

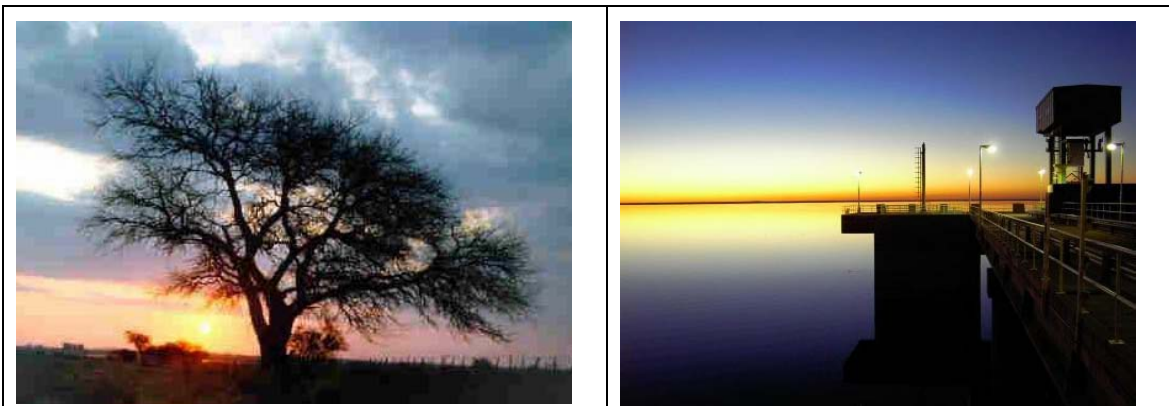
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA

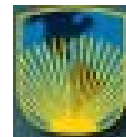
OBJETIVO ESPECIFICO 1

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

TAREA 7 – OPCIONES INSTITUCIONALES Y ORGANIZATIVAS



*Fondo Italiano para el Desarrollo
Sustentable de la República Argentina*



Banco Interamericano de Desarrollo

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PAMPA

TAREA 7 – OPCIONES INSTITUCIONALES Y ORGANIZATIVAS

INDICE

OPCIONES INSTITUCIONALES Y ORGANIZATIVAS.....	8
1. INTRODUCCIÓN.....	8
2. GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	10
2.1. <i>Documentos Internacionales</i>	10
2.2. <i>Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo</i>	10
2.3. <i>España</i>	12
2.4. <i>Alemania</i>	14
2.5. <i>Francia</i>	16
2.6. <i>México</i>	17
2.7. <i>Estados Unidos</i>	21
3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE A NIVEL NACIONAL	27
3.1 <i>La Constitución Nacional</i>	27
3.1.1. <i>Conclusiones</i>	30
3.2 <i>Leyes de Presupuestos Mínimos</i>	32
3.3. <i>Marco legal sobre Residuos</i>	32
3.3.1 <i>Ley Nº 25.612 de gestión integral de residuos industriales y actividades de servicios</i>	32
3.3.2. <i>Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos</i>	34

3.3.3 Ley Nº 25.916 de gestión de residuos domiciliarios.....	38
3.4. Marco Institucional Nacional.....	39
4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PROVINCIAL.....	45
4.1 Normativa aplicable a nivel provincial	45
4.1.1. Ley Nº 1914 de protección del ambiente	45
4.1.2. Conclusiones	47
4.2. Residuos Peligrosos. Régimen Legal.....	49
4.2.1. Conclusiones	50
4.3. Agroquímicos. Régimen Legal	50
4.3.1. Conclusiones	52
4.4. Control de PCBs. Régimen Legal.....	52
4.5. Residuos Patológicos.....	53
4.6. Residuos Radioactivos.....	54
4.7. Marco Institucional Provincial.....	55
4.7.1. Subsecretaría de Ecología.....	55
4.7.2. Ente de Políticas Ecológicas.....	57
4.7.3. Ministerio de Obras y Servicios Públicos	58
4.7.4. Ministerio de Bienestar Social.....	58
4.7.5. Ministerio de Cultura y Educación.....	59
4.7.6. Ministerio de la Producción	59
4.7.7. Secretaría de Recursos Hídricos	59
4.7.8. Secretaría de Asuntos Municipales.....	60
5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL MUNICIPAL.....	61

5.1. SERVICIOS PÚBLICOS	64
5.2 Tasa y Tarifas.....	64
5.3 Acuerdos Interjurisdiccionales.....	66
5.4 Exposición Sumaria de la Normativa Ambiental Aplicable	67
6. COMPONENTE 2: ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA INGENIERÍA JURÍDICA.....	91
6.1. Fortalecimiento Marco Institucional Provincial.....	91
6.2. Lineamientos para una legislación provincial y/o municipal sobre gestión de RSU	94
6.2.1. Generación de RSU.....	95
6.2.2. Evaluación de las diferentes alternativas de contratación en el manejo de residuos sólidos.....	118
6.2.3. Reglamento de Contrataciones de la Provincia de La Pampa.	123
7. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE A NIVEL NACIONAL.....	127
7.1. Tratados Internacionales.....	127
7.2. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático	127
7.3. Protocolo de Kyoto	128
7.4. Convenio de Basilea.....	129
7.5. Convenio de Estocolmo.....	131
7.6. Convenio de Rotterdam	132
8. ACUERDOS REGIONALES	135
8.1. Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR.....	136
8.2. Gestión Sanitaria de Residuos Sólidos	138
8.3. Ley Nº 25.675 del Ambiente.....	138
8.3.1. Ámbito de Aplicación.....	139
8.3.2. Evaluación de Impacto Ambiental.....	140

8.3.3. Acceso a la Información Pública	140
8.3.4. Participación Ciudadana	140
8.3.5. Daño Ambiental.....	140
8.3.6. Acuerdos Federales	141
8.4. Ley Nº 25.831 de Información Pública Ambiental.....	141
8.5. Ley Nº 25.670 de Regulación de PCBs.....	142
8.6. Legislación sobre la preservación de los Suelos.....	143
8.6.1. Ley Nº 22.428	143
8.7. Legislación sobre Protección de la Atmósfera.....	144
8.7.1. Ley Nº 20.284 y normas complementarias	144
8.7.2. Normas de Calidad del Aire. Anexo II – Ley Nº 20.284.....	146
8.8. Normativa Aplicable en Materia de Seguridad e Higiene y Medicina Laboral	147
8.8.1. Ruidos y vibraciones.....	147
8.8.2. Provisión de Agua Potable.....	148
8.8.3. Contaminación Ambiental	148
8.8.4. Máquinas y Herramientas	148
8.8.5. Protección contra Incendios.....	148
8.8.6. Provisión de Equipo de Protección Personal	149
8.8.7 Capacitación del Personal	149
8.9. Ley de Riesgos del Trabajo.....	149
8.10. Ley Nº 25.916 de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios. Texto.....	149
8.10.1 Capítulo I.....	149

8.10.2. Capítulo II.....	151
8.10.3. Capítulo III.....	151
8.10.4. Capítulo IV.....	152
8.10.5. Capítulo V.....	152
8.10.6. Capítulo VI.....	153
8.10.7. Capítulo VII.....	154
8.10.8. Capítulo VIII.....	154
8.10.9. Capítulo IX.....	155
8.10.10. Capítulo X.....	156
9. NORMATIVA APLICABLE ANIVEL PROVINCIAL – PROVINCIA DE LA PAMPA.....	160
9.1. TÍTULO I.....	160
9.1.1 Capítulo Único.....	160
9.2. TÍTULO II.....	160
9.2.1. Capítulo I.....	160
9.2.2. Capítulo II.....	161
9.2.3. Capítulo III.....	165
9.2.4. Capítulo IV.....	165
9.2.5. Capítulo V.....	165
9.2.6. Capítulo VI.....	165
9.3. TÍTULO III.....	166
9.3.1. Capítulo Único.....	166
9.4. TÍTULO IV.....	167
9.4.1. Capítulo I.....	167

9.4.2. Capítulo II.....	168
9.4.3. ANEXO I	169
9.5. REGLAMENTACIÓN PARCIAL LEY AMBIENTAL 1914.....	171
9.5.1. ASPECTOS GENERALES-OBJETO	171
9.5.2 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) – AUDIENCIA PUBLICA.....	172
9.5.3. REGISTRO PROVINCIAL DE CONSULTORAS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.-	175
9.5.4. DE LAS INFRACCIONES	175
9.5.5. DE LAS SANCIONES	177
9.6. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN JURADA AMBIENTAL (DJA)	177
9.6.1. INFORMACIÓN GENERAL	177
9.6.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AMBIENTE.....	177
9.6.3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD.....	178
9.6.4. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES	178
9.6.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.....	178
9.7. CONTENIDO DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL (IIA)	178
9.7.1. INFORMACION GENERAL.	178
9.7.2. DESCRIPCION GENERAL DEL AMBIENTE.....	178
9.7.3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA.	179
9.7.4. DESCRIPCION DEL PROCESO.	179
9.7.5. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES	180
9.7.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.....	180
9.8. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA).....	180

9.8.1. INFORMACION GENERAL	180
9.8.2. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE	180
9.8.3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA.	181
9.8.4. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.	184
9.8.5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.....	185
9.8.6. PLAN DE ACCION FRENTE A CONTINGENCIAS AMBIENTALES.	185
9.8.7. METODOLOGÍA UTILIZADA.	185
9.8.5. NORMAS CONSULTADAS.	185

OPCIONES INSTITUCIONALES Y ORGANIZATIVAS

Componente 1:

Relevamiento, análisis y actualización de la ingeniería aplicable al Proyecto.

1. INTRODUCCIÓN

En este informe se presenta un análisis de la normativa implementada a nivel internacional, nacional y provincial aplicable a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales en general, y, en particular aquella relacionada con la generación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y la gestión de residuos sólidos urbanos.

Asimismo, se identifican las autoridades que en los distintos órdenes jurisdiccionales tienen competencia para ejercer el poder de policía en materia ambiental, y en la prestación de los servicios de higiene urbana.

En un esfuerzo de síntesis y conceptualización de la metodología utilizada a los efectos de la exposición contenida en este trabajo, se expone bajo el sistema de cuadros y matrices la legislación vigente de aplicación al proyecto, que reviste mayor interés a nivel internacional, nacional y provincial, con identificación de sus correspondientes autoridades de aplicación.

A continuación se describen las actividades realizadas para el Componente 1 del presente informe.

- Se efectuaron tareas de relevamiento, identificación y análisis de la normativa ambiental vigente y aquella aplicable a nivel nacional en materia de gestión de residuos domiciliarios. La información fue relevada del sitio de Internet de información legislativa del Ministerio de Economía, como así también de las publicaciones del Boletín Oficial de la Nación, y publicaciones de Anales de Legislación Argentina.
- El relevamiento y recopilación de la normativa aplicable en la Provincia de La Pampa se efectuó vía Internet, y también a través de publicaciones de Anales de Legislación Argentina (ADLA, Ed. La Ley). A fin de completar el material relevado en las fuentes de información mencionadas, se visitó la biblioteca de la legislatura provincial a los efectos de recopilar material de las publicaciones del Boletín Oficial provincial.
- Fueron entrevistados y consultados funcionarios de la Subsecretaría de Ecología de la Provincia de La Pampa. Entre otros temas, se consultó acerca de la normativa aplicable a nivel provincial en materia de preservación del medio ambiente, residuos peligrosos, manejo de PCB's, y los lineamientos de coordinación implementados con otros organismos de fiscalización ambiental de la Provincia en los casos en que se presentaran competencias concurrentes.
- Fueron entrevistados y consultados funcionarios de la Dirección de Protección Ambiental y Servicios Públicos de la Municipalidad de Santa Rosa, y del Municipio de Gral. Pico, quienes brindaron información sobre la prestación del servicio de higiene urbana y sistemas de gestión y eliminación de residuos domiciliarios y patológicos. Asimismo, se les consultó acerca de la normativa ambiental vigente y los mecanismos de fiscalización ejercidos a los efectos de su cumplimiento.

-
- Se establecieron comunicaciones telefónicas y vía Internet con personal del Concejo Deliberante y Departamento Ejecutivo de otros municipios de la Provincia de La Pampa a fin de conocer la existencia de normativa municipal aplicable en materia de higiene urbana, el nivel de adhesión por parte de las municipalidades a las normas provinciales de preservación del medio ambiente, de residuos peligrosos, y la participación en acuerdos intermunicipales referidos a cuestiones ambientales.
 - Para obtener la información técnica existente sobre el manejo residuos sólidos urbanos, como así también acerca de sistemas jurídicos vigentes en países de la CEE, y América, se relevó vía Internet bibliografía existente en centros de documentación de organismos oficiales y entidades profesionales relacionadas con el manejo de residuos - CEAMSE, AIDIS, biblioteca BID INTAL -, que luego fueron visitados a los efectos de estudiar el material seleccionado.

2. GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

2.1. Documentos Internacionales

A continuación, se exponen los postulados proclamados en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, CNUMAD'92, Agenda 21, relacionados con la gestión de residuos sólidos urbanos.

2.2. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

El documento de referencia, fue aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en el año 1992 en Río de Janeiro, República Federativa de Brasil.

En él se reafirman los postulados proclamados en Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, y en consecuencia *“alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial”*.

La Agenda 21, en su Capítulo 21 "Manejo Ecológicamente Racional de los Desechos Sólidos" afirmó *“que la gestión ecológicamente racional de los desechos se encontraba entre las cuestiones que más importancia tenían para mantener la calidad del medio ambiente de la Tierra y, sobre todo, para lograr un desarrollo sostenible y ecológicamente racional en todos los países”*.

En el citado documento se enuncian cuatro áreas principales de programas relacionadas con los residuos sólidos urbanos, a saber:

1. Reducción al mínimo de los desechos

De acuerdo a los postulados del Capítulo 21 de la Agenda 21, los objetivos a alcanzar en el área de referencia son los siguientes:

a) Estabilizar o reducir, en un plazo convenido, la producción de desechos destinados a su eliminación definitiva, formulando objetivos sobre la base del peso, el volumen y la composición de los desechos y promover la separación para facilitar el reciclado y la reutilización de los desechos.

b) Reforzar los procedimientos para determinar la cantidad de desechos y las modificaciones en su composición con objeto de formular políticas de reducción al mínimo de los desechos, utilizando instrumentos económicos o de otra índole para promover modificaciones provechosas sobre las modalidades de producción y consumo.

2. Aumento al máximo de la reutilización y el reciclado ecológicamente racional de los desechos

Apunta a cumplir los objetivos que a continuación se exponen:

- a) Reforzar y ampliar los sistemas nacionales de reciclado de desechos.
- b) Crear en el sistema de las Naciones Unidas un programa modelo para el reaprovechamiento y el reciclado internos de los desechos generados, incluido el papel.
- c) Difundir información, técnicas e instrumentos de política adecuados para fomentar y poner en marcha los sistemas de reaprovechamiento y reciclado de los desechos.

3. Promoción de la eliminación y disposición ecológicamente racional de los desechos

El objetivo en ésta área es tratar y eliminar con métodos seguros una proporción creciente de los desechos producidos.

4. Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los desechos

El objetivo general de este programa es facilitar a toda la población servicios de recogida y eliminación de desechos que sean ecológicamente inocuos y protejan la salud.

En el Capítulo 21 de la Agenda 21 se determina que las cuatro áreas de programas señaladas, están correlacionadas y se apoyan mutuamente, deberán estar integradas a fin de constituir un marco amplio y ecológicamente racional para la gestión de los desechos sólidos municipales. La combinación de actividades y la importancia que se de a cada una de esas cuatro áreas *“variarán según las condiciones socioeconómicas y físicas locales, las tasas de generación de desechos y la composición de éstos”*. Afirma el documento de análisis que, *“todos los sectores de la sociedad deberían participar en todas las áreas de programas”*.

Antecedentes de la Normativa Implementada a Nivel Mundial

En este apartado se recopila y describen las principales regulaciones y normativas existentes en distintos países, a fin de evaluar el proceso de decisiones que sobre la gestión ambiental en materia de residuos rige en la esfera internacional, y, asimismo, se describen los principales componentes de las políticas públicas institucionales en los países seleccionados.

Cabe señalar que en los países europeos domina la institucionalidad medio ambiental con el rango de Ministerio y cuyas responsabilidades se concentran en las de regulación y fiscalización del cumplimiento de las políticas públicas en la materia. En América, en cambio, es más frecuente encontrar entidades de asesoría técnico-política, responsables de proponer al poder ejecutivo tanto las políticas públicas medioambientales como de articular a los diferentes sectores y recursos disponibles.

En todos los países existe una desconcentración de funciones y tareas hacia los niveles regionales y locales, asumiendo éstos una función importante en el manejo y gestión de los residuos, sea en forma directa como parte de las actividades de los municipios o gobiernos locales, o bien manteniendo la responsabilidad de supervisión y control, se delega en

terceros la operación de los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.

2.3. España

En la Unión Europea rigen Directivas Comunitarias que actúan como verdaderos referentes legales que, una vez suscritas por los países, integran un marco de regulación exigible para todos sus miembros. La Directiva Comunitaria sobre Residuos (91/156/CEE, 1995), introdujo un cambio radical en la concepción de la política de residuos, consistente en establecer una norma común para todos ellos, abandonando así la clasificación tradicional de los residuos en sus categorías de Peligrosos y Generales, hecho que es asumido en la actualidad por todos los estados miembros y crecientemente imitado por los países en desarrollo.

En España, las regulaciones y normativas (Ley sobre Residuos, 1998), son aplicables a todo tipo de residuos, con excepción de las emisiones a la atmósfera, los residuos radioactivos y aquellos residuos vertidos a los cursos de agua. Se basa en el criterio que “quien contamina paga” y su ámbito de acción contempla desde la fase previa a la generación, regulando las actividades de los productores, importadores y - en general -, las de cualquier persona o actividad que ponga en el mercado productos generadores de residuos. Hace recaer sobre el bien mismo, en el momento de su comercialización, los costos de la gestión adecuada de los residuos que genera y sus accesorios complementarios, tales como el envasado o embalaje.

Regula también la recolección de los residuos urbanos, el traslado interno y externo de los residuos dentro de la limitación de movimientos que imponen los Estados miembros de la Unión Europea, relativos a la vigilancia y control de los traslados de residuos y a la entrada y salida de la Comunidad Europea.

Para la obtención de los objetivos de reducción, reutilización, reciclado y valorización, así como para promover nuevas tecnologías menos contaminantes en la eliminación de residuos, la Ley establece que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, pueden implementar instrumentos de carácter económico que incentivan tales prácticas. Asimismo, se dictan normas sobre la declaración de suelos contaminados y se regula la responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de lo establecido, tipificándose tanto las conductas que constituyen infracción como las sanciones que proceden. Se asigna a los gobiernos locales la función de recolección, transporte y eliminación de los residuos urbanos.

En materia de residuos peligrosos la normativa los define como aquellos que figuran en un listado aprobado por la entidad reguladora, donde se establece tanto el requerimiento de caracterizarlos adecuadamente, como de los recipientes y envases que los hayan contenido. De igual forma, define obligaciones a los productores, en el sentido de separar y no mezclar residuos peligrosos, evitando particularmente aquellas mezclas de mayor peligrosidad; llevar un registro actualizado de la generación de residuos peligrosos; y, presentar informes anuales a la autoridad competente, en el que se debe especificar la cantidad de residuos peligrosos producidos o importados, naturaleza de los mismos y su destino final. La norma es explícita también en cuanto a que la autorización de recolección, transporte y almacenamiento debe ser aprobada por las Comunidades

Autónomas, correspondiendo a éstas realizar el control y fiscalización de todas las actividades.

La norma española define los residuos municipales o urbanos, como los generados en domicilios particulares, comercio, oficinas y servicios en general, así como todos aquéllos que no teniendo su origen en estos lugares, no sean considerados peligrosos, incluyendo además, en esta categoría, a los residuos provenientes de las actividades de demolición y construcción.

Asimismo, incentiva las actividades de reciclado, valorización y eliminación de los residuos en las condiciones que especifiquen las Ordenanzas de las Comunidades Autónomas. Los municipios con una población superior a cinco mil habitantes, están obligados a implantar un sistema de recolección selectiva de residuos urbanos que posibiliten su reciclado y otras formas de valorización. No obstante, los generadores de residuos urbanos que por sus características especiales produzcan riesgos por concepto de transporte, recolección, o eliminación estarán obligados a proporcionar una información detallada sobre su origen, cantidad y características.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando las entidades locales consideren que los residuos urbanos presentan características que los hagan peligrosos de acuerdo con los informes técnicos emitidos por los organismos competentes, o que dificulten su recolección, transporte, valorización, o eliminación, podrán obligar al productor o poseedor de los mismos a que adopten todas las medidas necesarias para eliminar o disminuir dichas características, o bien, que los depositen en la forma y lugares adecuados y debidamente controlados por la autoridad competente.

En cuanto al marco institucional de la gestión ambiental que se desarrolla en España, compete al Ministerio del Medio Ambiente entender en materia de políticas y planes, y se organiza a través de dos organismos, a saber:

- Secretaría de Aguas y Costas: responsable de elaborar políticas para preservar la calidad de las aguas y proteger los recursos marinos.
- Secretaría de Medio Ambiente: encargada del diseño de la política de protección de los recursos suelo, aire, y conservación de la biodiversidad en territorio español.

En lo que se refiere a residuos sólidos, corresponde al Estado Nacional la elaboración de planes nacionales; la autorización de los traslados de residuos desde o hacia terceros países no pertenecientes a la Unión Europea y la inspección derivada del régimen de los traslados, sin perjuicio de la colaboración que pueda prestarse por la Comunidad Autónoma donde esté situado el centro de la actividad correspondiente, así como la aplicación del correspondiente régimen sancionador (Ley de Residuos en España, 1998). Los planes nacionales son aprobados por el Consejo de Ministros, su diseño o actualización se realiza cada cuatro años, y la implementación es función del Ministerio del Medio Ambiente, debiendo incluir un trámite de información pública.

Las Comunidades Autónomas tienen la función de elaborar los planes para la gestión de residuos y la autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y manejo de los mismos. Son también competentes para otorgar las

autorizaciones de traslado de residuos desde o hacia países de la Unión Europea, así como de los traslados en el interior del territorio Estado y la inspección y, en caso que corresponda, aplicar las sanciones derivadas de los regímenes de traslados.

Las entidades locales para la gestión de los residuos urbanos y es función privativa de los municipios, como servicio obligatorio, la recolección, transporte y, la eliminación de los residuos urbanos en la forma en que establecen las respectivas Ordenanzas Municipales, privilegiando los planes de reutilización de residuos.

2.4. Alemania

La normativa alemana fomenta la llamada economía de ciclo integral (Ley de Ciclo Integral, 1996), cuyo propósito es garantizar la eliminación eco-compatible de todo tipo de residuos y reemplazó a la anterior Ley de Gestión de Residuos. Esta regulación abandona el modelo de la eliminación de residuos a favor de la llamada economía de ciclo integral, que prioriza la protección eficaz de los recursos naturales, el desarrollo de productos que generen la menor cantidad de residuos y el ajuste ecológico y económico del sistema de producción y consumo dentro de un circuito cerrado.

La Ley regula todos los procesos relevantes para la gestión de residuos en los ámbitos de la producción y el consumo, a partir de una definición más amplia de su concepto y especifica los requisitos que han de cumplirse a efectos de evitar la generación de residuos, asegurando el reciclado y la recuperación material y energética de los recursos generados y la eliminación eco-compatible de los residuos no recuperados. En este sentido, la norma equilibra el principio de contaminador-pagador, con la responsabilidad respecto al tipo y cantidad de residuos que generen los productos.

Para potenciar la iniciativa del sector privado, la Ley admite la posibilidad que determinadas funciones de gestión sean asumidas por asociaciones y corporaciones autónomas, establece la obligación de presentar planes y balances de gestión de residuos e implanta la institución de la Empresa Gestora de Residuos.

Para un país pobre en materias primas como Alemania, el control en la generación y el reciclado de residuos reviste gran importancia. Los reglamentos necesarios a estos efectos entraron en vigor simultáneamente con la Ley, reforzando el principio de la responsabilidad respecto a los productos, lo que se vio consagrado legalmente por primera vez en el Reglamento de Envases y Embalajes, que obliga a los fabricantes y distribuidores a retirar y reciclar sus productos una vez utilizados.

El Gobierno Federal estimula los compromisos asumidos voluntariamente por los responsables de los productos, como un instrumento idóneo para completar la regulación legal.

Complementariamente con lo anterior, la regulación promueve el cuidado del suelo (Ley Federal de Protección del Suelo, 1998), creando las bases para una protección eficaz de este recurso natural, y su objetivo es mantener o restablecer las funciones del suelo de forma sostenible, haciéndose expresa mención en su función como medio y espacio vital de los animales, las plantas y los organismos que lo habitan. Por lo tanto, el suelo como factor medioambiental, no sólo queda protegido de forma inmediata a través de la

regulación sobre residuos, sino que es objeto de una protección especial y directa -al igual que el agua o el aire- en la nueva Ley Federal.

Respecto de las competencias en materia medioambiental, cabe señalar que en Alemania hasta 1986 estaban repartidas en tres ministerios del Gobierno Federal de Alemania: Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Sanidad. A partir de ese año se crea el Ministerio de Medio Ambiente; Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear.

En esta institución están incluidas tres Oficinas Federales: la Oficina Federal para el Medio Ambiente; la Oficina Federal para la Protección de la Naturales; y, la Oficina Federal para Protección Radiológica. Asimismo, el Ministerio cuenta con el asesoramiento de varios grupos de expertos en cuestiones medioambientales y el Consejo Científico sobre Cambios Medioambientales Globales.

Los principios fundamentales de la política medioambiental alemana son: Cooperación con los Estados Federados y los municipios; Divulgación Popular de los temas medioambientales; protección climática, medio ambiente y energía; conservación de la pureza del aire; protección contra los ruidos; protección de aguas subterráneas, ríos, lagos y mares; protección del suelo y saneamiento de suelos contaminados; política de residuos y reciclaje; seguridad de los productos químicos, medioambiente y sanidad; prevención contra accidentes y catástrofes industriales; protección, conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica; seguridad en las instalaciones nucleares; protección radiológica; abastecimiento de energía nuclear y eliminación de sus residuos.

De la Ley Fundamental de la República Federal se derivan para la Administración Federal, competencias legislativas en tres niveles diferentes: la función legislativa exclusiva le corresponde a la administración federal en todos los asuntos multilaterales y en aquéllos relacionados con la Unión Europea, por ejemplo en lo referente a convenios medioambientales con otros Estados y organismos internacionales. El derecho a definir la legislación marco le corresponde a la administración federal, entre otros, en los ámbitos de gestión de las aguas, protección de la naturaleza y gestión paisajística, así como en lo relativo al ordenamiento territorial.

Los Estados Federados han de complementar y aplicar este marco general mediante leyes propias y su competencia legislativa rige sólo para los ámbitos de aprovechamiento de residuos, conservación de la pureza del aire, gestión para reducir los ruidos, energía atómica, protección radiológica y seguridad en materia de productos químicos. En el nivel local, los municipios regulan sus asuntos bajo el criterio de responsabilidad propia y dentro del marco de las normativas legales prescritas por la Administración Federal y los Estados Federados. Entre estos asuntos destaca la planificación federal urbanística y de desarrollo regional, sobre cuya base se asienta la clasificación de las áreas urbanas e industriales. Por regla general, las comunidades locales también organizan su propio abastecimiento de agua potable, así como la recolección y tratamiento de basuras y aguas residuales, lo cual conlleva frecuentemente la construcción y explotación de plantas depuradoras, vertederos de basuras y plantas incineradoras de residuos.

2.5. Francia

El organismo de máximo nivel dentro de la estructura de la administración es el Ministerio del Medio Ambiente, creado en 1971. En 1992, dos decretos reorganizaron el Ministerio y lo fortalecieron para posibilitar un tratamiento más eficaz de los problemas legales y técnicos y para asumir las obligaciones emergentes del contexto internacional en materia ambiental.

Las principales responsabilidades del Ministerio son las de asegurar:

- La manutención de la calidad del medio ambiente.
- La protección de la naturaleza, incluyendo el campo, los sitios protegidos, costas y montañas.
- La prevención, reducción o eliminación de la contaminación, ruidos y riesgos.
- La protección, control y administración de aguas subterráneas, superficiales y costeras.
- La coordinación de las acciones que involucren riesgos mayores (tanto tecnológicos como naturales).

Otros aspectos de la política ambiental francesa están bajo responsabilidad de otros ministerios o es compartida junto con el Ministerio del Medio Ambiente, como por ejemplo la gestión de los residuos industriales o la energía nuclear. El Ministerio de Industria tiene la responsabilidad del control de la gestión de desechos.

El Ministerio Nacional del Medio Ambiente tiene servicios regionales, dirigidos por el Prefecto de Región designado por el gobierno central. Los prefectos y los servicios a su cargo actúan como punto de contacto entre el estado nacional y las regiones en actividades que cubren más de un departamento, en particular para coordinar la implementación de las iniciativas contenidas en la planificación nacional.

Cada plan regional puede convertirse en un importante vehículo para la política ambiental, y tiene incluidos aspectos tales como monitoreo ambiental, protección de la fuente y calidad del recurso hídrico, reducción de la contaminación, gestión de desechos y reciclaje, educación ambiental y campañas de toma de conciencia.

El departamento es el nivel más importante de implementación de la política del gobierno central. La autoridad administrativa está encabezada por un prefecto designado por el Ministro del Interior y tiene la responsabilidad de otorgar autorizaciones y habilitaciones de industrias, minas o permisos de construcción para ciertos usos.

El Ministerio del Medio Ambiente ha encomendado a los departamentos la preparación de planes para el medio ambiente para sus áreas, los cuales podrían tener apoyo para la acción si se encuentran enmarcados en acuerdos inter-institucionales, a través de los cuales la mayor parte de las actividades del sector público están organizadas.

Las comunas de Francia son las que administran día a día sus territorios. Tienen poderes para mantener el orden público y la salud pública, además de la obligación de garantizar los servicios apropiados y de controlar su territorio.

Las comunas tienen la obligación de combatir la contaminación como parte de sus deberes con la salud pública.

Teniendo en cuenta que la inversión en infraestructura sanitaria para las comunas excede la capacidad de sus medios, es muy frecuente ver asociaciones entre comunas o con niveles más altos, con el objetivo de financiar sus trabajos. Existen, además, numerosas asociaciones para gestionar las cuestiones en común, incluyendo la gestión de residuos y el tratamiento de aguas residuales.

El cumplimiento por parte de Francia de los objetivos definidos en la Agenda 21 requiere la participación de todos los sectores involucrados; para ello existe un dispositivo institucional reforzado, compuesto por una numerosa y variada serie de organismos de soporte de las estructuras en materia ambiental, entre las que debe mencionarse la ADEMA (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie), quien contribuye a la puesta en marcha de un desarrollo sustentable, tanto en la intervención cotidiana como en la planificación a mediano y largo plazo.

Producto de la fusión de distintas agencias preexistentes, como la Agencia de la gestión de la Energía (AFME), Agencia para la Calidad del Aire (AQA) y la Agencia para la Recuperación y Eliminación de Desechos (ANRED), esta agencia es un establecimiento público de carácter industrial y comercial, ubicado bajo la tutela de los ministerios de Medio Ambiente, de la Industria y de la Investigación y la Tecnología.

2.6. México

Residuos Industriales y Peligrosos

Las regulaciones en México tienen como objetivo fundamental la protección del medio ambiente (Ley General del Equilibrio Ecológico, 1998) y están fuertemente influidos por la aprobación de tratados internacionales, en especial el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos.

En este contexto su estructura normativa y reglamentaria establece en sus consideraciones generales todo un marco de definiciones operacionales en cuanto a las reglas de juego que deben guiar el accionar de los generadores, tales como la caracterización de la peligrosidad de los residuos y procedimientos para una adecuada gestión y manejo de los mismos, además de las condiciones de envasado y almacenamiento, transporte y disposición final en celdas especialmente habilitadas para dar cuenta de los riesgos de corto y mediano plazo en el caso de residuos industriales peligrosos.

Es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a nivel ejecutivo central a quien compete la aplicación y control de las normas a través de una institucionalidad desconcentrada en el territorio nacional.

La generación de residuos peligrosos debe contar con autorización mediante un registro ante la Secretaría. Ello está orientado a mantener el control de su producción y nivel de peligrosidad en la medida que se hace exigible también, además de la caracterización, disponer de las tecnologías necesarias para el adecuado almacenamiento, transporte y evaluación de los riesgos en cada etapa. Esto permite contar con una base de información nacional respecto de los usos y destinos de los residuos, debiendo en cada caso mantener la información disponible hasta por períodos de 10 años.

La ley establece las condiciones de gestión de los residuos, radicando la responsabilidad del manejo en los generadores, quienes a su vez están en posibilidad de traspasar a terceros independientes, parte o la totalidad de los servicios, bajo la condición de que se sujeten a las mismas condiciones y normas, es decir deben contar con autorización para su funcionamiento; son controlados por la entidad pública correspondiente. Las normas alcanzan un importante nivel de detalle en materias referidas a la disposición final de los residuos, con tecnologías que reduzcan su peligrosidad y aseguren un estándar de seguridad en el confinamiento, para evitar los riesgos de contaminación a largo plazo.

Una materia de especial interés en el contexto de la apertura comercial impulsada en mayor fuerza a partir del NAFTA, es aquél capítulo que regula el proceso de importación y exportación de residuos. Sólo permite el tránsito de residuos bajo una estricta supervisión de origen, destino y uso, de modo tal que está prohibido el uso comercial de los residuos y únicamente permite el traslado a territorio mexicano para ser reciclado o reutilizado en el territorio nacional. Además de requerir una extensiva identificación de origen, transporte –vía y medio de transporte- y de todas las exigencias aplicables al manejo de residuos como si éste se generara en el país, se requiere la autorización de origen y destino en caso que México sea sólo un lugar de tránsito y el cabal cumplimiento de todas las normas nacionales e internacionales vigentes y aplicables tanto al proceso industrial, como al producto comercializado.

Completando lo anterior, a partir de 1993 se incorporaron normativas orientadas a temas más específicos en materia de caracterización, confinamiento y gestión de residuos peligrosos, a saber: normas que establecen las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que definen su peligrosidad por el grado de toxicidad al medio ambiente (NOM-52, 1993); y, normas que establecen los procedimientos para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que dan la toxicidad del residuo y aquélla que permite determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados peligrosos (NOM-53 y NOM-54, 1993). Este marco normativo es enriquecido con reglas más específicas en materia de disposición final, las que se expresan en normas que establecen las características de los sitios de destino controlado de residuos, con requisitos para el diseño, construcción y operación de las obras principales y complementarias, así como de las celdas de confinamiento.

Residuos Biológicos e Infecciosos

La norma oficial mexicana (NOM-087-ECOL, 1995), establece los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos que se generan en los centros de atención médica y veterinaria.

En lo principal, la norma define residuo peligroso biológico-infeccioso, como aquél que “contiene bacterias, virus u otros microorganismos con capacidad de causar infección o que contiene o puede contener toxinas producidas por microorganismos que causan efectos nocivos a seres vivos y al ambiente, que se generan en establecimientos de atención médica”.

Clasifica los residuos de acuerdo al grado de toxicidad sobre el ambiente; de igual forma, la norma clasifica los establecimientos generadores de acuerdo a su nivel de complejidad, desde los centros de atención primaria y laboratorios básicos, hasta los hospitales y centros de enseñanza e investigación más sofisticados en cuanto a tecnologías y nivel de producción de residuos.

La norma es detallista también en el manejo y gestión de este tipo de residuos y, según la clasificación antes señalada, establece condiciones para su envasado, almacenamiento, transporte y disposición final, cuyo confinamiento debe realizarse en celdas de seguridad que siguen un patrón en todo similar a lo que se exige en materia de residuos industriales peligrosos.

Residuos Domiciliarios

La norma oficial mexicana sobre residuos domiciliarios (NOM-083-ECOL, 1996), establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposición final de RSD. Esta norma regula las características de ubicación, hidrológicas, geológicas e hidrogeológicas que deben reunir los sitios destinados a la disposición final de residuos domiciliarios.

Las condiciones principales que debe cumplir un sitio de disposición final son las siguientes: las distancias mínimas a aeropuertos son de tres mil metros cuando maniobren aviones de motor a turbina, y de mil quinientos metros, a partir del límite urbano poblado así como de poblaciones rurales de hasta dos mil quinientos habitantes. En caso de no cumplir con esta condición debe demostrarse que no existirá riesgo para los centros poblados cercanos.

Establece que la distancia del sitio con respecto a cuerpos de agua superficiales con caudal continuo, debe ser de mil metros como mínimo y contar con sistemas de captación de aguas de lluvia en períodos equivalentes a 10 años de pluviosidad máxima.

Se restringe el uso de zonas donde existan o puedan generar asentamientos diferenciales que lleven a fallas o fracturas del terreno, que incrementen el riesgo de contaminación de acuíferos. Impone distancias mínimas a pozos para extracción de agua para uso doméstico, industrial, riego y ganaderos.

La fiscalización y control para el adecuado cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, es realizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los Gobiernos del Distrito Federal, de los Estados y de los municipios en el ámbito de su territorio y competencias.

En lo relacionado al marco institucional que rige en materia ambiental, cabe señalar que la Constitución mexicana define las funciones de los distintos poderes del Estado, atribuye al Ejecutivo la formulación de políticas y planes, así como el diseño de regulaciones y normas que, votadas en el Legislativo, deben orientar el accionar de la institucionalidad ambiental en la Federación de Estados y municipios del país. En este nivel se concentran importantes funciones relacionadas con el ambiente y más específicamente con la gestión de residuos.

A nivel nacional, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la entidad gubernamental que tiene la misión de diseñar políticas de protección ambiental que, junto con enfrentar los problemas derivados de la contaminación y del consiguiente daño ecológico, promueve y estimula planes y programas basados en el desarrollo sustentable del país con preservación de la biodiversidad en los ecosistemas naturales.

Los objetivos de la política ambiental de México comprenden los siguientes aspectos: promover un desarrollo sustentable y a escala humana, cuyos énfasis están puestos en la conservación de los ecosistemas amenazados por la contaminación de los suelos, el agua y el aire, impulsando un crecimiento económico con calidad de vida y donde las variables de productividad y competitividad incorporen la gestión ambiental con tecnologías limpias. En segundo lugar, garantizar el respeto al ordenamiento normativo e institucional, en cuanto al irrestricto cumplimiento de las reglas de juego, roles y funciones bien definidos y con importante participación de los Estados Federales y municipios, además de mecanismos explícitos de control social y ciudadano.

En términos de organización, la Secretaría cuenta con entidades de nivel central como es el caso de las tres Subsecretarías que cumplen funciones relativas a la planeación y política ambiental. Las funciones y actividades más relevantes de esta institucionalidad pública se refiere a coordinar a las diferentes entidades estatales y municipales, a objeto de garantizar el total cumplimiento y control de las normas oficiales para la preservación del medio ambiente, la protección de los ecosistemas, el aprovechamiento de los recursos naturales en materia de flora y fauna silvestre, y la fiscalización del recurso suelo por descargas de aguas residuales y manejo inadecuado de los residuos peligrosos y de origen domiciliario.

La función de planificación, como tarea esencial de la Secretaría, se basa en su capacidad para diseñar e implantar sistemas de información ambiental para la vigilancia y monitoreo atmosférico, del suelo y de los recursos de agua, así como un acabado inventario de recursos de flora y fauna del territorio nacional. En este ámbito le corresponde también ejecutar programas de capacitación orientados a mejorar la capacidad de gestión ambiental de los diferentes niveles del sector público, en coordinación con las Universidades, centros de formación académica y el sector privado interesado en participar en políticas de desarrollo sustentable.

A nivel desconcentrado y en directa relación con los Estados Federados opera un conjunto de entidades de carácter político técnico cuya función principal es la gestión ambiental en ámbitos tales como la coordinación intersectorial; fiscalización y control de políticas sobre medio ambiente, gestión de recursos naturales y ecosistemas naturales.

Desde ambos niveles, se establece una coordinación permanente con entidades descentralizadas, cuyas funciones son la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para la conservación del medio ambiente en áreas tales como calidad de aguas, estudios forestales, preservación de la biodiversidad, entre otros temas.

En los términos que definen las leyes federales y estatales, los municipios como entidades descentralizadas, con autonomía y recursos, tienen facultades para:

- Formular, aprobar y administrar la zonificación y el diseño y aplicación de planes de desarrollo urbano.
- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales. Ello incluye su participación en la creación y administración de reservas territoriales como zonas de protección ecológica, junto con la capacidad legal de intervenir en la regulación sobre tenencia de la tierra urbana y la posibilidad de otorgar permisos de construcción.
- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, a objeto de conciliar intereses locales con los de carácter federativo, especialmente en aspectos relacionados con territorios limítrofes y donde se requiera planes, regulaciones y acciones coordinadas para garantizar el interés colectivo de la población.

En lo más específico, los municipios tienen a su cargo, entre otras, las siguientes funciones ambientales: la gestión y manejo de la provisión de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; la administración directa o delegada en terceros particulares de la limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

2.7. Estados Unidos

El manejo de los desechos sólidos y residuos peligrosos se basa en la Ley de Eliminación de Desechos Sólidos (SWDA, Solid Waste Disposal Act, 1969) reformada por la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA, Resource Conservation and Recovery Act, 1990).

Residuos Peligrosos

Para que una sustancia se considere “residuo peligroso” debe ser en primer lugar un desecho sólido y además debe figurar en una lista específica de residuos peligrosos, o bien, poseer una de cuatro siguientes características: inflamabilidad, corrosividad, reactividad o toxicidad. Cualquier mezcla que contenga un residuo peligroso es considerada también como tal.

La norma establece exigencias detalladas para todos los generadores de residuos peligrosos, así como para las personas responsables del transporte, tratamiento, almacenamiento o eliminación de desechos. Los generadores son responsables de determinar si sus desechos son peligrosos o no; tienen que cumplir con requisitos de almacenamiento temporal y etiquetado en sus instalaciones y deben transportar o eliminar todos los residuos peligrosos en un plazo máximo de 90 días.

Los residuos peligrosos transportados fuera de su lugar de origen deben portar una identificación de la carga, en la que se especifique el generador. Estos deben presentar informes bienales en los que expresen el volumen, tipo, métodos de eliminación final y ubicación de sus desechos. Deben conservar al menos durante tres años copias de los informes y resultados de cualquier prueba realizada. Los generadores de volúmenes bajos (menos de 100 kg./mes) que cumplan otros requisitos determinados están en buena medida, exentos de los requerimientos que se impone para el manejo de los residuos peligrosos.

Si los residuos peligrosos se almacenan más allá del período de acumulación de 90 días (excepto en el caso de generadores de bajos volúmenes), o si son tratados o eliminados en el lugar, entonces la instalación se considera como una planta de tratamiento, almacenamiento o eliminación y está sujeta a los requerimientos de las leyes ambientales estadounidenses. Estas incluyen requisitos para la obtención del número de identificación de residuos peligrosos; el análisis de los desechos; el aseguramiento de la planta contra entradas no autorizadas; la conducción de inspecciones periódicas para verificar que no haya fugas o defectos; la separación de desechos inflamables, reactivos o incompatibles, y la preparación para hacer frente a las emergencias, incluida la adopción de un plan de contingencia y procedimientos de emergencia. Todos los operadores de planta deben mantener un registro detallado de la operación de su actividad y han de presentar un informe bienal a la EPA en el que describan el volumen y tipo de desechos que se manejan. También se exige la presentación de otros informes, como por ejemplo, informes sobre desechos no declarados, informes de cualquier escape, incendio o explosión e informes referentes al cierre de la planta.

En el marco de los tratados comerciales entre los países del norte de América, la normativa establece que las exportaciones de residuos peligrosos están prohibidas a menos que el exportador haya notificado a la EPA con un mínimo de 60 días de antelación; que el país receptor haya consentido en aceptar el residuo peligroso; que una copia del Reconocimiento de Admisión emitido por la EPA acompañe la carga y el embarque se realice de conformidad con los términos de aceptación del país receptor. Los exportadores deben cumplir también con todas las normas referentes al transporte de residuos peligrosos. Los importadores de residuos peligrosos reciben esencialmente el mismo tratamiento que los generadores para efectos de las disposiciones normativas. El movimiento internacional de desechos reglamentados como peligrosos está sujeto a los requisitos de declaración entre Estados Unidos y los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), excluidos México y Canadá, que están regulados por un sistema graduado de controles y procedimientos en función de si el residuo se considera “verde”, “amarillo” o “rojo” de acuerdo a su nivel de peligrosidad.

La EPA tiene poderes amplios de inspección y obtención de información para administrar y aplicar la norma en sitios donde se manejan residuos peligrosos. Dispone de tres vías de control de las regulaciones: la promulgación de una orden administrativa en la que se exige el cumplimiento; el inicio de una acción civil para cobrar multas u obtener un interdicto, y la interposición de una demanda penal. La EPA debe otorgar al infractor la oportunidad de una audiencia pública donde presente sus descargos y una vez probada la trasgresión intencional de los requerimientos, la EPA aplica sanciones de multas diarias por infracción, o bien hasta cinco años de prisión.

Residuos Domiciliarios

Un desecho es “cualquier basura; desperdicio; lodo generado en planta de tratamiento de desechos, plantas de tratamiento de agua o instalaciones para el control de la contaminación del aire; así como otros materiales de desecho, incluidos materiales, sólidos, líquidos, semisólidos o gaseosos producto de operaciones industriales, comerciales, mineras y agrícolas, y de actividades de la comunidad”, pero excluye las aguas residuales domésticas, los escurrimientos producto de la irrigación, las descargas de fuentes fijas permitidas por la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act, CWA, 1992) y ciertos residuos radioactivos.

El manejo de residuos domiciliarios es básicamente responsabilidad de los gobiernos municipales o de los condados. La participación federal se limita a: establecer directrices para los planes regionales y estatales de manejo de residuos sólidos; prohibir la eliminación de desechos sólidos en vertederos que no cumplan ciertas normas federales; otorgar permisos para la creación de vertederos de desechos sólidos; y, regular el transporte de desechos sólidos en las aguas costeras.

El gobierno presta asistencia técnica y financiera a los estados y regiones que adopten planes amplios de manejo de desechos sólidos que cumplan con determinadas directrices federales. La EPA ha emitido normas específicas para el diseño y la operación de todos los vertederos de desechos sólidos. Todo vertedero que no cumpla con tales normas se considera un “basurero a cielo abierto” y está prohibido. La eliminación de desechos sólidos domésticos, no puede realizarse en vertederos a cielo abierto y se aplican requisitos especiales a los vertederos municipales de residuos sólidos que reciben residuos peligrosos provenientes de los hogares o de generadores de bajo volumen, los cuales están excluidos de la cobertura de los reglamentos sobre residuos peligrosos. Los reglamentos de vertederos municipales incluyen normas detalladas para la ubicación, diseño, operación, mantenimiento, cierre y poscierre, aseguramiento financiero, monitoreo de aguas subterráneas y acciones correctivas.

La decisión acerca de la ubicación de los vertederos de desechos sólidos o de los incineradores generalmente corresponde a las autoridades estatales y locales que regulan el uso de la tierra, aunque la EPA haya promulgado restricciones a la ubicación de ciertos vertederos de desechos sólidos e instalaciones de tratamiento, almacenamiento y eliminación de residuos tóxicos. Corresponde a los Estados vigilar la aplicación de la prohibición de los vertimientos a cielo abierto y otros requerimientos para el manejo de desechos sólidos no peligrosos. El gobierno federal fundamentalmente brinda asistencia técnica y financiera para la instrumentación de los planes estatales de manejo de desechos sólidos.

Aspectos Institucionales

La Constitución de Estados Unidos no aborda directamente la protección ambiental ni menciona la autoridad competente ni el derecho de los habitantes a un ambiente sano. La Cláusula de Comercio (Commerce Clause), que autoriza al Congreso a regular el comercio interestatal, es la fuente principal del poder del Gobierno Federal para poder promulgar leyes destinadas a controlar la contaminación y regulaciones similares orientadas a la protección ambiental.

La Constitución también incluye las limitaciones de la autoridad federal, y en cuestiones ambientales cabe destacar la V Enmienda, que establece que “la propiedad privada no se podrá afectar para uso público sin una compensación justa”. Esto significa que las acciones gubernamentales que interfieran de manera considerable con las expectativas razonables, respaldadas por inversiones de los propietarios o que ocupen físicamente una propiedad privada, son inconstitucionales a menos que el Gobierno indemnice debidamente a los propietarios.

La mayoría de las obligaciones del Gobierno Federal corresponde al Consejo de Calidad Ambiental (Council on Environmental Quality –CEQ-) de la EPA, el Departamento de Justicia (Department of Justice –DOJ-) y el Departamento del Interior (DOI). Asimismo, las responsabilidades ambientales más específicas se encuentran en prácticamente toda dependencia gubernamental, como los Departamentos de Agricultura, Transporte, Energía, Comercio, de Estado, y las Agencias para el Desarrollo Internacional (Agency for International Development –AID-) y del Registro de Sustancias Tóxica y Enfermedades (ATSDR).

- Consejo de Calidad Ambiental: creado por la Ley Nacional de Protección Ambiental (National Environmental Protection Act –NEPA-), de 1969 para que: apoye y asesore al presidente; revise y evalúe los diversos programas y actividades del gobierno federal; desarrolle y recomiende políticas nacionales de impulso y fomento del mejoramiento de la calidad ambiental; documente y defina cambios en el medio ambiente natural, así como para que elabore y adecue tales estudios, informes y recomendaciones sobre asuntos que el presidente le solicite en materia de políticas y legislación.

El Consejo tiene bajo su responsabilidad un órgano consultivo especial establecido en 1993, con el fin de desarrollar una estrategia para la instrumentación de la Agenda 21. Esta Agenda es el marco general de desarrollo sustentable adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en 1992.

- Oficina de Protección Ambiental: creada en 1970, la EPA es la dependencia más importante para instrumentar la mayor parte de la legislación en materia de protección ambiental en Estados Unidos, incluidas las leyes que controlan la contaminación atmosférica y del agua, el manejo de desechos sólidos y peligrosos, el saneamiento de sitios contaminados y la regulación de plaguicidas y sustancias tóxicas. La EPA establece e implementa la mayoría de las normas federales y administra casi todos los programas ambientales relacionados con recursos naturales, los del manejo de las tierras o conservación de la flora y fauna silvestres.

La EPA dispone de oficinas regionales en todo el país, dirigidas por un administrador regional nombrado por el presidente y dividida por ámbitos del programa: atmósfera, agua, residuos y tóxicos. Estas oficinas son las responsables que se pongan en práctica las leyes ambientales federales, así como de los permisos, el cumplimiento y la supervisión de programas estatales de instrumentación de las leyes federales. Asimismo, inician prácticamente todas las acciones civiles que exigen la debida aplicación y sanción de las normas.

- División del Ambiente y los Recursos Naturales del Departamento de Justicia -(U.S. Department of Justice, Environment and Natural Resources Division)-: Las responsabilidades de la División del Ambiente y los Recursos Naturales del Departamento de Justicia, incluyen el litigio de todos los casos relacionados con la protección del medio ambiente y los recursos naturales; la adquisición, administración y disposición de tierras y recursos públicos, la protección de los derechos y las propiedades de las comunidades indígenas.
- Departamento del Interior (DOI, U.S. Department of Interior): El DOI es el principal Departamento en el manejo de los recursos naturales y las tierras públicas propiedad de la Federación. También administra los programas de las reservaciones indias. Entre sus principales dependencias figuran la Oficina de Administración de Tierras (Bureau of Land Management), el Servicio de Parques Nacionales (National Park Service), el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (U.S. Fish and Wildlife Service), la Oficina Nacional de Inspecciones Biológicas (National Biological Survey), la Oficina de Asuntos Indígenas (Bureau of Indians Affairs), la Oficina de Reclamaciones (Bureau of Reclamation), la Oficina de Inspecciones Geológicas (U.S. Geological Survey), el Servicio de Manejo de Minerales (Minerals Management Service), y la Oficina de Minería de Superficie (Office of Surface Mining)
- Departamento de Energía (U. S. Department of Energy, DOE): La Ley Orgánica del Departamento de Energía de 1977 creó el DOE, el cual tiene la responsabilidad de desarrollar una estrategia nacional de energía integral y equilibrada mediante la coordinación y administración de las funciones energía del gobierno federal. Su función es investigar, desarrollar y hacer demostraciones en materia de tecnología energética; comercializar la energía federal; elaborar programas de conservación y regulación de energía y formular el programa de armas nucleares.
- Departamento de Agricultura (U.S. Department of Agriculture –USDA-): Administra todos los programas federales de agricultura y tiene la responsabilidad de conducir y difundir los resultados de las investigaciones agrícolas; vigilar y clasificar los productos agrícolas; manejar los bosques nacionales, y apoyar los ingresos agrícolas mediante programas de ayuda de precios. Las dependencias más importantes del USDA con fines ambientales son el Servicio de Conservación de los Recursos Naturales y el Servicio Forestal.
- Departamento de Comercio (U.S. Department of Commerce –DOC-): Es responsable de fomentar la industria nacional y el comercio internacional por medio de investigaciones, publicaciones y asistencia técnica. La mayoría de sus actividades ambientales las realiza la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), creada en 1970 con la función de evaluar los sistemas ecológicos de la tierra. Su misión es impulsar la administración ambiental mundial y la gestión racional de los recursos marítimos y costeros de los Estados Unidos. La NOAA describe, supervisa y predice los cambios en el medio ambiente de la tierra a fin de asegurar y enriquecer las oportunidades de la economía sustentable.
- Departamento de Estado (U.S. Department of State). Tiene a su cargo elaborar y conducir la política exterior.

- Departamento de Transporte (U.S. Department of Transportation –DOT-): Incluye la Guardia Costera, cuya responsabilidad primaria es abordar los derrames de petróleo y la aplicación de las leyes marinas, así como la Administración de Investigaciones y Programas Especiales, encargada de supervisar el transporte de sustancias peligrosas.
- Agencia para el Desarrollo Internacional (U.S. Agency for International Development –AID-): Encargada de brindar ayuda extranjera, ofrece asistencia en el exterior para el desarrollo económico, así como ayuda humanitaria. La AID tiene un centro de ayuda internacional en materia ambiental para países en desarrollo.
- Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades (U.S. Agency for Toxic Substances and Disease Registry –ATSDR-): La ATSDR, dependencia del Servicio de Salud Pública, responde directamente al Director de Salud Pública. Está autorizada a: mantener un registro nacional de padecimientos graves y enfermedades de personas expuestas a sustancias tóxicas, establecer un inventario de literatura, investigaciones y estudios de los efectos de las sustancias tóxicas en la salud, formular el perfil toxicológico de las sustancias peligrosas más importantes, y conducir evaluaciones de salud de todos los sitios contaminados que se incluyen en la Lista Nacional de Prioridades.
- Comités Consultivos: Tanto el gobierno federal como los estatales recurren a comités consultivos, algunos de los cuales están autorizados por leyes específicas.
- Dependencias estatales: Todos los Estados cuentan con dependencias para la protección, la conservación de la naturaleza o el manejo de las tierras públicas que desempeñan funciones similares a las de las dependencias federales paralelas. Estas dependencias ambientales estatales establecen las normas y los lineamientos, instrumentan y administran las leyes, desarrollan los programas de educación pública y supervisan su cumplimiento. Tienen, por lo general, amplios poderes para investigar, realizar inspecciones e iniciar acciones administrativas, civiles y penales. Asimismo, a muchas dependencias estatales se les ha delegado autoridad para instrumentar y aplicar programas federales al amparo de numerosas disposiciones ambientales, como la Ley del Aire Puro, la Ley del Agua Limpia, y la Ley de Conservación y Recuperación de los Recursos Naturales.

3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE A NIVEL NACIONAL

3.1 La Constitución Nacional

Indudablemente el gobierno municipal es responsable de asegurar la correcta provisión del servicio de higiene urbana. Ello independientemente de la modalidad institucional o empresarial que se establezca con tal propósito. A efectos que las municipalidades puedan cumplir cabalmente con dicho mandato, ello amerita que exista y se cumpla un marco institucional y legal apropiado.

En tal sentido, este apartado tiene por objeto exponer los preceptos constitucionales, Constitución Nacional y Constitución de la Provincia de La Pampa, que deben ser observados a fin de garantizar la gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos.

- ♦ *Derecho a un ambiente sano y equilibrado*

La Constitución de la Nación Argentina reformada en el año 1994, consagra en el Capítulo Segundo de la Primera Parte, los "Nuevos Derechos y Garantías", dentro de los cuales se declara expresamente el derecho de todo habitante a gozar de un ambiente sano y equilibrado, el deber de preservarlo, y la obligación de las autoridades jurisdiccionales de proveer a la protección de ese derecho (conf. art. 41, 1º y 2º párr.).

En el mismo sentido, la Constitución Provincial -sancionada en 1960 y con las reformas de la Convención de 1994-, incorpora la temática ambiental en el artículo 18. Declara la obligación por parte del Estado, como así también de la comunidad, de proteger el ambiente y los recursos naturales, dictar las normas que aseguren la preservación del patrimonio natural y cultural de la provincia, y aquellas que garanticen la información y educación ambiental en todos los niveles de enseñanza.

Respecto de la protección de los derechos enunciados en los artículos 18 y 19, en el artículo 20º, la Constitución Provincial determina que toda persona física o jurídica podrá recurrir en defensa de los mismos ante el Ministerio Público.

Asimismo, la Carta fundamental pampeana determina la competencia originaria y de apelación del Superior Tribunal de Justicia *"para resolver cuestiones controvertidas por parte interesada, referentes a la inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, edictos, resoluciones o reglamentos que estatuyan sobre materias regidas por esta Constitución"* (conf. Inc. 1, art. 97, C.P.).

- ♦ *Daño Ambiental*

La obligación de recomponer el daño ambiental conforme lo establezcan las regulaciones vigentes, se encuentra expresamente declarado en ambas Constituciones – art. 41, C.N., art. 18 *in fine*, C.P.-.

El daño ambiental, no debe acarrear solamente el deber de indemnizar a las víctimas, sino que generará prioritariamente la obligación de restaurar las consecuencias dañinas para el ambiente.

La Nación, las provincias y los municipios pueden verse obligados a reparar el daño ocasionado al ambiente si no controlan adecuadamente una actividad que, siendo inicialmente inocua, se transforma en degradante del entorno.

En tal sentido es necesario establecer mecanismos de calidad ambiental en todas las fases del manejo de los residuos.

Se debe considerar el servicio de aseo dentro de la perspectiva ambiental, donde el principio de la responsabilidad compartida debe ser el eje central, manifestado por una corresponsabilidad social y la participación conjunta, coordinada y diferenciada de los productores, consumidores, empresas de servicios de manejo de residuos sólidos públicas o privadas, usuarios o no de los servicios, y los gobiernos nacionales, provinciales y locales.

- ♦ *Distribución de competencias ambientales. Normas de presupuestos mínimos de protección.*

El régimen jurídico que estructura la radicación y funcionamiento de los servicios municipales, regionales y/o empresariales de higiene urbana, básicamente, es alcanzado por el sistema general de distribución de las competencias ambientales, conforme lo establece nuestra Constitución Nacional.

Recurriendo a los principios generales, la distribución de competencias Nación y Provincias, surge de la aplicación del artículo 121 de la Constitución Nacional, conforme al cual las Provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación. Es decir que la Nación posee una competencia de excepción, ya que ella debe resultar de una delegación expresa, hecha a su favor por parte de las Provincias.

En materia ambiental, la cláusula contenida en el tercer párrafo del nuevo artículo 41 - texto reformado 1994, Constitución Nacional -, expresa que *"corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales"*.

Cabe señalar, que no hay una sola ley formal de presupuestos mínimos, sino que se trata de una tarea permanente de legislar los presupuestos mínimos ambientales. Cuando surja una ley nacional que exceda los límites competenciales asignados (presupuestos mínimos) no dejando espacio para la complementación provincial, en ese supuesto aparecerá la legitimación de las provincias para impugnar ante la justicia la ley por inconstitucional. Se persigue una normativa que sea uniforme y otra que sea específica y la complementa, pero teniendo en cuenta los aspectos locales del lugar donde se aplique.

La competencia para legislar en materia ambiental está depositada, de manera prioritaria, en los municipios y provincias. Para las provincias los presupuestos mínimos nacionales son una norma "umbral" o "básica", y en consecuencia también lo han de ser para los municipios, es ésta la única manera para que el sistema cobre coherencia y unidad (cfr. Pigretti, Eduardo, Derecho Ambiental Profundizado, La Ley, Bs. As. agosto 2003, pág. 31).

- ♦ *Régimen Municipal*

El contenido del régimen de los municipios provinciales se vincula a la denominada autonomía municipal por la expresa remisión al artículo 5to. que efectúa el nuevo artículo 123 de la Constitución Nacional. El precepto constitucional prescribe que el alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero de la autonomía municipal corresponde que sea regulado por la Constitución que dicta cada Provincia - y en su caso las leyes orgánicas que dicten las legislaturas provinciales -, con arreglo al sistema y a los principios de la Constitución Nacional.

Por su parte la Constitución de la Provincia establece entre las atribuciones y deberes comunes a todos los municipios, las de dictar ordenanzas y reglamentos en materia de higiene (conf. art. 123, inc. 4).

En cuanto a los conflictos que surgieren entre municipalidades, y entre éstas y los Poderes de la Provincia el artículo 97° de la Constitución de La Pampa, establece el ejercicio de la jurisdicción originaria y exclusiva del Superior Tribunal de Justicia.

♦ *Servicios Públicos*

La norma del artículo 42, C.N., menciona en forma expresa “al servicio público” y se refiere en su contenido al “usuario”, titular del interés público o colectivo que provocó y justificó el sometimiento de una determinada actividad al régimen de servicio público, él es el factor determinante. La necesidad de llegar a la generalidad de los usuarios nace de la valoración social que es captada por el legislador, por ello somete su prestación al régimen de garantía constitucional.

Por su parte la Constitución Provincial, regula los servicios públicos en el artículo 42, la norma preceptúa lo siguiente:

- Pertenecen originariamente al Estado provincial o municipal,
- Se propenderá a que la explotación de los mismos sea efectuada “*preferentemente*” por el Estado, municipios, entes autárquicos o autónomos, o cooperativas de usuarios, en los que podrán intervenir las entidades públicas.
- Se podrán otorgar concesiones a particulares y éstas se acordarán previa licitación de carácter público y con expresa reserva del derecho de reversión por la Provincia o los municipios en su caso, quienes ejercerán un contralor estricto respecto al cumplimiento de la concesión.
- Se determinará por ley especial las formas y condiciones de la explotación de los servicios públicos por la Provincia, municipalidades, concesionarios y demás entidades autorizadas a prestarlos.

Por otra parte el artículo 68°, atribuye a la Cámara de Diputados la facultad de legislar sobre servicios públicos de la Provincia, establecidos fuera de la jurisdicción municipal (cfr. inc. 4, art. 68, C. P.).

♦ *Amparo*

El artículo 43 - párrafos primero y segundo -, prevé los mecanismos legales conducentes a la protección de los derechos enunciados en los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional. En tal sentido, en el artículo de referencia se declara lo siguiente:

"Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva".

"Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización".

♦ Dominio de los Recursos Naturales

La reforma constitucional de 1994 efectuó algunos agregados en la Carta Magna al título denominado "Gobiernos de Provincia", entre ellos el artículo 124 que en su último párrafo establece que "... corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".

Esta norma enuncia un principio expresado por la mayoría de la doctrina y jurisprudencia anteriores a la reforma del texto constitucional.

3.1.1. Conclusiones

Del análisis de los preceptos constitucionales expuestos, se concluye lo siguiente:

- La Nación debe dictar la legislación de protección mínima común a todo el territorio nacional, de manera tal que se puede concluir que los presupuestos mínimos son institutos básicos comunes para todo el territorio nacional y, por esa razón, plenamente operativos y eficaces en cada provincia – y municipio – excepción hecha que exista en la provincia – o municipio – una norma local que provea mejor, más ampliamente con mayor eficiencia, rigor y en mayor grado a la tutela, y protección del ambiente.
- La reforma del año 1994 de la Constitución Nacional, establece la autonomía de los municipios, tal como surge en forma expresa del nuevo artículo 123 de la Constitución Nacional.
- La higiene urbana en jurisdicción local es inherente a la esfera municipal, y abarca no sólo la prestación del servicio público –que comprende todos los aspectos que le son propios, sin que pueda escindirse en él lo atinente a la disposición final de los residuos-, sino también facultades de inspección o policía a su respecto, la construcción de obras públicas necesarias para su cumplimiento, la potestad de imponer y percibir tributos correspondientes (tasas, contribuciones, cánones) por su prestación o concesión. Asimismo, la Ley Orgánica Municipal prevé la asociación o formación de consorcios

municipales que redunden en una mejor y más eficiente prestación de sus funciones *“en pro de la prosperidad, de la seguridad y el progreso de los habitantes de sus ejidos”* (cfr. art. 157 Ley Orgánica Municipal N° 1.597).

- El daño ambiental, no debe acarrear solamente el deber de indemnizar a las víctimas, sino que “generará prioritariamente” la obligación de restaurar las consecuencias dañinas para el ambiente. La Nación, las provincias y los municipios pueden verse obligados a reparar el daño ocasionado al ambiente si no controlan adecuadamente una actividad que, siendo inicialmente inocua, se transforma en degradante del entorno.

3.2 Leyes de Presupuestos Mínimos

Como se expuso anteriormente, los presupuestos mínimos de protección ambiental son una *“categoría especial de competencias concurrentes. El mínimo protectorio escapa a la competencia provincial, porque son propias del estado federal; las normas complementarias de competencia provincial son la añadidura para maximizar lo mínimo”* (cfr. Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho constitucional, t. 1-B, Ediar, 2001, ps. 239/240).

Desde julio del año 2002, se han promulgado las leyes de presupuestos mínimos que, en orden cronológico, a continuación se exponen.

- Ley N° 25.612, de presupuestos mínimos para la gestión integral de los residuos industriales y de actividades de servicio. Publicada B.O. 29/07/02.
- Ley N° 25.670, de presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de PCB's. Publicada B.O. 19/11/02.
- Ley N° 25.675, de presupuestos mínimos para la gestión sustentable y adecuada del medio ambiente. Publicada B.O. 28/11/02.
- Ley N° 25.688, régimen de gestión ambiental de las aguas. Publicada B.O. 30/01/03.
- Ley N° 25.831, de información pública ambiental. Publicada B.O. 07/01/04
- Ley N° 25.916, régimen de gestión integral de residuos domiciliarios. Promulgada parcialmente con fecha 03/09/04, observada por Decreto N° 1158/04.

3.3. Marco legal sobre Residuos

3.3.1 Ley N° 25.612 de gestión integral de residuos industriales y actividades de servicios

La Ley Nacional N° 25.612 – promulgada parcialmente en julio de 2002 –, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales o de actividades de servicios.

Es Autoridad de Aplicación la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Para identificarlos los describe en el artículo 2º como *“cualquier elemento, sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial, por la realización de una actividad de servicio, o por estar relacionado directa o indirectamente con la actividad, incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del cual su poseedor productor o generador no pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo”*.

A ese tipo básico le incorpora dos categorías más, que son los generados por una actividad de servicios, que es la que complementa a la industrial, y a los que por sus características sean asimilables a los de la anterior.

Esos residuos no industriales pueden provenir de actividades agropecuarias, militares, comerciales, recreativas, viales, ferroviarias, eléctricas, mineras, de las comunicaciones o de cualquier otra actividad, cuando el residuo sea asimilable al industrial por los niveles de riesgo que genere.

Excluye expresamente en el artículo 5º, los siguientes residuos:

- Los residuos biopatogénicos
- Los residuos domiciliarios
- Los residuos radioactivos
- Los residuos que resulten de operaciones de buques y aeronaves

La norma en el artículo 8º establece que las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son responsables del control y fiscalización de la gestión integral de los residuos; asimismo les compete identificar a los generadores y caracterizar los residuos que producen y clasificarlos, como mínimo, en tres categorías según sus niveles de riesgo bajo, medio y alto.

Establece el régimen de obligaciones y responsabilidades a los que deben someterse los sujetos comprendidos en la Ley de estudio, a saber: generadores, transportistas, plantas de tratamiento y disposición final.

En el caso que el transporte de los residuos tenga que realizarse fuera de los límites provinciales, esta Ley prevé que deberá existir convenio previo entre las jurisdicciones intervinientes (cfr. art. 26º).

La Ley exige que previo a la habilitación, toda planta de almacenamiento, tratamiento o disposición final de residuos, *“...deberá realizar un estudio de impacto ambiental, el cual deberá ser presentado ante la autoridad competente, que emitirá una declaración de impacto ambiental, en la que fundamente su aprobación o rechazo”* (conf. art. 32).

Cabe señalar que el artículo 39º de la norma de estudio prevé que el uso de la propiedad inmueble para la instalación o funcionamiento de sistemas y plantas de tratamiento o disposición final de residuos, deberá ser comunicado al registro de la propiedad que corresponda.

La norma establece que las autoridades provinciales y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llevarán y mantendrán actualizados los registros que correspondan, en el que deberán inscribirse todas las personas físicas o jurídicas responsables de la generación, manejo, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos industriales. La información obtenida por los mismos deberá integrarse en un Sistema de Información Integrado, que será administrado por la autoridad ambiental nacional y de libre acceso para

la población, a excepción de la información que deba considerarse de acceso restringido, por afectar derechos adquiridos o a la seguridad nacional (conf. art. 19, L. N° 25.612).

Otro de los requisitos que deben cumplir los sujetos comprendidos por esta Ley es documentar en el Manifiesto – instrumento con carácter de declaración jurada –, la naturaleza y cantidad de residuos, su origen y transferencia del generador al transportista, y de éste a la planta de tratamiento o disposición final, así como los procesos de tratamiento o eliminación a los que fueren sometidos, y cualquier otra operación que respecto de los mismos se realizare.

El artículo 51 establece la competencia de la Justicia ordinaria para entender en las acciones que se deriven de su incumplimiento.

La competencia de la Autoridad de Aplicación, se encuentra regulada en el Título III.

Para finalizar, cabe señalar que esta Ley se encuentra en pleno proceso de reglamentación consensuada. La doctrina interpreta que la norma está vigente, como así también se encuentra vigente la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos en carácter de ley complementaria, a tenor de lo prescripto en la parte final del art. 60 de la propia Ley N° 25.612 y hasta tanto los registros locales sean efectivamente puestos en funcionamiento por las respectivas jurisdicciones.

En función de lo expuesto, se puede concluir que no se ha derogado la Ley N° 24.051 como estaba previsto en el texto original de la Ley N° 25.612, pero que fuera vetada por el Decreto de promulgación parcial N° 1342/02, como así tampoco estarían derogadas las normas provinciales vigentes en la materia.

3.3.2. Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos

Actualmente, por ser el máximo organismo con competencia en el área ambiental la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable es la autoridad de aplicación de esta Ley Nacional, régimen al que adhirió la Provincia de La Pampa mediante la sanción de la Ley N° 1466, reglamentada por Decreto N° 2054/00.

Se aplica en los siguientes supuestos:

- i) generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional o ubicados en territorio de una provincia y destinados al transporte fuera de ella.
- ii) cuando a criterio de la autoridad de aplicación, dichos residuos pudieran afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado;
- iii) cuando las medidas higiénicas o de seguridad que fueran conveniente disponer, tuvieren una repercusión económica tal que tornase aconsejable uniformarlas en todo el territorio de la Nación.

Teniendo en cuenta que un daño al medio ambiente no puede considerarse privativo de una zona o jurisdicción, ya que necesariamente tendrá influencia en todo el territorio nacional y aun extraterritorialmente, resulta difícil imaginar qué casos de tratamiento de residuos peligrosos no están regidos por la LRP.

La LRP define "*residuo peligroso*" a "*todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general*". En particular son considerados peligrosos los residuos indicados en los anexos de la LRP, facultándose a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a emitir las enmiendas e incorporaciones que considere necesarias.

Además, con el propósito de ejercer un debido control sobre las sustancias peligrosas, la LRP creó el "Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos" habilitado mediante Resolución N° 413/93 por la autoridad de aplicación, en el cual deben necesariamente inscribirse todas las personas responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

Una vez cumplidos los requisitos que fija la Ley de marras para la inscripción en el Registro, los inscriptos reciben el llamado Certificado Ambiental, con validez por un año, con el cual se acredita en forma necesaria y exclusiva, la autorización y aprobación del sistema de transporte, manipulación, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

El Certificado Ambiental es definido como el instrumento administrativo por el cual se habilita a los generadores, transportistas y operadores para la manipulación, tratamiento, transporte y disposición de los mismos.

La importancia de la obtención del Certificado Ambiental radica en que el mismo es un requisito necesario para la habilitación de las respectivas industrias, transportes, plantas de tratamiento o disposición y otras actividades en general, que generen u operen con residuos peligrosos.

Asimismo, la Secretaría puede inscribir de oficio a las personas que por su actividad se encuentren comprendidos en los términos de la LRP.

Además, la Secretaría está facultada para rechazar la solicitud de inscripción en el Registro, suspender, cancelar o inhabilitar la inscripción, cuando la información que posea le permita suponer que podrían existir situaciones pasibles de la Sanciones previstas en la LRP.

La LRP y su decreto reglamentario disponen también que el transporte y generación de residuos peligrosos debe asentarse, con intervención de la Secretaría, en un documento llamado Manifiesto, cuyo contenido es taxativamente regulado. En el Manifiesto se debe asentar la naturaleza y cantidad de los residuos generados, su origen, transferencia del generador al transportista y de éste a la planta de tratamiento o disposición final; los procesos de tratamiento o disposición final, así como también los procesos de tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos y cualquier otra operación que con respecto a los mismos se efectúe.

La LRP define al generador de residuos peligrosos como aquel que, como resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad, produzca residuos calificados como peligrosos en los términos de la LRP.

Asimismo, el Decreto Reglamentario N° 831/93 consagra la obligación de toda persona física o jurídica que genere residuos, de verificar si éstos se encuentran calificados como peligrosos en los términos de la LRP; en los casos de generación de forma eventual (no programada) o accidental, debe también cumplir con las disposiciones de esta ley.

Los generadores deben solicitar su inscripción en el Registro presentando una declaración jurada describiendo las operaciones que realiza, datos de la empresa, características de los residuos, entre otros datos. Esta declaración jurada, además, sirve como base para la aplicación de una tasa por generación (evaluación y fiscalización) de residuos peligrosos que los generadores deben abonar, en función de la peligrosidad y cantidad de los residuos generados, y que no puede ser superior al 1 % de la utilidad presunta promedio de la actividad en razón de la cual se generan dichos residuos.

Por su parte, el Decreto Reglamentario N° 831/93 establece una calificación de los generadores de residuos, según la cantidad y peligrosidad de los residuos generados.

La LRP establece que el generador es responsable por los daños que ocasionen los residuos que produzca, en calidad de dueño de ellos. Dicha responsabilidad subsiste con independencia de la entrega al transportista o planta de tratamiento o disposición de los residuos generados.

Los transportistas de residuos peligrosos deben denunciar, para su inscripción en el Registro, los datos de la empresa, tipo de residuos que transportan, listados de vehículos y contenedores a ser utilizados y de peligro causado por accidente, acreditar conocimiento para proveer respuesta adecuada en caso de emergencia y acompañar la póliza de seguro que cubra daños causados o garantía suficiente.

La LRP contiene una serie de prohibiciones para el transportista, tales como:

- Mezclar residuos peligrosos con residuos o sustancias no peligrosos o residuos peligrosos incompatibles entre sí;
- Almacenar residuos por un período mayor de 10 días;
- Transportar, transferir, o entregar residuos peligrosos cuyo embalaje sea deficiente;
- Aceptar residuos cuya recepción no esté asegurada por una planta de tratamiento y/o disposición final;
- Transportar simultáneamente residuos peligrosos incompatibles entre sí en una misma unidad de transporte.

Con respecto a la responsabilidad, la LRP establece la responsabilidad del transportista por los daños causados por los residuos que transporte, dada su calidad de guardián de los mismos.

Plantas de tratamiento son aquellas en las que se modifican las características físicas, la composición química o la actividad biológica de cualquier residuo peligroso, de modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas o se recupere energía y/o recursos materiales, o se obtenga un residuo menos peligroso o se lo haga susceptible de recuperación o más seguro para su transporte o disposición final.

Son plantas de disposición final los lugares especialmente acondicionados para el depósito permanente de residuos peligrosos en condiciones exigibles de seguridad ambiental.

En toda planta de tratamiento o disposición, los titulares de los residuos son responsables, en calidad de guardianes, por los daños producidos por los que traten o almacenen.

La LRP establece un sistema de responsabilidades con respecto a los daños producidos por residuos peligrosos, que modifica el sistema general de responsabilidad del Código Civil. Así:

- Se presume, salvo prueba en contrario, que todo residuo peligroso es cosa riesgosa en los términos del art. 1113 del Código Civil.
- No es oponible a terceros la transmisión o abandono voluntario del dominio de residuos peligrosos.
- El dueño o guardián no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero de quien no debe responder, cuya acción pudo ser evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso.
- La responsabilidad del generador por los daños ocasionado por los residuos peligrosos no desaparece por la transformación, especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de éstos, a excepción de aquellos daños causados por la mayor peligrosidad que un determinado residuo adquiere como consecuencia de un tratamiento defectuoso realizado en la planta de tratamiento o disposición final.

La LRP establece un tipo penal, con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, para aquél que utilizando los residuos a que se refiere la LRP envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, agua, la atmósfera o el ambiente en general.

Si el hecho fuera seguido de la muerte de alguna persona las penas se elevan de 10 a 25 años de prisión. En caso de que el delito fuere cometido por negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos, la pena será de 1 mes a 2 años; y de 6 meses a 3 años, si del hecho resultare la enfermedad o muerte de una persona.

Si alguno de estos hechos se hubiese producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudieren existir.

La LRP consagra la jurisdicción federal para conocer las acciones penales que deriven de la ley.

3.3.3 Ley Nº 25.916 de gestión de residuos domiciliarios

La Ley Nº 25916 de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de residuos domiciliarios, es la última de las leyes que están conformando el nuevo orden público ambiental federal.

Siempre que respondan a la definición de domiciliarios, la norma incluye tanto los desechos de origen residencial como comercial, industriales o institucionales, sanitarios y asistenciales, aunque aclara: *“a excepción de aquellos cuya gestión hubiere sido regulada por normas específicas”*. El carácter de “domiciliarios” surge de la definición que hace la misma Ley, determinando que serán considerados tales aquellos elementos, objetos o sustancias que resulten desechados y/o abandonados, como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas (cfr. art. 2).

La norma clasifica a los generadores en individuales y especiales, de acuerdo a la cantidad y calidad de residuos domiciliarios que generen. En tanto que los parámetros para su determinación se establece que serán determinados por las normas complementarias de cada jurisdicción. Respecto de los generadores especiales, en los términos del artículo 12, son los que producen residuos domiciliarios en calidad, cantidad y condiciones tales que, a criterio de la autoridad competente, requieran de la implementación de programas particulares de gestión, previamente aprobados por la misma.

La nueva ley, en concordancia con la distribución de atribuciones reglada por la Constitución Nacional en materia ambiental, determina para su aplicación la competencia de las autoridades locales (art. 5º), responsabilizándolas por la gestión integral de los residuos que se produzcan en su jurisdicción, e imponiéndoles la obligación de garantizar que los residuos domiciliarios sean recolectados y transportados a los sitios habilitados, mediante métodos que prevengan y minimicen los impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población (art. 6º), facultándoles a suscribir acuerdos y convenios con entes públicos o privados para el cumplimiento de esa gestión. (art. 7º).

Asimismo, establece el deber de las autoridades competentes de promover la *“valorización de residuos mediante la implementación de programas de cumplimiento e implementación gradual”* (art. 8º).

En cuanto a la disposición final de residuos domiciliarios, la norma prescribe que compete a las autoridades establecer los requisitos necesarios para la habilitación de los centros de disposición final, entre los cuales el artículo 18 de esta Ley exige la aprobación de una Evaluación de Impacto Ambiental, que además *“contemple la ejecución de un Plan de Monitoreo de las principales variables ambientales durante las fases de operación, clausura y postclausura”*.

En concordancia con el nuevo orden público ambiental establecido por la Ley General del Ambiente, tributaria a su vez de un nuevo federalismo denominado “de concertación”; en el Capítulo VI, fija la obligatoriedad de la coordinación interjurisdiccional concertada, en el seno del Consejo Federal del Medio Ambiente - COFEMA -, a fin de acordar políticas de gestión integral de los residuos domiciliarios, que unifiquen criterios técnicos y ambientales a emplear en las distintas etapas de la gestión integral, así como las metas de valorización de los residuos domiciliarios.

A este fin, se deben formular políticas en materia de gestión de residuos domiciliarios, consensuadas en el seno del COFEMA, fomentar medidas que contemplen la integración de los circuitos informales de recolección de residuos, promover programas de educación ambiental, fomentar la valorización de los residuos y asesorar a ese fin, así como para implementar sistemas de recolección diferenciada en las distintas jurisdicciones, promover la participación de la población en programas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos, e impulsar un programa nacional de metas cuantificables de valorización de residuos de cumplimiento progresivo.

Prueba de la trascendencia que tiene la gestión de residuos sólidos urbanos, es la prioridad que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable le ha dado en la Agenda Ambiental Nacional. La SAYDS está en la actualidad dedicada a implementar la “Estrategia nacional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos” con apoyo del BIRF (Préstamo BIRF-AR 4281 PNUD ARG 99/025).

3.4. Marco Institucional Nacional

A través de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92), se establecieron los ministerios que conforman la organización de la Administración Pública Nacional y sus competencias. Por Decreto N° 828/06, se ampliaron las competencias de la Jefatura de Gabinete de Ministros asignándole las relativas a la implementación de la política ambiental, la preservación y protección de los recursos naturales y el desarrollo sustentable.

Posteriormente, mediante Decreto N° 830/06, se transfirió de la órbita del Ministerio de Salud al ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Asimismo, analizada la organización de la citada Secretaría y considerando razones de funcionalidad, por Decreto N° 830/06 se procedió al reordenamiento de los niveles políticos de la misma, con el objeto de cumplir con los criterios de eficacia y eficiencia para el logro de los objetivos estratégicos propuestos y optimizar su funcionamiento. A continuación se exponen las atribuciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, conforme le fueran asignadas por Decreto N° 830/06.

1. Asistir al Jefe de Gabinete de Ministros en la implementación de la política ambiental como política de Estado y en los aspectos técnicos relativos a la política ambiental y la gestión ambiental de la Nación.
2. Coordinar las políticas del gobierno nacional que tengan impacto en la política ambiental, estableciendo la planificación estratégica de políticas y programas ambientales del gobierno nacional.
3. Coordinar y articular la gestión ambiental de los organismos responsables de ejecutar la política ambiental nacional.
4. Planificar y coordinar la inserción de la política ambiental en los Ministerios y en las demás áreas de la Administración Pública Nacional.
5. Integrar el Consejo Federal del Medio Ambiente.
6. Intervenir desde el punto de vista de su competencia en el desarrollo de la biotecnología.
7. Entender en el ordenamiento ambiental del territorio y en la planificación e instrumentación de la gestión ambiental nacional.

8. Entender en la preservación, protección, defensa y mejoramiento del ambiente, en la implementación del desarrollo sustentable, en la utilización racional y conservación de los recursos naturales, renovables y no renovables, la preservación ambiental del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica tendientes a alcanzar un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, en el marco de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
9. Entender en la elaboración y actualización permanente del diagnóstico de la situación ambiental nacional en forma coordinada con organismos nacionales, provinciales y municipales.
10. Entender en la propuesta y elaboración de regímenes normativos que permitan la instrumentación jurídica administrativa de la gestión ambiental, el ordenamiento ambiental del territorio, a la conservación y uso racional de los recursos naturales y la calidad ambiental.
11. Entender en el establecimiento de metodologías de evaluación y control de la calidad ambiental en los asentamientos humanos así como la formulación y aplicación de indicadores y pautas que permitan conocer el uso sustentable de los recursos naturales.
12. Entender en el establecimiento de un sistema de información pública sobre el estado del ambiente y sobre las políticas que se desarrollan.
13. Promover la difusión de la información y la adquisición de conciencia sobre los problemas ambientales del país.
14. Promover la educación ambiental formal y no formal y coordinar con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología programas y acciones que fortalezcan su implementación.
15. Entender en las relaciones con las organizaciones no gubernamentales vinculadas al ambiente y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental.
16. Entender en la aplicación de los tratados internacionales relacionados con los temas de su competencia, e intervenir en la formulación de convenios internacionales en los asuntos propios de su área.
17. Conducir la gestión y obtención de cooperación técnica y financiera internacional que otros países u organismos internacionales ofrezcan, para el cumplimiento de los objetivos y políticas del área de su competencia, en coordinación con los demás organismos del estado para su implementación.
18. Entender en la gestión ambientalmente adecuada de los recursos hídricos en coordinación con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
19. Coordinar e impulsar planes y acciones con organismos interjurisdiccionales de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal competentes, que entiendan en el saneamiento y ordenamiento ambiental de las cuencas y costas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a fin cumplir los postulados de la Agenda 21, Capítulo 21, y considerando que en materia de gestión de residuos sólidos urbanos se requiere de un modelo sistematizado de gestión, homogéneo y adaptable a cada lugar, diseñó la Estrategia Nacional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos mediante propuestas de acciones futuras que puedan acordarse con los niveles provinciales y municipales, como así también con otras organizaciones sociales, instituciones científicas, académicas y profesionales, operadores privados y demás entes relacionados al manejo de los RSU.

El fin al que apunta la Estrategia Nacional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos está centrado en la preservación de la salud humana y la mejora de la calidad de vida de la población, como así también en el cuidado del ambiente y la conservación de los recursos naturales.

Para lograr una adecuada preservación ambiental, la Estrategia Nacional prioriza las medidas de prevención por sobre las de corrección ambiental, entendiéndose por éstas a las de mitigación, remediación y compensación. Asimismo, promueve la realización de Estudios de Impacto Ambiental (EIA); como así también aconseja efectuar los correspondientes Planes de Gestión Ambiental que incluyan los programas territoriales articulados con el Plan Gestión Integral de RSU.

La estrategia nacional se basa en los siguientes principios:

- Disminución significativa de los residuos a generar y disponer con aplicación de procesos de minimización y valorización.

Promueve la minimización de las cantidades de residuos a generar y también a disponer, como asimismo alienta la maximización de su aprovechamiento y valorización, a través de la aplicación de la trilogía: Reducir, Rehusar y Reciclar, a la cual, últimamente, la USEPA18 le ha agregado una cuarta "R" -Recompra de los materiales reciclados-, en cada etapa de la cadena de producción, comercialización y consumo de bienes y servicios.

- Disposición final de RSU en forma sostenible, a través de la puesta en marcha de rellenos sanitarios apropiados y de la erradicación y posterior clausura de basurales a cielo abierto.

Para alcanzar estos principios fundamentales se requiere de un gran número de acciones, en la estrategia de referencia se focalizan en cinco objetivos específicos, los cuales permiten identificar, agrupar y establecer una priorización de tareas. Estos se describen, en forma genérica, de la siguiente manera:

- Reducción y valorización de RSU.
- Implementación de la gestión integral de RSU.
- Clausura de basurales a cielo abierto.
- Recopilación, procesamiento y difusión de información.
- Comunicación y participación.

Asimismo, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, asumido el compromiso de implementar lo enunciado en la Agenda 21, ha comenzado a desarrollar a través de la Dirección de Calidad Ambiental, tareas conducentes a la formulación del Plan Nacional de Valorización de Residuos que, a escala nacional, establece directrices generales sobre gestión ambiental de los residuos sólidos urbanos.

El Plan prioriza los siguientes objetivos:

1. Promover la minimización y recuperación de los residuos, optimizando los beneficios sociales y ambientales emergentes
2. Implementar una gestión consensuada con los agentes involucrados en todo el ciclo de vida de los residuos.

3. Difundir, entre Medianos y Pequeños Asentamientos, la práctica de manejo ambiental de sus residuos sólidos mediante la recuperación y reciclado de los mismos y la desactivación, con remediación, de los basurales a cielo abierto.
4. Impulsar la formulación de normas nacionales (Presupuestos Mínimos) sobre Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y sobre Envases y Embalajes.

De lo expuesto se concluye que el soporte institucional de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos a nivel nacional se centra en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en tanto son las Provincias y sus municipios los responsables de su implementación utilizando, de ser necesario, sistemas de regionalización no sólo aplicables a la disposición final, sino también al procesamiento de los RSU.

A continuación se enumeran algunos ejemplos de regionalización en la gestión de residuos que existen en Argentina, relevados del informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ellos son:

- Agencia Córdoba Ambiente: Esta agencia elaboró los ejes estratégicos de la política integral de manejo de RSU para la Provincia de Córdoba, denominada Programa Córdoba Limpia. Considera que la gestión de residuos resulta técnica y económicamente viable cuando se aborda a nivel regional, posibilitando de esta manera la reducción de los costos y permitiendo la sustentabilidad tanto en los programas de desvío (valorización), como en la adecuada disposición final de los RSU.

Las regiones se conforman de acuerdo a parámetros como condiciones de transporte de residuos (costo del flete) desde los centros de generación (localidades) al punto de disposición final. Cabe señalar que la implementación de dicho programa estuvo subordinada al posible acceso a mecanismos de financiamiento de los organismos multilaterales de crédito.

- COPROBA: Se trata de el Consorcio Provincial para la Basura integrado por municipios de la Provincia de La Pampa que surgió a partir de la preocupación de las autoridades municipales y de la comunidad en general por el manejo inadecuado de los residuos. Su objetivo es discutir problemáticas comunes y la manera de superarlas para lograr un manejo conjunto de los residuos generados y asegurar la sustentabilidad, en el tiempo, de los diferentes emprendimientos.

En este marco en el año 2000 se preparó el Plan Modelo para la Gestión de Residuos en la Provincia.

- ECOCOOP: La Cooperativa de Transformación, Comercialización y Provisión de Bienes y Servicios para Municipalidades y Comunas se conformó en diciembre de 1998. Se trata de una red de cooperación intermunicipal constituida por diez municipios de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Su objetivo es resolver cuestiones de índole comercial vinculadas a la gestión de RSU en los municipios y comunas que la conforman, al mismo tiempo que contemplan el uso

compartido de equipos destinados al acondicionamiento de los materiales recuperados como paso previo a su comercialización.

- Provincia de La Rioja: En el marco del préstamo BIRF 3860-AR se preparó el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de la Rioja. Se crearon seis regiones conformadas por 44 localidades, ubicadas en 17 municipios/departamentos. Cuenta con los estudios de alternativas de regionalización para la recolección y disposición final y para el cierre de los basurales existentes. La regionalización planteada se basa en criterios geográficos elementales con miras a optimizar la distribución de los recursos disponibles.

El Proyecto planteado contempla tres etapas: la primera de ordenamiento donde se aprenda una correcta recolección de los residuos (identificación de composición cuali cuantitativa y lugar de disposición final); evitando que el costo incrementa demasiado los gastos de las gestiones actuales. La segunda etapa trata de la concientización de la población y capacitación al personal cuyo inicio está condicionado al cumplimiento de la primera. La tercera etapa comprende las inversiones.

- Provincia de Mendoza: Se trata de un Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, ejecutado por el Gobierno y considerado prioritario, cuyo objetivo es lograr una gestión integral de los RSU.

En dicho Plan la provincia enuncia con carácter tentativo y a modo de propuesta la posible regionalización a definir mediante la integración de distintas áreas servidas proponiendo su concentración en una única planta de tratamiento o disposición final.

Se presume la implementación de esta propuesta logrará reducir notablemente los costos de inversión y operación con significativas ventajas desde el punto de vista ambiental. A tal efecto se dividió la provincia en cuatro regiones: zona Metropolitana, zona Este, zona Centro, zona Sur.

- Provincia de Misiones: En esta provincia posee un caso de regionalización que empezó a funcionar con seis municipios y luego se extendió a ocho.

La disposición final se lleva a cabo en el predio provincial de Fachinal utilizando las estaciones de transferencia que se han definido. Los instrumentos jurídicos que se han utilizado para implementarlo son convenios de adhesión provincia-municipios.

El Departamento de Gestión Ambiental a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos está a cargo del Sistema de RSU provincial y a su vez monitorea y controla la concesión.

- Provincia de Salta: En el marco de la Ley N° 7070, Decreto N° 2354/00 se elabora el "Plan Provincial de Estudio y Gestión de Residuos" originado ante la preocupación del gobierno provincial por las deficiencias que presenta el manejo de los desechos en los distintos municipios del interior de la provincia.

En la etapa de diagnóstico y en base a la información obtenida se definen ocho regiones las que se diferenciaron en mesosistemas y microsistemas, donde los

primeros funcionarán con esquemas monomunicipales, mientras que los macrosistemas adoptan figuras de consorcios regionales quedando la recolección y el transporte a cargo de los municipios. Este Plan requiere de fondos para su implementación.

- Provincia de Santa Cruz: las localidades de Puerto Deseado, Jaramillo y Fitz Roy, Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico Truncado, Koluel Kaike, Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos, cuentan con un proyecto que propone instalar una planta de transferencia en cada localidad y una única Planta de Tratamiento Regional para los RSU generados. Dicho proyecto aún no ha sido implementado por falta de recursos financieros.
- Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires: Se lanzó oficialmente en febrero del 2001 el Programa Provincial de Residuos Sólidos Urbanos por el Poder Ejecutivo Provincial. Aún no ha sido concretado.

Su objetivo es el de asistir al diseño de la política provincial para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos y coordinar su aplicación por parte de los distintos municipios. Este programa propone Parques de Tratamiento en el Cordón del Gran Buenos Aires. Cada uno tratará 1/5 de los RSU generados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los residuos generados por el Partido donde estén emplazados, con una capacidad de operación de 2.000 t/día cada uno.

Para el resto de los municipios del AMBA y del interior de la provincia prevé la instalación de una Planta de Tratamiento cuyas dimensiones irán de acuerdo a la cantidad de residuos generados en su jurisdicción y contempla la posibilidad de realizar convenios y asociaciones entre municipios vecinos.

Entre las distintas limitaciones que han impedido el desarrollo e implementación de las iniciativas descriptas pueden mencionarse:

- a) la planificación territorial existente imposibilita la localización de plantas de tratamiento o centros de disposición final en algunas áreas;
- b) las distancias entre los municipios torna inviables algunas propuestas;
- c) la falta de financiamiento;
- d) la resistencia por parte de la comunidad, principalmente a la instalación de sitios de disposición final;
- e) la voluntad política para impulsar los proyectos y los cambios institucionales.

4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PROVINCIAL

4.1 Normativa aplicable a nivel provincial

Residuos Sólidos Urbanos

En cuanto al manejo de los residuos sólidos urbanos, durante las tareas de relevamiento de información legal, como asimismo en virtud de lo manifestado por funcionarios de la Subsecretaría de Ecología entrevistados, se pudo constatar que no hay una norma provincial específica que regule la materia.

Por su parte, el Código de Faltas de la Provincia, aprobado por Ley N° 1.123, sanciona al que *“en vehículo de carga transportare sin autorización de la autoridad competente, residuos sólidos o líquidos o basuras de cualquier origen, domiciliaria o no. Igual sanción se aplicará a quien los arrojará, depositare o acumulare en lugares públicos o privados no habilitados al efecto por la autoridad competente”* (cfr. art. 91, inc. 4, ap. a, L. 1123).

En tal sentido, resulta conveniente desarrollar una legislación provincial que regule aspectos relacionados con la separación en origen de RSU, disposición inicial, recolección, transporte, almacenamiento, plantas de transferencia y centros de disposición final, como así también erradicación y cierre gradual de basurales a cielo abierto, en concordancia con los lineamientos de la Ley N° 25.916, de manera de ajustar su contenido y posibilitar así la efectiva aplicación y fiscalización de la prestación del servicio, por parte de los organismos provinciales y municipales.

4.1.1. Ley N° 1914 de protección del ambiente

En el marco del artículo 18 de la Constitución Provincial fue sancionada la Ley N° 1914 - B.O. 02/02/01-, por la cual se establecen los lineamientos e instrumentos de política ambiental, tendientes a propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la preservación y reparación del medio ambiente, la educación y participación comunitaria en la materia.

La Subsecretaría de Ecología es la Autoridad de Aplicación, en coordinación con las áreas de gobierno que intervengan en la gestión ambiental, a través del Ente de políticas Ecológicas, creado al efecto por Decreto N° 1921/96. Asimismo, los municipios y/o Comisiones de Fomento adheridos, se encuentran facultados para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 1914 en el ámbito de sus jurisdicciones.

La Ley N° 1914 y su reglamentación parcial aprobada por Decreto N° 2.139/03 - B.O. 12/12/03 - regulan el procedimiento administrativo para obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El artículo 3° de la Ley determina que todos los proyectos de obras y acciones públicas o privadas, capaces de modificar directa o indirectamente el ambiente del territorio provincial, que se enuncian en el Anexo I, *“deberán obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), expedida por la Subsecretaría de Ecología, previa resolución del Ente de Políticas Ecológicas de la Provincia”*.

Asimismo, el citado artículo prevé, en función de la entidad del impacto de la obra o acción a desarrollar, eximir de la presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en cuyo caso, el responsable de la obra o acción cumplimentará una declaración jurada y/o informe ambiental.

Cabe señalar que en el Anexo I de la Ley N° 1914 se enuncian las obras y/o actividades que deben cumplir con el procedimiento descrito, entre las que figuran las plantas de almacenamiento, tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos urbanos, industriales y rurales.

En tal sentido, las plantas de almacenamiento, tratamiento y centros de disposición final que en la actualidad operan los municipios, como así también, las que se instalen en el futuro en territorio de la provincia, deben cumplir con los siguientes requisitos:

- El responsable de la actividad debe presentar la Evaluación de Impacto Ambiental ante el organismo provincial o municipal encargado de autorizar el emprendimiento, quien con el informe técnico correspondiente, deberá remitir todos los antecedentes obrantes en su poder a la Subsecretaría de Ecología a fin de tramitar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
- La Subsecretaría de Ecología debe convocar al Ente de Políticas Ecológicas, sometiendo a consideración y aprobación del mismo el proyecto presentado. A tales efectos, emitirán su opinión técnica todas las áreas representadas en el Ente de Políticas Ecológicas y aquellas que sean convocadas especialmente atento las cuestiones involucradas (cfr. arts. 6 y 7, L. 1914).
- El Ente de Políticas Ecológicas, a través de la Subsecretaría de Ecología convocará a una audiencia pública, con la participación de los potencialmente afectados ante quienes se expondrán los antecedentes del proyecto, la EIA presentada, los dictámenes técnicos emitidos, y toda la documentación que sea de interés (cfr. arts. 6º y ccdtes., D.R. 2139/03).
- Cumplido lo anterior, la Subsecretaría de acuerdo a lo resuelto por el Ente emite la DIA mediante resolución, disponiendo según el caso:
 - Autorizar la realización de la obra o acción en los términos y condiciones establecidos en la EIA presentada.
 - Autorizar la realización de la obra o acción proyectada pero condicionada al cumplimiento de las instrucciones que disponga el Ente de Políticas Ecológicas.
 - Negar la autorización

La DIA será exigida por los organismos centralizados o descentralizados de la Administración Pública Provincial y/o Municipal con competencia en la obra y/o acción.

El artículo 4º prohíbe la autorización administrativa y la ejecución de obras o acciones que no cuenten con la DIA pertinente, *“sin perjuicio de la nulidad de las actuaciones*

administrativas que se hubiesen iniciado, haciendo responsable al funcionario autorizante bajo tales circunstancias” (cfr. art. 4º in fine, L. 1914).

A los efectos de su localización, la norma de análisis prescribe en el artículo 14º, que deberán considerarse los siguientes lineamientos:

- a) *El ordenamiento ambiental del territorio.*
- b) *La naturaleza y características de cada bioma.*
- c) *La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos, la distribución de la población y sus características geoeconómicas en general, y*
- d) *Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales.*

En materia de prevención de la contaminación ambiental, la Ley N° 1914 prohíbe en el artículo 27 *“el vuelco, descarga o inyección de efluentes contaminantes a las masas superficiales y subterráneas de aguas, a la atmósfera y al suelo, cuando los efluentes superen los valores máximos de emisión establecidos para los mismos y/o cuando alteren las normas de calidad determinadas por cada componente ambiental”.*

La norma en el artículo 36 atribuye a los municipios y/o Comisiones de Fomento que adhieran a su régimen, las siguientes facultades:

- Verificar el cumplimiento de las normas ambientales inspeccionando y realizando constataciones.
- De comprobarse algún incumplimiento, están facultados a reclamar la intervención de la autoridad de aplicación.
- Podrán tomar decisiones de tipo cautelar o precautorio dando inmediato aviso a la Subsecretaría de Ecología.
- Celebrar de acuerdos interjurisdiccionales para constituir regiones o zonas integradas por dos o más municipios para el tratamiento de cuestiones ambientales comunes (cfr. art. 37, L. 1914).

Por su parte, en función de lo establecido en el marco regulatorio de análisis, corresponde a la Autoridad de Aplicación prestar asistencia técnica a los municipios y/o Comisiones de Fomento, y fiscalizar el cumplimiento de la Ley N° 1914, *“con la participación de las áreas específicas de la Administración provincial o municipal, respecto de las tareas de control, inspección y evaluación técnica”.*

4.1.2. Conclusiones

Del estudio de la normativa analizada en este apartado – Ley N° 1914 y su reglamentación parcial Decreto N° 2.139/03 -, y lo manifestado por representantes de los municipios que asistieron al Taller organizado por la Consultora, celebrado los días 5, 6 y 7 de Septiembre de 2006 en la ciudad de Santa Rosa, se puede arribar al siguiente diagnóstico:

- Si bien la norma establece como Autoridad de Aplicación a la Subsecretaría de Ecología, en el artículo 34 agrega: *“sin perjuicio de la incumbencia ambiental de cada una de las reparticiones provinciales”*.

Cabe advertir que una de las principales dificultades para aplicar la legislación ambiental es la duplicidad de funciones. La ambigüedad de funciones y atribuciones o la inexistencia de mecanismos para resolver los conflictos de competencia, hacen que las opciones jurídicamente disponibles de regulación no sean siempre las más eficientes.

Con buen criterio, a los efectos de subsanar este tipo de inconvenientes, fue creado el Ente de Políticas Ecológicas en calidad de comisión intersectorial de la Administración Pública Provincial de acuerdo a las atribuciones conferidas por Decreto N° 1921/96 (cfr. art. 35, L. 1914).

- Respecto del artículo 52 de la Ley N° 1914, por el cual se invita a los municipios a adherir a su régimen, el nivel de adhesión formal constatado, mediante el dictado de las correspondientes ordenanzas municipales ha sido insuficiente considerando la relevancia de la norma y sus reglamentaciones parciales, en cuanto a la efectividad de su aplicación y fiscalización.
- Los participantes expresaron la necesidad de promover y fomentar en los municipios programas de capacitación y asistencia técnica acerca el desarrollo de métodos, tecnologías y sistemas de reciclaje o recirculación de residuos u otros tipos de transformación de bajo o nulo impacto ambiental (cfr. art. 31, L. 1914).
- También se planteó la necesidad de capacitación técnica y el desarrollo de programas a largo plazo para la localización, instalación y funcionamiento de centros de disposición final de residuos sólidos urbanos, equipamiento e infraestructura, ambientalmente sustentable.

Cabe advertir que si bien las plantas de almacenamiento y disposición final deben presentar ante la Autoridad de Aplicación la Evaluación de Impacto Ambiental, durante los relevamientos no se pudo constatar que los centros de disposición de residuos sólidos urbanos que en la actualidad operan los municipios, cuenten con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental que los autorice a funcionar en virtud de las disposiciones analizadas precedentemente (cfr. arts. 14, 15, inc. 1, ap. b, Anexo I, pto. 15, L. 1914).

- Asimismo, se observó la necesidad de abordar los problemas de la débil o insuficiente fiscalización y control público de la normativa debido a la escasa capacitación o asistencia técnica de los municipios, tanto respecto del manejo y reciclaje de residuos en particular (cfr. art. 31, L. 1914), como así también en la prevención de la contaminación (cfr. arts. 2, inc. c-, 36, 40, L. 1914; art. 2º, ap. 5º, D.R. 2.139/03).

Asimismo, en el Taller los participantes manifestaron la dificultad de aplicar las normas ambientales en forma estricta a determinados procesos productivos, debido a las presiones de los sectores empresariales por el aumento de los costos, pérdida de

inversiones, desempleo, pérdida de ingresos tributarios, entre otras razones que motivan que las exigencias ambientales en el orden local se vean atenuadas.

Para lograr una correcta toma de decisiones, y una eficaz aplicación de sanciones, la normativa ambiental exige instituciones competentes, con recursos humanos y operativos, con financiamiento y equipos adecuados capaces de fiscalizar, monitorear y sancionar a quienes no cumplen (cfr. art. 2, aps. 6, 7, 8, y 9, D.DR. 2.139/03). De otra manera la Ley se convierte en letra muerta.

- Otro de los argumentos relacionados con el incumplimiento de la normativa ambiental por parte de la población en general, se basa en una visión parcial del manejo de la basura por entender que una vez realizada la disposición inicial de la misma, los residuos son responsabilidad de quien presta el servicio, olvidándose de su componente ambiental, social, económico y de salud, debido a la falta de concientización y educación de la responsabilidad compartida que trae aparejado el manejo de los residuos domiciliarios (cfr. art. 2, inc. e-., L. 1914).

Se manifestó la carencia de estrategias que motiven la participación ciudadana en la gestión de residuos sólidos urbanos, mediante procesos como por ejemplo la separación en origen.

4.2. Residuos Peligrosos. Régimen Legal

La Provincia de La Pampa adhirió al régimen de la Ley Nacional N° 24.051 que norma la generación, manipulación, transporte y tratamiento de los residuos peligrosos cuando dichas actividades se realicen en lugares sometidos a la jurisdicción provincial, en el marco del Artículo 41 de la Constitución Nacional, del Artículo 18 de la Constitución Provincial.

El Decreto 2.054/00, por el cual es aprobada la reglamentación de la Ley N° 1466, establece en el artículo 3° la competencia de la Subsecretaría de Ecología para entender en la materia, en coordinación con los organismos que determina el artículo 59, de conformidad a las competencias asignadas por la Ley de Ministerios, a saber:

- Dirección de Aguas, y Dirección de Transporte y Comunicaciones, dependientes de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
- Dirección de Recursos Naturales y Dirección de Minería, dependientes del Ministerio de la Producción.
- Dirección de Bromatología y Saneamiento Ambiental dependiente del Ministerio de Bienestar Social.
- Dirección de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia.

El artículo 62 prevé que el Ente de Políticas Ecológicas creado por Decreto N° 1921/96, ejercerá cada Comisión Interministerial.

Asimismo, el artículo 63 determina que la Autoridad de Aplicación será asistida por el Consejo Provincial de Ecología, creado por Decreto N° 759/96.

En cuanto a la fiscalización del cumplimiento del régimen de referencia a nivel municipal, el artículo 3° de la Ley N° 1466, invita a los municipios *“a dictar la norma de igual naturaleza que la presente para el tratamiento de los residuos peligrosos”*, en tanto que en el artículo 67 del Decreto reglamentario N° 2.054/00, se invita también a los municipios a celebrar convenios con la Autoridad de Aplicación con el mismo objetivo.

4.2.1. Conclusiones

Si bien el marco regulatorio aplicable a nivel provincial en materia de residuos peligrosos, invita a las municipalidades a dictar normas del mismo tenor o adherirse al régimen de la Ley N° 1.466 y su reglamentación, durante las tareas de relevamiento no se ha constatado una adhesión formal, salvo el caso del Municipio de Gral. Pico que adhirió exclusivamente al régimen de la Ley N° 1466, pero no a su reglamentación.

Se puede considerar que en algunos casos, la falta de adhesión por parte de los municipios se debe a falencias de capacidad y tecnología idónea para ejercer una fiscalización eficaz del cumplimiento del citado plexo normativo. Corrobora lo anterior, lo manifestado por funcionarios de la Subsecretaría de Ecología que a pedido de los municipios han intervenido para solucionar incidentes de contaminación por derrames de residuos peligrosos ocurridos en sus jurisdicciones.

4.3. Agroquímicos. Régimen Legal

A nivel provincial, la fabricación, distribución, comercialización, almacenamiento, traslado y utilización de agroquímicos en territorio provincial se encuentra normada en la Ley N° 1.173, modificada por Ley N° 1886, su reglamentación aprobada por Decreto N° 618/90, y la Disposición N° 385/01 que aprueba las normas básicas de seguridad en depósitos de agroquímicos.

La Autoridad de Aplicación del marco regulatorio de referencia, es la Subsecretaría de Asuntos Agrarios dependiente del Ministerio de la Producción, a quien compete evaluar con medios técnicos la presencia de residuos en los sitios de manejo y expendio de productos agroquímicos, en el medio ambiente en general, como así también tramitar administrativamente los sumarios que se sustancien para determinar la posible comisión de faltas, aplicando a su término las sanciones que prevé el Título IV (cfr. art. 6°, L. 1.173, art. 19°, L. 1.666).

Asimismo, por Ley N° 1886 queda facultada la autoridad de aplicación para establecer, las normas de seguridad, control y verificación relativas a la disposición final de los envases y/o contenedores de los mismos.

El Decreto N° 618/90, reglamentario de la Ley N° 1.173, establece que los límites máximos de residuos de plaguicidas, en los productos y sub-productos agropecuarios, serán los establecidos por los organismos nacionales competentes, en tal sentido el artículo 36 faculta

a la autoridad de aplicación para formalizar convenios al respecto los que serán suscriptos “*ad referendum*” del Poder Ejecutivo Provincial.

El artículo 37º del Decreto Nº 618/90, autoriza el decomiso de agroquímicos prohibidos, vencidos, con marbetes rotos o con sus envases de condiciones deficientes o que por cualquier motivo no cumplimenten los requisitos establecidos por las autoridades competentes nacionales o provinciales.

Respecto de las personas físicas o jurídicas, empresas o entidades cuya actividad principal o accesoria sea la fabricación, distribución, comercialización o aplicación de agroquímicos deberán cumplir con los requisitos que fija el artículo 10 de la Ley Nº 1.173, a saber:

- a) Inscribirse en los registros habilitados a tal fin por la autoridad de aplicación, de lo contrario no podrán desarrollar cualquier actividad relativa a agroquímicos. La caducidad o revocación de la inscripción producirá el mismo efecto.
- b) Contar con un asesor técnico matriculado en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de La Pampa.
- c) Suscribir una autorización, a favor de la autoridad de aplicación, para la inspección de depósitos, instalaciones, maquinarias y documentación en orden a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el marco regulatorio de análisis.
- d) Abonar una tasa de inspección anual, fijada por la autoridad de aplicación.

Por su parte los comercios habilitados están obligados según lo establece el artículo 11º de la Ley Nº 1.173 a registrar en un libro, “*foliado y rubricado por la autoridad de aplicación y provisto por ésta*”, las adquisiciones y ventas de productos agroquímicos. Cuando se trate de productos incluidos en la enumeración de los incisos b) y c), artículo 4º de la Ley Nº 1.173, (agroquímicos de uso y venta profesional; y, aquéllos de uso y venta registrada que requieren un control exhaustivo de comercialización y aplicación), la norma exige la presentación de una prescripción suscripta por un Ingeniero Agrónomo matriculado en el Colegio Profesional de la Provincia de La Pampa, de lo que se dejará constancia en el libro archivándose la prescripción.

Por Disposición Nº 385/05, son aprobadas las Normas Básicas de Seguridad en Depósitos de Agroquímicos, cuya autoridad de aplicación es la Dirección General de Agricultura y Ganadería.

Las normas de referencia establecen las condiciones de ubicación, estructura, y otros requisitos que deben cumplir dichas instalaciones, como así también los recaudos a cumplir en cuanto al almacenamiento y la distribución de los productos en el depósito.

Se prohíbe el almacenaje de envases abiertos, deteriorados o con pérdidas. En caso de derrames, las normas establecen el procedimiento a seguir y las medidas de seguridad a adoptar.

Se exige a los gerentes del depósito llevar un registro de los fitosanitarios recibidos, almacenados, destruidos o sacados del depósito. Asimismo, las normas establecen que se

deberán registrar detalladamente los siguientes datos: fecha de recepción, abastecedores y destinatarios, matrícula del transporte, número de la factura, marca registrada del producto y su número de registro, remito, cantidad recibida y expendida.

4.3.1. Conclusiones

Conforme surge de la Ley N° 1886 modificatoria de la Ley N° 1.173, compete a la Subsecretaría de Asuntos Agrarios a través de la Dirección de Agricultura y Ganadería establecer las normas de seguridad, control y verificación relativas a la disposición final de los envases y/o contenedores de agroquímicos; durante el Taller se manifestó la problemática ambiental debida a la falta de cumplimiento del marco regulatorio de referencia por parte de productores agropecuarios en lo que se refiere a la disposición final de envases usados, dado el vacío normativo existente respecto de los mecanismos administrativos y técnicos a seguir para una correcta disposición final de los mismos.

4.4. Control de PCBs. Régimen Legal

El control del PCBs en todo el territorio de la Provincia de La Pampa se rige por Ley N° 2.055 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 2.722/04, cuya Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Ecología encargada de adoptar las medidas necesarias para garantizar la prohibición del ingreso a la provincia de PCBs, la eliminación de PCBs usado y la descontaminación de PCBs de aparatos que lo contengan.

Asimismo, compete a la autoridad de aplicación autorizar el traslado de aparatos que contengan PCBs bajo estrictas medidas de seguridad, a los efectos de su descontaminación o eliminación según corresponda (cfr. art. 6º, L. 2.055).

El artículo 7º de la Ley establece la creación del Registro Provincial Integrado de Poseedores de PCBs, que es administrado por la Subsecretaría de Ecología, en el que se lleva las constancias de las existencias de PCBs, PCBs usados y aparatos que contengan PCBs inventariadas en el ámbito provincial, las que a su vez deben integrarse al inventario nacional (cfr. art. 8, L. 2.055).

En materia de responsabilidad, el artículo 19 de la Ley N° 2.055 establece la responsabilidad objetiva, es decir, que se presume, salvo prueba en contrario, que los PCBs, los PCBs usados y todo aparato que contenga PCBs, es cosa riesgosa en los términos del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil, modificado por la Ley Nacional N° 17.711. Asimismo, son aplicables para los PCBs usados, las disposiciones contenidas en los Capítulos VII, "De las responsabilidades", y IX (Régimen Penal), de la Ley 24.051.

El traslado de aparatos que contengan PCBs o PCBs usados sólo se podrá realizar por algún motivo especial, a los efectos de su descontaminación, eliminación o reparación, y acompañado por un Manifiesto otorgado a tal fin por la Subsecretaría de Ecología.

Hasta tanto se realice la descontaminación o eliminación de los aparatos que contengan PCBs o PCBs usados, los poseedores deberán garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad durante su almacenamiento. Conforme lo establece el artículo 6º del Decreto

Nº 2272/04, este debe efectuarse en un depósito especial de una sola planta, construido con materiales incombustibles. Las paredes y el piso estarán impermeabilizados con pintura epoxi. El piso del área de almacenamiento propiamente dicho, estará construido de manera tal que no permita que ante un derrame o pérdida de líquido, este se expanda fuera del depósito. A tal efecto el piso contará con canaletas colectoras, con pendiente hacia un tanque colector, a fin de contener posibles derrames o pérdidas. Será señalizado en la entrada con el lema “Entrada Prohibida a personal no autorizado - peligro”. El depósito estará permanentemente cerrado, con cerraduras de seguridad.

Cabe destacar que la Cooperativa Eléctrica del Municipio de Eduardo Castex mediante convenio celebrado con la Subsecretaría de Ecología procedió a la construcción de un depósito de PCBs, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 6º del decreto Nº 2.722/04, en el que se efectúa su almacenamiento hasta que se den las condiciones para su correcta eliminación.

4.5. Residuos Patológicos

La Ley Nº 1.586 y su Decreto Reglamentario Nº 756/97, conforman el régimen normativo aplicable a nivel provincial en lo relativo a la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patológicos.

La autoridad de aplicación del citado marco normativo es la Dirección de Bromatología y Saneamiento Ambiental, dependiente de la Secretaría de Salud Integral del Ministerio de Bienestar Social; dicho organismo es el encargado de fiscalizar y ejercer la auditoría permanente en el control de la gestión de los residuos patológicos.

El Decreto Nº 756/97, establece en su artículo 3º la creación en el ámbito de la Dirección de Bromatología y Saneamiento Ambiental, de los registros que a continuación se enuncian:

- a) Registro Provincial de Generadores de Residuos Patológicos
- b) Registro Provincial de Centros de Tratamiento de Residuos Patológicos
- c) Registro Provincial de Transportistas de Residuos Patológicos

Se establece la clasificación de los residuos patológicos en el artículo 8º del Decreto Nº 756/97, a saber:

- Residuos Patológicos Tipo A. Son aquellos desechos o elementos materiales, cualquiera sea su estado que presentan características de toxicidad y/o ineffectividad, que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos y/o causar contaminación del aire, suelo o atmósfera.
- Residuos Especiales Tipo B:
 - 1) Radiactivos: Son todos aquellos residuos sólidos provenientes de los servicios de radiología, radioterapia, bomba de cobalto y otros emisores de radiación. Los

residuos radiactivos por su especificidad se regirán por las normas de la Autoridad Regulatoria Nuclear (A.R.N.).

- 2) Químicos: Son los residuos tóxicos restos de medicamentos, reactivos, genotóxicos, cancerígenos, o mutagénicos o capaces de alterar material genético, por ejemplo, las drogas citotóxicas utilizadas en quimioterapia o elementos que hayan tenido contacto con las mismas). Aerosoles que contienen restos de sustancias propelentes y que pueden explotar en caso de ser incinerados o perforados.

El artículo 6º de la Ley Nº 1.586 establece que todo centro de atención de la salud humana y animal como también centros de investigaciones biomédicas que utilicen animales vivos, están obligados a cumplir las disposiciones de la ley y su reglamentación *"como condición para su habilitación y/o continuidad en servicios, sin perjuicio de otras que les fueran exigidas"*.

La norma de análisis prohíbe:

- La disposición final de residuos patológicos sin previo tratamiento (art. 4º, L. 1.586).
- El abandono de residuos patológicos, hayan sido tratados o no, en espejos de agua, en cursos de agua, en la vía pública, en zonas urbanas y rurales, o en sus inmediaciones o en cualquier otro lugar del territorio provincial que no sea autorizado por ley (art. 4º, L. 1.586).
- La introducción y transporte de residuos patológicos provenientes de otras jurisdicciones, provinciales, nacionales o extranjeras, en el territorio de la provincia (art. 5º, L. 1586).

La autoridad de aplicación se encuentra facultada para suscribir convenios con las municipalidades y comisiones de fomento a los efectos de la aplicación de la Ley y su reglamentación (art. 9º, L. 1.586).

4.6. Residuos Radioactivos

La Ley Nº 1.663, conforme el artículo 18 de la Constitución Provincial, tiene por objeto declarar zona no nuclear a la Provincia de La Pampa; asimismo, regula las actividades de ese origen, con el fin de preservar la vida y conservar la calidad ambiental.

En tal sentido, la norma de referencia en el artículo 2, prohíbe *"la introducción, tráfico, transporte y uso de sustancias radioactivas en todo el territorio de la provincia, como asimismo la instalación de centrales nucleares y la construcción y operación de basureros nucleares destinados al almacenamiento de esas sustancias"*.

Se encuentran exceptuadas aquellas sustancias radioactivas destinadas a las siguientes aplicaciones: a) medicina nuclear; b) industriales y mineras; c) agropecuarias; d) de servicios; y e) científico-experimentales (cfr. art. 4º, L. 1663).

La Subsecretaría de Salud Integral del Ministerio de Bienestar Social, es la autoridad competente para entender en la materia según lo establece el artículo 7º de la norma. A fin de cumplir con su cometido, la Autoridad de aplicación tiene los siguientes deberes y atribuciones: efectuar un relevamiento provincial y elaborar un registro de instituciones, establecimientos y personas -físicas y jurídicas-, que dediquen su accionar -total o parcialmente- al uso y manipulación de radio isótopos y radiaciones ionizantes (art. 8º, L. 1.663).

Asimismo, el artículo 9º de la norma faculta al Poder Ejecutivo Provincial para que: a) capacite personal; b) adquiera equipamiento; c) contrate estudios técnicos y d) establezca vínculos formales y/o convenios de ayuda u operación conjunta con organismos provinciales y/o nacionales, a los fines de hacer cumplir la Ley Nº 1.663.

Por último, es de señalar que, mediante la sanción de la Ley Nº 1.501 fue ratificado el convenio suscripto entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Provincia de La Pampa, sobre colaboración recíproca.

4.7. Marco Institucional Provincial

Las municipalidades, en su condición de entidades autónomas, son responsables de la operación, regulación y fiscalización de los servicios de higiene urbana, dentro de su ámbito de acción territorial.

Sin embargo, cabe señalar en este apartado los organismos que a nivel provincial, tienen algún tipo de competencia directa o indirecta en la gestión de residuos sólidos urbanos, a fin de contribuir al mejoramiento de la salud y calidad de vida de la población, y la preservación del medio ambiente en general y los recursos naturales en particular.

4.7.1. Subsecretaría de Ecología

Por Ley de Ministerios Nº 1.666 se establece la creación de la Subsecretaría de Ecología, cuya función es asistir al Gobernador de la Provincia en todo lo relacionado a la preservación del medio ambiente. Asimismo, el artículo 24 de la norma le atribuye en particular las siguientes competencias:

- 1º) organizar, ejecutar y fiscalizar la política integral de preservación de los ecosistemas naturales;
- 2º) intervenir en la creación y mantenimiento de parques provinciales, reservas faunísticas o ecológicas y áreas naturales protegidas;
- 3º) intervenir en las cuestiones referentes a la conservación, recuperación y utilización racional de los recursos naturales coordinando su acción con los organismos nacionales y provinciales competentes;

- 4º) intervenir en la conservación, recuperación y aprovechamiento integral de los bosques y el aumento del patrimonio forestal fomentando la implantación y conservación de viveros.

La Subsecretaría de Ecología - *“sin perjuicio de la incumbencia ambiental de cada una de las reparticiones provinciales”* (cfr. art. 34), es el organismo de aplicación de la Ley N° 1914 de protección del medio ambiente, sus reglamentaciones parciales – Decretos N° 2139/03, N° 458/05, N° 298/06-. Asimismo, la Ley provincial de protección del medio ambiente atribuye a la Subsecretaría de Ecología las siguientes facultades y funciones:

- Promover, en coordinación con los demás organismos competentes del Estado Provincial y/o Municipalidades y Comisiones de Fomento, el desarrollo de métodos, tecnologías y sistemas de reciclaje o recirculación de residuos u otros tipos de transformación de bajo o nulo impacto ambiental (art. 31, L. 1914).
- Concertar la celebración de acuerdos interjurisdiccionales con los municipios y/o Comisiones de Fomento, propiciados por el Poder Ejecutivo, atinentes a cuestiones ambientales comunes (art. 37, L. 1914)
- En coordinación con los demás organismos competentes de la provincia, debe llevar y mantener actualizado un registro de actividades riesgosas y contaminantes (art. 30, L. 1914).
- Instrumentar el Sistema de Información ambiental, coordinando su implementación con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, las demás áreas del gobierno provincial y municipal (art. 17, L. 1914).
- Coordinar con los municipios programas de educación no formal, difusión y capacitación de personal en el conocimiento de la temática ambiental (art. 20, L. 1914).
- Determinar, en coordinación con los organismos provinciales y/o nacionales competentes, los valores máximos de emisión, conforme el efluente y el cuerpo receptor, los que previamente deben ser consensuados en el Ente de Políticas Ecológicas (art. 29, L. 1914).
- Otorgar, si correspondiere, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), previa resolución del Ente de Políticas Ecológicas, como así también eximir de la presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) (art. 3, L. 1914).
- Llevar y mantener actualizado el Registro Provincial de Consultoras y/o Profesionales Especializados en Evaluación de Impacto Ambiental (art. 9, L. 1914).
- Celebrar convenios con Universidades, institutos y/o centros investigación con el fin de implementar, entre otras, las normas que rigen el impacto ambiental.
- Fiscalizar el cumplimiento de la Ley N° 1914, con la participación de las áreas específicas de la Administración Provincial y Municipal, respecto de las tareas de

control, inspección y evaluación técnica. Aplicar sanciones administrativas (arts. 40, 41, 42, L. 1914).

- Ingresar en todo emprendimiento que contamine o degrade el ambiente, a fin de realizar el seguimiento de lo establecido en Declaración de Impacto Ambiental, determinando el cumplimiento de las medidas de protección propuestas en la Evaluación de Impacto Ambiental (art. 33, L. 1914).
- Junto con el Ente de Políticas Ecológicas, es el encargado del ordenamiento y armonización de los regímenes legales vigentes en materia de recursos naturales y ambiente (art. 51, L. 1914).

Conforme lo establece el artículo 2º del Decreto Nº 1921/96, la Subsecretaría de Ecología preside y representa al Ente de Políticas Ecológicas.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3º del Decreto Nº 2.054/00 reglamentario de la Ley Nº 1466 - de adhesión a la Ley Nº 24.051 de residuos peligrosos -, la Subsecretaría de Ecología es la autoridad de aplicación en materia de residuos peligrosos.

Asimismo, la Subsecretaría de Ecología es autoridad de aplicación de la Ley Nº 2.055 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 2272/04, régimen normativo aplicable a la gestión y eliminación de PCB's.

4.7.2. Ente de Políticas Ecológicas

Debido a la existencia de aspectos ambientales que se planteaban como concurrentes entre autoridades de distintas áreas del gobierno provincial, por Decreto Nº 1921/96 se promovió la creación del Ente de Políticas Ecológicas, con el objeto de conformar un equipo multidisciplinario y definir competencias.

El Ente es presidido y representado por la Subsecretaría de Ecología, y se encuentra integrado por la Dirección de Bromatología y Saneamiento, la Dirección de Aguas, la Dirección de Recursos Naturales, la Dirección de Defensa Civil, y la Dirección de Minería.

Las atribuciones del citado organismo, son las siguientes:

- a) Establecer las políticas integrales de la provincia en materia de ecología, contemplando los aspectos que hacen a la materia de cada ministerio.
- b) Fiscalizar y asesorar sobre la ejecución de dichas políticas ecológicas en el ámbito de cada ministerio.
- c) Estudiar, elaborar y proponer las normas legales tendientes a la preservación de la calidad ambiental.
- d) Desarrollar los aspectos metodológicos y procedimentales que permitan regular y controlar la calidad ambiental.

- e) Elaborar informes y dictámenes sobre los aspectos técnicos, económicos, sociales y legales que presenta la problemática del medio ambiente, su preservación y mejoramiento.
- f) Intervenir en actuaciones administrativas o judiciales, a solicitud de organismos o Jueces competentes en las que se tramiten o controviertan cuestiones atinentes a la calidad ambiental.

4.7.3. Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Compete a la Ministerio de Obras y Servicios Públicos asistir al Gobernador de la Provincia en la elaboración, proposición y coordinación de la política provincial en la promoción, fiscalización y contralor de las obras y servicios públicos; y en particular: intervenir en los servicios públicos, su concesión y efectuar su fiscalización de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 42° de la Constitución Provincial; y, fomentar el desarrollo de las cooperativas de producción y distribución de energía y demás servicios públicos, las que fiscalizará en coordinación con la Administración Provincial de Energía (incs. 8 y 12, art. 22 bis, L. 1.666, modif. por L. 2150).

4.7.4. Ministerio de Bienestar Social

Entre otras facultades atribuidas en virtud de lo dispuesto por la Ley de Ministerios N° 1.666, el Ministerio de Bienestar Social, a través de la Secretaría de Salud Integral, tiene competencia para entender en temas relacionados con la salud de la población, tales como la gestión y disposición final de residuos patológicos que regula la Ley provincial N° 1.586 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 756/97.

En relación con la problemática generada por los residuos sólidos urbanos, y las consecuencias que trae aparejadas desde lo ambiental, social y la salud pública, el citado ministerio a través de sus áreas específica, se encuentra facultado para intervenir en la formación de las medidas relativas al saneamiento ambiental; como así también coordinar con los municipios en lo referente a la salubridad en los centros urbanísticos.

Asimismo, el Ministerio de Bienestar Social es competente para promover las acciones tendientes a resolver estados carenciales individuales y colectivos de la población. En el tema que nos ocupa, es indispensable favorecer el desarrollo de proyectos con grupos de población socialmente marginada que segregan basura en sitios de disposición final, mediante su asistencia, recuperación, rehabilitación y readaptación social.

Entre otras atribuciones conferidas al Ministerio de análisis, la Ley N° 1.666 enuncia las siguientes:

- Promover y fiscalizar programas y proyectos de abastecimiento de agua potable, disposición de líquidos cloacales y todo otro servicio sanitario;
- Elaborar un sistema, que haga efectivos los principios de promoción y recuperación de la salud, prevención de la enfermedad;

- Promover el desarrollo de una conciencia sanitaria en todos los niveles de la población a través de los organismos técnicos educativos pertinentes y promover la participación de la comunidad organizada en la realización de los respectivos programas;
- Ejecutar programas sanitarios tendientes al control y erradicación de enfermedades infecto-contagiosas, así como realizar programas y campañas de inmunizaciones; y, en coordinación con el Ministerio de la Producción, los correspondientes a zoonosis.

4.7.5. Ministerio de Cultura y Educación

Conforme surge del inciso e), artículo 18 de la Constitución de la Provincia de La Pampa, y del texto de la Ley N° 1914 de protección del medio ambiente, la educación ambiental *“debe incluirse en todos los niveles del sistema educativo, bajo pautas orientadas a la formación de individuos responsables con el medio ambiente”* (art. 2, inc. e.-, L. 1.914)

En prosecución del mandato constitucional y lo establecido en la Ley N° 1.914 señalados en el párrafo anterior, el Ministerio de Cultura y Educación debe, en el ámbito de la competencia que le fuera asignada por la Ley de Ministerios, arbitrar los mecanismos conducentes a cumplir con dicho cometido, es decir, la incorporación de las ciencias ambientales en los distintos niveles del sistema educación formal, como así también informal, procurando su difusión de tal manera que alcance a toda la población.

4.7.6. Ministerio de la Producción

De acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Ministerios N° 1.666, compete al Ministerio de la Producción:

- Intervenir en todos los asuntos referentes a la conservación de los suelos.
- Intervenir en los asuntos relacionados con la conservación de la fauna silvestre e ictícola.
- Intervenir en la protección y fiscalización sanitaria, coordinando las acciones respectivas con las que correspondan a organismos nacionales y provinciales
- Promover el adelanto técnico de la producción agropecuaria, forestal, comercial y minera.
- Fomentar la innovación tecnológica, la productividad y la calidad.

4.7.7. Secretaría de Recursos Hídricos

La Ley N° 2.094, modificatoria de la Ley de Ministerios N° 1.666, establece la misión de la Secretaría de Recursos Hídricos de asistir al Gobernador de la Provincia en la coordinación y asesoramiento sobre aspectos referentes a la evaluación, investigación, aprovechamiento, preservación, promoción y defensa de los recursos hídricos provinciales.

Asimismo, entre otras atribuciones conferidas por la ley de mareas, relacionadas con la preservación de los recursos hídricos provinciales, compete a la Secretaría de Recursos Hídricos:

- Proponer y auspiciar los convenios que el Gobierno de La Pampa deba suscribir con otros gobiernos provinciales, con el Gobierno Nacional, o con organismos interjurisdiccionales, nacionales o internacionales, o con personas físicas o jurídicas privadas, para desarrollar actividades de evaluación, investigación, aprovechamiento, preservación, promoción y defensa de los recursos hídricos.
- Promover y difundir aspectos relacionados con la problemática de los recursos hídricos.
- Investigar, cuantificar y evaluar los recursos hídricos superficiales y subterráneos planificando su relevamiento integral, con el objetivo de elaborar un Inventario General de los Recursos Hídricos.

4.7.8. Secretaría de Asuntos Municipales

De acuerdo a la modificación de la Ley de Ministerios N° 1.666 por Ley N° 2.074, se establece la creación de la Secretaría de Asuntos Municipales encargada de asistir al Gobernador de la Provincia en la elaboración, proporción y coordinación de la política provincial atinente a la relación con las Municipalidades y Comisiones de Fomento, e intervenir en lo concerniente al régimen municipal, manteniendo las relaciones y promoviendo el desarrollo integral de las Municipalidades y Comisiones de Fomento (art. 22 quater, L. 2.074).

5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL MUNICIPAL

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

Como se expresara en apartados anteriores, tradicionalmente la responsabilidad de proveer el servicio de higiene urbana es del municipio, a quien compete crear su propia estructura administrativa y forma de funcionamiento de acuerdo a su capacidad institucional, legal, financiera, técnica y operativa. A su vez, a fin de velar por la salud de la ciudadanía y la protección del medio ambiente, deben fiscalizar el cumplimiento de las normas aplicables al sector, y las relacionadas con la prevención de la contaminación y el saneamiento ambiental. Asimismo, tienen la potestad legal de asociarse con otras municipalidades cercanas o identificadas territorialmente para atender la disposición final de los residuos.

El fundamento de tales facultades y deberes de las municipalidades deviene de su condición de entidades autónomas, reconocida expresamente en la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de La Pampa y la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, Ley N° 1.597.

- *Constitución Nacional*

El fortalecimiento institucional de los municipios se observa claramente en la Constitución Nacional, en el Título Segundo referido a los Gobiernos de Provincia, que establece que cada Provincia dicta su propia Constitución "...asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero" (cfr. art. 123, C. N.)

- *Constitución de la Provincia de La Pampa*

El Régimen Municipal se encuentra regulado en la Sección Quinta de la Constitución de la Provincia de La Pampa, a través del artículo 115º que a continuación se transcribe:

Artículo 115º.- Todo centro de población superior a quinientos habitantes, o los que siendo de menor número determine la ley en función de su desarrollo y posibilidades económico-financieras, constituye un municipio con autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional, cuyo gobierno será ejercido con independencia de todo otro poder, de conformidad a las prescripciones de esta Constitución y de la Ley Orgánica.

La ley establecerá el régimen de los centros de población que no constituyan municipios.

La Constitución provincial, entre otras facultades y deberes enunciados en el artículo 123º, atribuye a los municipios el dictado de ordenanzas y reglamentos sobre "*planes edilicios, asistencia, higiene, seguridad, tránsito local, moralidad, ornato y toda otra actividad propia del municipio*".

- *Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento N° 1.597*

El artículo 1º de la Ley Orgánica prescribe que el gobierno y administración de los intereses y servicios comunales de la provincia, "*corresponden a las municipalidades o comisiones de*

fomento en su caso, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Provincial y la presente Ley”.

El artículo 7º, Capítulo II de la Ley Nº 1597, define la autonomía del gobierno de los municipios, al establecer:

“Los centros de población que sean declarados municipalidad, constituyen municipios autónomos. Tendrán en el orden local un gobierno que será ejercido con independencia de todo otro poder y que estará a cargo de una rama ejecutiva desempeñada por un ciudadano con el título de Intendente, y otra deliberativa desempeñada por ciudadanos con el título de Concejales. Los municipios y las comisiones de fomento ejercerán su autoridad y facultades reglamentarias en todo el ámbito territorial de su ejido”.

En cuanto a las facultades normativas del Departamento Deliberativo, el artículo 36º le asigna la misión de dictar ordenanzas relativas a la prestación de servicios públicos (cfr. inc. 43º), la protección y fomento de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado - siguiendo las pautas del artículo 18 de la Constitución Provincial y en el marco de sus competencias (cfr. inc. 37º) -, y, entre otros, las atinentes a los siguientes temas:

1º) El funcionamiento, ubicación e instalación de los establecimientos comerciales e industriales, de conformidad con las ordenanzas que si dictaren al efecto con carácter general y de acuerdo con las Leyes Nacionales y Provinciales.

2º) El tránsito y estacionamiento en las calles y caminos de jurisdicción municipal.

11º) Las inspecciones veterinarias de los animales y sus productos con destino al consumo, cualquiera fuere su procedencia y de conformidad con la Legislación Nacional y Provincial.

12º) La protección y cuidado de los animales.

13º) La protección de los árboles, jardines y demás paseos públicos.

14º) Las obligaciones de los vecinos respecto a los servicios de la municipalidad.

20º) Las condiciones para la instalación de pozos de agua, cámaras sépticas, pozos ciegos, aljibes, baños, albañales, chimeneas, hornos, hornallas, estufas, calderas, instalación de agua corriente y de gas; y ocupación de espacios aéreos, superficiales y subterráneos, de conformidad con las prescripciones de la legislación Provincial y Nacional.

21º) Las funciones de policía no delegadas.

24º) Los depósitos de materias corrosivas, insalubres, inflamables y explosivas o que atenten contra el medio ambiente.

25º) Las máquinas a vapor, calderas, motores eléctricos y en general la instalación y funcionamiento de fábricas que puedan significar un peligro para el personal o para la salubridad o seguridad pública o que puedan incomodar a la población o atentar contra la solidez de los edificios.

32º) *El Código Fiscal Municipal.*

33º) *El Código de Faltas Municipal y las normas procedimentales correspondientes.*

41º) *Autorización de consorcios, cooperativas, suscripción de convenios, acogimiento a los beneficios de las leyes Nacionales y Provinciales para la prestación de servicios y obras públicas.*

Del contenido de los textos normativos expuestos se puede afirmar que se manifiesta el reconocimiento expreso del ejercicio del *poder y función* de policía otorgado a los municipios de la Provincia de La Pampa, en cuanto a la gestión de los residuos sólidos urbanos, y la fiscalización y control del cumplimiento de las regulaciones generales y sectoriales sobre protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Debido a la inmediatez con la problemática local, los municipios deben ejercer el poder de policía en el sentido de facultad normativa de los Concejos Deliberantes de restringir derechos y libertades en defensa del interés general. La función de policía, debe configurar la puesta en práctica de la potestad administrativa de fiscalización que compete a los Departamentos Ejecutivos.

La Ley Orgánica Municipal y de Comisiones de Fomento, prevé el derecho a la participación de la ciudadanía, de acuerdo a lo previsto en su artículo 138º, cuyo texto es el que a continuación se transcribe:

“El Concejo Deliberante, mediante la sanción de una ordenanza especial aprobada por el voto de los dos tercios del total de sus miembros, podrá someter a referéndum o consulta popular todo asunto de interés general municipal, con intervención del Tribunal Electoral de la Provincia. El resultado será vinculante para el órgano o rama a que se refiere el mismo, de acuerdo a lo que determine la ordenanza respectiva”.

“La ordenanza especial indicada, establecerá el padrón que se utilizará y el porcentaje de votos necesarios para su validez”.

“En ningún caso se considerará válido el referéndum o la consulta popular, cuando no haya participado de la elección la mayoría absoluta del padrón utilizado”.

En cuanto al régimen sancionatorio aplicable para los casos de transgresión a las obligaciones que impongan su Código de Faltas o las ordenanzas dictadas por el Concejo Deliberante, se encuentra establecidas en el artículo 35º de la Ley Nº 1597, y serán las siguientes:

a) *Multas, las que se determinarán anualmente en la ordenanza tarifaria;*

b) *clausuras, desocupaciones y traslados de establecimientos comerciales e industriales y demolición de edificios; y*

c) *decomisos.*

5.1. Servicios Públicos

En materia de servicios públicos el artículo 90º reitera lo expresado en el 42º de la Constitución de la Provincia de La Pampa que establece:

“Los servicios públicos pertenecen originariamente al estado provincial o municipal y se propenderá a que la explotación de los mismos sea efectuada preferentemente por el estado, municipios, entes autárquicos o autónomos, o cooperativas de usuarios en los que podrán intervenir las entidades públicas”.

“Se podrán otorgar concesiones a particulares y éstas se acordarán previa licitación de carácter público y con expresa reserva del derecho de reversión por la provincia o los municipios en su caso, quienes ejercerán un contralor estricto respecto al cumplimiento de la concesión”.

“Una ley especial determinará las formas y condiciones de la explotación de los servicios públicos por la provincia, las municipalidades y concesionarios y demás entidades autorizadas a prestarlos”.

La Ley Orgánica de las Municipalidades y Comisiones de Fomento N° 1597 prevé la competencia del Concejo Deliberante para dictar las ordenanzas relativas a la prestación de servicios públicos de barrido y limpieza, y sobre contrataciones de servicios públicos, fijando los montos para efectuar adjudicaciones en forma directa, por concursos de precios, licitación privada o pública (cfr. art. 47, art. 91, L. 1.597).

Asimismo el artículo 94º de la Ley N° 1597 dispone que las personas físicas o jurídicas que exploten concesiones de servicios públicos serán fiscalizadas por funcionarios del municipio o por el propio Departamento Ejecutivo, *“aún cuando en el título constitutivo de la concesión no se hubiese establecido tal facultad de contralor”*. (cfr. art. 67, incs. 21 y 23, art. 94, L. 1597).

En cuanto a la ejecución directa de los servicios de la Municipalidad, el artículo 93º de la Ley N° 1597 determina que corresponde al Departamento Ejecutivo, *“quien administrará los establecimientos por medio de los empleados a sueldo, comisiones de vecinos, cooperadoras vecinales u organismos descentralizados”*.

5.2 Tasa y Tarifas

El sostenimiento del servicio se da a través de la recaudación de una tasa municipal que generalmente no es exclusiva del servicio de higiene urbana, sino que integra otros servicios como alumbrado público, impuesto predial, entre otros, lo que se complementa con subsidios generalmente del propio Municipio.

Siguiendo el texto de la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, respecto de las tasas establece que son consideradas jurídicamente como retributivas de los servicios públicos que presten los municipios en su gestión de administración y gobierno, y, conforme surge del artículo 109º *“se fijarán en forma que cubran el costo total de los mismos más un adicional de hasta el treinta por ciento (30%) de ese costo”* (cfr. art. 109, L. 1597).

En el caso del impuesto predial, el cobro se hace a través de una tasa de alumbrado barrido y limpieza, que se fija como un porcentaje del impuesto predial del inmueble o por metro de frente u otro, según lo decreten los mismos municipios.

En general se puede afirmar que las municipalidades desconocen los gastos reales de los servicios y sus ingresos, y el valor de las tasas es calculado en base a índices de actualización generales y ajustes por necesidades globales. Por consiguiente, la fijación de las tasas es independiente del análisis del costo del servicio y a menudo la tasa facturada por el servicio es menor de la mitad de los costos reales del servicio. Aún así existen dificultades para la recaudación de las tasas, en gran parte debido a la ineficiencia de los sistemas de recaudación, sumada a la cultura del no pago.

La falta de un sistema de tasas y/o tarifas y gestión basada en sistemas de contabilidad de costos es uno de los puntos más críticos para la autosostenibilidad de los servicios, los cuales a menudo sufren un déficit crónico, que no permite que las municipalidades logren una autosuficiencia financiera y obliga a que los servicios estén supeditados a transferencias del gobierno central o a la obtención de recursos específicos no tradicionales.

La Ley Orgánica prevé el cobro ejecutivo de las deudas, cuando correspondiera, se hará efectivo por vía de apremio fiscal judicial, *“sirviendo de título suficiente para la ejecución, la constancia de la deuda respectiva, firmada por el Intendente o en quien éste delegue dicha atribución, Secretario y/o Contador cuando lo hubiere o bien, por sentencia firme dictada por el Juzgado de Faltas Municipal”* (cfr. art. 74º, L. 1597).

El ejercicio de la acción por parte de la municipalidad, mediante la sustanciación del procedimiento administrativo o de faltas, o la ejecución fiscal, interrumpen la prescripción (cfr. art. 75º, L. 1.597).

La Ley Nº 2.209 modifica el artículo 161 de la Ley Nº 1.597, el que queda redactado en los siguientes términos:

“Las deudas de los contribuyentes que hubieren incurrido en mora en el pago de tributos, tasas y cualquier otra especie de contribuciones adeudadas a la municipalidad, prescriben a los cinco (5) años de la fecha en que debieron pagarse”

“La acción de repetición estará prescripta al cumplirse el mismo lapso, medido desde la fecha de pago de la contribución que pudiera originarlo. En todos los casos, el término de la prescripción se interrumpirá por el reconocimiento expreso que el deudor hiciere de sus obligaciones y por los actos judiciales y administrativos que la municipalidad ejecutare en procuración del pago. Iguales garantías amparan al contribuyente en su derecho de repetir”.

Aunque la Ley contempla el cobro judicial para la cobranza por efectos del servicio, éste no se ha implementado prácticamente. Para ello se necesita un marco legal que sea capaz de garantizar la recuperación de los costos de administración, operación y mantenimiento.

El hecho que a nivel municipal no exista una programación que oriente las proyecciones financieras para cubrir los servicios de aseo urbano, hace que las decisiones de incrementar las tasas de aseo obedezcan a necesidades inmediatas y apremiantes que invariablemente chocan con la oposición de la población.

5.3 Acuerdos Interjurisdiccionales

La implementación de estrategias regionales mediante acuerdos intermunicipales, ya sea para alguna o la totalidad de las etapas de la gestión de residuos sólidos urbanos permitirán:

- Abaratar los costos de operación y mantenimiento con disminución del impacto en las tasas del servicio.
- Mejorar las condiciones operativas y de comercialización de los materiales recuperados.
- La correcta disposición final de residuos en forma sustentable.

El marco legal que propicia este tipo de acuerdos intermunicipales, esta contenido en el inc. 41º, artículo 36 de la Ley Nº 1597 atribuye al Concejo Deliberante la facultad de dictar ordenanzas relativas a la *“autorización de consorcios, cooperativas, suscripción de convenios, acogimiento a los beneficios de las leyes Nacionales y Provinciales para la prestación de servicios y obras públicas”*.

Asimismo, y conforme lo establece el artículo 157º de la Ley Nº 1597, el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Asuntos Municipales, podrá convocar a reuniones o congresos de Municipalidades y/o Comisiones de Fomento, con el objeto de coordinar la acción comunal con la provincial; lograr mayor eficiencia en los planes de gobierno; unificar y/o reestructurar ordenanzas impositivas y, en general, *“para considerar todas aquellas medidas que redunden en una mejor y más eficiente prestación de las funciones de los entes mencionados, en pro de la prosperidad, de la seguridad y el progreso de los habitantes de sus ejidos”*.

5.4 Exposición Sumaria de la Normativa Ambiental Aplicable

En el presente capítulo a título informativo, se exponen bajo el sistema de tablas un listado de las normas ambientales vigentes a nivel internacional, regional (MERCOSUR), provincial y municipal relevadas a los efectos del presente informe.

TABLA 1 - Identificación de Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Internacional				
Sector	Tratado Internacional	Norma Nacional	Autoridad de Aplicación	Sumario
Protección de la Atmósfera	<i>Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático</i>	<i>Ley 24.295</i>	<i>Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable</i>	<i>La República Argentina al ratificar la Convención Marco sobre Cambio Climático por Ley N° 24.295/93, asumió entre otros compromisos enunciados en sus cláusulas, el de volver a los niveles de 1990 las emisiones antropógenas de Dióxido de Carbono y otros gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal (cont. Inc. a., 2da. parte, art. 4°).</i>
	<i>Protocolo de Kyoto</i>	<i>Ley 25.438</i>	<i>Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable</i>	La República Argentina con la ratificación del Protocolo de Kyoto por Ley 25.438, asume el compromiso de limitar sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A no excedan de las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones consignados para ellas en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, con miras a reducir el total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012.
	<i>Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono</i>	<i>Ley 23.724</i>	<i>Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable</i>	<i>La República Argentina asume el compromiso de arbitrar los mecanismos legales, administrativos y técnicos conducentes a proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono.</i>
	<i>Protocolo de Montreal</i>	<i>Ley 23.778</i>	<i>Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable</i>	<i>La República Argentina asume el compromiso de adoptar medidas de control sobre aquellos factores que incrementan el agotamiento de la capa de ozono, entre los que cabe mencionar: la producción de sustancias controladas, el consumo de las mismas, su racionalización industrial. Con posterioridad se introdujeron enmiendas al Protocolo de Montreal, ratificadas mediante las siguientes leyes nacionales: L.. 24.167, aprobó enmienda, adoptada en</i>

TABLA 1 - Identificación de Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Internacional

Sector	Tratado Internacional	Norma Nacional	Autoridad de Aplicación	Sumario
				<i>Londres, el 29/06/90; L. 24.418, aprobó enmienda al Protocolo de Montreal, adoptada en Copenhague (Reino de Dinamarca), el 25/11/92; L. 25.389, Se aprobaron las enmiendas al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, adoptadas en Montreal –Canadá-, el 17/09/97.</i>
Diversidad Biológica	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Conservación de la Diversidad Biológica	Ley 24.375	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	La República Argentina se compromete a adoptar las medidas necesarias conducentes a conservar la biodiversidad, entre ellas: posibilitar el usos sostenible de sus componentes, distribuir equitativamente sus beneficios, establecer procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de proyectos que puedan tener efectos adversos para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos.
Fauna	Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres	Ley 22.344	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	La Convención (CITES) tiene por objeto fomentar la cooperación internacional para lograr la protección de ciertas especies contra el tráfico excesivo, con el fin de asegurar su supervivencia. A los efectos de establecer la protección que requieren distintas especies, se elaboraron tres Apéndices, que contienen listas donde figuran los animales y plantas, de acuerdo con el grado de amenaza que sufre cada uno de ellos. La Convención CITES tuvo una enmienda, adoptada en la Segunda Reunión Extraordinaria de la Conferencia de las Partes, celebrada en Gaborone, Bostwana, el 30 de Abril de 1983, la que fue ratificada por la República Argentina por Ley Nº 23.815.
	Convención sobre Conservación de Especies Migratorias	Ley 23.918	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Ratifica Convención sobre Conservación de Especies Migratorias. Obliga a los Estados Parte a adoptar medidas y celebrar Acuerdos conducentes a la preservación de las especies migratorias y sus hábitats en general, en particular recomienda a los Estados Parte la prevención, reducción, o control y limitación de las inmisiones de sustancias nocivas para las especies migratoria s en cuestión en el hábitat de dicha especie.
Residuos Peligrosos	Convenio de Basilea sobre el Movimiento Transfronterizo de Residuos Peligrosos	Ley 23.922	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Regula el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y su eliminación. A partir de su ratificación la República Argentina asume el compromiso de adoptar las medidas posibles para garantizar que los desechos peligrosos se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos que puedan derivarse de tales desechos.
Contaminantes Orgánicos Persistentes	Convenio de Estocolmo	Ley 26.011	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	El Convenio de Estocolmo fue adoptado el 22 de mayo de 2001, y aprobado por la República Argentina por Ley Nº 26.011. El objetivo del Convenio se funda en el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y consiste en proteger la salud humana y el

TABLA 1 - Identificación de Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Internacional				
Sector	Tratado Internacional	Norma Nacional	Autoridad de Aplicación	Sumario
				<i>medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes.</i>
Agroquímicos	<i>Convenio de Róterdam</i>	<i>Ley 25.278</i>	<i>Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable</i>	<i>Mediante el Convenio de Rotterdam fueron aprobadas a nivel internacional las disposiciones sobre el procedimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. El Convenio fue adoptado el 10 de Septiembre de 1998, y aprobado por la República Argentina a través de la sanción de la Ley N° 25.278.</i>
Medio Ambiente Laboral	<i>Convenio sobre la Prevención y el Control de los Riesgos Profesionales causados por las Sustancias o Agentes Cancerígenos</i>	<i>Ley 21.663</i>	<i>Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social</i> <i>Superintendencia de Riesgos del Trabajo</i>	<i>Ley 21.663, ratifica el Convenio 139 de la O.I.T. por el cual se establecen normas de seguridad y prevención de enfermedades profesionales provenientes de actividades relacionadas con el uso y manejo de sustancias cancerígenas.</i>
Suelo	<i>Convención de las Naciones Unidas sobre Lucha contra la Desertificación</i>	<i>Ley 24.071</i>	<i>Ministerio de Economía</i> <i>Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos</i>	<i>Mediante Ley 24.071 se aprueba la Convención por la cual la República Argentina se compromete, entre las prescripciones del texto legal internacional, a adoptar medidas técnicas y legales, en las que se consideren los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos de los procesos de desertificación y sequía, a fin de amortiguar sus efectos en el suelo del territorio nacional.</i>

Tabla 2 - Identificación de Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Regional.				
Sector	Acuerdo Regional	Norma Nacional	Autoridad de Aplicación	Sumario
Medio Ambiente	<p>Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente</p> <p>MERCOSUR/CMC/Dec. 02/01</p>	Ley 25.841	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	<p>Los países signatarios se comprometen a cumplir con los principios enunciados en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio ambiente y Desarrollo de 1992, como así también analizar la posibilidad de aplicar dichos principios que no hayan sido objeto de tratados internacionales (conf. arts. 1º y 2º). Incentivar políticas e instrumentos nacionales en materia ambiental, buscando optimizar la gestión del medio ambiente.</p> <p>Complementan el Acuerdo precedente las siguientes normas aprobadas en el ámbito del MERCOSUR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolución MERCOSUR/GMC N° 10/94. Aprueba las "Directrices Básicas en Materia de Política Ambiental". - Resolución MERCOSUR/GMC N° 7/98. Incluye el tema "Emergencias Ambientales" en el Programa de Trabajo del Subgrupo de Trabajo N° 6 a fin de proponer al Grupo Mercado Común "las prioridades, los mecanismos de coordinación y las directrices generales para la implementación de la cooperación entre los Estados Partes del MERCOSUR" - Decisión MERCOSUR/CMC N° 10/00. Aprueba la Complementación del Plan General de Cooperación y Coordinación Recíproca para la seguridad regional entre los Estados Parte del MERCOSUR en materia de ilícitos ambientales, tales como contaminación del medio ambiente, depredaciones de la biodiversidad, tráfico ilegal de flora, fauna y sustancias y productos peligrosos, entre otros, excepto los radioactivos.
Gestión Residuos	Res. MERCOSUR/GCM N° 30/02	Res. 408/04	Ministerio de Salud	Fue incorporado a la normativa nacional vigente el documento "Criterios para la Gestión Sanitaria de Residuos Sólidos en Puertos, Aeropuertos, Terminales Internacionales de Carga y Pasajeros y Puntos de Frontera en el MERCOSUR", aprobado por la Resolución MERCOSUR/GMC N° 30/02.
Residuos Peligrosos	MERCOSUR/CMC/Dec. 2/94	Res. (ST) 195/97	Secretaría de Transporte	Aprueba el Acuerdo y su Anexo sobre transporte de mercancías peligrosas, cuyas normas son de aplicación conjuntamente con las disposiciones particulares de cada Estado Parte (conf. art. 5) y las recomendaciones de las Naciones Unidas (conf. inc. a) art. 6).

Tabla 3 - Identificación de Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Nacional			
Sector	Autoridad de Aplicación	Norma Nacional	Sumario
Medio Ambiente	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Ley 25.675	Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Fija los principios de la política ambiental. Define: Presupuesto mínimo. Fija la competencia judicial. Determina los instrumentos de política y gestión. Regula lo relativo a: ordenamiento ambiental; evaluación de impacto ambiental; educación e información; participación ciudadana, audiencias públicas. Define el daño ambiental, establece el régimen de responsabilidades y define las competencias administrativas y judiciales, según los casos. Dispone sobre seguro ambiental y fondo de restauración. Sistema Federal Ambiental. Ratificación de acuerdos federales. Autogestión. Daño ambiental. Fondo de Compensación Ambiental
		D. 481/03	Establece la designación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente, como autoridad de aplicación de la Ley N° 25.675, Ley del Ambiente.
		Res. 685/05	Resuelve la conformación de un Programa de Ordenamiento Ambiental del Territorio en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se encomienda a la Subsecretaría de Planificación, Ordenamiento y Calidad Ambiental la coordinación y articulación de las actividades del citado programa.
		Res. 250/03	Aprueba el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los efectos de la Sequía (PAN), y su Documento Base. Establece la creación en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Salud y Ambiente, la Comisión Asesora del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía, la que funcionará en el ámbito de la Secretaría.
Diversidad Biológica	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Ley 24.375	Ratifica Convención sobre la Diversidad Biológica. La República Argentina se compromete a adoptar las medidas necesarias conducentes a conservar la biodiversidad, entre ellas: posibilitar el usos sostenible de sus componentes, distribuir equitativamente sus beneficios, establecer procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de proyectos que puedan tener efectos adversos para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos.
		D. 134/97	Designa como Autoridad de Aplicación de la Convención sobre Diversidad Biológica a la ex – Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable). Estable la creación de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica. Establece entre las funciones de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica, elaborar y proponer a la Autoridad de Aplicación, para su aprobación, la Estrategia Nacional sobre la Diversidad Biológica.
		Res. 260/03	Aprueba el texto ordenado del Reglamento de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica.
		Res. 91/03	Se adopta el documento Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica.
		Res. 904/02	Se crea en el ámbito de la Dirección Nacional de Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Salud y Ambiente a la Coordinación de Conservación de la Biodiversidad, quien entre sus responsabilidades, debe proponer a la mencionada Dirección Nacional la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica.
Residuos	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Ley 25.916	Regula la gestión de residuos domiciliarios. Vetada por D. 1158/03.

Tabla 3 - Identificación de Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Nacional

Sector	Autoridad de Aplicación	Norma Nacional	Sumario
		Ley 25.612	Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional y derivados de procesos industriales o de actividades de servicios. Fija los niveles de riesgo. Regula lo atinente a obligaciones de los generadores, transportistas, plantas de tratamiento y disposición final. Aprobación de tecnologías. Registros. Manifiesto. Responsabilidad administrativa. Jurisdicción. Autoridad de aplicación. Conforme surge del artículo 60 de la norma, quedaría derogada la Ley N° 24.051, texto observado por Decreto N° 1343/02, junto con los artículos 51, 52, 53 y 54 que regulan la responsabilidad penal en la materia.
		Ley 24.051 D.R. 831/93	Régimen legal aplicable en materia de generación, transporte, tratamiento y disposición de residuos peligrosos. Establece la obligación de los generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos de inscribirse en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. Asimismo, deben tramitar el Certificado Ambiental, instrumento que deberá ser renovado anualmente y que acredita la forma de manipulación, transporte, tratamiento o disposición final que los inscriptos aplicarán a los residuos peligrosos
		D. 181/92	Prohíbe el transporte, la introducción y la importación definitiva o temporal de todo tipo de residuo, desecho o desperdicio, a territorio nacional.
		Res. 79/02	Establece el procedimiento para llevar a cabo, de oficio, la liquidación de la tasa ambiental prevista en la Ley N° 24.051 para los generadores y operadores de residuos peligrosos que hayan incumplido con su obligación de abonar en término la misma.
		Res. 11/02	Aprueba en nuevo formulario de Manifiesto.
		Res. 1091/01	Establece el cronograma de pagos de la tasa de fiscalización de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24.051.
		Res. 1082/01	Aprueba los formularios y el instructivo para la presentación de la Declaración Jurada anual correspondiente al año 2000 por parte de aquellos establecimientos que produzcan en forma continua o discontinua vertidos residuales o barros originados en la depuración de conductos cloacales, pluviales o a un curso de agua.
		Res. 737/01	Aprueba el procedimiento de inscripción registral de generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos con aplicación del Manual de Gestión para los procedimientos administrativos sustanciados en el ámbito de la Unidad Registro de Residuos Peligrosos.
		Res. 599/01	Fija la tasa ambiental prevista por la L. 24.051 para todos los generadores de residuos peligrosos con independencia de toda prestación singularizada de evaluación y fiscalización por parte de la autoridad de aplicación. Cronograma de pagos. Deroga las Res. N° 189/96 y N° 206/96
		Res. 09/01	Establece los requisitos para la tramitación de solicitudes de importación de residuos o desechos no peligrosos como implementación del Decreto N° 181/92.
		Res. 255/01	Aprueba el reglamento para sustanciación de sumarios por infracciones ambientales.
		Res. 1367/99	Aprueba los formularios de solicitud de inscripción, renovación en soporte magnético en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, los que como Anexo I forman parte integrante de la Res. 1367/99
		Res. 185/99	Establece los requisitos para la obtención del Certificado Ambiental Anual para Operadores con equipos transportables
Suelo	Ministerio de Economía Secretaría de Agricultura,	Ley 24.701	Mediante Ley 24.071 se aprueba la Convención por la cual la República Argentina se compromete, entre las prescripciones del texto legal internacional, a adoptar medidas

Tabla 3 - Identificación de Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Nacional

Sector	Autoridad de Aplicación	Norma Nacional	Sumario
	<i>Ganadería, Pesca y Alimentos</i>		<i>técnicas y legales, en las que se consideren los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos de los procesos de desertificación y sequía, a fin de amortiguar sus efectos en el suelo del territorio nacional.</i>
		<i>Ley 22.428 D.R. 681/81</i>	<i>Regula la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos, como así también prevenir, controlar la degradación de las tierras, provocada por la acción del hombre. Establece la competencia de la Autoridad de Aplicación Nacional promover la investigación en los aspectos relacionados con la conservación del suelo, así como difundir las normas conservacionistas que corresponda a toda la población. Asimismo, faculta a las Provincias a velar por la aplicación de normas conservacionistas en el planeamiento y ejecución de obras a realizarse en su jurisdicción, como así también a emplazar a los responsables, a hacer cesar las prácticas o manejos en contravención o contratar a costa del incumplidor la ejecución de los trabajos que corresponda realizar, en caso de incumplimiento de los planes y programas aprobados o en situaciones de emergencia (conf. art. 6.L. 22.428).</i>
		<i>Res. 302/04</i>	<i>Aprueba el Reglamento General de la Comisión Asesora Nacional del Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación.</i>
		<i>Res. 250/03</i>	<i>Aprueba el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía (PAN), y su documento de base. Establece la creación en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Salud y Ambiente, de la Comisión Asesora del Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía.</i>
Recursos Hídricos	<i>Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable</i>	<i>Ley 25.688</i>	<i>Establece los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional.</i>
Recursos Forestales	<i>Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable</i>	<i>Ley 13.273</i>	<i>Régimen legal aplicable en materia de defensa, conservación y protección de la masa forestal nacional, la elaboración y ejecución de programas de investigación y de extensión, y la promoción del crecimiento de la masa boscosa mediante el otorgamiento de créditos, exenciones impositivas y/o subsidios.</i>
		<i>Res. 780/98</i>	<i>Aprueba el Organigrama de la Unidad Ejecutora del Plan Nacional de Manejo del Fuego.</i>
		<i>Res. 222/97</i>	<i>Establece las directrices organizativas del Plan de Manejo del Fuego.</i>
		<i>Res. 569/96</i>	<i>Autoriza a la Unidad Ejecutora del Plan Nacional de Manejo del Fuego a suscribir Convenios en representación de la ex Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable sobre la implementación del Plan Nacional de Manejo del Fuego.</i>
		<i>Res. 465/96</i>	<i>Aprueba el Plan Nacional de Manejo de Fuego</i>
Parques Nacionales y Áreas Protegidas	<i>Secretaría de Turismo Administración de Parques Nacionales</i>	<i>Ley 22.351</i>	<i>Establece el régimen aplicable en lo relacionado con parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, reconocidas e identificadas como tales aquellas áreas del territorio de la República destinadas a la conservación de la diversidad biológica, por el valor de sus extraordinarias bellezas o riquezas en flora y fauna autóctona o en razón de un interés científico determinado, que deben ser protegidas y conservadas para investigaciones científicas, educación y goce de las presentes y futuras generaciones, con ajuste a los requisitos de Seguridad Nacional. El art. 5 inc. c) de la ley prohíbe expresamente la exploración y explotación minera en los parques nacionales. Permite en cambio la explotación de canteras en las reservas nacionales (art. 10, inc.a).</i>
		<i>D. 453/94</i>	<i>Fija la clasificación de áreas protegidas. Prohíbe realizar en las Reservas Naturales Silvestres y en las Reservas Naturales Educativas, actividades que modifiquen sus características naturales, que amenacen disminuir su diversidad biológica, o que de cualquier manera afecten a sus elementos de fauna, flora o gea, con excepción de aquellas que sean necesarias a los fines de su manejo.</i>

Tabla 3 - Identificación de Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Nacional

Sector	Autoridad de Aplicación	Norma Nacional	Sumario
		D. 2148/90	Específicamente prohíbe el uso extractivo de sus recursos naturales, ya sea a través de la explotación agropecuaria, forestal o minera, la caza o pesca comerciales o cualquier otro aprovechamiento de dichos recursos.
		Res. 145/00	Reconoce los conocimientos, innovaciones y prácticas de las Comunidades Indígenas que ocupan áreas integrantes del sistema de la Ley N° 22.351. Se garantiza a través del comanejo, la participación de las Comunidades Indígenas en todo acto administrativo de la Administración de Parques Nacionales referido a los recursos naturales existentes en las áreas que ellas ocupan y a los demás intereses que las afecten, de conformidad con lo ordenado en el art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de la O.I.T., art. 8°, inc. j) L. 24.375 que ratifica el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
		Res. 185/98	Establece el procedimiento aplicable a la instalación de tanques destinados a depósito de combustibles, en las áreas comprendidas en el sistema de la Ley N° 22.351, a los efectos que los mismos se ajusten estrictamente a las normas de seguridad y técnicas que sobre esta materia dicta la Secretaría de Energía, considerando los aspectos que deben evaluarse y preverse para autorizar estas instalaciones en las áreas protegidas.
		Res. 164/98	Modifica el Reglamento para la Evaluación de Impacto Ambiental en áreas de la Administración de Parques Nacionales, en los aspectos relacionados con la presentación de los Informes de Impacto Ambiental, que deben ser aprobados mediante acto dispositivo por la Dirección Nacional de Conservación de Áreas Protegidas.
		Res. 16/94	Aprueba el Reglamento para la Evaluación de Impacto Ambiental en las áreas de la Administración de Parques Nacionales, cuyo objetivo es disponer de la realización de estudios ambientales previos a la ejecución de proyectos - públicos o privados -, consistentes en obras u otras actividades a desarrollar en dichas áreas, a los efectos de ser aprobados por el citado organismo.
Fauna	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Ley 25.679	Declara de interés nacional en todo el territorio de la República Argentina a la cría de la especie Nandú Petiso o Choique (<i>Pterocnemia pennata pennata</i>), y del Choique cordillerano o surí (<i>Pterocnemia pennata garleppi</i>).
		Ley 24.702	Declara monumento natural en los términos del art. 8° Ley N° 22.351 a las especies vivas de los ciervos andinos (<i>Hippocamelus bisulcus</i>) -huemul, güemul o guamul (araucano), shoam o shonen (tehuelche), ciervo andino, huemul del sur, trula, huemul chileno, hueque, ciervo (Patagonia austral) e <i>Hippocamelus antisensis</i> (tarusch, taruga, taruka o chacu (quichua), venado huemul del norte o norteño, huemul, gamo, venado cerrero, huemul cordillerano, huemul peruano, peñera).
		Ley 23.918	Ratifica Convención sobre Conservación de Especies Migratorias. Obliga a los Estados Parte a adoptar medidas y celebrar Acuerdos conducentes a la preservación de las especies migratorias y sus hábitats en general, en particular recomienda a los Estados Parte la prevención, reducción, o control y limitación de las inmisiones de sustancias nocivas para las especies migratorias en cuestión en el hábitat de dicha especie.
		Ley 23.582	Aprueba el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, suscrito en Lima en 1979.
		Ley 22.421 D.R. 667/97	Régimen legal aplicable en materia de preservación de la fauna silvestre y su hábitat. Regula temas concernientes a protección, comercialización, importación y exportación de especies, caza deportiva, comercial, y científica. Tipifica infracciones y establece el régimen sancionatorio. En el artículo 1° de la Ley N° 22.241 se declara de interés público la fauna silvestre que temporal o permanentemente habita el Territorio de la República, así como su protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional. Establece la competencia de la Autoridad de Aplicación para coordinar con los organismos oficiales nacionales y locales, la prevención de la contaminación o de la degradación ambiental, en grado nocivo para la vida silvestre,

Tabla 3 - Identificación de Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Nacional

Sector	Autoridad de Aplicación	Norma Nacional	Sumario
			mediante medidas preventivas, la realización de estudios de factibilidad y proyectos de obras (desmonte, secado y drenaje de tierras inundables, modificaciones del cauce de los ríos, construcción de diques y embalses), que puedan causar transformaciones en el ambiente de la fauna silvestre, deberán ser consultados previamente a las Autoridades nacionales o provinciales competentes en materia de fauna (conf. art. 13, Cap. IV, L. 22.241). Asimismo, se prevé que antes de autorizar el uso de productos venenosos o tóxicos que contengan sustancias residuales nocivas, en especial los empleados para la destrucción de aquellos invertebrados o plantas que son el alimento natural de determinadas especies, deberán ser previamente consultadas las Autoridades nacionales o provinciales competentes en materia de fauna silvestre (conf. art. 14, Cap. IV, L. 22.241).
		Ley 22.344	La Convención (CITES) tiene por objeto fomentar la cooperación internacional para lograr la protección de ciertas especies contra el tráfico excesivo, con el fin de asegurar su supervivencia. A los efectos de establecer la protección que requieren distintas especies, se elaboraron tres Apéndices, que contienen listas donde figuran los animales y plantas, de acuerdo con el grado de amenaza que sufre cada uno de ellos. La Convención CITES tuvo una enmienda, adoptada en la Segunda Reunión Extraordinaria de la Conferencia de las Partes, celebrada en Gaborone, Bostwana, el 30 de Abril de 1983, la que fue ratificada por la República Argentina por Ley N° 23.815.
		Ley 19.282	Aprueba la adhesión de la República Argentina al Convenio para la Conservación de la Vicuña, suscripto entre la República del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia en 1969.
		D. 522/97	Aprueba el reglamento de las disposiciones de la Ley N° 22.344 que ratificó la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
		Res. 635/05	Prohíbe la caza, exportación, tránsito interprovincial y comercialización en jurisdicción federal de ejemplares vivos, productos y subproductos de la especie vicuña.
		Res. 381/03	Aprueba las modificaciones a los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, adoptadas en la Duodécima Reunión de la Conferencia de las Partes, realizada en Chile en el año 2002.
		Res. 58/02	Establece un Reglamento para la creación de fondos de investigación y manejo de especies silvestres.
		Res. 1449/00	Aprueba las modificaciones a los apéndices de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre adoptadas en Nairobi, Kenia.
		Res. 220/98	Crea el Programa de Manejo Sustentable de la especie Guanaco (Lama guanicoe).

Tabla 3 - Identificación de Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Nacional

<i>Sector</i>	<i>Autoridad de Aplicación</i>	<i>Norma Nacional</i>	<i>Sumario</i>
Atmósfera	<i>Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable</i>	<i>Ley 20.284</i>	<i>Tiene como objetivo estructurar y ejecutar un programa de carácter nacional que involucre todos los aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención y control de la contaminación atmosférica.</i>
		<i>D. 1609/04</i>	<i>Establece las medidas que deberán adoptarse a fin de regular la importación y exportación de las sustancias controladas. Aprueba la creación del Registro de Importadores y Exportadores de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (RIESAO), Res. 953/04 regula los requisitos y condiciones para la inscripción en el RIESAO por parte de los interesados.</i>
		<i>Res. 954/04 Res. 349/04</i>	<i>Establece la creación del Banco Nacional de Halones en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI -. Dispone que las empresas interesadas en actuar como Operadores del Banco Nacional de Halones, deberán contar con la autorización otorgada por el INTI – CONSTRUCCIONES y a tales efectos deberán cumplir los requisitos que fija el artículo 3º la Resolución Conjunta.</i>
		<i>Res. 825/04</i>	<i>Deja sin efecto las Res. N° 167/01, N° 168/01 y N° 169/01. Aprueba las Normas de Procedimiento para la Evaluación Nacional de Proyectos presentados ante la Oficina Argentina del Mecanismo para un Desarrollo Limpio.</i>
		<i>Res. 296/03</i>	<i>Amplía las sustancias comprendidas en artículo 1º de la Ley 24.040 por la cual se aprueba el Protocolo de Montreal sobre control de producción, utilización, comercialización, importación y exportación de sustancias que agotan la capa de ozono, los compuestos químicos incluidos en los Anexos B,C y E del Protocolo de Montreal relativo a sustancias que agotan la capa de ozono y las enmiendas ratificadas por la República Argentina.</i>
		<i>Res. 56/03</i>	<i>Establece la creación de la Unidad Cambio Climático en la jurisdicción de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Entre las funciones asignadas le corresponde: proponer y propiciar acciones conducentes al logro de los objetivos y metas contenidas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, incluyendo el desarrollo de actividades locales de concientización para la mitigación del cambio climático.</i>
		<i>Res. 620/02</i>	<i>Autoriza, en los términos de lo dispuesto por el art. 7º de la Ley N°24.040, la comercialización de Halón 1301, Halón 1211 y</i>

Tabla 3 - Identificación de Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Nacional

Sector	Autoridad de Aplicación	Norma Nacional	Sumario
			<i>Halón 2402, como agentes extintores de fuego para instalaciones fijas y/o portátiles según corresponda, para aquellos usos considerados "críticos" enunciados en el artículo 2° de la norma.</i>
		<i>Res. 61/99</i>	<i>Acepta resultados de ensayos en relación con el control de la emisión de gases contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas provenientes de automotores.</i>
		<i>Res. 1156/98</i>	<i>Acepta ensayos realizados en determinados laboratorios, a los efectos del otorgamiento de Certificados de Aprobación de Emisiones Sonoras y Gaseosas.</i>
		<i>Res. 273/97</i>	<i>Acepta los ensayos realizados en otros países, a los efectos de la emisión de certificados de aprobación de emisiones sonoras y gaseosas.</i>
Patrimonio Cultural	<i>Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación</i>	<i>Ley 25.743</i>	<p><i>Deroga la Ley Nº 9080. Establece el régimen legal aplicable en materia de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico de la Nación. Regula lo atinente a objetivos de la norma, bienes arqueológicos y paleontológicos. Distribución de competencias y de las autoridades de aplicación. Dispone sobre el dominio sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos. Fija las condiciones y requisitos para la inscripción en el Registro Oficial de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos y de Colección u Objetos Arqueológicos o Restos Paleontológicos. Regula lo atinente a las Concesiones. Limitaciones a la propiedad particular. Establece el régimen de Infracciones y sanciones, tipifica los delitos y consecuentes penas. Traslado de objetos. Protección especial de los materiales tipo paleontológico. Disposiciones complementarias. Entre los deberes que fija la norma cabe señalar los siguientes:</i></p> <p><i>Toda persona física o jurídica que practicare excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de construcción, agrícolas, industriales u otros de indole semejante, está obligado a denunciar al organismo competente el descubrimiento del yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto paleontológico que se encontrare en las excavaciones, siendo responsable de su conservación hasta que el organismo competente tome intervención y se haga cargo de los mismos (conf. Art. 13)</i></p>
		<i>Ley 24.252</i>	<i>Modifica L.. 12.665. Otorga a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos la atribución de designar a los expertos para realizar la evaluación de los valores históricos, artísticos, arquitectónicos o arqueológicos del monumento o lugar indicado.</i>
		<i>Ley 12.665</i>	

Tabla 3 - Identificación de Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Nacional

Sector	Autoridad de Aplicación	Norma Nacional	Sumario
		<i>D.R. 84.005/41</i>	<i>Establece el régimen legal aplicable a la protección de los bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos, inmuebles propiedad de la Nación, de las Provincias, de las Municipalidades o instituciones públicas, a los cuales somete a la custodia y conservación del gobierno federal y, en su caso, en concurrencia con las autoridades respectivas.</i>
		<i>Res. 2272/04</i>	<i>Establece los requisitos que deben reunir, en los casos permitidos por la L.. 25.743, las solicitudes de exportaciones temporarias, definitivas y de devolución de bienes arqueológicos</i>
		<i>Res. 184/03</i>	<i>Se designan al Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" e Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales, como autoridad competente en la aplicación y control del cumplimiento de la Ley Nº 25.743.</i>
		<i>Disp. 18/03</i>	<i>Establece la creación en el ámbito del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" e Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales, del Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos.</i>
Seguridad e Higiene en el Trabajo	<i>Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social</i> <i>Superintendencia de Riesgos del Trabajo</i>	<i>Ley 19.587</i> <i>D.R. 351/79</i>	<i>Normativa que regula medidas tendientes a la preservación de la integridad psico-física de los trabajadores, a fin de reducir los accidentes y enfermedades laborales, como así también los riesgos provenientes de diferentes factores de la actividad laboral.</i>
		<i>D. 1338/96</i>	<i>Con la sanción del Decreto Nº 1338/96 quedan derogados el Título II del Anexo I del D.R. 351/79 - Prestaciones de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo -, y el Título VIII del Anexo I del D.R. 351/79 - Estadísticas de Accidentes y Enfermedades del Trabajo -, a fin de evitar la superposición de funciones entre los servicios de medicina y de higiene y seguridad exigidos por Decreto 351/79 reglamentario de la Ley 19.587, y las obligaciones asumidas por las Aseguradoras autorizadas a operar en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo.</i>
		<i>Res. 577/91</i>	<i>Norma el uso, manipuleo y disposición de amianto (asbestos) y sus desechos, en cualquier situación que entrañe un riesgo de exposición profesional al amianto en suspensión en el aire. Esta norma se dictó debido a las falencias que presentaba el Decreto Nº 351/79. Entre los antecedentes de esta Resolución se encuentran las proposiciones plasmadas en la Recomendación Nº 172 de la O.I.T. (Recomendación sobre asbestos, 1986).</i>
		<i>Res. 444/91</i>	<i>En el año 1992 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M.T. y S.S), de acuerdo a la propuesta realizada por la Dirección Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Juri-</i>

Tabla 3 - Identificación de Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Nacional

Sector	Autoridad de Aplicación	Norma Nacional	Sumario
			dicos, procedió a modificar el Anexo III correspondiente al artículo 61 de la Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 351/79, mediante la Resolución Nº 444/91 en los valores de concentración máxima permisible para contaminantes químicos, con el objeto de utilizar los valores actualizados que reflejan los últimos adelantos en la materia, clasificándose en mezclas, partículas molestas y asfixiantes simples - gases o vapores inertes.
		Res. 369/91	Regula el uso, manipulación y disposición segura de difenilos policlorados – PCB's- y sus desechos.
Riesgos del Trabajo	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Superintendencia de Riesgos del Trabajo	Ley 24.557 D.R. 170/95	La Ley 24.557, D.R. 170/95, sus normas modificatorias y complementarias, que conforman el marco regulatorio que establece el nuevo sistema integral de prevención de riesgos del trabajo (SIPRIT), y el régimen legal de las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART).
		Res.840/05	Establece la creación del Registro de Enfermedades Profesionales. Fija en el Anexo I, los procedimientos a seguir para la denuncia de enfermedades profesionales. Determina en el Anexo II la Información que las aseguradoras y empresas autoaseguradas deben remitir a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
		Res. 592/04	Aprueba el Reglamento para la Ejecución de Trabajos con Tensión en Instalaciones Eléctricas Mayores a Un Kilovolt. Establece la obligatoriedad para los empleadores que desarrollen trabajos con tensión de poner a disposición de las comisiones de higiene y seguridad los Planes de Capacitación para la habilitación de los trabajadores que lleven a cabo las tareas mencionadas.
		Res. 133/04	Establece la obligación, para las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y los empleadores autoasegurados, de arbitrar los medios necesarios a fin de asegurar la presencia de los trabajadores damnificados ante los prestadores asistenciales, toda vez que deban concurrir a recibir las prestaciones previstas en el artículo 20 de la Ley 24.557.
		Res. 869/03	Modifica la Res.497/2003, en relación con la inscripción en el "Registro de Difenilos Policlorados" de los empleadores que los produzcan, utilicen, obtengan en procesos intermedios, o los vendan y/o cedan a título gratuito.
		Res. 743/03	Dispone el funcionamiento del "Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales Mayores" en el ámbito de esta Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En el artículo 4º obliga a inscribirse en el citado Registro a los empleadores que importen, utilicen, obtengan en procesos intermedios, vendan y/o cedan a título gratuito las sustancias químicas en cantidad mayor o igual a las consignadas en el Anexo I, de acuerdo con los requisitos que se fijan en el Anexo II. Datos que deberán ser presentados con carácter de declaración jurada, anualmente antes del 15 de abril, con la información correspondiente al año calendario anterior, ante las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo o la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, según corresponda (art. 6º, Res. 743/03)
		Res. 497/03	Establece la creación del "Registro de Difenilos Policlorados" en el ámbito de esta Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el cual se deben inscribir todos aquellos empleadores que produzcan, importen, utilicen, obtengan en procesos intermedios, vendan y/o cedan a título gratuito Difenilos Policlorados.
		Res. 230/03	Establece que los empleadores asegurados y los empleadores autoasegurados tienen la obligación de denunciar todos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a su Aseguradora y a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo respectivamente, según lo establecido en la Resolución S.R.T. N° 15/98, o la que en el

Tabla 3 - Identificación de Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Nacional

Sector	Autoridad de Aplicación	Norma Nacional	Sumario
			<i>futuro la reemplace o modifique. La información remitida tendrá el carácter de declaración jurada y los empleadores asegurados y autoasegurados deberán conservar copia del formulario, con constancia de recepción por parte de la Aseguradora o la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, según corresponda, por un período de tres (3) años.</i>
Riesgos del Trabajo	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Superintendencia de Riesgos del Trabajo	Res. 415/02	<i>Dispone el funcionamiento del Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos. Listado de dichas sustancias. Inscripción de los empleadores en el mencionado Registro, por medio de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo o directa en el caso de los Empleadores Autoasegurados</i>
		Res.320/99	<i>Obliga a los empleadores a declarar el alta de sus trabajadores a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo con antelación al inicio de la relación laboral. Asimismo, el empleador pondrá a disposición de los trabajadores los exámenes realizados debiendo entregar copias de ellos mediando simple solicitud en tal sentido. Establece la validez de los exámenes preocupacionales por el término de dieciocho (18) meses desde su realización. La acreditación por el trabajador de un examen preocupacional realizado dentro del término de validez, eximirá al empleador de la obligación de realizar uno nuevo. La eximición se hará efectiva cuando los requisitos del siguiente examen, de acuerdo a la nueva ocupación laboral, coincidan con los del examen anterior presentado por el trabajador.</i>
		Res. 60/98	<i>Fija las patologías que deberán ser objeto de denuncias por parte de las ART y las empresas autoaseguradas dentro de las 24 horas de prestada la primera asistencia médica al trabajador accidentado, como así también las circunstancias que se produzcan e impliquen un cambio sobre la denuncia inicial, en un plazo de 12 horas. Deroga y reemplaza la Resolución (SRT) N° 79/96.</i>
		Res. 54/98	<i>Establece un régimen optativo en materia de exámenes periódicos respecto de la población actualmente ocupada.</i>
		Res. 15/98	<i>Crea el Registro de Sinistros, a cargo de la Subgerencia de control de Entidades de la SRT. Fija los mecanismos y procedimientos para efectuar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales</i>
		Res. 43/97	<i>Regula los exámenes médicos de salud incluidos en el sistema de riesgos del trabajo, a saber: preocupacionales o de ingreso; periódicos; previos a una transferencia de actividad; posteriores a una ausencia prolongada y previos a la terminación de la relación laboral o de egreso. Deroga la Resolución (SRT) N° 196/96.</i>
		Res. 31/97 Res. 25178	<i>Aprueba el contenido de la información registral que deberán mantener las Aseguradoras y empleadores autoasegurados, originada en los siniestros denunciados en el ámbito de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. Respecto de las rectificaciones o modificaciones de las mismas, se establece que deberán efectuarse sin requerimiento específico por parte de la SSN y de la SRT.</i>
		Res. 16/97	<i>Establece la creación del Programa de Acciones para la Prevención (P.A.P.) tendiente a mejorar las condiciones de salud y seguridad en el ámbito laboral. Fija que los componentes básicos del P.A.P. serán: difusión, capacitación y asistencia técnica, modernización, fiscalización y control.</i>
		Res.78/96	<i>Fija los requisitos para la elaboración de denuncias de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que deberán presentar las Aseguradoras ante la ART.</i>

Tabla 3 - Identificación de Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Nacional			
Sector	Autoridad de Aplicación	Norma Nacional	Sumario
Seguridad e Higiene para la Industria de la Construcción	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Superintendencia de Riesgos del Trabajo	D. 1057/03	Modifica los D. 351/79, D. 911/96 y D. 617/97, con la finalidad de facultar a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para actualizar las especificaciones técnicas de los Reglamentos de Higiene y Seguridad en el Trabajo, aprobados por el Poder Ejecutivo Nacional en virtud de la L. 19.587.
		D. 144/01	Decreta la ampliación de facultades por el D. 911/96 a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en relación con el dictado de normas complementarias y de actualización de acuerdo con las innovaciones tecnológicas que se produzcan en la industria de la construcción.
		D. 911/96	Aprueba el reglamento sobre seguridad e higiene para la industria de la construcción.
		Res. 231/96	Reglamenta los arts. 9, 17 y 20 del D. 911/96. En ella se establecen los plazos perentorios para alcanzar condiciones apropiadas de higiene y seguridad en las construcciones, las horas de asignación profesional por semana y los requisitos que el Legajo Técnico deberá contener, independientemente de los ya establecidos por el citado Decreto.
		Res. 51/97.	Establece un mecanismo eficiente para la adopción de las medidas de seguridad preventivas, correctivas y de control en las obras de construcción. En tal sentido, el artículo 1º obliga a los empleadores a comunicar a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en forma fehaciente, y en un plazo de no menos de cinco días hábiles de anticipación, la fecha de inicio de toda obra que emprendan. Asimismo, el artículo 2º de la Resolución (SRT) Nº 51/97 obliga a los empleadores de la construcción, en cada obra que inicien, relacionada con tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media o Alta Tensión -definidas MT y AT, según el Reglamento del Ente Nacional Regulador de la Electricidad-, a confeccionar el Programa de Seguridad que integra el Legajo Técnico, de acuerdo a lo exigido por Res. 231/96.
		Res. 35/98	Modifica Res.51/97. Establece un mecanismo de coordinación para la redacción de Programas de Seguridad, su verificación y recomendación de las medidas correctivas en las obras de construcción. En tal sentido, el artículo 1º de la citada norma dispone: "...el empleador de la construcción que actúe en carácter de contratista principal o el comitente coordinará un Programa de Seguridad Único para toda la obra, que deberá contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también del de las empresas subcontratistas. En el caso de que hubiere más de un contratista principal, la confección del Programa de Seguridad deberá ser acordada por dichos contratistas". A su vez la Res. 35/98, art. 4, dispone que "... a los efectos del cumplimiento del mecanismo de verificación que se describe en el Anexo I de la Res. 51/97, el Servicio de Prevención de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo del contratista principal o de cada contratista principal, en el caso que hubiere más de uno, será responsable de controlar el cumplimiento general del Programa de Seguridad Único de la obra. El Servicio de Prevención de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo de cada subcontratista, será responsable de controlar el cumplimiento del Programa de Seguridad en lo atinente al personal cubierto por esa Aseguradora, debiendo elevar un informe de visita a obra al Director de obras y/o al contratista principal o comitente y al responsable de Higiene y Seguridad de éstos".
		Res. 633/98	Se delega en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo todo lo atinente a la administración y gobierno del Fondo de Garantía creado por L. 9688, modificada por la L. 23.643 y por L. 24.028
		Res. 319/99	Modifica Res. 51/97 Dispone que las personas físicas o jurídicas que actúen como comitentes o contratistas principales en las actividades de construcción comprendidas en el D. 911/96, deberán implementar obligatoriamente un servicio de higiene y seguridad.-

Tabla 4 - Identificación Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Provincial, Provincia de La Pampa			
Sector	Autoridad de Aplicación	Norma Provincial	Sumario
Medio Ambiente	Subsecretaría de Ecología	Ley 2.085	Mediante la sanción de la Ley 2.085, la Provincia adhiere al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
	Ente de Políticas Ecológicas	D. 1921/96	Establece la creación del Ente de Políticas Ecológicas, presidido por el Subsecretario de Ecología. Determina su integración - un representante titular de cada uno de los siguientes organismos: Dirección de Bromatología y Saneamiento Ambiental, Dirección de Aguas, Dirección de Recursos Naturales y Dirección de Minería -, y funciones.
		Ley 1914 D.R. 2.139/03 D.R. 458/05 D.R. 298/06	Ley de protección, conservación, defensa y mejoramiento de los recursos naturales y del medio ambiente. Regula la Evaluación de Impacto Ambiental en los casos de emprendimientos, cuyas acciones u obras sean susceptibles de producir efectos negativos sobre el ambiente, entre las actividades sometidas el Anexo I de la norma señala las plantas de almacenamiento, tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos urbanos, industriales y rurales. Invita a los municipios a adherir al régimen establecido a fin de fiscalizar toda acción que produzca un menoscabo en el ambiente, como así también interponer medidas precautorias.
		Ley 1.882	Información ambiental. Aprueba el Acta Acuerdo suscripta entre la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Gobierno de la Provincia de La Pampa, con la finalidad de arbitrar los medios necesarios para el cumplimiento del proyecto "Plan Piloto Mapeo de Riesgos de la Provincia de La Pampa, a fin de dotar a los Gobiernos Nacional y Provincial y a través de éste último al Gobierno Municipal de una base para la elaboración de un Sistema de Información alerta para la gestión de emergencias y desastres naturales antrópicos.
		Ley 1.762	Aprueba el Convenio, suscripto entre la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable -actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable- de la Nación y la Provincia de la Pampa, por la cual se adhiere al Programa Desarrollo Institucional Ambiental.
		Ley 1.666	Ley de Ministerios. Establece la creación de la Subsecretaría de Ecología.
		Ley 1.494	Ratifica el Pacto Federal ambiental, suscripto entre todas las Provincias Argentinas y el Estado nacional, con el objetivo de promover políticas de desarrollo ambientalmente adecuadas en todo el territorio nacional.
		Ley 1.427	Ratifica el Convenio Marco suscripto entre los Gobernadores de las Provincias de Neuquén y de La Pampa, por el que se establece el compromiso de reafirmar el Federalismo, la identidad regional patagónica y la promoción de acciones concretas para el desarrollo de sus pueblos, mediante le establecimiento de los mecanismos recíprocos de cooperación, complementación y coordinación. En la cláusula 4º las Partes se comprometen a adoptar medidas de conservación y preservación del medio ambiente, priorizando fundamentalmente el ecosistema de la Cuenca del Río Colorado; comprometiéndose a intercambiar información sobre el ejercicio del poder de Policía en hidrocarburos y a respaldar el accionar del organismo interjurisdiccional (COIRCO).
		Ley 1.396	Educación Ambiental. La Ley 1.396 tiene como objetivos promover la formación de conciencia ecológica en los niños de edad escolar.
		L. 1.352 D.R. 1.194/98	Regula el procedimiento para el amparo de los intereses difusos o derechos colectivos relacionado con: a) La defensa del medio ambiente y del equilibrio ecológico, preservando de las depredaciones o alteraciones el aire, las aguas, el suelo y sus frutos, los animales y vegetales, incluyendo la defensa contra la contaminación sonora; b) La conservación de los valores estéticos, históricos, urbanísticos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos y paisajísticos; c) Con la defensa de los derechos e intereses del consumidor y d) Con la defensa de cualquier otro bien que responda, en

Tabla 4 - Identificación Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Provincial, Provincia de La Pampa

<i>Sector</i>	<i>Autoridad de Aplicación</i>	<i>Norma Provincial</i>	<i>Sumario</i>
			<i>forma análoga, a necesidades de grupos humanos a fin de salvaguardar la calidad de la vida social.</i>
		<i>D. 1.380/98</i>	<i>Información Ambiental. Establece la creación del "Sistema Provincial de Información Ambiental", con dependencia directa de la Subsecretaría de Ecología.</i>
		<i>Disp. 2/98</i>	<i>Establece la creación del Registro Provincial de Organizaciones Ambientistas no Gubernamentales (OANG-LP), a cargo de la Subsecretaría de Ecología.</i>
Residuos Patológicos	<i>Dirección de Bromatología y Saneamiento Ambiental Municipios</i>	<i>Ley 1.586 D.R. 756/97</i>	<i>Establece el régimen aplicable en materia de generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patológicos.</i>
Residuos Peligrosos	<i>Subsecretaría de Ecología</i>	<i>Ley 1.663</i>	<i>Declara zona no nuclear la Provincia de La Pampa. Regula las actividades de ese origen con el fin de preservar la vida y conservar la calidad ambiental.</i>
		<i>Ley 1.466 D.R. 2054/00</i>	<i>Mediante la sanción de la Ley 1.466, la Provincia adhiere a la Ley 24.051 de residuos peligrosos.</i>
		<i>Ley 1.222 D.R. 1.128/92</i>	<i>Establece la creación de la Comisión Interministerial e Interdisciplinaria de investigación y gestión de elementos tóxicos. Declara de interés provincial la constitución de consorcios agropecuarios.</i>
Residuos Sólidos Urbanos	<i>Tribunales de Faltas</i>	<i>Ley 1.123</i>	<i>Código de Faltas. Sanciona al que "en vehículo de carga transportare sin autorización de la autoridad competente, residuos sólidos o líquidos o basuras de cualquier origen, domiciliaria o no. Igual sanción se aplicará a quien los arrojará, depositare o acumulare en lugares públicos o privados no habilitados al efecto por la autoridad competente" (art. 91, inc. 4, ap. a).</i>
PCBs	<i>Subsecretaría de Ecología</i>	<i>Ley 2.055 D.R. 2.272/04</i>	<i>Establece los lineamientos básicos en materia de gestión y eliminación de PCB's (Bifenilos Policlorados).</i>
Atmósfera	<i>Ministerio de Bienestar Social Subsecretaría de Ecología</i>	<i>Ley 1.693</i>	<i>Mediante la sanción de la Ley 1.693, la Provincia de La Pampa, adhiere a la Ley Nacional N° 20.284, Plan de Prevención de Situaciones Críticas de Contaminación Atmosférica. Determina como autoridad de aplicación de la Ley, a la Subsecretaría de Ecología y al Ministerio de Bienestar Social de la Provincia, en el ámbito de sus respectivas competencias (conf. art. 2).</i>
Saneamiento	<i>Ministerio de Bienestar Social Subsecretaría de Ecología</i>	<i>Ley 1.640</i>	<i>Roedores. La Ley 1640 tiene como objetivo prevenir y/o controlar el desarrollo de colonias de roedores. Establece la competencia de la Autoridad de Aplicación de aprobar las acciones y métodos de muestreo, medición y control de roedores, como así la identificación de las especies problemáticas, estando al mismo tiempo facultada para intervenir y disponer las medidas convenientes cuando razones de preservación de la salud pública así lo requieran (art. 7).</i>
Fauna	<i>Ministerio de la Producción en coordinación con la Subsecretaría de Ecología</i>	<i>Ley 2.060</i>	<i>Aprueba el convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, para asistir a los productores afectados por emergencia y/o desastre agropecuario.</i>
		<i>Ley 2.054</i>	<i>Aprueba el Convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, para implementar el régimen de recuperación de la ganadería ovina. L. Nac. 25.422.</i>
		<i>Ley 1.194</i>	<i>Regula la conservación de la fauna silvestre. Modificada por Ley 2.183.</i>
		<i>Ley 1.937</i>	<i>Aprueba Convenio entre la Provincia de La Pampa y el Gobierno nacional, con el objeto de poner en funcionamiento una Red Federal de Información Agroalimentaria y Pesquera en el marco del Proyecto "Sistema Integrado de Información Agropecuaria"(SIIA).</i>

Tabla 4 - Identificación Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Provincial, Provincia de La Pampa

<i>Sector</i>	<i>Autoridad de Aplicación</i>	<i>Norma Provincial</i>	<i>Sumario</i>
		<i>Ley 1.585</i>	<i>Declara de interés provincial la cría de camélidos sudamericanos y ciervos colorados en territorio provincial.</i>
		<i>Res. 399/02</i>	<i>Reglamenta la introducción de especies exóticas en territorio provincial.</i>
Recursos Hídricos	Ministerio de Obras y Servicios Públicos Administración Provincial del Agua	<i>Ley 2.068</i>	<i>Establece normas aplicables al funcionamiento y gestión de obras hidráulicas y sistemas hídricos provinciales, construidas o a construirse en todo el territorio de la Provincia de La Pampa destinadas al control de los excedentes hídricos, "siempre que no se encuentren comprendidos en regímenes especiales bajo la jurisdicción de organismos específicos" (art. 1º). Dispone sobre la creación del Comité de Regiones Hídricas, composición y funciones del citado organismo.</i>
		<i>Ley 2.064</i>	<i>Aprueba el acta constitutiva y Carta Orgánica del Consejo Hídrico Federal, instancia federal para el tratamiento de los aspectos de carácter global, estratégico, interjurisdiccional e internacional que se susciten con relación a las aguas interjurisdiccionales.</i>
		<i>Ley 2.044</i>	<i>Aprueba el Convenio Marco suscripto entre la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y el Gobierno de la Provincia de La Pampa. Se establecen las condiciones que regirán la ejecución de las obras hídricas del "Plan Federal de Control de Inundaciones".</i>
		<i>Ley 1.951</i>	<i>Declara al territorio de la Provincia de La Pampa en estado de Emergencia Hídrica. Con vigencia hasta el cese de las condiciones climáticas excepcionales que dan origen a la sanción de la L. 1.951.</i>
		<i>Ley 1.765</i>	<i>Aprueba el Convenio de Cooperación, entre el Instituto de Geoquímica y de Aplicaciones Geológicas de la Teleobservación, de la ciudad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires y la Provincia de La Pampa, con el objeto de desarrollar en conjunto un proyecto de investigación sobre contaminación con arsénico fluor, selenio, vanadio y otros oligoelementos, en aguas subterráneas de la Provincia de La Pampa.</i>
		<i>Ley 1.508</i>	<i>Efluentes líquidos. Prohíbe la emisión o descarga al ambiente de todo tipo de efluentes líquidos y sus agregados sin previo tratamiento o disposición que los convierten en inocuos para todos y cada uno de los elementos constitutivos del ambiente y/o para la salud y bienestar de la población. El art. 9 establece que los residuos estacionados dentro de los establecimientos o depósitos debidamente autorizados, a la espera de ser evacuados dentro de los plazos que los organismos competentes establezcan para cada caso deberán ser acondicionados en forma tal que no provoquen la degradación del ambiente o la de sus elementos constitutivos, ni afecten el bienestar y/o la salud de la población.</i>
		<i>Ley 1.380</i>	<i>Ratifica el Convenio la Administración Provincial del Agua de La Pampa y el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, en el que ambas partes se comprometen a iniciar un Programa de Estudios de Impacto Ambiental provocado por el Embalse Casa de Piedra.</i>
		<i>L. 1.027 D.R. 193/81</i>	<i>Establece el régimen legal aplicable en materia de conservación y uso del agua potable.</i>
		<i>Ley 894</i>	<i>Declara de interés público la promoción del aprovechamiento de los cursos de agua en el territorio provincial. Establece que en todos los casos la distribución del agua deberá tener en cuenta el principio de unidad de cuenca, asegurando un aprovechamiento integral del recurso con atención a la preservación del medio ambiente y evitando la contaminación (art. 4). Deroga la Ley 858.</i>
		<i>Ley 775</i>	<i>Ratifica el Estatuto del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), aprobado por los Gobernadores de las cinco provincias condóminas del citado río. El art. 2º establece que el COIRCO tendrá por objeto asegurar la ejecución del Programa Único de Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de Caudales del Río Colorado</i>

Tabla 4 - Identificación Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Provincial, Provincia de La Pampa

<i>Sector</i>	<i>Autoridad de Aplicación</i>	<i>Norma Provincial</i>	<i>Sumario</i>
			<i>(Programa Único) acordado y su adecuación al grado de conocimiento de la Cuenca y a su comportamiento en las distintas etapas de esa ejecución, la que deberá ser gradual y coordinada.</i>
		<i>Ley 497</i>	<i>Establece el sistema de afectación y colonización de tierras comprendidas en la zona de influencia del Río Colorado. Determina la competencia del Ente Provincial del Río Colorado para proceder a su planificación.</i>
Patrimonio Cultural	<i>Ministerio de Cultura y Educación Subsecretaría de Cultura</i>	<i>Ley 2.083</i>	<i>Declara de interés público las acciones destinadas a proteger el patrimonio cultural de la Provincia. Establece la creación de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, determina su integración y funciones. Crea el Registro Provincial de Patrimonio Cultural. Establece el régimen de sanciones.</i>
Lucha contra Incendios	<i>Ministerio de la Producción Subsecretaría de Asuntos Agrarios</i>	<i>Ley 2.071</i>	<i>Mediante Ley 2.071, la Provincia de La Pampa aprueba el Convenio interprovincial de alerta y colaboración mutua en incendios rurales en zonas limítrofes celebrado entre las provincias de Mendoza, San Luis y La Pampa, con fecha 27/05/03.</i>
		<i>Ley 1.808</i>	<i>Aprueba el convenio suscrito entre la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable –actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable- de la Nación y la Provincia de La Pampa, con el objeto de implementar, aplicar y desarrollar el Plan Nacional de Manejo del Fuego.</i>
		<i>Ley 1.354 D.R. 1.925/05</i>	<i>Establece los lineamientos del Plan Integral de Prevención y Lucha Contra Incendios, y la elaboración del Plan Provincial de Picadas Contrafuego, conforme a las características de cada zona. Capítulo 3º fija el régimen de sanciones. Deroга L. Nº 963.</i>
Áreas Protegidas	<i>Subsecretaría de Ecología</i>	<i>Ley 1.899</i>	<i>Aprueba el convenio suscrito entre la Nación Argentina y la Provincia de La Pampa, por el cual se acuerdan las condiciones para la ampliación de los límites del Parque Nacional Lihuel Calef.</i>
		<i>Ley 1.850</i>	<i>Establece la desafectación de espacio verde en el Parque de Producción, Comercio y Servicios de Gral. Pico y la transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Gral. Pico.</i>
		<i>Ley 1.689</i>	<i>En los términos de la L. 1.321, declara Áreas Protegidas a varios inmuebles provinciales: Área Protegida Parque Luro, Área Protegida Pichi Mahuida, Área Protegida Limay Mahuida, Área Protegida La Reforma, Área Protegida La Humada.</i>
		<i>Ley 1.510</i>	<i>Declara Patrimonio natural, histórico y cultural al área del Parque Luro.</i>
		<i>Ley 1.475</i>	<i>Declara Área Protegida, el lago formado sobre territorio de la Provincia de La Pampa, con aguas del Río Colorado por el embalse Casa de Piedra, incluyendo su entorno y excluyéndolas áreas de regadío y sus sistemas de riego y drenaje, dentro del marco de la Ley Provincial número 1.321.</i>
		<i>Ley 1.353</i>	<i>Se declara "Área Protegida" la Laguna de Guatraché incluyendo su entorno, dentro del marco de la L. 1.321.</i>
		<i>Ley 1.321 D.R. 1.283/95</i>	<i>Regula el sistema de áreas protegidas de la Provincia de La Pampa, calificándolas dentro de distintas categorías de manejo, según sus características, aptitudes, utilización y grados de intervención del Estado. La norma establece que los espacios naturales o seminaturales ubicados en territorio provincial que revistan importancia ecológica, social, histórica o estética podrán ser declarados "áreas protegidas", a los efectos de su conservación, recuperación, aprovechamiento de sus recursos naturales y armonización de las actividades que se cumplan en los mismos (art. 1º).</i>
Forestación	<i>Ministerio de la Producción Subsecretaría de</i>	<i>Ley 1.667 D.R. 71/99</i>	<i>Declara de interés provincial la defensa, mejoramiento y aprovechamiento de los bosques y tierras forestales, así como el fomento a la actividad foresto-industrial sometidas al régimen de la L. 1667. El art. 29 establece que toda actividad de desmonte y de aprovechamiento de productos forestales requerirá siempre</i>

Tabla 4 - Identificación Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Provincial, Provincia de La Pampa

Sector	Autoridad de Aplicación	Norma Provincial	Sumario
	<i>Ecología</i>		autorización previa de la autoridad de aplicación. El art. 48 de la L. 1667 prohíbe en el ámbito provincial la limpieza de banquetas y zonas de vías cualquiera sea su jurisdicción, mediante la utilización del fuego sin expresa autorización de la autoridad de aplicación. Deroga las Leyes N° 44, N° 1.103 y N° 990.
		Ley 1.883	Adhiere a la Ley Nacional 25.080, Ley de Inversiones de Bosques Cultivados.
Suelo	Ministerio de la Producción Subsecretaría de Ecología	Ley 2.139	Declara de interés público el uso sustentable del recurso suelo y las acciones privadas y/o públicas destinadas al manejo de su recuperación, preservación, conservación, al control de su capacidad productiva, a la prevención de procesos de degradación, y a la promoción de la educación para su uso racional. El art. 19 establece que la extracción de la capa superficial del suelo para ser utilizada de manera no agropecuaria, deberá ajustarse a la reglamentación de la Ley 2.139. Deroga la Ley 155.
		Ley 1.229	Declara de interés público la constitución de Consorcios Agropecuarios, "cuyos objetivos comunes sean: aumentar la calidad y cantidad de producción, mejorar la estructura productiva y la calidad de vida de asalariados y empresarios rurales, siempre que ello no signifique el deterioro de los recursos naturales" (art. 1°).
		Ley 1.074	Mediante la sanción de la Ley 1.074, la Provincia adhiere a la Ley Nacional N° 22.428, que establece el régimen de fomento de la conservación de los suelos.
Agroquímicos	Ministerio de Bienestar Social en coordinación con la Subsecretaría de Ecología	Ley 1.886	Modifica el art. 8° de la L. 1173, por el que se faculta a la autoridad de aplicación para establecer las normas de seguridad, control y verificación relativas a la fabricación, distribución, almacenamiento y traslado de agroquímicos, asimismo la disposición final de los envases y/o contenedores de los mismos.
		Ley 1.173 D.R. 618/90	Regula la fabricación, transporte, distribución, comercialización y aplicación de agroquímicos para uso agrícola y saneamiento urbano. La norma no regula el método de disposición final aplicable a los residuos generados (envases y desechos).
		Ley 41	Régimen legal aplicable en materia de sanidad vegetal. Obliga a los propietarios, arrendatarios, usufructuarios u ocupantes de tierras fiscales o privadas, a destruir dentro de los inmuebles que posean u ocupen, las plagas declaradas tales por el Poder Ejecutivo de la Nación o de la Provincia. Complementan la norma de referencia: D. 131/55, D. 1543/54, D. 1620/58.
		D. 131/55	Declara plagas de la agricultura, siendo obligatoria su destrucción en todo el territorio de la Provincia, de acuerdo a las disposiciones vigentes en la Ley Provincial N° 41, a las malezas denominadas <i>Centaurea</i> spp, <i>Cirsium lanceolatum</i> , <i>Syllibu</i> , <i>marianun</i> y <i>Cynara cardunculus</i> , vulgarmente conocidas con los nombres de abre puño, cardo negro, cardo asnal, y cardo de castilla, respectivamente.
		Disp. 385/01	Aprueba las normas básicas de seguridad en depósitos de agroquímicos, a fin de evitar riesgos. Establece la competencia de la Dirección General de Agricultura y Ganadería para fiscalizar su cumplimiento (conf. art. 3°). En cuanto a envases deteriorados o con pérdidas, la norma prohíbe su almacenamiento. Respecto de desechos producidos por derrames de agroquímicos, como así también envases dañados, la norma dispone que sean introducidos en envases herméticos a los efectos de eliminar tales desechos "de manera segura". La norma no regula el método de disposición final aplicable a dichos envases y desechos.
Ruidos	Ministerio de Bienestar Social	Ley 1.630	Prohíbe la contaminación acústica en todo el territorio de la Provincia de La Pampa, así como su producción, origen, estimulación o provocación a través de ruidos de consecuencias nocivas. El art. 2° prescribe los niveles de ruidos tolerados en zonas urbanizadas.
Tránsito	Dirección de Transporte y Comunicaciones	Ley 1.713	Mediante la sanción de la Ley 1.713, la Provincia adhiere al régimen de la Ley de Tránsito nacional N° 24.449. Por Ley 2016, se deja establecido que dicha adhesión no comprende las disposiciones de los artículos 69, inc. h) y 71 de la citada Ley nacional,

Tabla 4 - Identificación Autoridades Competentes y Normativa Aplicable a Nivel Provincial, Provincia de La Pampa

<i>Sector</i>	<i>Autoridad de Aplicación</i>	<i>Norma Provincial</i>	<i>Sumario</i>
			<p><i>"y consecuentemente no se presta adhesión a la prórroga de jurisdicción"; asimismo, determina que el cobro de las infracciones a la Ley 24.449 y a la Ley 1.713, tramitará bajo el procedimiento previsto en el Código Fiscal Provincial, y las normas procesales provinciales.</i></p> <p><i>Mediante Decreto 2055/00 se aprueba la reglamentación referida al otorgamiento de permisos especiales de tránsito para la circulación de vehículos especiales y cargas excepcionales por rutas de jurisdicción provincial.</i></p>

Tabla 5 - Normativa aplicable a Nivel Municipal			
Municipio	Autoridad de Aplicación	Norma Municipal	Sumario
Santa Rosa	Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano	Ord. 3.140/03	Artículo 5° Compete al Secretario de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano asistir al Intendente en la orientación, regulación, planificación, dirección, ejecución y control de planes, programas y actividades relacionadas con las obras públicas y privadas, la prestación de servicios públicos, el catastro municipal, el tránsito y todo lo atinente al ordenamiento y control del desarrollo armónico e integral de la ciudad.
	Dirección de Protección Ambiental y Servicios Públicos	Ord. 2.930/02	Autoriza al Departamento Ejecutivo a la gestión y prestación del "Servicio de Relleno Sanitario en la Ciudad de Santa Rosa" por administración y bajo los requerimientos técnicos que exige esta modalidad de tratamiento sanitario de la basura.
		Ord. 2.244/98	Establece la recolección y disposición final de pilas y/o micropilas en forma diferenciada del resto de los residuos sólidos domiciliarios. El art. 6 prevé la recolección mensual por parte de la Autoridad de Aplicación Municipal de las pilas almacenadas en las urnas instaladas en establecimientos educativos y comercios habilitados al efecto, para ser luego confinadas en contenedores en dependencias del Relleno Sanitario Municipal, "hasta tanto surjan nuevos sistemas de almacenamiento o reciclado que serán autorizados oportunamente por el Honorable Concejo Deliberante".
		Ord. 1.899/97	Adhiere a la Ley provincial N° 1.640 de prevención y control de roedores.
		Ord. 1.582/95	Aprueba el Código Urbanístico de Santa Rosa, se clasifica el territorio en Área Urbana, destinada a contener todas las actividades concernientes a la vida ciudadana, y en Área Rural, destinada a la producción agropecuaria intensiva, extensiva forestal y minera.
		Ord. 1.342/93	Establece la creación en el ámbito del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Santa Rosa la sección "Patrulla Ecológica", cuya misión será la detección de toda situación que atente contra el medio ambiente.
		Ord. 1.333/93	Declara la Ciudad de Santa Rosa "zona no nuclear". Prohíbe en el Ejido Municipal, la instalación de Centrales Nucleares, depósitos transitorios o permanentes de residuos radiactivos, Plantas o Establecimientos de cualquier tipo que elaboren o utilicen durante el proceso de producción, elementos que pudieran contaminar radiactivamente. Asimismo, prohíbe dentro del Ejido Municipal, la circulación o transporte por cualquier medio, de sustancias o materiales radiactivos de origen nuclear, salvo los mencionados en el art. 4 de la norma – entre otros los de uso medicinal -.
		Ord. 837/91	Regula el manejo y disposición final de residuos patológicos. Prohíbe la entrega de residuos patológicos a recolectores y/o personas no autorizadas expresamente por la Municipalidad (art. 3). Establece los requisitos que deben reunir los recipientes y áreas de concentración o almacenamiento previas a la disposición final de los mismos (arts. 7, 9). Dispone que los hornos para quema o incineración de los residuos patológicos deberán estar ubicados preferentemente en el mismo predio o lugar donde se producen o eliminan los mismos, en el caso que la disposición final se realice en otros lugares habilitados, la norma prohíbe expresamente el transporte de dichos residuos conjuntamente con cualquier otro tipo de residuos (art. 16)
		Ord. 357/87	Aprueba el Código de Faltas aplicable en la ciudad de Santa Rosa.
		Ord. 354/87	Declara de interés público la defensa, preservación y recuperación del arbolado público. Prohíbe la extracción, poda o cualquier otra tarea sobre las especies arbóreas, salvo los casos establecidos en el art. 2 de norma.
		Ord. 15/82	Regula tenencia y circulación de animales domésticos, perros y gatos, en el ámbito de la Ciudad de Santa Rosa. Prohíbe perros sueltos en los lugares de concurrencia pública (art. 17).
		Ord. 7/80	Prohíbe la instalación de criaderos y tenencia de cerdos en el ejido urbano de la ciudad de Santa Rosa.
	Secretaría de Obras, Servicios Públicos y	Ord. 20/76	Prohíbe arrojar basura y otros desperdicios en el terreno perteneciente al Ferrocarril Domingo F. Sarmiento.

Tabla 5 - Normativa aplicable a Nivel Municipal			
Municipio	Autoridad de Aplicación	Norma Municipal	Sumario
	Planeamiento Urbano	<i>D. 1.603/05</i>	Aprueba las Ord. Tarifarias para el ejercicio 2005 de las Comisiones de Fomento que enuncia el art. 1°.
	Dirección de Protección Ambiental y Servicios Públicos	<i>Res. 522/04</i>	Aprueba el Convenio de prórroga y expiración anticipada suscripto con fecha 25/03/04, en el marco de la concesión del Servicio Público de Recolección de Residuos Domiciliarios y Barrido y Limpieza en la ciudad de Santa Rosa, entre la Municipalidad de Santa Rosa y la firma – CLEAR SRL - .
		<i>Res. 137/76</i>	Terrenos Baldíos. Establece la creación de una brigada de limpieza, que tendrá como misión la desmalezación de terrenos baldíos, eliminación de alimañas, como así la construcción de cercos y veredas a todos aquellos terrenos que carecen de los mismos. El art. 2 determina que los gastos que demanden los trabajos señalados serán a cargo de la propiedad y los mismos serán abonados en un plazo de 48 horas de recibida la notificación, con más un 20% por gastos de administración.
Gral. Pico	Departamento de Saneamiento Ambiental	<i>Ordenanza Tarifaria 2006</i>	En el Capítulo 9° fija la tasa por recolección especial. Servicio que comprende la recolección de residuos no habituales, (ramas, malezas, cajas de cartón, etc.) en forma periódica. El art. 488, inc. 2° describe las infracciones a las normas de higiene y salubridad urbana pasibles de sanción de multa, cabe mencionar las siguientes: emanación de gases tóxicos y/o humos (art. 488, inc. 2, ap. Q, y ap. S-), por vertimiento de líquidos o materias residuales o tóxicas (art. 488, inc. 2, ap. R-); terrenos baldíos (art. 488, inc. 2, ap. Z-); ruidos molestos (art. 488, inc. 10); infracciones al servicio de control y vigilancia de la población canina (art. 488, inc. 11), arrojar en la vía pública animales muertos ; por dejar en la vía pública animales sueltos; arrojar basura en la vía pública y/o predios baldíos dentro del ejido municipal; depositar basura considerada de recolección especial o de recolección diaria fuera de los horarios y/o días establecidos por el D.E. Municipal; la quema de basura y/o malezas dentro del radio urbano y/o suburbano de la ciudad.
		<i>Ord. 147/04</i>	Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a crear un programa integrado por vecinos, instituciones barriales y el Municipio para erradicar paulatinamente los pequeños basurales de la ciudad.
		<i>Ord. 157/97</i>	El Código urbanístico junto con el Plano de zonificación, constituyen los instrumentos normativos que rigen actualmente el ordenamiento en el territorio del ejido de Gral. Pico.
		<i>Ord. 246/96</i>	Reglamenta la recolección, tratamiento y disposición final de residuos patológicos. Prohíbe la entrega de residuos a firmas o personas no autorizadas expresamente por la Municipalidad a la recolección especial de los mismos. Ord. 58/97, modifica art. 5° Ord. 246/96.
		<i>Ord. 30/90</i>	Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal para llamar a licitación pública o privada la explotación de los residuos depositados y a depositarse en el Basural Municipal, y la prestación de servicios de vigilancia y control.
		<i>Ord. 143/88</i>	Establece que el Departamento Ejecutivo Municipal colocará contenedores en zonas estratégicas de la Ciudad priorizando aquellos lugares donde frecuentemente se arrojan desperdicios, a tal efecto habilitará vehículos acoplados para facilitar la recolección y el desplazamiento de la carga.
		<i>Ord. 48/87</i>	Establece sanciones a quienes arrojen residuos y animales muertos en lugares no previstos por el Departamento Ejecutivo Municipal.
		<i>Ord. 47/85</i>	Regula la recolección, tratamiento y disposición final de residuos domiciliarios. Prohíbe la tarea de cirujeo en el ámbito municipal.

Tabla 5 - Normativa aplicable a Nivel Municipal			
Municipio	Autoridad de Aplicación	Norma Municipal	Sumario
Eduardo Castex	Dirección de Planeamiento, Obras y Medio Ambiente	<i>Ordenanza Tarifaria 05/2006</i>	Capítulo IV establece la tasa por servicios de limpieza e higiene
		<i>Ord. 12/06</i>	Mediante la sanción de la Ord. 12/06, el Municipio de Eduardo Castex adhiere al Consorcio Provincial de la Basura - COPROBA -.
		<i>Ord. 113/04</i>	Reglamenta la recolección, traslado, clasificación y disposición final de distintos tipos de residuos, incluidos los patológicos.
		<i>Ord. 06/01</i>	Mediante la sanción de la Ord. 06/01 el Municipio de Eduardo Castex adhiere a la Ley 1.914.
		<i>Ord. 105/96</i>	Regula la organización integral de la limpieza del Municipio.
Arata	Departamento Ejecutivo	<i>Ordenanza Tarifaria 2006</i>	En el Cap. IV regula la tasa por servicio especiales de limpieza e higiene.
Catrilo	Departamento Ejecutivo	<i>Ordenanza Tarifaria 2006</i>	Cap. I se establecen las tasas por servicios de alumbrado, limpieza, riego, barrido y conservación de la vía pública
Colonia Barón	Departamento Ejecutivo	<i>Ordenanza Tarifaria 2006</i>	Cap. I. Art. 2, fija la tasa por servicios de alumbrado, limpieza, riego, barrido y conservación de la vía pública. Cap. IV, art. 5, fija la tasa por servicios especiales de limpieza e higiene
Gral. Acha	Departamento Ejecutivo	<i>Ordenanza Fiscal</i>	En el Libro Segundo – Parte especial, Cap. 1, regula las tasas por alumbrado, limpieza y riego, barrido y conservación de la vía pública.
25 de Mayo	Departamento Ejecutivo	<i>Ord. 11/03</i>	Prohíbe en todo el ejido municipal, arrojar o colocar desperdicios, residuos, escombros, restos de poda y/o aguas servidas en la vía pública, veredas terrenos fiscales, baldíos, espacios verdes y/o cualquier otro lugar no autorizado. Autoriza campaña de difusión sobre higiene urbana. Establece sanciones. Deroga Ord. 56/02 y Ord. 34/02.
Realicó	Departamento Ejecutivo	<i>Ord. 33/03</i>	Establece la obligación de los responsables de las viviendas de colocar un cesto para depositar los residuos sólidos urbanos en la vereda a los efectos de su recolección. Determina las medidas y condiciones de instalación que deben cumplir los mismos a los efectos que los residuos no sean desparramados por animales sueltos. Establece multas para los vecinos que no coloquen en los cestos de referencia los residuos.
Comisión de Fomento de Dorila	Departamento Ejecutivo	<i>Ordenanza Tarifaria 2005</i>	Fija en el Cap. I, art. 2, la tasa por alumbrado público, riego, barrido y conservación de la vía pública. En el Cap. IV, art. 5, fija la tasa por servicios especiales de limpieza e higiene. En el art. 49, establece las sanciones aplicables a faltas contra la sanidad e higiene.
Comisión de Fomento Maisonnave	Departamento Ejecutivo	<i>Ord. 01/05</i>	Apueba Ordenanza Tarifaria. Capítulo 4º regula la Tasa por servicios especiales de limpieza e higiene. En el artículo 49 describe las faltas contra la sanidad e higiene.

6. COMPONENTE 2: ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA INGENIERÍA JURÍDICA

6.1. Fortalecimiento Marco Institucional Provincial

En su calidad de titular de los recursos naturales existentes en su territorio, compete al gobierno de la Provincia de La Pampa velar por la protección del medio ambiente en general y los recursos naturales en particular.

El control ambiental de la gestión de los RSU a nivel provincial es ejercido por la Subsecretaría de Ecología, autoridad de aplicación de las disposiciones de la Ley N° 1914 - B.O. 02/02/01-, por la cual en el marco del artículo 18° de la Constitución Provincial, se establecen los lineamientos e instrumentos de política ambiental, tendientes a propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la preservación y reparación del medio ambiente, la educación y participación comunitaria en la materia.

Asimismo, los municipios y/o comisiones de fomento adheridos a la norma de referencia, se encuentran facultados para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 1914 en el ámbito de sus jurisdicciones.

Debido a la falta de una norma provincial aplicable a la gestión de RSU, se debería desarrollar una legislación provincial complementaria de la Ley de presupuestos mínimos de gestión integral de residuos domiciliarios, Ley N° 25.916, a fin de posibilitar así su efectiva aplicación y fiscalización de la prestación del servicio, por parte de los organismos provinciales y municipales.

Asimismo, la Autoridad de Aplicación Ambiental de la provincia en prosecución de una eficiente gestión de los RSU debería adoptar las medidas de fortalecimiento institucional que señala la Ley provincial de protección del medio ambiente, a saber:

- Exigir la presentación de informes de evaluación de impacto ambiental de plantas de almacenamiento, tratamiento, estaciones de transferencia, centros de disposición final de RSU (pto. 15, Anexo, L. 1914).
- Fiscalizar por sí, o si lo ameritara, con la colaboración de universidades, institutos y/o centros investigación provinciales, nacionales e internacionales, o la contratación de empresas del sector privado especializadas en la materia, el cumplimiento de las exigencias de la Ley N° 1914, y sus reglamentaciones parciales, intensificando control, inspección y evaluación técnica en aquellas instalaciones destinadas al acopio, tratamiento y disposición final de RSU que contaminen y/o degraden el ambiente, que en la actualidad funcionan en los municipios y Comisiones de Fomento de la Provincia de La Pampa a fin de realizar su seguimiento y determinar el cumplimiento de las medidas de protección exigidas por la Ley N° 1914 (cfr. art. 33 y ccdtes., pto. 15, Anexo, L. 1914).
- Intensificar por sí, o con la colaboración de universidades, institutos y/o centros investigación provinciales, nacionales e internacionales, o bien mediante la contratación de empresas del sector privado especializadas en la materia, el asesoramiento dirigido a los municipios y Comisiones de Fomento de la Provincia de

La Pampa, con el objeto de solucionar las falencias existentes debido a una inadecuada gestión de RSU.

- Intensificar en coordinación con los municipios y comisiones de fomento el relevamiento, control e inspección respecto de la existencia de basurales a cielo abierto y basurales clandestinos existentes en territorio provincial, a fin de proceder a la erradicación de los mismos, y saneamiento de los predios afectados, en resguardo de la salud, calidad de vida de la población, y la preservación del medio ambiente.
- Propiciar la concertación y celebración de acuerdos interjurisdiccionales con los municipios y/o comisiones de fomento, atinentes a cuestiones ambientales comunes entre las que cabe mencionar la gestión integral de RSU (art. 37, L. 1914).
- Propiciar con la colaboración de universidades, institutos y/o centros investigación provinciales, nacionales e internacionales, o la contratación de empresas del sector privado especializadas en la materia, la implementación de planes y programas de difusión y capacitación sobre mecanismos de control, inspección y evaluación técnica, dirigidos a funcionarios y personal relacionados directa y/o indirectamente con el sector de higiene urbana de los municipios y comisiones de fomento. Asimismo, se recomienda propiciar la celebración de talleres de capacitación en los que participen funcionarios municipales responsables de la gestión de RSU y representantes de la Autoridad de Aplicación Provincial, sobre prácticas conducentes a un adecuado manejo de los RSU.

Esta recomendación se funda en que una de las falencias observadas es la carencia de programas de desarrollo de recursos humanos enfocados a los funcionarios municipales encargados de las decisiones, así como para aquéllos asignados a la recolección y disposición final.

Los cursos de capacitación dirigidos a los funcionarios municipales se dan muchas veces dentro del marco de actividades de capacitación municipal, que puede incluir un componente de residuos sólidos, sin mayor énfasis en la operación de los servicios ni en los impactos sanitarios y riesgos ocupacionales que involucra el manejo inadecuado de los residuos.

Uno de los problemas serios estructurales administrativos que enfrentan las municipalidades en la formación de recursos humanos, es el constante cambio del personal directivo encargado de los servicios de limpieza urbana que puede traer aparejada una discontinuidad en los planes de capacitación y aprendizaje, lo que repercute en ineficiencias importantes en esta área.

En tal sentido, es necesaria la creación de una mejor infraestructura de planificación, en que los elementos fundamentales de este esfuerzo deberían ser el reforzamiento y modernización de los sistemas de información, y el mejoramiento de la capacidad analítica de los encargados del manejo de los RSU para interpretar y utilizar de la mejor manera dicha información.

- Llevar y mantener actualizado un registro de la información relativa a la gestión de RSU que se desarrollen en los municipios y Comisiones de Fomento de la Provincia, como así también instrumentar el sistema de información ambiental, coordinando su

implementación con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, las demás áreas del gobierno provincial y municipal (art. 17, L. 1914).

- Coordinar con los municipios y comisiones de fomento la implementación de programas de educación formal y no formal, como así también campañas dirigidas a la población en general, relacionados con temas tales como: separación en origen, disposición inicial diferenciada de RSU, responsabilidad compartida en la generación de RSU y su impacto en el medio ambiente (art. 20, L. 1914). Se recomienda la implementación de programas de educación a nivel terciario mediante la creación de tecnicaturas en materia ambiental relacionada con la gestión de RSU.
- Promover, el desarrollo de métodos, tecnologías y sistemas de reciclaje o recirculación de residuos u otros tipos de transformación de bajo o nulo impacto ambiental (art. 31, L. 1914).
- Propiciar mecanismos administrativos para lograr transparencia en la comercialización de productos resultantes de las operaciones de reuso, reutilización y reciclaje de RSU, con el objeto de lograr una mayor rentabilidad en la gestión.
- Propiciar la creación de registros provinciales destinados a prestar o proveer de servicios para la gestión de RSU, tales como:
 - o Laboratorios.
 - o Empresas prestadoras de servicios de transporte de RSU.
 - o Empresas proveedoras de equipos de infraestructura destinados a la gestión, incluidos maquinarias, repuestos, vehículos, y otros elementos.
 - o Empresas y/o profesionales especializados en la prestación de servicios de asesoría, auditorías, relevamiento pasivos ambientales, y saneamiento ambiental, entre otros.
 - o Empresas comercializadoras de material reciclado.

Como conclusión se podría afirmar que dada la complejidad que reviste llevar una adecuada fiscalización de la preservación del medio ambiente en general respecto de las actividades antrópicas, entre ellas la gestión de RSU, se debería fortalecer institucionalmente a la Autoridad de Aplicación, elevándola a la jerarquía de Ministerio.

Por otra parte, si bien se creó el Ente de Políticas Ecológicas a fin de coordinar las competencias concurrentes de los distintos organismos del gobierno provincial con incumbencia en materia ambiental, la aplicación de la legislación se dificulta por la duplicidad de atribuciones, la ambigüedad de funciones y la inexistencia de mecanismos para resolver conflictos.

Para el caso particular de la gestión de RSU, se recomienda fortalecer la fiscalización ambiental a nivel provincial centralizándola en un único organismo, e incrementar la coordinación de relaciones institucionales más fluidas con los municipios, mediante la

formulación de una política ambiental integral a través de la sanción de un régimen legal en el que se institucionalice y estructure íntegramente la gestión de RSU, como así también la elaboración y aplicación de estrategias, planes y programas de capacitación e intercambio de información.

Para cumplir con dicho cometido se deberían arbitrar los mecanismos administrativos eficientes para facilitar el apoyo que requieran los municipios y comisiones de fomento para el desarrollo de una adecuada gestión de RSU cuyos responsables directos son los municipios de la provincia, como así también intensificar la fiscalización ambiental que deben ejercer en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales en virtud de los principios de política ambiental expresados en la Carta Magna Provincial, la Carta Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento - Ley N° 1597 -, y la Ley N° 1914 de preservación del medio ambiente.

6.2. Lineamientos para una legislación provincial y/o municipal sobre gestión de RSU

Las nuevas misiones y funciones que surgen de la Ley N° 25.916 de presupuestos mínimos de gestión ambiental de residuos sólidos urbanos, incumben tanto a los municipios como a la provincia. La competencia primaria es plenamente municipal, pero el gobierno provincial detenta la responsabilidad eminente de que se cumpla la Ley N° 25.916 y tiene la obligación constitucional de dictar las normas complementarias a dicho texto legal (C.N. art. 41°, 3er. párrafo).

En apartados subsiguientes se presentan los lineamientos destinados a cumplir la función de complementariedad de la norma de análisis.

- *Objeto y Ambito de Aplicación.* La norma, reconociendo la autonomía municipal y su competencia en la gestión de los RSU, como así también la capacidad asociativa de los municipios para la gestión mancomunada de los residuos, debe establecer las exigencias básicas para un adecuado manejo de los RSU, a fin de minimizar los impactos negativos que puedan producir sobre el ambiente, minimizar la cantidad de RSU con destino a disposición final, promover la valorización de los RSU, e involucrar a la sociedad civil en aspectos tales como su responsabilidad en la generación de los mismos y a la toma de decisiones respecto de su gestión.

Asimismo, en la norma se debe establecer claramente la definición de residuos sólidos urbanos, y especificar expresamente aquellos residuos que se encuentran excluidos. La determinación de los residuos dará el fundamento básico necesario para determinar el objeto a regular, y circunscribir el ámbito de aplicación de la normativa a aplicar.

- *Criterios de Clasificación de Generadores de RSU.* Para la determinación de las diferentes clases de generadores, la norma debería fijar determinados parámetros, a los efectos de justificar el criterio seleccionado, de acuerdo a la realidad de cada municipio respecto del manejo de los residuos. Algunos lineamientos recomendables para la clasificación de los usuarios del servicio podría establecerse en función de la cantidad y calidad de los residuos sólidos urbanos desechados por los particulares.

Calidad de los RSU generados. La norma podría reglamentar las siguientes alternativas relacionadas con la calidad de los RSU, a saber: los producidos por actividades y situaciones domiciliarias, comerciales, de servicios, sanitarias, de limpieza urbana, industriales (no peligrosos), obras en edificios (material de construcción y demolición), abandono de animales muertos, restos de poda - parques y jardines -, entre otros.

De acuerdo a la clasificación; se normará sobre el manipuleo, preparación, almacenamiento “in situ” y ubicación de estos para su recolección; asimismo la norma debería especificar que tipo de residuo manejará el municipio y cuáles tercerizará.

Cantidad de RSU generados. En la norma se deberían establecer las cantidades de RSU generados a los efectos de determinar la clasificación de los generadores, a modo de ejemplo se podría establecer: en el caso de residuos domiciliarios 70 kg/día por generador; en el supuesto de establecimientos comerciales e industriales (no peligrosos), podría aumentarse este límite, en el caso de generarse cantidades mayores se consideraría gran generador y se pagarían tasas diferentes. En el supuesto de residuos provenientes de demoliciones, en el texto de la norma se podría considerar la cantidad de 500 kg/día y líneas blancas y otros de gran volumen (se establecería un sistema de recolección y disposición especial dentro de la tarifa, a mayor peso se realizaría con otro servicio y otras tarifas). En cuanto a restos de poda de parques y jardines, se deberían establecer la prestación de servicios especiales y dentro de la tarifa.

- La norma debe regular cada una de las etapas que componen la gestión integral de residuos sólidos urbanos, a continuación se determinan los lineamientos a considerar en la normativa complementaria, a saber:

6.2.1. Generación de RSU: la norma debería regular los siguientes aspectos:

- La norma debería promover la reducción de la generación de basura y la utilización de productos más duraderos o reutilizables; la separación y el reciclaje de productos susceptibles de serlo; la separación y el compostaje y/o biodigestión de residuos orgánicos; como así también la promoción de medidas tendientes al reemplazo gradual de envases descartables por retornables y la separación de los embalajes y envases para ser recolectados por separado a cuenta y cargo de las empresas que los utilizan.
- *Separación en origen.* La norma debería establecer las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos dentro de la unidad generadora. Asimismo, debería prever la separación en origen de los materiales rehusables (tales como papeles y cartones, plásticos varios, vidrios, metales, productos de poda, material orgánico, entre otros), de manera de mantener las condiciones de calidad del material recuperado.

Una alternativa recomendable, sería que en la norma se regule, de acuerdo a la idiosincrasia de cada municipio, que en toda la ciudad o en sectores o zonas determinados se presenten por separado o se depositen en recipientes especiales aquellos residuos susceptibles de distintos aprovechamientos.

- *Generación de residuos industriales no peligrosos.* La norma debería regular lo relacionado con la generación de residuos industriales no peligrosos, asimilables a residuos domiciliarios.
- *RSU provenientes de la limpieza de la vía pública y espacios libres.* La norma deberá regular los residuos resultantes de la limpieza de la vía pública (calles, avenidas, peatonales, etc.), barrido y riego de calles de tierra, y los generados por la limpieza de espacios libres (plazas, parques, etc.).

En tal sentido, y de acuerdo a la organización de la prestación del servicio en cada municipio, la reglamentación debería contener disposiciones acerca de la frecuencia (especificación de días y horarios), y formas de acondicionamiento, tratamiento y disposición final de los residuos provenientes de la limpieza de la vía pública y espacios libres.

Asimismo, la norma, en armonización con las normas de tránsito y seguridad vial que rijan en el municipio, debería establecer las condiciones de estacionamiento de vehículos, de tal manera de no obstaculizar el barrido y la limpieza de alcantarillados y sumideros existentes, como así también otras restricciones que puedan facilitar la ejecución del servicio de limpieza de calles.

Por otra parte, la norma debería contener especificaciones técnicas relativos a los distintos sistemas de barrido de la vía pública, tales como métodos de barrido mecánico, o bien el barrido manual. El primero de ellos, comprende desde barredoras-aspiradoras hasta lavadoras de calle mecánicas, estos equipos son recomendables en los siguientes casos:

- Vías rápidas como viaductos y similares.
- Vías pavimentadas y de fácil acceso.
- Alto costo de la mano de obra que justifique el uso de equipamiento mecánico.
- Disponibilidad de repuestos y accesorios, y personal calificado en la localidad.
- Capacidad logística y económica del operador para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de barrido mecánico, así como la constante renovación y mantenimiento de las escobas.

Por su lado, el barrido manual emplea equipo más sencillo y de relativamente menor costo. Los barrenderos trabajan individualmente o en pequeñas cuadrillas dependiendo de la cantidad de residuos a barrer, los pactos establecidos entre obreros y la institución, las condiciones de seguridad urbana, y las que imponen los sindicatos.

El planeamiento del sistema de barrido requiere de una adecuada definición de las zonas, horarios y frecuencias de barrido, así como del debido equipamiento de los barrenderos.

Es de suma importancia que las personas encargadas del barrido empleen los equipos de protección y seguridad laboral, tales como: gorra, uniforme de alta visibilidad, guantes, botas o calzado cómodo, mascarilla sobre todo en zonas de gran congestión vehicular.

- *RSU resultantes de la limpieza de veredas.* La norma debería establecer las condiciones, frecuencia (especificación de días y horarios) en que los responsables frentistas deben proceder a la limpieza de aceras, limpieza y cuidado de cancheros existentes en las veredas. En igual sentido, la norma deberá regular las condiciones

de limpieza de aceras pertenecientes a establecimientos comerciales, reglamentando los horarios de barrido, depósito de residuos, entre otros aspectos.

- *RSU generados por la limpieza de fachadas.* La regulación debería contener disposiciones relacionadas con los residuos provenientes de la limpieza de vidrieras, puertas, marquesinas, toldos o cortinas de establecimientos comerciales y/o inmuebles destinados a vivienda, como así también respecto de la limpieza de patios, balcones y terrazas, con el objeto de evitar el arrojo intencional o accidental de los mismos a la vía pública, ocasionando daños o molestias a transeúntes o vehículos.
- *RSU provenientes de cualquier edificio* (vivienda unifamiliar o multifamiliar, comercio, industrias, u otros). La norma debería contemplar requisitos tales como los siguientes: que los RSU sean almacenados en recintos especiales destinados a tal función, que cumplan con las normas de higiene y seguridad, y cuyas dimensiones sean tales que la basura pueda ser almacenada por el tiempo que transcurra entre dos (2) recogidas.
- *RSU provenientes de urbanizaciones.* La norma que regule la gestión de los residuos generados en urbanizaciones tales como barrios cerrados, clubes de campo, debería establecer la existencia de un área con capacidad y dimensiones adecuadas para el acopio de los mismos hasta el momento de su recolección. Asimismo, la norma debería regular las condiciones y requisitos que debe cumplir dicho sector a fin de evitar la generación de vectores de enfermedades, molestias o cualquier factor que perturbe a los habitantes de las urbanizaciones señaladas.
- *RSU generados durante operaciones de carga y descarga de productos* destinados a establecimientos comerciales, hipermercados. En la norma se debería establecer la frecuencia con que se debe realizar la limpieza del área en que se efectuaran dichas operaciones, como así también los espacios ocupados por los vehículos.
- *RSU generados en obras de construcción y/o demolición de edificios.* La norma debería contener disposiciones sobre condiciones de acopio de sobrantes y escombros, días, plazos en los que deben ser retirados y requisitos que deben cumplirse durante la carga y transporte de los mismos, con el objeto de no perturbar la circulación de peatones y vehículos. La norma debería obligar al generador a petitionar al Municipio la colocación de contenedores o volquetes destinados al depósito de escombros procedentes de las obras cuando superen determinada cantidad.
- *RSU provenientes de obras que se realicen en la vía pública.* La norma debería contener disposiciones sobre condiciones de acopio de sobrantes y escombros, días, plazos en los que deben ser retirados y requisitos que deben cumplirse durante la carga y transporte de los mismos, con el objeto de no perturbar la circulación de peatones y vehículos. La norma debería obligar al generador a petitionar al Municipio la colocación de contenedores o volquetes destinados al depósito de escombros procedentes de las obras cuando superen determinada cantidad.
- *Restos de poda.* La norma debería establecer la forma de acopio de los restos de poda provenientes de la limpieza de parques y jardines, plazos para proceder a su retiro, como así también determinar las modalidades y días en que deben realizarse

dichas actividades a fin de evitar perturbar la circulación de peatones y vehículos. La norma debería obligar al generador a petitionar al municipio la colocación de contenedores o volquetes destinados al depósito de restos de poda cuando superen determinado volumen y/o cantidad.

- *RSU generados por la limpieza de terrenos baldíos.* La norma debería establecer las condiciones de limpieza en que se deberían encontrar los terrenos baldíos. Asimismo, debería regular el procedimiento a seguir por la autoridad de aplicación en caso de incumplimiento por parte de los propietarios, reembolso de gastos por las tareas de saneamiento realizadas, y régimen de sanciones aplicable a los infractores.
- *RSU resultantes de la limpieza o saneamiento de Inmuebles abandonados.* La norma deberá establecer disposiciones relativas al mantenimiento de inmuebles no habitados o abandonados que sean susceptibles de convertirse en focos de contaminación o generación de vectores que pongan en riesgo la salud humana o afecten el medio ambiente. La norma, deberá regular el procedimiento a seguir por la autoridad de aplicación en caso de incumplimiento por parte de los propietarios, reembolso de gastos por las tareas de saneamiento realizadas, y régimen de sanciones aplicable a los infractores.
- *Vehículos abandonados.* En la norma se debería regular las condiciones y requisitos aplicables a vehículos o restos de vehículos abandonados, que impacten en el paisaje y se conviertan con el transcurso del tiempo en focos de contaminación del medio ambiente, o bien de generación de vectores que afecten la salud de la población.
- *RSU generados por animales domésticos.* La norma debería regular la responsabilidad de los propietarios o quienes conduzcan animales domésticos por la vía pública o espacios libres, de proceder a la limpieza inmediata de las deposiciones realizadas por ellos en la vía pública (veredas, calles, zonas destinadas a la circulación peatonal y vehicular o de paseo).
- *Campañas de concientización.* Alcance, tiempo y forma en que la autoridad de aplicación, o bien la empresa a cargo de la prestación del servicio (sea pública o privada) debe implementar campañas de concientización de la población en atención a su responsabilidad en la gestión de residuos domiciliarios, a través de programas de educación formal e informal para usuarios del servicio y la población en general, planes de difusión y concientización a través de los distintos medios de comunicación e información.
- *Mecanismos de información.* Alcance, tiempo y forma de los procedimientos de información y comunicación respecto de la prestación del servicio a los usuarios a implementar por la autoridad de aplicación - o bien la empresa a cargo de la prestación del servicio (sea pública o privada) -, como así también de los procedimientos a seguir por los usuarios para efectuar reclamos, observaciones, o recomendaciones a la empresa.
- *Registro de Información sobre RSU.* La norma debería establecer mecanismos efectivos para el registro a nivel provincial de información relacionada con la cantidad y calidad de RSU generados en cada Municipio, discriminando los residuos sometidos a

operaciones de reciclaje, reutilización, rehusó, recompra, y rechazos. Sería conveniente también que la norma estableciera procedimientos administrativos para que dicha información sea elevada por la autoridad municipal que fiscaliza la prestación del servicio, al organismo provincial de aplicación, para finalmente los datos contenidos en dichos registros sean elevados a la autoridad nacional.

6.2.1.1. Disposición Inicial de RSU

Aspectos que debería regular la normativa complementaria que se dicte en la materia:

- La norma debería establecer las condiciones y requisitos en que debe ser efectuada la disposición inicial de RSU, sea general - sin clasificación y separación de residuos -, o selectiva - con clasificación y separación de residuos a cargo del generador.
- En la norma se deberían determinar las condiciones de los recipientes destinados a contener los RSU.
- Se deberían colocar cestos y/o papeleras en la vía pública en los que deberían ser arrojados residuos de pequeña entidad de los que deseen desprenderse los transeúntes de calles, plazas, jardines y otros espacios libres.
- Con el objeto de evitar que animales sueltos desparramen la basura depositada en la vía pública, en la norma se deberían especificar las condiciones que deben cumplir los cestos y/o papeleras destinados al depósito de los recipientes que contengan los RSU, tales como forma, profundidad, tamaño, altura, ubicación en relación con la unidad generadora de los mismos.
- Debería regularse el procedimiento administrativo sobre petición de contenedores por parte de los generadores de RSU que por su cantidad y volumen no pueden ser dispuestos en cestos destinados a residuos domiciliarios comunes, tal es el caso de materiales, escombros provenientes de obras en construcción, restos de poda, RSU provenientes de establecimientos institucionales, comerciales, obras en la vía pública, entre otros.

Asimismo, se deberían regular los requisitos de seguridad, y de diseño de los contenedores que permitan mantenerlos cubiertos a fin de evitar que otras personas arrojen basura en su interior, y por otra parte lograr que los materiales depositados, no rebasen el plano delimitado por las aristas superiores de los contenedores.

En la norma se deberían determinar, de acuerdo con lo establecido con el Código de Edificación del Municipio, los requisitos de diseño, dimensiones y condiciones constructivas de los locales destinados a funcionar como depósitos de RSU, o bien áreas donde se instalen compactadores de RSU, generados en edificios y/o urbanizaciones destinadas a vivienda, como así también en mercados, establecimientos comerciales, entre otras construcciones que requieran condiciones de construcción que faciliten la disposición inicial de RSU para su posterior recolección.

6.2.1.2. Recolección de RSU

La norma debería regular la alternativa más conveniente para la realización de las operaciones de recolección de RSU - sean las unidades generadoras: viviendas, de uso comercial, industrial o institucional -, entre las que cabe mencionar las siguientes: puerta a puerta, en cordón de vereda, en contenedores, general / diferencial.

- La norma debería regular los horarios en que se debe efectuar la recolección, especificar si se trata de horarios nocturnos, vespertinos, matutinos o a pedido, como así también la antelación con que los usuarios del servicio deben depositar los residuos para su recolección. En el articulado de la norma se debería determinar la frecuencia, por ejemplo: seis días por semana a excepción del día sábado, o bien se puede disponer que la recolección se realice tres días por semana – lunes, miércoles y viernes; martes, jueves y sábado -.
- De establecerse sectorialmente frecuencias adicionales en la recolección de residuos, se debería considerar en la regulación los tonelajes y volúmenes de generación, caracterización de residuos, densidad de las poblaciones, movimiento vehicular y peatonal y demás factores implicados en la gestión de recolección de residuos.
- En la normativa se debería prever la alternativa de la recolección diferenciada, en la que se establezcan lineamientos sobre los siguientes aspectos: discriminación por tipo de residuo - en función de su tratamiento y valoración posterior -, provisión por parte del municipio de recipientes y contenedores apropiados para la recolección diferenciada, frecuencia de recolección de RSU secos diferente a la recolección de RSU húmedos, requisitos que deben cumplir las empresas prestadoras del servicio de recolección diferenciada – cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad del personal dedicado a dichas tareas, condiciones de limpieza y seguridad de equipos y vehículos, inscripción en registros que lleve el municipio de las empresas a los efectos de su mejor fiscalización, entre otros aspectos -.
- Respecto del personal destinado a las tareas de recolección, la norma debería establecer la obligación de cumplir las disposiciones de ley de contrato de trabajo, las normas de seguridad e higiene laboral, y contar los operarios con seguro otorgado por ART conforme lo exige la ley de riesgos del trabajo.
- En cuanto a los vehículos destinados a la recolección de RSU, deberían dictarse reglamentaciones, en concordancia con las normas de tránsito y seguridad vial, en las cuales se exija que se encuentren acondicionados para cumplir su función, y contar con la debida habilitación mediante la verificación técnica correspondiente.
- En las disposiciones normativas complementarias se deberían regular, en los casos que la prestación del servicio de recolección se encuentre en manos del municipio o del sector privado, los mecanismos de información al usuario y población en general respecto de los siguientes temas: horario de recolección, periodicidad, sanciones en caso de arrojar basura en la vía pública, o fuera de los horarios y días establecidos para la recolección.

- La norma debería establecer los procedimientos a seguir ante la Autoridad de Aplicación para la petición de contenedores por parte de los generadores de escombros, restos de poda, o bien RSU que por su cantidad y peso superen la capacidad de los cestos destinados a la disposición inicial de residuos domiciliarios.

La norma debería determinar las especificaciones técnicas que deben cumplir los contenedores en cuanto a formas, los límites en la capacidad y altura de la carga del volquete, y residuos que podrán ser cargados.

La norma debería establecer las condiciones, como así también el plazo en que deben ser retirados de la vía pública los contenedores de RSU, una vez que hayan cumplido la función por la cual fueron requeridos por los generadores. Y en tal caso, también se debería prever en la norma, las condiciones de su transporte, circulación por la ciudad, rutas, ingreso al sitio de disposición final.

6.2.1.3. Transporte de RSU:

- En cuanto a los vehículos destinados al transporte de RSU, deberían dictarse reglamentaciones, en concordancia con las normas de tránsito y seguridad vial, en las cuales se exija que se encuentren acondicionados para cumplir su función, y contar con la debida habilitación y la verificación técnica correspondiente.
- En la norma complementaria a dictarse deberían considerarse la regulación de medidas de seguridad aplicables al transporte de RSU - tales como tierra, escombros, materiales, áridos, hormigón, papeles o cualquier otra materia similar – tendientes a impedir vuelcos, caídas o derrames, por su mala adecuación.
- Deberían establecerse los requisitos que deben cumplir los conductores de los vehículos que transporten RSU, de acuerdo con las normas nacionales vigentes en materia de tránsito y seguridad vial, contrato de trabajo, seguridad e higiene laboral, y riesgos del trabajo.
- En la norma se debería especificar la documentación que deben contar los vehículos destinados al transporte de RSU, tales como hoja de ruta y planos de acción para los casos de emergencia, entre otros.
- La norma debería establecer los procedimientos administrativos y documentación requerida, relacionados con la determinación itinerarios, sistemas de contralor y otros lineamientos que aseguren la verificación del cumplimiento de los recorridos ordenados desde los lugares de generación hacia plantas de transferencia, sitios de acopio, plantas de tratamiento y centros de disposición final.
- La norma debería contener disposiciones relacionadas con el transporte interjurisdiccional de RSU.

6.2.1.4. Estaciones de Transferencia de RSU

- Para este tipo de instalaciones, la normativa a dictarse debe contemplar su necesidad operativa, en tal sentido se debería regular su emplazamiento en lugares cercanos al origen de los RSU, en zonas que de acuerdo a las disposiciones del Código de Planeamiento Urbano del Municipio sea factible su emplazamiento.
- La norma debe contener especificaciones que favorezcan su instalación considerando que la transferencia se torna más económicamente rentable cuanto mayor es la distancia entre el municipio generador de RSU y el centro de disposición final, se trata de un sistema recomendable para aquellos municipios alejados.
- En la norma se deberían regular el sometimiento de las estaciones de transferencia al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para su habitación – de acuerdo a lo exigido por las leyes de presupuestos mínimos: Ley Nº 25.675 y Ley Nº 25.916, previa audiencia pública que garantice el derecho a la participación ciudadana y a la información pública -.
- La normativa complementaria debería regular especificaciones técnicas y medidas de seguridad para este tipo de instalaciones.
- Respecto de los operarios que realicen tareas en las estaciones de transferencia, se debería exigir el cumplimiento de las normas de contrato de trabajo, seguridad e higiene laboral, y aquellas aplicables en materia de riesgos del trabajo.

6.2.1.5. Tratamiento de RSU

Considerando que las operaciones comprendidas en esta etapa de la gestión de RSU, se realizan en prosecución del aprovechamiento de los mismos, se deberían estudiar los siguientes aspectos:

- A los efectos de redactar la norma se debería después de un estudio técnico-económico optar por una, alguna o la combinación de las modalidades de tratamiento científicamente conocidas, y, una vez seleccionada, regular la alternativa más conveniente para el tratamiento de RSU. Entre ellas cabe mencionar las siguientes: separación y concentración selectiva de materiales incluidos en los residuos por cualquiera de los métodos o técnicas usuales; transformación por métodos químicos (hidrogenación, oxidación húmeda o hidrólisis) o bioquímicos (compostaje, digestión anaerobia y degradación biológica) de determinados productos de los residuos en otros aprovechables; y, recuperación de materiales incluidos en los residuos para volverlos a utilizar. Asimismo, la normativa complementaria debería contener disposiciones relativas a sistemas de valorización de RSU.
- En la norma se debería exigir el requisito de haber obtenido la Declaración de Impacto Ambiental, con carácter previo a su instalación – de acuerdo a lo exigido por las leyes de presupuestos mínimos: Ley Nº 25.675 y Ley Nº 25.916, previa audiencia pública que garantice el derecho a la participación ciudadana y a la información pública.
- La norma respecto de los operarios de una planta de tratamiento de RSU, debería exigir el cumplimiento de la ley de contrato de trabajo, las disposiciones vigentes en

materia de seguridad e higiene laboral, como así también lo regulado por la ley de riesgos del trabajo.

- La norma debería contener especificaciones técnicas relativas a la clasificación y subclasificación del material recuperable, y las operaciones de prensa y acopio, condiciones que deben cumplir las instalaciones donde deben realizarse dichas operaciones, como así también lo atinente al manejo de la parte del rechazo, para su posterior traslado a rellenos sanitarios.

6.2.1.6. Centros de Disposición Final

- La norma debería regular el sometimiento al procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental para su instalación – de acuerdo a lo exigido por las leyes de presupuestos mínimos: Ley N° 25.675 y Ley N° 25.916, previa audiencia pública que garantice el derecho a la participación ciudadana y a la información pública.

Asimismo, la norma debería establecer los lineamientos técnicos relativos a las condiciones y requisitos de construcción, funcionamiento, cierre y saneamiento del predio donde se instalen, periodicidad y tipo de controles, monitoreos, entre otros aspectos a reglamentar.

- En la normativa complementaria se debería prever la construcción de rellenos sanitarios en los que se concentren los RSU generados por dos o más municipios, en tal sentido se deberían establecer los procedimientos administrativos conducentes a la organización de la prestación de esta etapa del servicio, previa celebración del convenio bilateral o multilateral correspondiente entre los municipios interesados, de manera de alcanzar una unidad económica aceptable.

En general, en la normativa a dictarse deberían fijarse pautas relacionadas con los siguientes aspectos:

1. Previo a la instalación del relleno sanitario se deberá someter el proyecto al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
2. Localización. El área seleccionada debe permitir un período de vida útil, y cumplir con la técnica y principios de ingeniería.
3. El predio seleccionado no debe presentar controversias legales, incompatibilidades de uso del suelo según los planes de desarrollo urbano y rechazo de la población.
4. Construcción del relleno sanitario. La norma debe exigir un proyecto y deberá establecer las especificaciones técnicas aplicables a este tipo de obras. Los procedimientos de contratación se fijarán en concordancia con la Reglamentación de Contrataciones y la Ley de Obras Públicas vigentes a nivel provincial.
5. La operación y mantenimiento del relleno sanitario debe respetar lo proyectado y reglamentar mediante especificaciones técnicas que exijan una debida continuidad

en la fiscalización de su adecuado funcionamiento, a fin de evitar que se convierta en un basural a cielo abierto por falta de una supervisión y monitoreo de las actividades, débil capacitación del personal, e inadecuada planificación financiera. La operación del relleno sanitario puede ser derivada a un operador privado acorde lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Provincial.

6. La norma a dictarse debe prever los lineamientos técnicos destinados a regular el proyecto de cierre y saneamiento de los rellenos sanitarios, como así también su cumplimiento y responsabilidad del titular del predio por un período mínimo de veinte años posteriores a la realización de dichas operaciones.
- La norma respecto de los operarios que realicen tareas durante la construcción, funcionamiento, cierre y saneamiento de los predios destinados a la disposición final de RSU o rellenos sanitarios, debería exigir el cumplimiento de la ley de contrato de trabajo, las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene laboral, como así también lo regulado por la ley de riesgos del trabajo.
- En la normativa complementaria se debería regular los requisitos legales y técnicos a cumplir para la erradicación y posterior clausura de basurales a cielo abierto existentes en territorio provincial.

La norma debe reglamentar este tipo de operaciones considerando que, en general, la clausura de estos sitios de disposición de RSU es una tarea que se debe realizar cuando no es posible optimizarlos. Esto normalmente ocurre en los casos en que han funcionado por varios años, las zonas de expansión urbana se encuentran próximas, y estos sitios se constituyen en fuente de riesgo para la salud y el ambiente.

Asimismo, la clausura de basurales a cielo abierto suele incluir un enterramiento y compactación planificado de los residuos sólidos, el monitoreo de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y suelos, y finalmente la implementación de algún proyecto de uso del lugar.

Por otro lado la optimización o recuperación de basurales a cielo abierto, comprende reorganizar el trabajo en el mismo sitio siguiendo los criterios básicos mencionados para el relleno sanitario. Además, se deben implementar los equipos y dispositivos propios de un relleno sanitario y erradicar toda actividad que pueda atentar contra la correcta operación de un basurero a cielo abierto.

6.2.1.7. Contrataciones con el Sector Privado

La elección de los prestadores de los servicios públicos para cualquiera de las etapas de la gestión que el Municipio decida otorgar en concesión, debe realizarse por licitación pública de acuerdo a lo previsto por el artículo 42 de la Constitución de la Provincia de La Pampa, y el Decreto Acuerdo N° 470/73 aplicable en general en materia de contrataciones, sus normas modificatorias y complementarias.

En su articulado, la norma debería establecer que los prestadores deben garantizar la implementación y cumplimiento de las medidas de seguridad y protección personal en el

trabajo previstas en las normas nacionales y provinciales aplicables, como así también todas aquéllas que ameriten la naturaleza y los riesgos de las tareas desempeñadas en las distintas etapas de la prestación del servicio de higiene urbana.

Asimismo, la normativa complementaria debe contemplar como causal de rescisión del contrato de concesión del servicio, el incumplimiento de los presupuestos mínimos exigidos por la Ley N° 25.916, de las disposiciones complementarias provinciales y de las causales de rescisión que establezcan los contratos de concesión que se celebren.

El articulado de la norma debería prever la implementación de sistemas de registro de documentación de datos relativos a la gestión de los RSU por parte de los prestadores del servicio, el alcance y contenido de la obligación de presentar dicha información por parte de los concesionarios, los plazos y modos en que debe ser elevada a la Autoridad de Aplicación, los medios a través de los cuales estará a disposición del público, las sanciones en caso de incumplimiento.

6.2.1.8. Tasas

La norma debería establecer la tasa a abonar por los generadores de residuos, sean estos domiciliarios o institucionales, a fin de cubrir la totalidad de los costos de la prestación del servicio, en principio *“se fijarán en forma que cubran el costo total de los mismos más un adicional de hasta el treinta por ciento (30%) de ese costo”* (cfr. art. 109, L. 1597).

A su vez la norma debe contemplar que la tasa sea establecida por medio de una ordenanza, luego de realizados los estudios económicos que requieran su determinación, y que tenga en cuenta la cantidad de población, de residuos generados, y los objetivos de minimización de generación de residuos, entre otras variables. La norma debería prever los mecanismos aptos para su cobrabilidad, como así también las sanciones aplicables en caso de incumplimiento por mora.

6.2.1.9. Competencia de la Autoridad de Aplicación

En la normativa complementaria, deberían establecerse las atribuciones y deberes de la Autoridad de Aplicación, entre los que cabe mencionar los siguientes lineamientos:

- Establecer los objetivos y políticas en materia de gestión de RSU.
- Formular los planes y programas referidos a la gestión integral de RSU.
- Promover el cambio cultural instando a los generadores a modificar su accionar en la materia, a través de la formulación de programas públicos permanentes de educación ambiental, como así también de información sobre el sector de higiene urbana, formales e informales.
- Evaluar en forma periódica el cumplimiento de los objetivos, políticas y propuestas para la gestión de RSU.

- Elaborar información y registros del tipo, volumen y cantidad de RSU recolectados como así también la cantidad total y composición de los residuos que hayan sido reutilizados, reciclados, valorizados y los derivados a los sitios de disposición final.
- Crear un registro de empresas prestadoras del servicio de recolección, tratamiento, acopio y disposición final de RSU.
- Efectuar la fiscalización de la prestación del servicio y control ambiental de la gestión de RSU, en prosecución del desarrollo sustentable, crear un cuerpo de inspectores que supervisen la actividad del sector dentro del ejido urbano, o bien contratar una empresa fiscalizadora del servicio.
- Establecer las metas anuales de reducción de residuos a ser depositados en los centros de disposición final.
- Promover en los establecimientos educacionales cursos de adiestramiento y especialización a diferentes niveles (primario, secundario, terciarios).

6.2.1.10. Actuaciones no permitidas

En la norma complementaria se deberían describir con precisión las conductas prohibidas y pasibles de sanción, en prosecución de una correcta gestión de los residuos sólidos urbanos, a fin de evitar riesgos para la salud de la población y la contaminación del medio ambiente, como por ejemplo las que a continuación se enuncian:

- Arrojar indiscriminadamente basura en la vía pública, espacios libres, terrenos baldíos, edificios abandonados y lugares del ejido urbano como así también en zona rural, y zona de caminos.
- La generación de basurales a cielo abierto clandestinos.
- El abandono de cadáveres de animales de toda especie, sobre cualquier clase de terrenos, y su inhumación en terrenos de propiedad pública.
- La recolección, transporte y aprovechamiento de los RSU, sin la previa concesión o autorización municipal.
- La realización en la vía pública de actividades u operaciones que afecten la higiene y el aseo urbano, tales como: limpieza de vehículos - como cambiar a los mismos el aceite y otros líquidos -, manipular o seleccionar los desechos o RSU produciendo su dispersión, dificultando la recolección o alternado sus envases, La quema o incineración de residuos sólidos urbanos, sin el debido permiso y control de la autoridad de aplicación, arrojar el producto de la limpieza de viviendas, edificios, desde ventanas, balcones o terrazas; arrojar folletos de propaganda.
- La contratación de servicios de tratamiento de RSU, que tengan por objeto la combustión en otras jurisdicciones, sin que exista convenio previo intermunicipal que regule el control sobre dichas operaciones.

- Depositar para la recolección RSU que presenten características que los hagan tóxicos o peligrosos.
- Depositar para la recolección en cestos de basura domiciliaria, o abandonar en la vía pública, escombros o materiales de obras de construcción.

6.2.1.11. Régimen Sancionatorio.

La normativa complementaria debe establecer el régimen de contravenciones y sanciones aplicables a las conductas que infrinjan las disposiciones de la ley de RSU en función de la gravedad de la infracción, según lo dispuesto por los Código de Faltas o las ordenanzas dictadas por el Concejo Deliberante de los municipios, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 35º de la Ley Orgánica Nº 1597, tales como: multas, las que se determinarán anualmente en la ordenanza tarifaria; clausuras, desocupaciones y traslados de establecimientos comerciales e industriales y demolición de edificios; decomisos.

6.2.1.12. Opciones para la Organización Institucional en el MIRS

En este apartado se proponen distintas opciones institucionales que podrán ser recomendadas respecto de la totalidad de las etapas de la gestión, o bien serán aconsejadas para cada fase de la gestión de RSU en particular, ya se trate de la recolección, transporte, instalación de estaciones de transferencia, plantas de almacenamiento, tratamiento o bien la construcción de rellenos sanitarios destinados a la disposición final de residuos que los municipios deseen ejecutar en forma mancomunada, en virtud de acuerdos intermunicipales celebrados y autorizados por los respectivos concejos deliberantes, en función de la voluntad asociativa y/o afinidad territorial.

Para la gestión mancomunada de RSU generados en las jurisdicciones de municipios parte de acuerdos bilaterales y multilaterales, se considera conveniente presentar las siguientes opciones de organización institucional:

1. La constitución de un comité interjurisdiccional afectado a velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por los municipios firmantes de los acuerdos intermunicipales, relacionados con la problemática de los residuos sólidos de la región.
2. La constitución de un consorcio público autorizado mediante Ley provincial, conformado por los municipios firmantes de los acuerdos intermunicipales, encargado de la gestión mancomunada de la disposición final de los residuos sólidos de la región.
3. La constitución de un Ente Regulador Provincial de Higiene Urbana, encargado de fiscalizar la prestación del servicio.
4. La constitución de una Sociedad del Estado, encargada de planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación de terceros, la gestión integral de RSU en su

totalidad o bien respecto de alguna o algunas de las etapas de acuerdo a las necesidades de los municipios parte en convenios bilaterales o multilaterales.

5. Constitución de una Sociedad Cooperativa en los términos de la Ley N° 20.337.

6.2.1.13. Constitución de un Comité Interjurisdiccional

Los municipios parte de los acuerdos bilaterales o multilaterales pueden constituir un Comité Interjurisdiccional para la gestión integral de RSU de la región; dicho organismo tendrá como objetivo la concertación política del sistema de gestión y su posterior implementación.

Las decisiones adoptadas por el Comité deben ser aprobadas por los concejos deliberantes de los municipios parte, con carácter previo a su ejecución.

El Comité podrá delegar en una o varias personas jurídicas de derecho público o privado, seleccionadas a través de una licitación pública e idóneas para los cometidos que se les encomendarán, la implementación de las políticas concertadas en el Comité y aprobadas, previa realización de una audiencia pública, por los concejos deliberantes de los municipios parte.

Las atribuciones del Comité serían las siguientes:

- Concertar las políticas para la disposición final de los residuos sólidos urbanos de los municipios parte.
- Proponer a los concejos deliberantes de los municipios parte la aprobación por ordenanza de las políticas concertadas.
- Implementar dichas políticas a través de contrataciones que resulten necesarias para la realización de estudios, adquisición de predios y otros bienes, contratación de servicios y personal, operación de los sitios de disposición final, y en general, cualquier otra actividad que requiera la implementación mencionada.
- Efectuar controles de vectores, olores, gases, operativos de obra, y tomar medidas para reducir al máximo las molestias y riesgos procedentes del centro de disposición final, tales como la ocurrencia de incendios.
- Fijar los aportes que deberán realizar los municipios parte para la disposición final de los RSU, los cuales deberán cubrir la totalidad de sus costos, como así también establecer una compensación a favor del municipio en el cual se establezca la disposición final.
- Administrar los recursos de los municipios parte que le sean transferidos como aportes, previamente aprobados por los concejos deliberantes.
- Rendir cuentas a los concejos deliberantes sobre su gestión técnica y económica.
- Poner a disposición del público los resultados de su gestión.

Las autoridades que integrarían el Comité serían: un órgano plenario integrado por los intendentes de los municipios parte o quien los represente, y por representantes de la sociedad civil. Las decisiones del plenario se tomarían por mayoría absoluta de los miembros integrantes. El órgano ejecutivo estaría integrado por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario designado entre los miembros del órgano plenario. Su función sería ejecutar las políticas y mandatos decididos en el pleno.

El procedimiento para la solución de controversias entre las partes, a los efectos de recurrir a la vía judicial, se basaría en un proceso de consultas y negociaciones a fin de lograr su solución.

6.2.1.14. Constitución de un Consorcio Intermunicipal

El Consorcio es un instrumento que el ordenamiento jurídico ofrece a una pluralidad de sujetos para el desarrollo en común de cierta actividad, que consistiría en la realización de obras o en la prestación de terminados servicios a través de la asociación de los sujetos interesados en tales resultados. El Consorcio se situaría así en una posición de intermediación entre determinados sujetos y una cierta actividad en el sentido que la actividad, aunque propia de éstos, es ejercida por el primero.

Lo que singulariza al Consorcio es una técnica de mediación que permite a sus miembros organizarse y efectuar mancomunadamente actividades que redundan en beneficio de cada uno de ellos y que pueden ser mejor afrontadas interponiendo entre los intereses particulares y la actividad a su servicio un órgano común que asume por cuenta y a favor de los consorciados tareas más eficazmente cumplidas desde un centro de imputaciones colectivas.

El Consorcio pone a disposición de sus componentes un aparato instrumental que actuará en pro de sus intereses, pero que sólo acometerá aquellas actividades que se decida encomendarle, precisamente por ser susceptibles de mejor desempeño por vía asociativa.

El carácter instrumental del Consorcio implica la imputación al mismo sólo de los resultados de concretas actividades, las que determinaron su creación, mientras que las restantes se asignan directamente a los propios consorciados. Lo mismo puede decirse del régimen de bienes: el Consorcio sólo utilizará los precisos para el desempeño de sus funciones, los demás son de la libre disposición de sus componentes, no son aportados a la gestión colectiva. Únicamente el Consorcio asumirá patrimonio y titularidades en la medida y con el alcance necesario para garantizar el éxito de las funciones adjudicadas.

Se trata de una institución que actúa por sí aquéllos poderes que sean precisos para el cumplimiento de su misión y a él se le imputarán igualmente los resultados con ella directamente vinculados, los derechos y las obligaciones que en su consecuencia deban asignarse a su peculiar órbita jurídica.

Los caracteres expuestos del Consorcio, permiten distinguirlo de otras figuras asociativas.

- Se diferencia de la sociedad porque en él se identifican fin y objeto, mientras que para la sociedad pueden observarse por un lado su objeto propio y por otro el fin perseguido, que sería el lucro. En el Consorcio no aparece el ánimo de beneficio: el deseo de ganancia como fin propiamente consorcial, puede favorecer desde luego a los consorciados, pero el Consorcio en sí no pretende ni la obtención de rendimiento, ni la consecución de lucros mercantiles.

En el Consorcio existirá una preexistente comunidad de intereses objetivamente identificada que asigna a sus miembros una motivación especial para agruparse, a diferencia de lo que sucede en la sociedad, en la que no se requieren especiales predisposiciones de los socios.

En cuanto a la comunidad de bienes, la distinción se basa en que en la sociedad se aportan efectivamente patrimonios para la creación de un acervo común susceptible también de gestión colectiva. El Consorcio, por el contrario, no persigue la comunidad de titularidades; lo que pretende es realizar colectivamente sólo la gestión, no una comunidad de patrimonio en sí. Ello no obsta a que determinados elementos sean puestos a disposición del Consorcio, pero no en cuanto a la creación de una comunidad patrimonial, sino exclusivamente como medios al servicio de su gestión.

- Más complicado resulta diferenciar al Consorcio de las asociaciones civiles, la distinción podría señalarse en que en el Consorcio, a diferencia de la asociación, existiría una sustitución de las actividades de los sujetos en todo aquello que no sea materia específica del Consorcio. Pero en cualquier forma los Consorcios tienen en común con las asociaciones, el constituir una agrupación de esfuerzos para fines que aisladamente no podrían lograrse o no se podrían alcanzar con el nivel de eficacia deseada, aunque a diferencia de ellas, resultaría una absorción de competencias que a partir de la creación del Consorcio van a ser exclusivamente desempeñadas por él.

Los Consorcios se pueden clasificar en privados y de entes públicos; entre estos últimos se destacan los municipales.

Se trata de una asociación de municipios constituida legalmente, con plena personalidad jurídica, la cual surge como consecuencia del acuerdo de los municipios que lo integran. En esta opción institucional, los municipios parte de acuerdos intermunicipales conformarían un consorcio público de gestión intermunicipal de RSU como persona pública estatal.

El Estatuto del Consorcio debería contener como mínimo los siguientes extremos:

- Relación de entidades, instituciones u organismos consorciados.
- Fines perseguidos (deben ser específicos dada su naturaleza entidad instrumental).
- Régimen orgánico.
- Régimen de funcionamiento.
- Régimen financiero, presupuestario y contable.

- Duración.
- Procedimiento para la alteración, disolución y liquidación.
- Procedimiento para la modificación del Estatuto.

Siguiendo los lineamientos enunciados precedentemente las funciones y atribuciones del Consorcio establecidas en el Estatuto serían las siguientes:

- Proponer y aplicar una reglamentación uniforme del Sistema de Gestión de RSU generados en el territorio de los municipios integrados.
- Ejecutar, operar y mantener las obras de infraestructura proyectadas.
- Convenir con organismos públicos o privados.
- Administrar los recursos económicos.
- Estudiar y desarrollar la gestión integral del servicio.
 - . Determinar el flujo y prácticas racionales de gestión de RSU.
 - . Proponer y/o administrar si así lo determina cada uno de los municipios signatarios, sistemas comunes de recolección, inspecciones de calidad, selección de tecnologías, entre otros aspectos de la gestión.
 - . Releva las áreas geográficas comunes con el objeto de seleccionar aquellos sitios más aptos para la instalación de rellenos sanitarios, plantas de selección de material, estaciones de transferencia.
 - . Proponer y ejecutar programas que permitan una gradual recuperación de las zonas degradadas por la inadecuada disposición de residuos.
 - . Diseñar y ejecutar programas de concientización y difusión para promover la participación de la población en las actividades destinadas a optimizar la gestión de residuos.
 - . Desarrollar y coordinar la ejecución de un programa de capacitación para el personal técnico.

Serían autoridades del Consorcio:

- Consejo de Administración. La dirección y administración del Consorcio estaría a cargo de un Consejo de Administración constituido por los intendentes de los municipios. De entre sus miembros se designará un Presidente que tendrá la representación del Consorcio y ejercerá sus funciones por tres años.

Son funciones, atribuciones y responsabilidades del Consejo de Administración:

- Ejercer la dirección y administración de la entidad, estando facultado para realizar cuantos actos sean necesarios para el cumplimiento del objeto del Consorcio, excepto aquellos que estén expresamente reservados a la Asamblea.
- Ejecutar las decisiones de la Asamblea.
- Llevar toda la documentación, registros contables y libros necesarios para el control del movimiento de fondos del Consorcio.
- Confeccionar el balance general anual que será sometido a consideración de la Asamblea, y balances mensuales de comprobación.

La gestión técnica, administrativa y financiera del Consorcio estaría a cargo de un gerente general de operaciones designado por el Consejo de Administración, cuyas funciones serían las siguientes:

- Ejercer la dirección del personal a su cargo y la conducción de las actividades técnicas, administrativas y operativas del Consorcio.
- Desarrollar y proponer la organización y procedimientos del Consorcio, normativa y todo lo referente a la optimización del sistema de gestión de los RSU.
- Dirigir y supervisar la gestión de RSU.
- Elaborar el plan anual de actividades y de gastos y recursos que será sometido a consideración del Consejo de Administración.
- Autorizar pagos y concertar contratos dentro de las previsiones presupuestarias aprobadas.
- Efectuar operaciones de crédito, previamente aprobadas por el Consejo de Administración.
- Elaborar un informe técnico que elevará a consideración del Consejo de Administración.

Por último, el Consejo de Administración podría contar con la asistencia y asesoramiento de un órgano consultivo que estaría integrado por un representante por Concejo Deliberante de cada municipio integrante del Consorcio; un representante técnico del área a cargo de las competencias ambientales del Departamento Ejecutivo de cada municipio integrante del Consorcio; un representante de la autoridad de aplicación provincial en materia ambiental; representantes de organizaciones no gubernamentales.

- Asamblea. Es el órgano de gobierno del Consorcio. Está constituida por la totalidad de los intendentes de los municipios que lo integran; sesionaría una vez cada tres meses. Podrá ser convocada por el Presidente del Consejo de Administración o por decisión de sus miembros, conforme lo establezca el Estatuto. Tomará sus decisiones por mayoría absoluta de votos de sus integrantes.

Serían atribuciones y obligaciones de la Asamblea:

- Considerar la memoria y balance anual del Consorcio.
- Considerar los asuntos incluidos en el orden del día de cada convocatoria.
- Aprobar el presupuesto anual del Consorcio, contemplando la ejecución de los programas e inversiones necesarias para el cumplimiento del objeto del Consorcio.
- Asignar a los municipios integrantes las correspondientes cargas presupuestarias, de modo equitativo y teniendo en cuenta la cantidad de RSU a gestionarse por jurisdicción.
- Resolver sobre la forma, tiempo, modo y condiciones en que se desarrollarán las tareas que son objeto del Consorcio, pudiendo aprobar un reglamento interno al efecto.
- Elegir al Presidente y demás integrantes del Consejo de Administración.
- Proponer a los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas.
- Decidir sobre la adquisición de bienes.
- Decidir sobre la incorporación de otros municipios.
- Rendir cuentas, a través del Consejo de Administración, de la gestión del Consorcio a los concejos deliberantes de los municipios que lo integran.
- o Comisión Revisora de Cuentas, estaría integrada por un revisor de cuentas titular y un suplente, designados por el Consejo de Administración a propuesta de la Asamblea, quienes ejercerían el cargo por dos años. Serían sus funciones:
 - Inspeccionar los libros de tesorería, documentos, cuentas, comprobantes de ingresos y egresos, debiendo informar al Consejo de Administración.
 - Proponer reformas al sistema de contabilidad del Consorcio.
 - Emitir dictamen sobre la memoria anual elaborada por el Consejo de Administración.

6.2.1.15. Ente Regulador Provincial de Higiene Urbana

El objeto del Ente sería la fiscalización y asesoramiento de la gestión de residuos sólidos urbanos en los municipios y comisiones de fomento.

El Ente estaría dirigido y administrado por un directorio formado por un presidente y cuatro directores designados por el Poder Ejecutivo provincial.

La Dirección del Ente estaría a cargo de un Director General, el que sería nombrado y removido por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, quien establecería la dependencia orgánica del Ente.

Serían funciones del Ente:

- Aplicar y fiscalizar la ejecución de las normas legales y reglamentarias regulatorias del servicio, ejercitando el poder de policía del servicio de higiene urbana.
- Dictar los reglamentos necesarios para asegurar el cumplimiento del servicio y la calidad, eficiencia, salubridad, continuidad y seguridad de las prestaciones propias del mismo, con especial referencia a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales.
- Velar por el derecho de los usuarios a tratamientos equitativos, dignos, no discriminatorios y ajustados al ordenamiento y por la participación de los mismos en la prestación del servicio.
- Dictar los reglamentos de servicios a que deberán ajustarse los municipios y comisiones de fomento responsables directos del servicio, como así también las licenciatarias y concesionarias prestadoras.
- Dictar los reglamentos referidos a la expansión de los servicios a cargo de las licenciatarias y concesionarias.
- Dictar el reglamento del usuario que contendrá la enunciación de los derechos de éstos y las vías y procedimientos para su defensa.
- Aprobar los cuadros tarifarios y sus modificaciones, que percibirán las licenciatarias, previa publicación en el boletín oficial de la provincia y controlar el cumplimiento de tales cuadros tarifarios.
- Realizar auditorias y demás técnicas de control, para dar cumplimiento a las observancias de las pautas tarifarias.
- Organizar el régimen de audiencias públicas previsto en la ley reglamentaria.
- Dictar los reglamentos necesarios para su organización interna, debiendo preverse formas de actuación descentralizada territorialmente.
- Celebrar acuerdos judiciales o extrajudiciales y transacciones.
- Celebrar todos los actos necesarios o convenientes para el ejercicio de las potestades de las que se encuentra investida el Ente, a los fines del adecuado cumplimiento de sus funciones y la observancia de las leyes y reglamentos;
- El Ente regulará su gestión financiera, patrimonial y contable por los reglamentos que dicte su Directorio, los que serán aprobados por el Poder Ejecutivo.

- Celebrar acuerdos judiciales o extrajudiciales y transacciones.

6.2.1.16. Constitución de una Sociedad del Estado

Se presenta como opción la administración pública para estatal. La Sociedad del Estado estaría constituida con sujeción a la Ley N° 20.705, que define el marco jurídico de las sociedades del Estado, y las disposiciones de la Ley N° 19.550 que le fueren aplicables. Tendría funciones de carácter técnico-administrativas, encargada de planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación de terceros, la gestión integral de RSU en su totalidad o bien respecto de alguna o algunas de las etapas de acuerdo a las necesidades de los municipios parte en convenios bilaterales o multilaterales firmados a tal fin.

Estaría sometida un régimen jurídico con predominio casi absoluto del derecho privado en todo lo que se refiere a su organización, funcionamiento y actividades externas, sin perjuicio de ser también de aplicación en su respecto ciertas normas y principios de derecho público no incompatibles con las finalidades de su creación.

La Sociedad no podría ser ajena al requerimiento de un plan previo que justifique su creación. El plan debe contemplar la actividad proyectada y el objeto social por cumplir, el cual no podrá ser ajeno a la participación comunitaria, cuando dicho proyecto posea trascendencia geográfica o implique un plan de acciones de desarrollo regional.

Asimismo, no debe obviar la consideración del presupuesto para la concreción del programa, que incluya la suficiencia del patrimonio afectado y un caudal de recursos propios, provenientes de la actividad empresarial desarrollada, que le confieran autosubsistencia. La entidad debe ser un instrumento económico para una mejor administración, y no un instrumento político para promoción política, sectorial o personal.

Debe ejercer su competencia dentro del arco puro y exclusivo de la especialidad de su objeto, esto es para el cumplimiento de los fines que motivaron su creación (cfr. Enrique Sayagués Laso, "Tratado de Derecho Administrativo", T. I, p. 198).

La Sociedad tendría plena capacidad legal para actuar como persona jurídica de derecho privado, pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones cualesquiera sea su carácter legal, incluso de carácter financiero que hagan directa o indirectamente al cumplimiento del objeto de la Sociedad.

Asimismo, estaría capacitada para realizar por sí o mediante la contratación de terceros (empresas del sector privado sean internacionales y/o nacionales), las siguientes acciones:

- La recolección, el transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios.
- La recolección, el transporte y disposición final de los residuos industriales asimilables a los domiciliarios.
- Las tareas de Consultoría y Asesoramiento.

- Las tareas de Auditoría Interna de la gestión técnico-administrativa que desarrolle.
- La implementación de programas de reciclaje.
- Una política de protección, mantenimiento y creación de Áreas Verdes, incluyendo planes de forestación y suministro de especies arbóreas.
- Colaboración en la erradicación y saneamiento de basurales a cielo abierto.

La Sociedad estaría integrada por los siguientes órganos:

- La Asamblea constituida por la totalidad de los intendentes de los municipios parte del acuerdo intermunicipal, o por sus representantes; un representante de la Subsecretaría de Ecología, y un representante del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia. Las asambleas – ordinarias y extraordinarias - se celebrarían de acuerdo a lo establecido en los artículos 234 y 235 de la Ley Nº 19.550, serían convocadas por el Directorio o el Síndico con arreglo a lo dispuesto por el artículo 237, y sesionarían y resolverían de acuerdo con las disposiciones estatutarias y lo establecido por la Ley de Sociedades.

La Presidencia de las Asambleas podría recaer por decisión de éstas en el Presidente o Vicepresidente del Directorio, de acuerdo a lo que establezca el Estatuto Social.

- La administración y representación de la Sociedad estaría a cargo de un Directorio compuesto de tres (3) miembros, quienes durarían tres (3) ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. La Asamblea elegiría los componentes del Directorio, entre los intendentes de los municipios parte o quienes los representen, si así se estableciera en el estatuto de la Sociedad.

El Directorio se reuniría como mínimo una vez por mes, sin perjuicio de que el Presidente o quien lo reemplace lo convocara cuando lo estimase conveniente. Igualmente, el Presidente o quien lo reemplace debería citar a reunión de Directorio cuando así lo solicitare uno cualquiera de los Directores.

- Asimismo la Sociedad contaría con los siguientes cargos: un Gerente Técnico, un Gerente Administrativo y un Gerente Contable con asesoría legal, los que serían concursados en función de la idoneidad y experiencia en la materia.
- La fiscalización de la Sociedad sería ejercida por tres (3) Síndicos Titulares quienes ejercerían sus funciones durante tres (3) años en sus funciones. Serían elegidos por la Asamblea, la que también elegiría igual número de Síndicos Suplentes.

El personal administrativo de la Sociedad debería cumplir con los requisitos de idoneidad, eficiencia y experiencia en materia de RSU. Debería ser inferior al 10% del monto total dado que, considerando los antecedentes analizados, cabe advertir que en la gestión administrativa de los RSU se ha comprobado que a mayor cantidad de personal mayor sería el costo operativo, y en consecuencia aumentaría la burocracia en detrimento de la eficiencia en la misión que debiera cumplir la Sociedad.

6.2.1.17. Constitución de una Sociedad Cooperativa

La prestación del servicio de higiene urbana puede estar a cargo de Sociedades Cooperativas, como integrantes de la administración pública paraestatal, estaría constituida conforme los lineamientos de la Ley N° 20.337 *“son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios”*.

Las cooperativas prestan servicios a sus asociados y a no asociados en las condiciones que para este último caso establezca la autoridad de aplicación.

Se rigen por sus estatutos, la norma elaborada por los fundadores de la Sociedad Cooperativa, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, respetando la normativa vigente, regula la organización interna y el funcionamiento de cada cooperativa.

Las sociedades cooperativas deben estar integradas por los siguientes órganos:

- Asambleas se encuentran reguladas en el Capítulo VI de la Ley N° 20.337. Son ordinarias o extraordinarias. Las resoluciones se adoptan por simple mayoría de los asociados presentes en el momento de la votación, salvo que la normativa aplicable o el Estatuto requieran mayor número de votos.

Los consejeros, síndicos, gerentes y auditores tienen voz en las Asambleas, pero no pueden votar sobre la memoria, el balance y demás asuntos relacionados con su gestión, ni acerca de las resoluciones referentes a su responsabilidad.

Las decisiones de la Asamblea de acuerdo con la normativa aplicable, el estatuto, y el reglamento, son obligatorias para todos los asociados.

- La administración y representación de las Sociedades Cooperativas está a cargo del Consejo de Administración, a cargo de la dirección de las operaciones sociales, dentro de los límites que fije el Estatuto, con aplicación supletoria de las normas del mandato.

La representación de la Cooperativa corresponde al Presidente del Consejo de Administración.

Debe reunirse por lo menos una vez al mes, y cuando lo requiera cualquiera de sus miembros; en su defecto puede convocarlo cualquiera de los consejeros.

El Consejo de Administración debe ser elegido por la Asamblea; los consejeros deben ser asociados, y no deben ser menos de tres, cuya duración en el cargo no debe exceder de tres ejercicios. El Estatuto puede establecer la elección de consejeros suplentes para subsanar la falta de consejeros por cualquier causa.

- En el Estatuto o reglamento se puede instituir un comité ejecutivo o mesa directiva, integrado por consejeros para asegurar la continuidad de la gestión ordinaria.
- El Consejo de Administración puede designar gerentes, a quienes puede encomendar las funciones ejecutivas de la administración. Responden ante la Cooperativa y los

terceros por el desempeño de su cargo en la misma extensión y forma que los consejeros, su designación no excluye la responsabilidad de aquéllos.

- La fiscalización privada está a cargo de uno o más síndicos elegidos por la Asamblea entre los asociados y la duración del cargo no puede exceder de tres ejercicios. Cuando el Estatuto previera más de un síndico debe fijar un número impar. En tal caso, actuarán como cuerpo colegiado bajo la denominación de Comisión Fiscalizadora. El Estatuto debe regular su constitución y funcionamiento.

6.2.2. Evaluación de las diferentes alternativas de contratación en el manejo de residuos sólidos

A nivel municipal se están experimentando nuevas formas de cooperación público-privada en la gestión de los residuos sólidos, enriquecidas por los aportes de la experiencia del sector privado en la gestión empresarial, como asimismo la función que le corresponde al sector público en lo referente a la prestación del servicio y la fiscalización relativa a la protección del medio ambiente y la salud de la población.

De dicha combinación se presentan las diferentes alternativas relevadas sobre procedimientos más usuales para la gestión de los servicios de recolección, barrido y disposición de residuos sólidos urbanos, y son las que *a priori* se mencionan y en apartados subsiguientes serán analizadas, a saber:

- Operación municipal directa
- Empresa autónoma municipal
- Operación municipal contratada
- Operación privada (concesiones)
- Operación comunitaria y microempresas
- Tercerización
- Operación mixta

Algunas de estas modalidades se encuentran previstas en el Art. 42º de la Constitución de la Provincia de La Pampa que en materia de servicios públicos establece:

“Los servicios públicos pertenecen originariamente al estado provincial o municipal y se propenderá a que la explotación de los mismos sea efectuada preferentemente por el estado, municipios, entes autárquicos o autónomos, o cooperativas de usuarios en los que podrán intervenir las entidades públicas”.

“Se podrán otorgar concesiones a particulares y éstas se acordarán previa licitación de carácter público y con expresa reserva del derecho de reversión por la provincia o los

municipios en su caso, quienes ejercerán un contralor estricto respecto al cumplimiento de la concesión”.

“Una ley especial determinará las formas y condiciones de la explotación de los servicios públicos por la provincia, las municipalidades y concesionarios y demás entidades autorizadas a prestarlos”.

La modalidad de participación privada predominante en los municipios es la contratación de empresas para la recolección y transporte de residuos. Con relación a la disposición final, la contratación es creciente aunque en muchos casos persiste el manejo directo de los municipios, y en otros el sector privado cobra a la municipalidad el arrendamiento del equipo e incluso del predio destinado a la disposición final y su administración.

Cualquiera sea la alternativa de operación utilizada, la municipalidad tiene por Ley la responsabilidad del servicio de higiene urbana. Los procesos de descentralización para la gestión ambiental de los residuos sólidos urbanos, ponen de relieve el rol del municipio en cuanto al desarrollo de una política integral en la materia, que asegure un servicio eficiente y de calidad, así como arbitrar las medidas pertinentes para mitigar los impactos que genere su manejo en el ambiente.

6.2.2.1. Operación Municipal Directa

El manejo municipal directo involucra la utilización de personal y equipo de la municipalidad.

Las ventajas de esta alternativa incluyen el estado exonerado de impuestos de las operaciones públicas sin fines de lucro, que pueden resultar en la reducción de costos o servicio adicional, sumado a la centralización de las operaciones de compra de insumos para el servicio. Además, el control administrativo de los servicios por la municipalidad es a menudo necesario para la implementación de políticas de recolección que requieren el cumplimiento sistemático para ser efectivas – por ejemplo, recolección separada para recuperación de materiales de la basura -.

Por otro lado, la naturaleza monopólica de la operación puede resultar en una falta de estímulo hacia la eficiencia. Asimismo, en el establecimiento de políticas de trabajo diarias, la municipalidad puede verse enfrentada a presiones de sindicatos o gremios de trabajadores, lo que afecta su flexibilidad de gestión y libertad de acción.

En el área financiera, los servicios de higiene urbana, por la baja prioridad que se les da a los presupuestos municipales para este fin, se ven afectados en su eficiencia.

6.2.2.2. Empresa Autónoma Municipal

En algunos municipios, se ha optado por el establecimiento de empresas municipales autónomas de higiene urbana, o en su defecto, incluyen el servicio de limpieza urbana en las empresas de agua potable y alcantarillado para lograr mayor eficiencia del servicio.

Generalmente esta forma de operación de los servicios es complementaria a otras modalidades utilizadas. En Argentina, la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) está encargada de la transferencia y disposición final de los residuos sólidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios hasta el área de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Las empresas autónomas a su vez pueden operar directamente los servicios o pueden contratarlos a terceros, pero conservando para sí las tareas de fiscalización, control y planificación territorial y financiera.

6.2.2.3. Operación Municipal Contratada

Con miras a encontrar soluciones a sus limitaciones técnicas y financieras, los gobiernos municipales están integrando cada vez más al sector privado, ya sea como un contratista municipal o como un proveedor privado a través de una concesión.

La participación privada ha aportado un nuevo enfoque en la prestación de los servicios de manejo de residuos sólidos; mediante su contratación se logran mejoras en la calidad y cobertura de los mismos, con una rentabilidad económica y financiera aceptable, evitando así que los municipios lleven la carga del servicio sin las condiciones presupuestarias apropiadas.

La participación privada ha ido adquiriendo mayor relevancia en la provisión de los servicios de barrido de calles y recolección de residuos domiciliarios, y en menor escala en su disposición final. Generalmente la duración de los contratos fluctúa entre 5 a 7 años para la recolección y transporte, y 20 años para la disposición final, considerando la vida útil de las inversiones.

La competencia entre varias empresas bajo un sistema de licitación pública para realizar los servicios de higiene urbana se efectúa con el criterio de lograr mayor efectividad de los servicios. De esta manera, la municipalidad puede retener el control de las políticas de recolección y derivar las eficiencias de un sistema competitivo, motivado en la ganancia.

Esta modalidad precisa la regulación activa de la municipalidad, que debe establecer claramente las condiciones para mantener y mejorar la eficiencia y evitar costos excesivos de los servicios de higiene urbana, situación que no se cumple en la mayoría de los casos debido a la debilidad de las entidades municipales que son la contraparte de las empresas privadas.

Bajo esta modalidad el contratista posee el equipo, pero debe cumplir con los criterios de desempeño establecidos en el contrato. Particularmente, el sector privado tiene amplia participación en la prestación del servicio de residuos peligrosos.

Esta alternativa es el modelo más usual y menos costos de participación del sector privado en la prestación de servicios, con una gran opción de actividades del manejo de residuos sólidos que se pueden cubrir. Sin embargo, es necesario fortalecer este tipo de gestión, mediante indicadores y parámetros estandarizados que permitan facilitar la supervisión de los servicios y aplicar criterios de eficiencia.

La contratación de los servicios con la iniciativa privada no ha sido siempre exitosa, debido a la injerencia de los gobiernos municipales en las licitaciones, adjudicaciones y rescisiones de contratos, realizadas muchas veces en forma no transparente. Ello motiva una estricta regulación al respecto.

6.2.2.4. Operación Privada (Concesiones)

La concesión de los servicios involucra que la administración, la prestación y el cobro del servicio, y en algunos casos las inversiones nuevas, quedan a cargo del concesionario. Generalmente, las empresas privadas que tienen la concesión de los servicios de manejo de residuos sólidos proponen tarifas acordes con los costos del mismo para su adecuada operación y mantenimiento.

Las empresas tienen a su cargo el cálculo y cobro de la tarifa del servicio, con la aprobación del municipio. Las concesiones del sector privado deben ser siempre reguladas y supervisadas por parte de la municipalidad. Por consiguiente, la concesión del servicio necesita de la existencia de un marco legal y regulatorio claro, definido y permanente para asegurar el éxito de esta alternativa de contratación del servicio.

El contrato de concesión debe ser lo suficientemente preciso para que esté acorde con el marco regulatorio, en el cual estén definidas las metas y tarifas. La concesión se debe realizar mediante el procedimiento de licitación pública (cfr. art. 42º, 2do. párr., Constitución Provincial).

Cuando la concesión involucra la compra o construcción de instalaciones que requieren inversiones de alta envergadura, como es el caso de los rellenos sanitarios, es corriente que las empresas privadas cuenten con inversión extranjera.

Para fortalecer esta opción, es necesario desarrollar los siguientes aspectos:

- Creación de organismos operadores con permanencia y estabilidad, destinados a la supervisión técnica de la concesión.
- Reglamentación adecuada para la prestación de servicios públicos.
- Esquemas transparentes de licitación, concesión, contratación y operación, con visión técnica, económica y social de largo plazo.
- Apoyo financiero.
- Programas municipales de mediano plazo, para el desarrollo de infraestructura ambiental y la prestación de servicios públicos, con metas verificables.
- Evaluación analítica de tecnologías disponibles.
- Esquemas de escrutinio y de participación pública con indicadores de desempeño.

- Profesionalización del sector público.
- Esquemas de comunicación y de relación con la sociedad.

6.2.2.5. Operación comunitaria y microempresas

La participación de pequeñas empresas y microempresas privadas en la recolección y transporte de residuos sólidos significa una alternativa más económica para las municipalidades. Las ventajas de estas empresas radican en el uso intensivo de la mano de obra, la utilización de tecnologías de muy bajo costo, y la promoción de mayor participación comunitaria para facilitar la operación de recolección y separación de materiales en la fuente de generación.

Bajo este esquema, en la práctica las microempresas se asimilan al tratamiento dado a los empleado municipales permanentes, sin ninguna garantía laboral de éstos. No obstante, estas empresas tienen serias dificultades para su supervivencia por su débil autosostenibilidad económica y escasa capacidad de gestión empresarial.

Las cooperativas de gestión de residuos sólidos, brindan servicios a un número significativo de población de bajos recursos. En la Provincia de Córdoba, algunos municipios trabajan en conjunto con cooperativas de recicladores de la planta de tratamiento de la ciudad que comercializan los materiales recuperados. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Ley N° 992 establece la regularización de los recuperadores de residuos reciclables incorporándolos a la recolección diferenciada del servicio de higiene urbana vigente.

6.2.2.6. Tercerización

El contrato de tercerización de los servicios implica generalmente que el municipio emita las facturas, el concesionario realice la cobranza y de lo recolectado entregue un porcentaje previamente establecido en el contrato a la municipalidad, como contraprestación de la concesión.

Esta modalidad se utiliza para la contratación de los servicios de higiene urbana por períodos cortos.

6.2.2.7. Gestión Mixta

Esta alternativa involucra la participación de dos o más de los procedimientos anteriormente indicados. Estas operaciones mixtas asumen diferentes formas, se observan casos en los que la autoridad o empresa municipal contrata la recolección, barrido de calles y disposición final a una o más empresas privadas, incluidas las microempresas.

En otros casos, la autoridad municipal contrata parcialmente algunos servicios con compañías privadas, por ejemplo para el mantenimiento de equipo o solamente contrata vehículos y otro equipo necesario para el servicio. Al respecto, hay una variedad de

procedimientos: o bien la autoridad municipal brinda el equipo (mediante contrato de leasing) y las empresas privadas aportan personal, o las empresas proporcionan el vehículo de recolección con el conductor y la municipalidad aporta los operarios.

6.2.3. Reglamento de Contrataciones de la Provincia de La Pampa.

El Decreto-Acuerdo N° 470/73 y sus modificaciones: Decreto-Acuerdo N° 2272/74, Decreto-Acuerdo N° 520/78; Decreto-Acuerdo N° 1457/79 y Decreto-Acuerdo N° 2626/86, conforman el Reglamento de Contrataciones Públicas de la Provincia de La Pampa. Las compras directas quedan excluidas del citado Reglamento, rigiéndose por las respectivas disposiciones que las normatizan (cfr. art. 108, Reglamento).

Los organismos licitantes al establecer las cláusulas particulares que correspondan respecto de la prestación a contratar, no podrán incluir en ellas requisitos o condiciones que se aparten de lo determinado en el Reglamento (conf. art. 2º, D.A. 470/73).

El Reglamento regula en el Capítulo IV el procedimiento y requisitos del llamado a licitación pública, en el artículo 20º se establece que el Poder Ejecutivo podrá ampliar los plazos y medios de difusión según la importancia de la contratación. Asimismo, establece las condiciones de las licitaciones privadas y los requisitos a cumplir en los concursos de precios.

Las firmas que presenten ofertas deben estar inscriptas en el Registro de Proveedores, a excepción de las ofertas formuladas por personas físicas o jurídicas que no se encuentren inscriptas en dicho Registro que enuncia el artículo 25 del Reglamento, entre las que figuran las firmas establecidas en el extranjero sin sucursal ni representación en el país, y los oferentes en concesiones estatales.

Asimismo, las propuestas deben cumplir las condiciones que regula el Capítulo V, entre otras, las siguientes:

- Serán presentadas en sobre cerrado y por duplicado cuando así lo requieran las cláusulas particulares, deben estar firmadas por el oferente o su representante legal, y acompañadas con la constancia de la constitución de garantía de acuerdo a lo exigido en el Capítulo VII del Reglamento (cfr. art. 26).
- La presentación de oferta sin observación respecto de lo exigido por el Reglamento y las cláusulas particulares o la omisión de requisitos o características exigidas en las mismas, significará la aceptación de todas las estipulaciones que rigen la contratación, *“aún cuando las cláusulas particulares no se acompañen con la oferta o no estén firmadas por el oferente”* (cfr. art. 27).
- Precios. La oferta especificará el precio unitario fijo y cierto, la cotización por cantidades netas, el origen del producto cotizado (cfr. art. 29). Los precios correspondientes a la adjudicación serán invariables cualquiera fuera la causal que modifique la economía del contrato. Sólo podrá admitirse el reajuste de precios cuando exista autorización otorgada por el Poder Ejecutivo, y se lo hubiere previsto expresamente en las cláusulas particulares. La omisión de este último requisito,

significará que el organismo licitante no hace uso de la facultad otorgada, y por lo tanto no se reconocerá derecho alguno al proveedor (cfr. art. 33).

- A todos los efectos legales se considerará domicilio constituido de los proponentes y adjudicatarios el que figure en el Registro de Proveedores. Las firmas no inscriptas, a excepción de las establecidas en el extranjero, deberán constituirlo en territorio de la República Argentina en la oportunidad de formular sus propuestas (cfr. art. 32)
- Los proponentes se obligan a mantener sus ofertas por el término de quince (15) días a contar de la fecha de apertura. *“Cuando por la urgencia, naturaleza e importancia de la contratación –circunstancias éstas que deberán estar justificadas en las actuaciones respectivas-, o cuando se trate de licitaciones públicas, fuere necesario fijar un término distinto del indicado, regirá el plazo que a tal efecto se establezca en las cláusulas particulares”* (cfr. art. 34).

El Capítulo X del Reglamento establece el régimen aplicable al contrato en sí, a saber:

- El contrato se perfecciona con la adjudicación efectuada por la autoridad competente y la comunicación efectuada al interesado dentro de los 5 (cinco) días de acordada, constituyendo esa comunicación la orden para cumplimentar el compromiso en las condiciones estipuladas (cfr. arts. 62 y 63).
- El organismo licitante, con autorización de la autoridad competente, tendrá derecho a aumentar o disminuir hasta un veinticinco por ciento (25%) del total adjudicado, en las condiciones y precios pactados –este porcentaje podrá incidir tanto en la entrega total como en las entregas parciales-; cuando tratándose de la aplicación del 25% anterior, resulte fracción de cuerpo cierto o unidad indivisible, podrán aumentarse o disminuirse los porcentuales establecidos; prorrogar, en las condiciones y precios pactados, los contratos de prestaciones de cumplimiento sucesivo, a efectos del ejercicio de esta facultad el organismo licitante deberá emitir la orden pertinente antes del vencimiento de la vigencia del contrato (cfr. art. 66).
- Todas las cuestiones que se suscitaren con motivo de la ejecución o interpretación del contrato serán resueltas conforme con las previsiones del Reglamento, las cláusulas particulares de la contratación y de la legislación subsidiaria. En las cláusulas particulares *“no podrá estipularse el juicio de árbitros o amigables compondores para dirimir las divergencias que se produjeran con motivo de la interpretación o ejecución del contrato”* (cfr. art. 67).
- El contrato no podrá ser transferido ni cedido por el adjudicatario sin la previa anuencia de la autoridad competente. En caso de infracción se podrá declarar rescindido el contrato de pleno derecho (cfr. art. 68). En los supuestos de rescisión de contrato, los recursos que se dedujeren contra la respectiva resolución no tendrán efecto suspensivo (cfr. art. 69). Cuando el Estado rescinda un contrato por una causa no prevista en el Reglamento, el adjudicatario tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos directos e improductivos en que probare haber incurrido con posterioridad a la adjudicación y con motivo del contrato, pero no se hará lugar a reclamo alguno por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para financiaciones (cfr. art. 70).

En los casos en que fuere necesario establecer, con carácter general para determinadas contrataciones, cláusulas distintas de las establecidas en el Reglamento de análisis, la modificación *"deberá ser autorizada por el Poder Ejecutivo con previa intervención del Departamento de Compras y Suministros y del Tribunal de Cuentas, y se hará constar en las cláusulas particulares de las respectivas contrataciones"* (cfr. art. 107).

En cuanto al cumplimiento del contrato, el Capítulo XI del Reglamento de referencia establece los lineamientos pertinentes, como los que a continuación se exponen;

- Los adjudicatarios cumplirán la prestación a que se hubieren obligado, ajustándose a las formas, plazos, lugar y demás especificaciones establecidas en el contrato. Los funcionarios responsables, *"informarán el incumplimiento de las cláusulas contractuales al Departamento de Compras y Suministros o a la dependencia que actúe como tal en otros entes, especificando si las causas son justificables o no"*, lo que servirá de base para la aplicación de las penalidades contractuales que estipula el Capítulo XIII del Reglamento (cfr. art. 71).
- Vencido el plazo de cumplimiento de contrato o de las prórrogas acordadas (cfr. art. 73), sin que fueran prestados los servicios de conformidad, el contrato *"quedará rescindido de pleno derecho, sin necesidad de intimación o interpelación judicial o extrajudicial"*. Asimismo, el artículo 74 del Reglamento establece que si el cumplimiento recayera sobre servicios de carácter urgente e impostergable, *"se podrá contratar por cuenta del adjudicatario remiso por los medios directos posibles y ajustando los plazos de acuerdo con las nuevas necesidades, pero cuidando que las características de los elementos y servicios en sí se ajusten estrictamente a las de las originariamente pactadas"*.
- Para aquellos casos en que la prestación a cargo del adjudicatario no pudiera cumplirse sino después de satisfechos determinados requisitos por el organismo licitante, se establecerá en las cláusulas particulares los plazos correspondientes para la satisfacción de tales requisitos. Si el organismo licitante no cumpliera en término los requisitos a su cargo, el artículo 78 del Reglamento otorga al adjudicatario las siguientes opciones, a saber:
 1. Reclamar mayor costo de mano de obra exclusivamente, derivado de la demora imputable al Estado, extremos ambos que deberá probar fehacientemente en su oportunidad.
 2. Tener por rescindido el contrato, y en tal sentido ejercer el derecho a que se le reconozcan los gastos directos e improductivos en que probare haber incurrido con posterioridad a la adjudicación y con motivo del contrato, menos el lucro cesante o los intereses de capitales requeridos para financiaciones.

Las opciones señaladas, deberán ser efectuadas por escrito, dentro del décimo día del vencimiento del plazo establecido, la falta de opción significará *"que el adjudicatario acepta ejecutar sus obligaciones de acuerdo con las estipulaciones del contrato, sin derecho a reclamación alguna"* (cfr. art. 78, *in fine*).

- La conformidad definitiva se acordará en forma expresa, dentro de los cinco (5) días de prestado el servicio (cfr. arts. 82, 85), no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios que se advirtieren durante el plazo de seis meses, computados a partir de la conformidad definitiva, salvo que por la índole de la prestación en las cláusulas se fijara un plazo mayor. Asimismo, el artículo 87 *in fine*, establece que el adjudicatario *“quedará obligado a efectuar las reposiciones o reparaciones correspondiente, en el término y lugar que indique el organismo licitante”*.

Por último, cabe hacer referencia a la Ley N° 1.259, que aprueba el Reglamento de Contrataciones entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos con organismos públicos o privados para la construcción, conservación o ampliación de obras públicas, en el caso que sea sometido a este régimen la contratación de la construcción de obras de infraestructura necesarias para la gestión de los RSU, como por ejemplo los rellenos sanitarios.

ANEXO MARCO LEGAL

7. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE A NIVEL NACIONAL

7.1. Tratados Internacionales

En el presente capítulo se exponen las disposiciones que surgen de las cláusulas de los tratados internacionales y acuerdos regionales, ratificados por la República Argentina en lo atinente a la preservación del medio ambiente en general y los recursos naturales, y la gestión de residuos.

7.2. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en la ciudad de Nueva York el 9 de mayo de 1992, tiene como objetivo lograr *“la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático”*.

Asimismo el artículo 2º *in fine* de la Convención dispone que *“ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”*.

En prosecución de los principios enunciados en el artículo 3º de la Convención de análisis, ratificada por Ley N° 24.295, la República Argentina debe cumplir con el compromiso de volver a los niveles de contaminación alcanzados en el año 1990 en relación a las emisiones antropógenas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal (cont. inc. a., 2da. parte, art. 4º), como así también los que a continuación se describen:

- a) Elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes, inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, utilizando metodologías comparables que habrán de ser acordadas por la Conferencia de las Partes (conf. inc. a, art. 4º, inc. a, art. 12º)
- b) Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y, según proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático, tomando en cuenta las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, y medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático (conf. inc. b. art. 4º; inc. b, art. 12)

- c) Promover la gestión sostenible y promover y apoyar con su cooperación la conservación, según proceda, de los sumideros y depósitos de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal (conf. inc. d, art.4º)
- d) Cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos del cambio climático; desarrollar y elaborar planes apropiados e integrados para la protección y rehabilitación de las zonas, afectadas por la sequía y la desertificación, así como por las inundaciones (conf. inc. e, art. 4º)
- e) Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes y emplear métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto, formulados y determinados a nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, de los proyectos o medidas emprendidos para mitigar el cambio climático o adaptarse a él (conf. inc. f, art. 4º)
- f) Promover y apoyar con su cooperación la investigación científica, tecnológica, técnica, socioeconómica y de otra índole, la observación sistemática y el establecimiento de archivos de datos relativos al sistema climático, con el propósito de facilitar la comprensión de las causas, los efectos, la magnitud y la distribución cronológica del cambio climático, y de las consecuencias económicas y sociales de las distintas estrategias de respuesta y de reducir o eliminar los elementos de incertidumbre que aún subsisten al respecto (conf. inc. g, art. 4º)
- g) Promover y apoyar con su cooperación el intercambio pleno, abierto y oportuno de la información pertinente de orden científico, tecnológico, técnico, socioeconómico y jurídico sobre el sistema climático y el cambio climático, y sobre las consecuencias económicas y sociales de las distintas estrategias de respuesta (conf. inc h, art. 4º)
- h) Promover y apoyar con su cooperación la educación, la capacitación y la sensibilización del público respecto del cambio climático y estimular la participación más amplia posible en ese proceso, incluida la de las organizaciones no gubernamentales (conf. inc. i, art. 4º, art. 6º)

7.3. Protocolo de Kyoto

Con fundamento en los principios y compromisos asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se celebra el Protocolo de Kyoto, ratificado por la República Argentina mediante Ley Nº 25.438.

Conforme surge del texto del artículo 3º, los compromisos de limitación o reducción de emisiones son más estrictos, a saber:

- *Las emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el Anexo A no excedan de las cantidades atribuidas, calculadas en función de los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones consignados para las Partes*

en el Anexo B, con miras a reducir el total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012.

- *Demostrar en el año 2005 un avance concreto en el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud del Protocolo de Kyoto.*
- *Las variaciones netas de las emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero que se deban a la actividad humana directamente relacionada con el cambio del uso de la tierra y la silvicultura, limitada a la forestación, reforestación y deforestación desde 1990, calculadas como variaciones verificables del carbono almacenado en cada período de compromiso, serán utilizadas a los efectos de cumplir los compromisos de cada Parte. Se informará de las emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero que guarden relación con esas actividades de una manera transparente y verificable.*
- *En el primer período de compromiso cuantificado de limitación y reducción de las emisiones, del año 2008 al 2012, la cantidad atribuida a cada Parte incluida en el anexo I será igual al porcentaje consignado para ella en el anexo B de sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A correspondientes a 1990, o al año o período de base determinado con arreglo al párrafo 5 supra, multiplicado por cinco. Para calcular la cantidad que se les ha de atribuir, las Partes del anexo I para las cuales el cambio del uso de la tierra y la silvicultura constituían una fuente neta de emisiones de gases de efecto invernadero en 1990 incluirán en su año de base 1990 o período de base las emisiones antropógenas agregadas por las fuentes, expresadas en dióxido de carbono equivalente, menos la absorción por los sumideros en 1990 debida al cambio del uso de la tierra.*
- *Toda Parte incluida en el anexo I podrá utilizar el año 1995 como su año de base para los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre para hacer los cálculos a que se refiere el párrafo 7 supra*

En el artículo 7º del Protocolo de Kyoto las Partes se comprometen a presentar inventarios anuales de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal.

7.4. Convenio de Basilea

El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, suscripto en Basilea, el 22 de marzo de 1989 fue ratificado por la República Argentina mediante Ley N° 23.922.

Según surge de los preceptos contenidos en el Convenio, existirá movimiento transfronterizo de residuos peligrosos o de otros desechos, toda vez que dichas sustancias u objetos se transporten desde el territorio de un Estado, o Estado de exportación, hacia el territorio de otro, o Estado de importación, o hacia una zona que no se encuentra sometida a jurisdicción

de Estado alguno, pasando durante el trayecto, por el territorio de un tercer Estado de tránsito, o por una zona que no está sometida a jurisdicción nacional alguna. En cualquiera de los casos enunciados precedentemente, este tipo de traslado de residuos peligrosos debe afectar a, por lo menos, dos Estados.

Asimismo, corresponde señalar que el Convenio de Basilea regula no sólo el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos incluidos en algunas de las categorías que se encuentran enumeradas en su Anexo I, o bien posean algunas de las características peligrosas descritas en el Anexo III del citado tratado internacional, sino que también engloba aquellos desechos que son considerados o definidos como “peligrosos” por la legislación nacional de un Estado Parte involucrado en este tipo de operaciones.

Cabe destacar que, el Convenio de marras no prohíbe la realización de este tipo de operaciones, sino que compromete a los Estados Parte a adoptar “todas las medidas posibles para garantizar que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos que pueden derivarse de tales desechos” (conf. art. 2, párr. 8, Conv. Basilea).

A su vez, el Convenio en su artículo 4, párrafo 9, dispone que sólo se permitirá el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos cuando exista alguna de las siguientes circunstancias:

- Que el Estado de exportación no disponga de la capacidad técnica ni de los servicios requeridos o de lugares de eliminación adecuados a fin de eliminar los desechos de que se trate de una manera ambientalmente racional o eficiente
- Que los desechos de que se trate sean necesarios como materias primas para las industrias de reciclado o recuperación que funcionen en el territorio del Estado de importación
- Que el movimiento se efectúe de conformidad con otros criterios que puedan decidir las partes siempre que tales criterios no contradigan el objetivo y fin del Convenio

En los casos enunciados en párrafos precedentes, se deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Proporcionar información a los Estados interesados sobre el movimiento propuesto y sus efectos sobre la salud humana y el medio ambiente
- El movimiento y la eliminación deben estar a cargo de personas autorizadas o habilitadas para realizar este tipo de operaciones
- El embalaje, etiquetado y transporte debe realizarse de conformidad con las normas y usos internacionales
- Los desechos deben ir acompañados de un documento sobre el movimiento desde el punto en que se inicia hasta el punto en que se eliminan

En cuanto al tema que nos ocupa, la gestión de residuos, podemos concluir que se deberían aplicar los principios que surgen del Convenio de Basilea, como los siguientes:

- Principio de prevención. La generación de desechos peligrosos debe reducirse al mínimo desde su origen en términos de cantidad y de su potencial riesgo.
- Principio de proximidad. Cuando la generación de desechos peligrosos es inevitable, éstos deben eliminarse lo más cerca posible de su fuente de origen.
- Principio de no discriminación. Cualquiera sea su lugar de eliminación, debe garantizarse un manejo ambientalmente adecuado de desechos.
- Principio de Autosuficiencia. Cada país debe asegurarse de disponer de instalaciones adecuadas de eliminación de desechos, así como también debe procurar tratar y eliminar los desechos peligrosos que produzca.
- Principio de soberanía nacional. Cada país tiene derecho a prohibir la importación de desechos peligrosos a su territorio.
- Principio de oportunidad ecológica. Los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos deben reducirse a un mínimo compatible con su manejo ambientalmente adecuado.

7.5. Convenio de Estocolmo

El Convenio de Estocolmo fue adoptado el 22 de mayo de 2001, y aprobado por la República Argentina por Ley Nº 26.011. El objetivo del Convenio se funda en el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y consiste en proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes.

El Convenio obliga a las Partes a adoptar medidas tendientes a:

- Reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción y utilización intencionales (cfr. art. 3).
- Reducir o eliminar las liberaciones derivadas de fuentes antropógenas de cada uno de los productos químicos incluidos en el anexo C del Convenio, *"con la meta de seguir reduciéndolas al mínimo y, en los casos en que sea viable, eliminarlas definitivamente"* (cfr. art. 5).
- Reducir o eliminar las liberaciones derivadas que consistan en productos químicos incluidos en el anexo A o el anexo B, o que contengan esos productos químicos, así como los desechos, incluidos los productos y artículos cuando se conviertan en desechos, que consistan en un producto químico incluido en el anexo A, B o C o que contengan dicho producto químico o estén contaminadas con él, *se gestionen de manera que se proteja la salud humana y el medio ambiente* (cfr. art. 6º).

A fin de cumplir con este compromiso el artículo 6º del Convenio de análisis obliga a las Partes a elaborar estrategias apropiadas para determinar existencias o que contengan o estén contaminados con los productos químicos enunciados en los Anexos A, B, o C. Asimismo obliga a gestionar de manera segura para que esos desechos, incluidos los productos y artículos, cuando se conviertan en desechos:

- i) *Se gestionen, recojan, transporten y almacenen de manera ambientalmente racional;*
- ii) *Se eliminen de un modo tal que el contenido del contaminante orgánico persistente se destruya o se transforme en forma irreversible de manera que no presenten las características de contaminante orgánico persistente o, de no ser así, se eliminen en forma ambientalmente racional cuando la destrucción o la transformación irreversible no represente la opción preferible desde el punto de vista del medio ambiente o su contenido de contaminante orgánico persistente sea bajo, teniendo en cuenta las reglas, normas, y directrices internacionales, y los regímenes mundiales y regionales pertinentes que rigen la gestión de los desechos peligrosos;*
- iii) *No estén autorizados a ser objeto de operaciones de eliminación que puedan dar lugar a la recuperación, reciclado, regeneración, reutilización directa o usos alternativos de los contaminantes orgánicos persistentes; y*
- iv) *No sean transportados a través de las fronteras internacionales sin tener en cuenta las reglas, normas y directrices internacionales.*

Se esforzará por elaborar estrategias adecuadas para identificar los sitios contaminados con productos químicos incluidos en el anexo A, B o C; y en caso de que se realice el saneamiento de esos sitios, *ello deberá efectuarse de manera ambientalmente racional.*

Por su parte, el artículo 9º establece que cada Parte facilitará o llevará a cabo el intercambio de información relativa a la reducción o la eliminación de la producción, utilización y liberación de contaminantes orgánicos persistentes; y respecto de las alternativas a los contaminantes orgánicos persistentes, incluida la información relacionada con sus peligros y con sus costos económicos y sociales.

7.6. Convenio de Rotterdam

Mediante el Convenio de Rotterdam fueron aprobadas a nivel internacional las disposiciones sobre el procedimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. El Convenio fue adoptado el 10 de Septiembre de 1998, y aprobado por la República Argentina a través de la sanción de la Ley Nº 25.278.

El Convenio se basa en las disposiciones de los siguientes documentos internacionales, a saber:

- Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el capítulo 19 del Programa 21, sobre "Gestión ecológicamente racional de los productos químicos

tóxicos, incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos".

- Directrices de Londres para el intercambio de información acerca de productos químicos objeto de comercio internacional, en su forma enmendada.
- Código Internacional de Conducta para la distribución y utilización de plaguicidas, de la FAO.
- Código Deontológico para el Comercio Internacional de productos químicos del PNUMA,

Conforme surge del artículo 3, el ámbito de aplicación del Convenio comprende:

- Los productos químicos prohibidos, definidos por el documento internacional como aquéllos cuyos usos dentro de una o más categorías han sido prohibidos en su totalidad, en virtud de una medida reglamentaria firme, con objeto de proteger la salud humana o el medio ambiente.
- Los productos químicos rigurosamente restringidos, entendiéndose por tales aquellos cuyos usos dentro de una o más categorías hayan sido prohibidos prácticamente en su totalidad, en virtud de una medida reglamentaria firme, con objeto de proteger la salud humana o el medio ambiente, pero del que se sigan autorizando algunos usos específicos.
- Las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas

En cuanto a su aplicación el artículo 15 prevé que cada Estado Parte del Convenio tomará las medidas necesarias para establecer y fortalecer su infraestructura y sus instituciones nacionales para la aplicación efectiva de sus cláusulas. Agrega que dichas medidas podrán incluir, cuando proceda, la adopción o enmienda de medidas legislativas o administrativas nacionales, y además:

- a) *El establecimiento de registros y bases de datos nacionales, incluida información relativa a la seguridad de los productos químicos;*
- b) *El fomento de las iniciativas de la industria para promover la seguridad en el uso de los productos químicos; y*
- c) *La promoción de acuerdos voluntarios.*

Se obliga a los Estados signatarios a controlar que el público tenga acceso adecuado a la información *"sobre manipulación de productos químicos y gestión de accidentes y sobre alternativas que sean más seguras para la salud humana o el medio ambiente"* respecto de los productos químicos que figuran en el Anexo III del Convenio.

Del articulado del Convenio surge que los Estados podrán celebrar acuerdos de cooperación, directamente o, si procede, por conducto de las organizaciones internacionales competentes, para la aplicación del Convenio a nivel subregional, regional y mundial.

Cabe destacar que las Partes signatarias del Convenio a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente, pueden adoptar medidas más estrictas que las establecidas en el Convenio, *“siempre que sean compatibles con las disposiciones del Convenio y conformes con el derecho internacional”*.

Teniendo en cuenta especialmente las necesidades de los países en desarrollo y los países con economías en transición, el Convenio prevé en el artículo 16 que los Estados signatarios, cooperarán en la promoción de la asistencia técnica para el desarrollo de la infraestructura y la capacidad necesarias para el manejo de los productos. Asimismo, establece que las Partes que cuenten con programas más avanzados de reglamentación de los productos químicos, *“deberían brindar asistencia técnica, incluida capacitación, a otras Partes para que éstas desarrollen la infraestructura y la capacidad de manejo de los productos químicos a lo largo de su ciclo de vida”*.

8. ACUERDOS REGIONALES

Mercado Común del Sur - MERCOSUR

Antecedentes normativos

El origen inmediato del Mercado Común del Sur - en adelante MERCOSUR - se encuentra en una serie de documentos y conductas del gobierno argentino y brasileño manifestadas a partir del año 1985, cuyas instancias principales fueron:

- La Declaración de Foz de Iguazú (30/11/85) que creó una Comisión Mixta de Alto Nivel para la Integración
- El Acta para la Integración argentino-brasileña y el Programa de Integración y Cooperación Económica (29/07/86)
- El Acta de Amistad argentino-brasileña denominada “Democracia, Paz y Desarrollo” (10/12/86)
- El Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil (29/11/88)

En 1991, los Gobiernos de Argentina (L. 23.981), Brasil (Dto. Leg. 197/91), Paraguay (L. 9/91), y Uruguay (L. 16.196), ratifican el Tratado de Asunción, por el que se constituye el Mercado Común del Sur, cuyo objetivo era ampliar la dimensión de los mercados nacionales a través de la integración.

En la Cumbre de Las Leñas se dio un paso adicional a través de la creación mediante Resolución MERCOSUR N° 22/92 de la Reunión Especializada de Ambiente (REMA). Dichas reuniones posibilitan el análisis de la legislación ambiental de cada uno de los países miembros a fin de buscar la forma de armonizar la protección del ambiente y lograr un entorno institucional para la consideración conjunta de los temas ambientales.

La puesta en marcha oficial del MERCOSUR, en 1995, hizo que las cuestiones ambientales cobraran en cierta medida nuevo ímpetu. Los ministros ambientales de los Estados Parte se reunieron ese año en el Palacio de Taranco - Uruguay - donde se examinaron problemas ambientales de interés común, y se adoptaron medidas que fueron plasmadas en la declaración consiguiente. Una de ellas fue el perfeccionamiento del mecanismo de las REMA, de modo que pasó a ser un subcomité técnico (SCT N° 6) de carácter autónomo dentro de la estructura del Grupo del Mercado Común.

Dentro de los instrumentos aprobados en el ámbito del MERCOSUR destinados al logro de los objetivos ambientales, cabe mencionar los siguientes:

- Resolución MERCOSUR/GMC N° 10/94. Aprueba las “Directrices Básicas en Materia de Política Ambiental”.
- Resolución MERCOSUR/GMC N° 7/98. Incluye el tema “Emergencias Ambientales” en el Programa de Trabajo del Subgrupo de Trabajo N° 6 a fin de proponer al Grupo

Mercado Común “las prioridades, los mecanismos de coordinación y las directrices generales para la implementación de la cooperación entre los Estados Partes del MERCOSUR”.

- Decisión MERCOSUR/CMC N° 2/94. Aprueba el Acuerdo y su Anexo sobre transporte de mercancías peligrosas, cuyas normas son de aplicación conjuntamente con las disposiciones particulares de cada Estado Parte (conf. art. 5) y las recomendaciones de las Naciones Unidas (conf. inc. a) art. 6).
- Decisión MERCOSUR/CMC N° 10/00. Aprueba la Complementación del Plan General de Cooperación y Coordinación Recíproca para la seguridad regional entre los Estados Parte del MERCOSUR en materia de ilícitos ambientales, tales como contaminación del medio ambiente, depredaciones de la biodiversidad, tráfico ilegal de flora, fauna y sustancias y productos peligrosos, entre otros, excepto los radioactivos.

8.1. Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR

Mediante Decisión MERCOSUR N° 2/01, fue aprobado el Acuerdo sobre Medio Ambiente por los países integrantes del MERCOSUR, suscripto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay. La República Argentina ratifica el Acuerdo Marco, con fecha 22 de junio de 2001, mediante Ley Nacional N° 25.841.

El Acuerdo tiene como objetivo *“el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente, mediante la articulación de las dimensiones económicas, sociales y ambientales, contribuyendo a una mejor calidad del ambiente y de la vida de la población”* (conf. art. 4).

En tal sentido, los países signatarios se comprometen a cumplir con los principios enunciados en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio ambiente y Desarrollo de 1992, como así también analizar la posibilidad de aplicar dichos principios que no hayan sido objeto de tratados internacionales (conf. arts. 1° y 2°).

Asimismo, a fin de lograr el objeto del Acuerdo de referencia e implementar sus disposiciones, los Estados Parte asumen el compromiso de cooperar entre ellos en los siguientes aspectos ambientales:

- Cumplimiento de los acuerdos internacionales ambientales de los cuales sean parte,
- Cooperación que, cuando se considere conveniente, incluiría la adopción de *“políticas comunes para la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales, la promoción del desarrollo sustentable, la presentación de comunicaciones conjuntas sobre temas de interés común y el intercambio de información sobre las posiciones nacionales en foros ambientales internacionales”* (conf. art. 5).
- Profundizar en el análisis de los problemas ambientales de la subregión con la participación de los organismos nacionales competentes y de las organizaciones de la sociedad civil, debiendo implementar las acciones que establece el artículo 6 del Acuerdo, a saber:

- Incrementar el intercambio de información sobre leyes, reglamentos, procedimientos, políticas y prácticas ambientales así como sus aspectos sociales, culturales, económicos y de salud, en particular, aquéllos que puedan afectar al comercio o las condiciones de competitividad en el ámbito del MERCOSUR.
- Incentivar políticas e instrumentos nacionales en materia ambiental, buscando optimizar la gestión del medio ambiente.
- Buscar la armonización de las legislaciones ambientales, considerando las diferentes realidades ambientales, sociales y económicas de los países del MERCOSUR.
- Identificar las fuentes de financiamiento para el desarrollo de las capacidades de los Estados Partes, a efectos de contribuir con la implementación del Acuerdo.
- Contribuir a la promoción de condiciones de trabajo ambientalmente saludables y seguras para que, en el marco de un desarrollo sustentable, se posibilite mejorar la calidad de vida, el bienestar social y la generación de empleo.
- Contribuir para que los demás foros e instancias del MERCOSUR consideren adecuada y oportunamente los aspectos ambientales pertinentes.
- Promover la adopción de políticas, procesos productivos y servicios no degradantes del medio ambiente.
- Incentivar la investigación científica y el desarrollo de tecnologías limpias.
- Promover el uso de instrumentos económicos de apoyo a la ejecución de las políticas para la promoción del desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente.
- Estimular la armonización de las directrices legales e institucionales, con el objeto de prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en los Estados Partes, con especial referencia a las áreas fronterizas.
- Brindar, en forma oportuna, información sobre desastres y emergencias ambientales que puedan afectar a los demás Estados Partes, y cuando fuere posible, apoyo técnico y operativo.
- Promover la educación ambiental formal y no formal y fomentar conocimientos, hábitos de conducta e integración de valores orientados a las transformaciones necesarias para alcanzar el desarrollo sustentable en el ámbito del MERCOSUR.
- Considerar los aspectos culturales, cuando corresponda, en los procesos de toma de decisión en materia ambiental.
- Desarrollar acuerdos sectoriales, en temas específicos, conforme sea necesario para la consecución del objeto del Acuerdo.

Las directrices señaladas en el artículo 6 del Acuerdo previamente enunciadas, se complementarán con futuros acuerdos en los que los Estados signatarios establezcan pautas de trabajo en materia ambiental, en consonancia con la agenda del MERCOSUR (conf. art. 7).

8.2. Gestión Sanitaria de Residuos Sólidos

Por Resolución N° 408/04 del Ministerio de Salud de la Nación, fue incorporado a la normativa nacional vigente el documento "Criterios para la Gestión Sanitaria de Residuos Sólidos en Puertos, Aeropuertos, Terminales Internacionales de Carga y Pasajeros y Puntos de Frontera en el MERCOSUR", aprobado por la Resolución MERCOSUR/GMC N° 30/02.

Estos criterios serán aplicados en puertos, aeropuertos, terminales internacionales de carga y pasajeros y puntos de frontera instalados en los Estados Partes del MERCOSUR, los que deberán contar con un Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Asimismo, el documento de referencia establece que para administrar estos residuos, se deberá presentar para su aprovechamiento en los organismos nacionales competentes en la materia un Plan de Gestión de residuos sólidos, que contenga los aspectos señalados por dicho instrumento, relacionados con: la información de base, los objetivos a ser alcanzados por el Plan de Gestión, los marcos de referencia del Plan Local de gestión de residuos sólidos y el Plan de Contingencias para residuos peligrosos.

Respecto del tratamiento y disposición final de residuos sólidos, en el apartado 4, se establece que todos los equipamientos e instalaciones destinadas al transporte, almacenamiento, tratamiento y destino final de residuos sólidos, *"deberán ser licenciados por las autoridades ambientales y sanitarias de los Estados Partes"*.

En el apartado 8 del documento se establecen los requisitos mínimos para la gestión de residuos sólidos en puertos, aeropuertos, terminales internacionales de carga y pasajeros y puntos de frontera.

Por último el documento señala que en situaciones especiales, *"cada Estado Parte se reserva el derecho de no recibir residuos sólidos en su territorio atendiendo las realidades epidemiológicas o de otro carácter, que puedan constituir riesgo sanitario y/o ambiental"*. Este hecho deberá estar debidamente fundamentado y ser proporcional al riesgo que podría ocasionar.

8.3. Ley N° 25.675 del Ambiente

Denominada Ley General del Ambiente, Ley Nacional N° 25.675 sancionada en el año 2002, provee la estructura institucional básica, sobre la cual debe organizarse, sancionarse, interpretarse y aplicarse la normativa específica, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios de política ambiental contenidos en el artículo 4° de la norma.

Por Decreto N° 481/04, el Poder Ejecutivo Nacional designó como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

8.3.1. Ámbito de Aplicación

De aplicación en todo el territorio nacional, la Ley N° 25.675 en el artículo 3° determina que sus disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios de política ambiental contenidos en el artículo 4° de la norma. Ellos son:

- *Principio de congruencia. La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.*
- *Principio de prevención. Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.*
- *Principio precautorio. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.*
- *Principio de equidad intergeneracional. Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.*
- *Principio de progresividad. Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.*
- *Principio de responsabilidad. El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.*
- *Principio de subsidiariedad. El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales.*
- *Principio de sustentabilidad. El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.*

- *Principio de solidaridad. La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos.*
- *Principio de cooperación. Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional, El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta.*

Como consecuencia de la supremacía que ejerce la Ley N° 25.675 frente a las demás leyes ambientales federales, sus normas relativas a la protección ambiental no sólo se aplican conjuntamente con las disposiciones de la Ley N° 25.916, sino que prevalecen sobre ellas.

8.3.2. Evaluación de Impacto Ambiental

Con verdadero acierto, la Ley N° 25.675 consolida a la evaluación de impacto ambiental como el instrumento de la preservación del daño al entorno, estableciendo uniformemente y para toda la Nación su obligatoriedad como requisito previo, básico e idóneo para la valoración y prevención de los impactos que puede provocar las acciones antrópicas, en este caso puntual, el manejo y disposición final de los residuos domiciliarios.

8.3.3. Acceso a la Información Pública

En general, y en particular relacionado con este procedimiento, el artículo 16 impone el deber de informar, al que están sujetos las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, respecto de la calidad ambiental de las actividades que desarrollan. Este precepto se encuentra regulado en la Ley N° 25.831.

8.3.4. Participación Ciudadana

Como instancia obligatoria para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente, la norma prescribe el deber de la Autoridad de Aplicación de institucionalizar el derecho a la participación ciudadana, a través de consultas o audiencias públicas en procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio - en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados (arts. 19º, 20º, 21º, L. N° 25.675).

8.3.5. Daño Ambiental

En materia de responsabilidad por daño ambiental, la norma prescribe lo siguiente:

- El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción (art. 28º, L. N° 25.765).

- Si en la comisión del daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable (art. 31º, L. Nº 25.765).
- La Ley de análisis, en el artículo 30 regula quiénes tendrán la legitimación activa para obtener la recomposición del ambiente dañado, ellos son: *“...el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción”*.
- En lo relativo a la competencia judicial aplicable en los casos de daño ambiental, el artículo 7º de la Ley Nº 25.675, establece la competencia de los tribunales ordinarios, en razón del lugar, la materia o las personas. Asimismo, prevé la intervención de la justicia federal cuando se provoque la degradación o contaminación de recursos ambientales interjurisdiccionales.

8.3.6. Acuerdos Federales

Finalmente, es de señalar que La Ley General del Ambiente Nº 25.675, en su artículo 25 establece la ratificación de los siguientes acuerdos federales:

- Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), acta constitutiva suscrita el 31 de agosto de 1990, en la ciudad de La Rioja. Al que adhirió la Provincia de La Pampa por Ley Nº 2085. Entre los cometidos del COFEMA el principal consiste en la concertación y elaboración de políticas ambientales con la participación de las jurisdicciones locales, en su calidad de últimas ejecutoras de las normas de presupuestos mínimos, lo cual permite identificar los intereses y necesidades locales.
- Pacto Federal Ambiental, suscrito el 5 de junio de 1993, en la ciudad de Buenos Aires, ratificado por la Provincia de La Pampa por Ley Nº 1494, tiene por objeto *“promover políticas ambientalmente adecuadas en todo el territorio nacional, estableciendo Acuerdos Marcos entre los Estados Federales y entre estos y la Nación, que agilicen y den mayor eficiencia a la preservación del ambiente”*.

8.4. Ley Nº 25.831 de Información Pública Ambiental

La Ley Nº 25.831 tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.

Esta Ley tampoco está reglamentada, lo que no obsta a su aplicación por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Las disposiciones de la norma son operativas en su mayor parte.

La información ambiental comprende “... toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable”.

Los criterios para establecer los procedimientos de acceso a la información ambiental en cada jurisdicción, serán determinados en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) por las Autoridades competentes a nivel nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires (conf. art. 5º, L. Nº 25.831).

El Sistema de Información Ambiental Nacional (SIAN) es responsable del diseño y desarrollo del sitio fue creado mediante la Resolución Nº 459/98, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 41 de la Constitución Nacional, que define la responsabilidad de las autoridades respecto de la provisión de información ambiental.

Sus principales objetivos son:

- Recopilar y procesar información ambiental con el fin de ponerla a disposición de los organismos gubernamentales ambientales, no gubernamentales y la comunidad.
- Proveer al sector gubernamental instrumentos que faciliten los procesos de toma de decisiones en materia de gestión ambiental.
- Facilitar la comunicación e intercambio de información entre los organismos ambientales.

El SIAN ha sido considerado mediante la Resolución Nº 94/04 por el Consejo Federal de Medio Ambiente como el Mecanismo Facilitador de la Información requerido a través de la Ley Nacional Nº 25.675.

La Provincia de La Pampa, por Decreto Nº 1.380/98, establece la creación del “Sistema Provincial de Información Ambiental” con dependencia directa de la Subsecretaría de Ecología.

8.5. Ley Nº 25.670 de Regulación de PCBs

La Ley Nº 25.670 regula, con carácter de presupuestos mínimos relativos a la protección ambiental, (art. 41 de la Constitución Nacional), los aceites habitualmente confinados en instalaciones eléctricas, cuyo grado de contaminación es altísimo y cuyo control no ha sido efectuado hasta el presente, provocando graves daños a la salud humana y al ambiente.

Según el artículo 2º, la finalidad de la Ley es la siguiente:

- a) Fiscalizar operaciones asociadas a los PCBs.
- b) Obtener la descontaminación o la eliminación de los aparatos que lo contengan.

- c) Igualmente se persigue la eliminación de los aceites refrigerantes usados.
- d) Prohibir el ingreso al país de los mismos, como también la producción y la comercialización de los mismos.

El artículo 3º de la Ley define las sustancias a las que se relaciona, señalando que se refiere a las mezclas cuyo contenido sea superior al 0,05 % en peso, estableciendo además la referencia a 50 partes por millón como precisión al respecto.

También involucra a los transformadores, condensadores, recipientes que los contenga en cantidades residuales, en cuanto no hayan sido descontaminados.

En este aspecto de los aparatos establece una presunción *iuris tantum* según la cual si el aparato es del tipo que debe contener PCBs se debe considerar que tienen PCBs.

La norma define también el concepto de poseedor (persona física o jurídica, pública o privada) que esté en posesión de tales productos. Asimismo, define el procedimiento que denomina de descontaminación que consiste en las operaciones que permitan reutilizar, reciclar o eliminar en condiciones seguras el elemento fluido contaminador y su cambio por otros elementos.

Se crea el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCBs *“que será administrado por el organismo de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental y que reunirá a los registros existentes hasta la fecha”* (cfr. art. 7, Cap. II, L. 25.670).

El Capítulo V de la Ley Nº 25.670 establece el régimen aplicable en materia de infracciones y sanciones, determina que las mismas serán reprimidas por la autoridad de aplicación local, *“previo sumario que asegure el derecho de defensa y la valoración de la naturaleza de la infracción y del perjuicio causado”* (cfr. art. 21, L. 25.670).

Es de señalar que la norma de análisis prevé que los PCBs usados y residuos conteniendo PCBs *“siguen alcanzados por la normativa específica de residuos peligrosos”* (cfr. art. 24, L. 25.670).

Por último, cabe advertir que las disposiciones complementarias de la Ley Nº 25.670 establecen que *deberá ser reglamentada en un plazo máximo de sesenta días corridos*, dicho requisito aún no ha sido cumplido, por lo tanto se podría concluir que la norma no es operativa, dada la *vacatio legis*, estos es, cuando la ley dilata su aplicación por un plazo que ella determina (cfr. Bidart Campos, Germán, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, T. II, pág. 236).

A fin de paliar este vacío normativo nacional, en la Provincia de La Pampa es de aplicación la Ley provincial Nº 2.055 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 2.272/04, que establece los lineamientos básicos en materia de gestión y eliminación de PCBs.

8.6. Legislación sobre la preservación de los Suelos

8.6.1. Ley Nº 22.428

La Ley N° 22.428, y su reglamentación Decreto N° 681/71, establece el régimen legal aplicable a la conservación y recuperación de los suelos.

La Provincia de La Pampa adhirió al régimen de referencia a través de la sanción de la Ley N° 1.074

La tierra en la República Argentina está caracterizada por una casi exclusiva pertenencia al dominio privado, mientras que en materia de jurisdicción sobre el recurso, por la estructura federal de la organización política adoptada, la misma corresponde exclusivamente a la Provincia.

La Ley N° 22.428 tiene por objeto alentar la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos, como así también prevenir, controlar la degradación de las tierras, provocada por la acción del hombre y manifestada por la aparición de la erosión, la salinización y alcalinización en áreas de riego y la desertización en regiones áridas y semiáridas.

En tal sentido, el citado marco regulatorio incorpora normas específicas de conservación del suelo, buscando equilibrarlas con las de promoción y estimulación de la actividad privada, de conformidad a lo establecido en su artículo 3º: *"...las respectivas autoridades de aplicación podrán declarar distrito de conservación de suelos toda zona donde sea necesario o conveniente emprender programas de conservación o recuperación de suelos y siempre que cuente con técnicas de comprobada adaptación y eficiencia para la región o regiones similares"*.

Las Leyes N° 13.246 y N° 22.298 de arrendamientos y aparcerías rurales que consideran la erosión del suelo como causal de extinción de estos contratos, además de obligar a los aparceros y arrendatarios a prevenir y evitar este tipo de degradación del recurso.

A su vez, cabe mencionar las disposiciones aplicables al problema de la desertización que surgen del Código Civil. En efecto, el citado cuerpo normativo no se limita a fijar restricciones y límites al dominio, sino que también dispone medidas protectoras del ambiente y los recursos naturales. En tal sentido, la reforma al artículo 2513, introducida por la Ley N° 17.711, se inserta en la línea doctrinaria orientada a limitar el derecho absoluto del propietario del fundo. El viejo texto permitía la desnaturalización, la degradación y aún la destrucción de la propiedad. El nuevo artículo determina que el uso y goce de la propiedad debe ser realizado mediante un temperamento que suponga un ejercicio general de tal derecho.

8.7. Legislación sobre Protección de la Atmósfera

8.7.1. Ley N° 20.284 y normas complementarias

En lo atinente a preservación de la atmósfera, además de los tratados internacionales ratificados por la República Argentina expuestos precedentemente, rige en la materia la Ley N° 20.284, sancionada en el año 1973, cuya Autoridad de Aplicación a nivel nacional es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Tiene como objetivo estructurar y ejecutar un programa de carácter nacional que involucre todos los aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención y control de la contaminación atmosférica. En ella, se encomienda a la autoridad nacional fijar las normas de calidad del aire y las concentraciones de contaminantes correspondientes a los estados del Plan de Prevención de Situaciones Críticas de Contaminación Atmosférica (art. 6, L. 20.284), y los niveles máximos de emisión de fuentes móviles (art. 8, L. 20.284).

Asimismo, atribuye a las autoridades locales la facultad de establecer para cada zona los niveles máximos de emisión de los distintos tipos de fuentes fijas, declarar la existencia y fiscalizar el cumplimiento del plan de Prevención de Situaciones Críticas de Contaminación Atmosférica (art.8, L. 20.284).

En el caso de emisión de fuentes contaminantes que tengan influencia en zonas sometidas a más de una jurisdicción, se establece que entenderá en la aplicación de esta ley una Comisión Interjurisdiccional.

Cabe señalar que la Provincia de La Pampa mediante la sanción de la Ley N° 1693, adhirió a la Ley Nacional N° 20.284, y determina como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Ecología y al Ministerio de Bienestar Social de la Provincia, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones (art. 2, L. 1693).

Por otra parte, en materia de prevención de la contaminación atmosférica, rigen las disposiciones de la Ley N° 24.449, y su reglamentación aprobada por Decreto N° 773/92, y Decreto N° 779/95, marco regulatorio aplicable a nivel nacional en materia de tránsito, transporte y seguridad vial.

Las infracciones a la Ley N° 20.284, serán pasibles de las sanciones que establece el artículo 26, las que podrán imponerse independientemente o conjuntamente, según la gravedad de la infracción, y son las siguientes: multa, clausura temporal o definitiva de la fuente contaminante, inhabilitación temporal o definitiva del permiso de circulación –cuando se trate de unidades de transporte aéreo, terrestre, marítimo o fluvial.

A los fines de la graduación de la sanción, cada una de las fuentes será considerada en forma independiente y por separado, siendo pasible de las mismas la entidad comercial o civil o la persona física responsable (art. 27, L. 20.284).

Cuando la infracción se produzca estando en vigencia alguno de los estados del Plan de Prevención de Situaciones Críticas, las multas podrán ser elevadas al doble graduándoselas según la gravedad del estado de que se trate (art. 28, L. 20.284).

La pena de inhabilitación temporaria o definitiva de los permisos de circulación, podrá ser aplicada cualquiera sea la autoridad administrativa que la haya otorgado (art. 29, L. 20.284).

En materia de reincidencia por considerarse una circunstancia agravante, en el artículo 31 prevé para tales casos, una sanción que no podrá ser inferior al duplo del mínimo establecido para la infracción de que se trate, pudiendo aplicarse además las otras sanciones previstas, guardando la debida proporcionalidad con la sanción o las sanciones anteriores y hasta el máximo fijado por las disposiciones pertinentes.

Por último, se exponen en este Capítulo a modo de tabla, las normas de calidad de aire que figuran en el Anexo III de la Ley.

8.7.2. Normas de Calidad del Aire. Anexo II – Ley N° 20.284

CONTAMINANTE (unidad)	NORMA CALIDAD DE AIRE	ALERTA	ALARMA	EMERGENCIA
CO (1) (ppm)	10 ppm – 8 horas 50 ppm – 1 hora	15 ppm – 8 horas 100 ppm – 1 hora	30 ppm – 8 horas 120 ppm – 1 hora	50 ppm – 8 horas 150 ppm – 1 hora
NO x (2) (ppm)	0,45 ppm – 1 hora	0,6 ppm – 1 hora 0,15 ppm – 24 horas	1,2 ppm – 1 hora 0,3 ppm – 24 horas	0,4 ppm – 24 horas
SO ₂ (3) (ppm)	0,03 ppm (70 ug/m ³) (promedio mensual)	1 ppm – 1 hora 0,3 ppm – 8 horas	5 ppm – 1 hora	10 ppm – 1 hora
O ₃ (y oxidantes en general (4) (ppm)	0,10 ppm – 1 hora	0,15 ppm – 1 hora	0,25 ppm – 1 hora	0,40 ppm – 1 hora
Partículas en suspensión (mg/m ³) (5)	150 ug/m ³ (promedio mensual)	No aplicable	No aplicable	Idem
Partículas sedimentables (6) (mg/cm ² 30 días)	1,0 mg/cm ² 30 días	Idem	Idem	Idem

Por Resolución N° 708/96, se establece adoptar para la extracción de muestras de gases y de la medición de su concentración en chimeneas, con respecto a los compuestos especificados en el Anexo I , las siguientes normas internacionales, a saber:

- ISO standard Compendium – Environment Air Quality, ISO Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization), edición 1994.
- Códigos de Regulación Federal del Ambiente, Salud y Seguridad, EE.UU (Environmental, Health and Safety Code of Federal Regulation, USA), EPA - Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency), 40 CFR -Título 40- Protección del Ambiente Federal (Title 40 Environment)del Código de Regulación Federal (Code of Federal Regulation), Pt. 60 -Parte 60 Estándares de comportamiento para fuentes nuevas estacionarias. (Part 60 - Standards of performance for new stationary sources) App..A -Apéndice A Appendix A), Meth.-Métodos de análisis y procedimientos (Test Methods), edición 1994.
- JIS - Estándar de la Industria Japonesa (Japanese Industrial Standard). La norma de análisis prevé en su artículo 2° la actualización bianual de las citadas normas internacionales, “según lo exija el desarrollo científico, tecnológico y ambiental, o en un período menor en caso de que organismos nacionales o internacionales aprobaran métodos de medición que signifiquen importantes avances en la materia”.

8.8. Normativa Aplicable en Materia de Seguridad e Higiene y Medicina Laboral

La Autoridad de Aplicación local debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad, higiene y medicina laboral – a saber: Ley N° 19.587, Decreto reglamentario N° 351/79, modificado por el Decreto N° 1338/96 y normas complementaria – respecto del personal a cargo de la prestación del servicio de higiene urbana, durante las tareas de recolección, transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos.

8.8.1. Ruidos y vibraciones

En materia de contaminación sonora en los ambientes de trabajo, el Decreto N° 351/79 regula su prevención en el Título III, Capítulo 13, y en el Anexo V, que integra la reglamentación de análisis.

El apartado 2 del Anexo V del Decreto N° 351/79, prescribe acerca de la dosis máxima admisible de niveles de ruido.

Siguiendo el citado texto legal, ningún trabajador podrá estar expuesto a una dosis superior a 90 dB(A) de nivel sonoro continuo equivalente, para una jornada de 8 hs. y 48 hs. semanales.

Asimismo, se establece que por encima de 115 dB (A) no se permitirá ninguna exposición sin protección individual ininterrumpida mientras dure la agresión sonora.

En lo atinente a protección contra la contaminación proveniente de ruidos, la norma prescribe que en niveles mayores de 135 db (A) no se permitirá el trabajo ni aun con el uso obligatorio de protectores individuales.

Para el caso que el nivel sonoro continuo equivalente supere en el ámbito de trabajo la dosis establecida en el Anexo V, a los efectos de su reducción se deberán adoptar las correcciones que enuncia y en el orden que dispone el artículo 87 del Decreto N° 351/79, a saber:

- 1. Procedimientos de ingeniería, ya sea en la fuente en las vías de transmisión o en el recinto receptor*
- 2. Protección auditiva al trabajador*
- 3. De no ser suficiente las correcciones indicadas precedentemente, se procederá a la reducción de los tiempos de exposición*

Si por razones debidamente fundadas ante la autoridad de aplicación no fuere posible cumplir con las disposiciones previamente enunciadas, se establecerá la obligatoriedad del uso de protectores auditivos por toda persona expuesta (conf. art. 88, D.R. 351/79).

Asimismo, el artículo 89 de la reglamentación prescribe que *“en aquellos ambientes de trabajo sometidos a niveles sonoros por encima de la dosis máxima permisible y que por razones debidamente fundadas ante la autoridad competente hagan impracticable lo establecido en el artículo 87, incisos 1 y 2, se dispondrá la reducción de los tiempos de exposición de acuerdo con lo especificado en el Anexo V”*.

Por su parte, el Anexo V del Decreto N° 351/79 contiene disposiciones que deberán ser observadas, relativas a los siguientes aspectos: requisitos del instrumental a utilizarse para la medición de ruidos (apart. 3); técnicas de medición del nivel sonoro (apart. 4); cálculo y procedimiento de cálculo de nivel sonoro de ruidos no impulsivos (apart. 5); cálculo de nivel sonoro de ruidos de impacto (apart. 6); cálculo de nivel sonoro de ruidos impulsivos (apart. 7); infrasonidos y ultrasonidos (apart. 8); trabajos de mantenimiento (apart. 9); vibraciones; y procedimiento de cálculo del nivel sonoro continuo equivalente (apart. 10).

8.8.2. Provisión de Agua Potable

Según se establece en el artículo 57, Capítulo VI, D.R. 351/79, se deberá contar con provisión de agua para uso humano, la que deberá ser sometida a análisis bacteriológicos -cada seis meses-, físicos y químicos -en forma anual-. Asimismo, se deben respetar las especificaciones que establece el Anexo I de la Res. (MTySS) N° 523/96, modificatoria del art. 58, Cap. 6 del D.R. 351/79.

8.8.3. Contaminación Ambiental

Todo lugar de trabajo en el que se efectúan procesos que produzcan la contaminación del ambiente con gases, vapores, humos, nieblas, polvos, fibras, aerosoles o emanaciones de cualquier tipo, deberá disponer de dispositivos destinados a evitar que dichos contaminantes alcancen niveles que puedan afectar la salud del trabajador (cfr. Cap. IX, D.R. 351/79).

8.8.4. Máquinas y Herramientas

Las máquinas y herramientas utilizadas en plantas de reciclaje, tratamiento, transferencia y/o centros de disposición de residuos sólidos urbanos deberán ser seguras y en caso de que originen riesgos, no podrán emplearse sin la protección adecuada. Deberán cumplirse las disposiciones contenidas en el Capítulo XV del Decreto Reglamentario N° 351/79.

8.8.5. Protección contra Incendios

En las instalaciones destinadas a plantas de reciclaje, tratamiento y/o centros de transferencia y disposición de residuos sólidos urbanos, como así también los vehículos destinados a la recolección y transporte de los mismos, deben contar con equipamiento de protección contra incendios, y cumplir las disposiciones que prevé el Capítulo XVIII del D.R. 351/79.

Los objetivos a cumplimentar son:

- 1) Dificultar la iniciación de incendios.
- 2) Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos.

- 3) Asegurar la evacuación de las personas.
- 4) Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos.
- 5) Proveer las instalaciones de detección y extinción.

8.8.6. Provisión de Equipo de Protección Personal

Los operarios destinados al servicio de higiene urbana deben realizar sus tareas munidos del correspondiente equipo y elementos de protección personal, en observancia de las disposiciones del D.R. 351/79 (Tít. VI, Cap. XIX).

8.8.7 Capacitación del Personal

El D. R. 351/79 en el Capítulo XXI establece la obligación de capacitar al personal en materia de higiene y seguridad, en prevención de enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo, de acuerdo a las características y riesgos propios, generales y específicos de las tareas que desempeña.

8.9. Ley de Riesgos del Trabajo

La Ley Nacional de Riesgos del Trabajo, Ley N° 24.557, Decreto Reglamentario N° 170/96, sus normas modificatorias y complementarias, conforman el marco regulatorio que establece el nuevo sistema integral de prevención de riesgos del trabajo (SIPRIT), y el régimen legal de las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART).

La Autoridad de Aplicación del plexo normativo de riesgos, es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (conf. art. 35, L. N° 24.557).

La Autoridad de Aplicación local, debe velar que los operarios del sector se encuentren comprendidos en el citado régimen legal, durante las diferentes etapas de la prestación del servicio de higiene urbana.

8.10. Ley N° 25.916 de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios. Texto.

8.10.1 Capítulo I

Disposiciones generales

ARTICULO 1º — Las disposiciones de la presente ley establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas.

ARTICULO 2º — Denomínese residuo domiciliario a aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados.

ARTICULO 3º — Se denomina gestión integral de residuos domiciliarios al conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población.

La gestión integral de residuos domiciliarios comprende de las siguientes etapas: generación, disposición inicial, recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final.

- a) Generación: es la actividad que comprende la producción de residuos domiciliarios.
- b) Disposición inicial: es la acción por la cual se depositan o abandonan los residuos; es efectuada por el generador, y debe realizarse en la forma que determinen las distintas jurisdicciones.

La disposición inicial podrá ser:

- 1. General: sin clasificación y separación de residuos.
- 2. Selectiva: con clasificación y separación de residuos a cargo del generador.

- c) Recolección: es el conjunto de acciones que comprende el acopio y carga de los residuos en los vehículos recolectores. La recolección podrá ser:

- 1. General: sin discriminar los distintos tipos de residuo.
- 2. Diferenciada: discriminando por tipo de residuo en función de su tratamiento y valoración posterior.

- d) Transferencia: comprende las actividades de almacenamiento transitorio y/o acondicionamiento de residuos para su transporte.

- e) Transporte: comprende los viajes de traslado de los residuos entre los diferentes sitios comprendidos en la gestión integral.

- f) Tratamiento: comprende el conjunto de operaciones tendientes al acondicionamiento y valorización de los residuos.

Se entiende por acondicionamiento a las operaciones realizadas a fin de adecuar los residuos para su valorización o disposición final.

Se entiende por valorización a todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, mediante el reciclaje en sus formas física, química, mecánica o biológica, y la reutilización.

- g) Disposición final: comprende al conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito permanente de los residuos domiciliarios, así como de las fracciones de rechazo inevitables resultantes de los métodos de tratamiento adoptados. Asimismo,

quedan comprendidas en esta etapa las actividades propias de la clausura y postclausura de los centros de disposición final.

ARTICULO 4º — Son objetivos de la presente ley:

- a) Lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población;
- b) Promover la valorización de los residuos domiciliarios, a través de la implementación de métodos y procesos adecuados;
- c) Minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente;
- d) Lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final.

8.10.2. Capítulo II

Autoridades competentes

ARTICULO 5º — Serán autoridades competentes de la presente ley los organismos que determinen cada una de las jurisdicciones locales.

ARTICULO 6º — Las autoridades competentes serán responsables de la gestión integral de los residuos domiciliarios producidos en su jurisdicción, y deberán establecer las normas complementarias necesarias para el cumplimiento efectivo de la presente ley.

Asimismo, establecerán sistemas de gestión de residuos adaptados a las características y particularidades de su jurisdicción, los que deberán prevenir y minimizar los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.

ARTICULO 7º — Las autoridades competentes podrán suscribir convenios bilaterales o multilaterales, que posibiliten la implementación de estrategias regionales para alguna o la totalidad de las etapas de la gestión integral de los residuos domiciliarios.

ARTICULO 8º — Las autoridades competentes promoverán la valorización de residuos mediante la implementación de programas de cumplimiento e implementación gradual.

8.10.3. Capítulo III

Generación y Disposición inicial

ARTICULO 9. — Denominase generador, a los efectos de la presente ley, a toda persona física o jurídica que produzca residuos en los términos del artículo 2º. El generador tiene la obligación de realizar el acopio inicial y la disposición inicial de los residuos de acuerdo a las normas complementarias que cada jurisdicción establezca.

ARTICULO 10. — La disposición inicial de residuos domiciliarios deberá efectuarse mediante métodos apropiados que prevengan y minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.

ARTICULO 11. — Los generadores, en función de la calidad y cantidad de residuos, y de las condiciones en que los generan se clasifican en:

- a) Generadores individuales.
- b) Generadores especiales.

Los parámetros para su determinación serán establecidos por las normas complementarias de cada jurisdicción.

ARTICULO 12. — Denomínase generadores especiales, a los efectos de la presente ley, a aquellos generadores que producen residuos domiciliarios en calidad, cantidad y condiciones tales que, a criterio de la autoridad competente, requieran de la implementación de programas particulares de gestión, previamente aprobados por la misma.

Denomínase generadores individuales, a los efectos de la presente ley, a aquellos generadores que, a diferencia de los generadores especiales, no precisan de programas particulares de gestión.

8.10.4. Capítulo IV

Recolección y transporte

ARTICULO 13. — Las autoridades competentes deberán garantizar que los residuos domiciliarios sean recolectados y transportados a los sitios habilitados mediante métodos que prevengan y minimicen los impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población. Asimismo, deberán determinar la metodología y frecuencia con que se hará la recolección, la que deberá adecuarse a la cantidad de residuos generados y a las características ambientales y geográficas de su jurisdicción.

ARTICULO 14. — El transporte deberá efectuarse en vehículos habilitados, y debidamente acondicionados de manera de garantizar una adecuada contención de los residuos y evitar su dispersión en el ambiente.

8.10.5. Capítulo V

Tratamiento, Transferencia y Disposición final

ARTICULO 15. — Denomínase planta de tratamiento, a los fines de la presente ley, a aquellas instalaciones que son habilitadas para tal fin por la autoridad competente, y en las cuales los residuos domiciliarios son acondicionados y/o valorizados. El rechazo de los procesos de valorización y todo residuo domiciliario que no haya sido valorizado, deberá tener como destino un centro de disposición final habilitado por la autoridad competente.

ARTICULO 16. — Denomínase estación de transferencia, a los fines de la presente ley, a aquellas instalaciones que son habilitadas para tal fin por la autoridad competente, y en las cuales los residuos domiciliarios son almacenados transitoriamente y/o acondicionados para su transporte.

ARTICULO 17. — Denomínase centros de disposición final, a los fines de la presente ley, a aquellos lugares especialmente acondicionados y habilitados por la autoridad competente para la disposición permanente de los residuos.

ARTICULO 18. — Las autoridades competentes establecerán los requisitos necesarios para la habilitación de los centros de disposición final, en función de las características de los residuos domiciliarios a disponer, de las tecnologías a utilizar, y de las características ambientales locales. Sin perjuicio de ello, la habilitación de estos centros requerirá de la aprobación de una Evaluación de Impacto Ambiental, que contemple la ejecución de un Plan de Monitoreo de las principales variables ambientales durante las fases de operación, clausura y postclausura.

ARTICULO 19. — Para la operación y clausura de las plantas de tratamiento y de las estaciones de transferencia, y para la operación, clausura y postclausura de los centros de disposición final, las autoridades competentes deberán autorizar métodos y tecnologías que prevengan y minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.

ARTICULO 20. — Los centros de disposición final deberán ubicarse en sitios suficientemente alejados de áreas urbanas, de manera tal de no afectar la calidad de vida de la población; y su emplazamiento deberá determinarse considerando la planificación territorial, el uso del suelo y la expansión urbana durante un lapso que incluya el período de postclausura. Asimismo, no podrán establecerse dentro de áreas protegidas o sitios que contengan elementos significativos del patrimonio natural y cultural.

ARTICULO 21. — Los centros de disposición final deberán ubicarse en sitios que no sean inundables. De no ser ello posible, deberán diseñarse de modo tal de evitar su inundación.

8.10.6. Capítulo VI

Coordinación interjurisdiccional

ARTICULO 22. — El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) a los fines de la presente ley, y en cumplimiento del Pacto Federal Ambiental actuará como el organismo de coordinación interjurisdiccional, en procura de cooperar con el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

ARTICULO 23. — El organismo de coordinación tendrá los siguientes objetivos:

- a) Consensuar políticas de gestión integral de los residuos domiciliarios.
- b) Acordar criterios técnicos y ambientales a emplear en las distintas etapas de la gestión integral.
- c) Consensuar, junto a la Autoridad de Aplicación, las metas de valorización de residuos domiciliarios.

8.10.7. Capítulo VII

Autoridad de aplicación

ARTICULO 24. — Será autoridad de aplicación, en el ámbito de su jurisdicción, el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que determine el Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 25. — Serán funciones de la autoridad de aplicación:

- a) Formular políticas en materia de gestión de residuos domiciliarios, consensuadas en el seno del COFEMA.
- b) Elaborar un informe anual con la información que le provean las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, el que deberá, como mínimo, especificar el tipo y cantidad de residuos domiciliarios que son recolectados, y además, aquellos que son valorizados o que tengan potencial para su valorización en cada una de las jurisdicciones.
- c) Fomentar medidas que contemplen la integración de los circuitos informales de recolección de residuos.
- d) Promover programas de educación ambiental, conforme a los objetivos de la presente ley.
- e) Proveer asesoramiento para la organización de programas de valorización y de sistemas de recolección diferenciada en las distintas jurisdicciones.
- f) Promover la participación de la población en programas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos.
- g) Fomentar, a través de programas de comunicación social y de instrumentos económicos y jurídicos, la valorización de residuos, así como el consumo de productos en cuya elaboración se emplee material valorizado o con potencial para su valorización.
- h) Promover e incentivar la participación de los sectores productivos y de comercio de bienes en la gestión integral de residuos.
- i) Impulsar y consensuar, en el ámbito del COFEMA, un programa nacional de metas cuantificables de valorización de residuos de cumplimiento progresivo; el cual deberá ser revisado y actualizado periódicamente.

8.10.8. Capítulo VIII

De las infracciones y sanciones

ARTICULO 26. — El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley o de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que pudieran corresponder, será sancionado con:

- a) Apercibimiento.
- b) Multa de diez (10) hasta doscientos (200) sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la Administración Pública Nacional.
- c) Suspensión de la actividad de treinta (30) días hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso.
- d) Cese definitivo de la actividad y clausura de las instalaciones, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso.

ARTICULO 27. — Las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán previa instrucción sumaria que asegure el derecho de defensa, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción y el daño ocasionado.

ARTICULO 28. — En caso de reincidencia, los máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 26 podrán multiplicarse por una cifra igual a la cantidad de reincidencias aumentada en una unidad.

ARTICULO 29. — Se considerará reincidente al que, dentro del término de tres (3) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción de idéntica o similar causa.

ARTICULO 30. — Las acciones para imponer sanciones previstas en la presente ley prescriben a los cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la infracción o que la autoridad competente hubiere tomado conocimiento de la misma, la que sea más tardía.

ARTICULO 31. — Lo ingresado en concepto de multas a que se refiere el artículo 26, inciso b) serán percibidas por las autoridades competentes, según corresponda, para conformar un fondo destinado, exclusivamente, a la protección y restauración ambiental en cada una de las jurisdicciones.

ARTICULO 32. — Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en el presente capítulo.

8.10.9. Capítulo IX

Plazos de adecuación

ARTICULO 33. — Establecerse un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para la adecuación de las distintas jurisdicciones a las disposiciones establecidas en esta ley respecto de la disposición final de residuos domiciliarios. Transcurrido ese plazo, queda prohibida en todo el territorio nacional la disposición final de residuos domiciliarios que no cumpla con dichas disposiciones.

ARTICULO 34. — Establecerse un plazo de 15 años, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para la adecuación de las distintas jurisdicciones al conjunto de disposiciones establecidas en esta ley. Transcurrido ese plazo, queda prohibida en todo el territorio nacional la gestión de residuos domiciliarios que no cumpla con dichas disposiciones.

8.10.10. Capítulo X

Disposiciones Complementarias

ARTICULO 35. — Las autoridades competentes deberán establecer, en el ámbito de su jurisdicción, programas especiales de gestión para aquellos residuos domiciliarios que por sus características particulares de peligrosidad, nocividad o toxicidad, puedan presentar riesgos significativos sobre la salud humana o animal, o sobre los recursos ambientales.

ARTICULO 36. — Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán brindar a la Autoridad de Aplicación la información sobre el tipo y cantidad de residuos domiciliarios recolectados en su jurisdicción, así como también aquellos que son valorizados o que tengan potencial para su valorización.

ARTICULO 37. — Se prohíbe la importación o introducción de residuos domiciliarios provenientes de otros países al territorio nacional.

ARTICULO 38. — La presente ley es de orden público.

ARTICULO 39. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

Decreto Nº 1.158/2004

VISTO el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.916 sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el día 4 de agosto de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que el citado Proyecto de Ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la "Gestión integral de residuos domiciliarios".

Que el Capítulo VII del Proyecto de Ley regula lo atinente a su Autoridad de aplicación, estableciéndose, en el artículo 24, que será autoridad de aplicación, en el ámbito de su jurisdicción, el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que determine el Poder Ejecutivo Nacional.

Que, tratándose de una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, no cabe contraponer, en orden a la ejecución de la ley, la jurisdicción de las autoridades locales (denominadas autoridades "competentes" en el texto de cuya promulgación se trata) a la jurisdicción del Gobierno Federal, normalmente circumscripita a supuestos de afectación interjurisdiccional del

ambiente y al ámbito físico de los establecimientos y otros lugares sometidos a jurisdicción nacional.

Que, en efecto, la Constitución ha reservado la competencia para ejecutar las leyes de presupuestos mínimos a las jurisdicciones locales; al Gobierno Federal, a través de su autoridad ambiental, le corresponde aplicar la ley de presupuestos mínimos no en el sentido estricto de ejecutar una ley federal, sino en un sentido institucional y político — consustanciado con el espíritu del tercer párrafo de la cláusula ambiental de la Constitución —, desarrollando funciones que, como las enumeradas en el artículo 25 del proyecto de ley en cuestión, se relacionan con la formulación de políticas ambientales de carácter nacional, antes que con la ejecución administrativa de las cláusulas de la ley.

Que, además de esa importante razón conceptual y de hermenéutica constitucional, si el texto se promulgara conteniendo la expresión "...en el ámbito de su jurisdicción..." daría lugar a equívocos en su cumplimiento, pues las funciones especificadas en el artículo 25 podrían interpretarse como circunscriptas a aquellos supuestos en los que hubiera afectación interjurisdiccional del ambiente o en los que las actividades reguladas en el proyecto de ley se desarrollaran en establecimientos o lugares sometidos a jurisdicción nacional.

Que el Capítulo VIII del Proyecto de Ley se refiere a las infracciones y sanciones.

Que, en dicho marco, fijar el plazo de prescripción para las acciones sancionatorias de las autoridades competentes locales, como lo hace el artículo 30, se considera como invadiendo la competencia que se han reservado las provincias de definir sus instituciones de Derecho Administrativo. Aunque la competencia delegada a la Nación para dictar presupuestos mínimos de protección ambiental incluye la potestad de establecer, como principio de política ambiental nacional, que las infracciones a los presupuestos mínimos entrañarán responsabilidad en el orden administrativo, es del estricto resorte provincial, con motivo del dictado de las normas "complementarias" a que alude el tercer párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional, fijar el plazo de prescripción de las respectivas acciones sancionatorias. Si se tratara de figuras penales, la Nación podría fijar un plazo de prescripción (art. 75, inc. 12, Const. Nac.), pero no sucede ello con las penalidades administrativas, que pertenecen al ámbito del Derecho Administrativo, el cual es de naturaleza local.

Que el Capítulo IX del Proyecto de Ley se refiere a los plazos máximos con los que contarán las jurisdicciones locales para adecuar a las disposiciones establecidas en la ley la gestión integral de residuos domiciliarios que se lleva a cabo en ellas; según el artículo 33, dicho plazo será de DIEZ (10) años en materia de disposición final de residuos domiciliarios y, según el artículo 34, el plazo será de QUINCE (15) años para las restantes etapas de la gestión integral de los residuos.

Que los plazos contemplados en dichas previsiones se oponen al principio de congruencia establecido en el artículo 4º de la Ley General de Ambiente N° 25.675, conforme al cual la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijados en dicha ley y en toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental nacional, como es el caso de una ley sectorial de presupuestos mínimos.

Que, por otra parte, siendo las leyes de presupuestos mínimos de orden público y, además, comportando los presupuestos mínimos una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional que tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental (v. art. 6º, Ley Nº 25.675), se advierte que no resulta adecuado establecer plazos máximos que puedan diferir su cumplimiento cuando corresponde a las jurisdicciones locales dictar las normas complementarias y de ejecución pertinentes para asegurar a sus respectivos habitantes el goce efectivo de aquella tutela ambiental.

Que el artículo 37 del Proyecto de Ley —dentro del Capítulo X sobre disposiciones complementarias — prohíbe la importación o introducción de residuos domiciliarios provenientes de otros países al territorio nacional.

Que la importación o introducción de residuos domiciliarios provenientes de otros países se halla actualmente prohibida dentro de los términos del Decreto Nº 181 de fecha 24 de enero de 1992. La SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE del MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE es autoridad de aplicación de dicho decreto, a los fines de autorizar el ingreso de aquellos residuos que, por estar amparados en certificaciones de inocuidad ambiental y sanitaria, no representan un peligro o un riesgo para el ambiente, la calidad de vida de las personas y los recursos naturales.

Que una prohibición absoluta de importación tendría un impacto negativo en el sector industrial del país que, hasta ahora, y de acuerdo con la normativa vigente, ha importado en cantidad y calidad muy significativas residuos no peligrosos como insumos de procesos industriales.

Que aunque una prohibición absoluta de ingreso tendría la ventaja de promover un mayor desarrollo del reciclado de residuos locales, importantes limitaciones tecnológicas y económicas impedirían hacerlo en el corto plazo, lo cual redundaría en un perjuicio para el sector industrial antes mencionado, perjuicio que no resulta ser ambientalmente exigible en atención a que los residuos que actualmente se importan y utilizan al amparo del Decreto Nº 181/92, son inocuos ambiental y sanitariamente, no comprometiéndolo el bien jurídico protegido en el proyecto legislativo en cuestión, que es el ambiente y la calidad de vida de la población.

Que, por ende, observar lo dispuesto en el artículo 37 del Proyecto de Ley Nº 25.916 no implicaría dejar autorizado, en términos generales, el ingreso o importación de residuos domiciliarios, sino mantener vigente un régimen de prohibición más razonable y sustentable.

Que la presente medida no altera el espíritu ni la unidad del proyecto de Ley sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para dictar el presente en virtud de lo dispuesto por el artículo 80 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

Artículo 1º — Observase, en el artículo 24 del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 25.916, la expresión "...en el ámbito de su jurisdicción...".

Art. 2º — Obsérvense los artículos 30, 33, 34 y 37 del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 25.916.

Art. 3º — Con las salvedades establecidas en los artículos anteriores, cúmplase, promúlgase y téngase por Ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 25.916.

Art. 4º — Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. — Roberto Lavagna. — Ginés M. González García. — Julio M. De Vido. — Aníbal D. Fernández. — Daniel F. Filmus. — José J. B. Pampuro. — Horacio D. Rosatti. — Alicia M. Kirchner. — Carlos A. Tomada.

9. NORMATIVA APLICABLE ANIVEL PROVINCIAL – Provincia de La Pampa

LEY N° 1914
LEY AMBIENTAL PROVINCIAL
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE LA PAMPA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

9.1. TÍTULO I

9.1.1 Capítulo Único OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º. La presente Ley, en el marco del artículo 18 de la Constitución de la Provincia de La Pampa, tiene como objeto la protección, conservación, defensa y mejoramiento de los recursos naturales y del ambiente en el ámbito provincial, a través de la definición de políticas y acciones, la compatibilización de la aplicación de las normas sectoriales de naturaleza ambiental y la coordinación de las áreas de gobierno intervinientes en la gestión ambiental, promoviendo la participación ciudadana.

9.2. TÍTULO II

9.2.1. Capítulo I DISPOSICIONES GENERALES De la política ambiental

Artículo 2- El Poder Ejecutivo Provincial y los municipios que adhieran al régimen de la presente Ley garantizarán, en la ejecución de sus políticas de gobierno, la aplicación de los siguientes principios de política ambiental:

- a- El uso y aprovechamiento de los recursos naturales, en el marco de un proceso de crecimiento económico compatible con la preservación del ambiente (Desarrollo Sustentable), debe efectuarse conforme los criterios de:
 - Unidad de gestión
 - Tratamiento integral
 - Economía del recurso
 - Descentralización operativa
 - Coordinación entre los organismos de aplicación involucrados en el manejo de los mismos
 - Participación de los usuarios.
- b -Todo emprendimiento, público o privado, cuyas acciones u obras sean susceptibles de producir efectos negativos sobre el ambiente, debe contar con una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa.

- c- El Poder Ejecutivo Provincial a través de sus organismos competentes y los municipios, deben fiscalizar todas las acciones que puedan producir un menoscabo al ambiente, a la utilización racional de los recursos naturales y a la preservación del patrimonio natural y la diversidad biológica y procederán a ejecutar según el caso:
 - Acciones de carácter preventivo
 - Exigir a los responsables la reparación de los daños causado y su restauración mediante la reposición de las cosas a su estado anterior, siempre que sea posible reparar en especie el daño.
 - Exigir a los responsables la reparación pecuniaria por los daños ocasionados.
- d- La planificación del desarrollo agropecuario, urbano e industrial, deberá tener en cuenta. entre otras cuestiones, los límites físicos del área, la situación socioeconómica de la región y el impacto ambiental de las acciones a emprender.
- e- La educación ambiental debe incluirse en todos los niveles del sistema educativo, bajo pautas orientadas a la formación de individuos responsables con el medio ambiente.
- f- Se instrumentará, a través de la autoridad de aplicación, el Sistema Provincial de Información Ambiental, coordinando su implementación con los municipios y los demás organismos de la Administración Pública Provincial.

9.2.2. Capítulo II

De los instrumentos de política ambiental

De la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

Artículo 3- Todos los proyectos de obras y acciones públicas o privadas, capaces de modificar directa o indirectamente el ambiente del territorio provincial, que se enuncian en el Anexo 1, deberán obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). expedida por la Subsecretaría de Ecología, previa resolución del Ente de Políticas Ecológicas de la Provincia.

Facultase al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la autoridad de aplicación. a introducir modificaciones al Anexo 1 y a pedido de interesada. en función de la entidad del impacto obra o acción a desarrollar, eximir de la presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en cuyo caso, el responsable de la obra o acción cumplimentara una declaración jurada y/O informe ambiental. cuyos contenidos se establecerán por vía reglamentaria.-

Artículo 4- La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) será exigida por los organismos centralizados o descentralizados de la Administración Pública Provincial y/o Municipal con competencia en la obra y/o acción.

Queda prohibida en el territorio de la Provincia, la autorización administrativa y la ejecución de acciones que no cumplan dicho recaudo, bajo la pena de aplicación de las sanciones previstas por la presente Ley y sin perjuicio de la nulidad de la actuaciones administrativas que se hubiesen iniciado haciendo responsable al funcionario autorizante bajo tales circunstancias.

Artículo 5- El responsable de la obra y/o acción a emprender deberá presentar, integrando su propuesta, una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ante el organismo provincial o municipal encargado de autorizar el emprendimiento. Dicho organismo provincial o municipal, con el informe técnico correspondiente, deberá remitir todos los antecedentes obrantes en su poder a la Subsecretaría de Ecología a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Las ampliaciones y/o cambios de actividad y/o los traslados a otras localizaciones, serán consideradas nuevas actividades y por lo tanto, susceptibles de exigencia de una nueva Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Artículo 6-. La Subsecretaría de Ecología convocará al Ente de Políticas Ecológicas, creado por Decreto N° 1.921/96, sometiendo a consideración y aprobación del mismo el proyecto presentado.

Artículo 7- A los efectos previstos en el artículo anterior emitirán su opinión técnica todas las áreas representadas en el Ente de Políticas Ecológicas y aquellas que sean convocadas especialmente atento las cuestiones involucradas. El Ente de Políticas Ecológicas podrá recabar la opinión técnica de personas idóneas en el tema de que se trate, de Universidades, Centros de Estudios y de Investigación, Cámaras Empresariales, Colegios Profesionales y demás entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, respecto de los informes de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se presenten.

Artículo 8- El Ente de Políticas Ecológicas, a través de la Subsecretaría de Ecología convocará a una audiencia pública, con la participación de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, estatales o no, potencialmente afectadas por la realización del proyecto y/o acción y a las organizaciones no gubernamentales interesadas en la presentación de los valores ambientales que esta ley protege.

Se pondrán a disposición de los interesados todos los antecedentes del caso, la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) presentada, los dictámenes técnicos emitidos y toda la documentación que pueda resultar de interés.

Artículo 9- Crease el registro provincial de Consultoras y/o Profesionales Especializados en Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el cual funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Ecología, requisito obligatorio para la presentación de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) de la actividad privada.

Artículo 10.- Cumplidos los pasos previstos en los artículos anteriores el Ente de Políticas Ecológicas analizará toda la documentación obrante en su poder, emitiendo un dictamen técnico del que resultará la autorización o el rechazo de la EIA que se presenten.

Artículo 11- La Subsecretaría de Ecología, conforme lo resuelto por el Ente de Políticas Ecológicas, emitirá la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) disponiendo según el caso: Autorizar la realización de la obra o acción en los términos y condiciones establecidos en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) presentada.

- Autorizar la realización de la obra o acción proyectada pero condicionada al cumplimiento de las instrucciones que disponga el Ente de Políticas Ecológicas
- Negar la autorización.-

Se remitirá la DIA con la documentación recibida al organismo de origen para notificar al interesado.

Artículo 12.- La reglamentación de la presente Ley establecerá los plazos y modalidades del procedimiento para obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en general y en especial el desarrollo de las audiencias públicas.

Artículo 13.- Para aquellas obras y/o acciones que se enuncian en el Anexo 1 de la presente Ley y aquellas que a su criterio lo ameriten y cuya iniciación sea anterior a la puesta en vigencia de ésta, la autoridad de aplicación podrá exigir, según la naturaleza de la obra y/o acción, Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) u otros mecanismos de contralor.

Del planeamiento y ordenamiento ambiental

Artículo 14.- En la localización de actividades productivas de bienes y/o servicios en el aprovechamiento de los recursos naturales y en la localización y regulación de los asentamientos humanos deberá tenerse en cuenta:

- a) El ordenamiento ambiental del territorio.
- b) La naturaleza y características de cada bioma
- c) La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos, la distribución de la población y sus características geo-económicas en general, y
- d) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales.-

Artículo 15.- Lo prescripto en el artículo anterior será aplicable:

- 1) En lo que hace al desarrollo de actividades productivas de bienes y/o servicios y aprovechamiento de recursos naturales:
 - a) Para la realización de obras públicas.
 - b) Para las autorizaciones de construcción y operación de plantas o establecimientos industriales, comerciales o de servicios.
 - c) Para las autorizaciones relativas al uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, o primarias en general.
 - d) Para el financiamiento de actividades mencionadas en el inciso anterior a los efectos de inducir su adecuada localización.
 - e) Para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones, o permisos para el uso y aprovechamiento de aguas, y
 - f) Para el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para el aprovechamiento de las especies de flora y fauna silvestre.
- 2) En lo referente a la localización y regulación de los asentamientos humanos:
 - a) Para la fundación de nuevos centros de población y la determinación de los usos y destinos del suelo urbano y rural.
 - b) Para los programas de gobierno y su financiamiento destinado a infraestructura, equipamiento urbano y viviendas, y
 - c) Para la determinación de parámetros y normas de diseño, tecnologías de construcción y uso de viviendas.

Del Sistema Provincial de Información ambiental

Artículo 16.- Las entidades oficiales tendrán la obligación de suministrar a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que así lo soliciten, la información de que dispongan en materia de medio ambiente, recursos naturales y de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Dicha información sólo podrá ser denegada cuando la entidad le asigne carácter confidencial.

Artículo 17.- El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Subsecretaría de Ecología, instrumentará el Sistema Provincial de Información Ambiental, coordinando su implementación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental de la Nación, las demás áreas del gobierno provincial y los municipios. El Sistema deberá reunir toda la información existente en materia ambiental proveniente del sector público y privado, y constituirá una base de datos interdisciplinaria accesible a la consulta de quien lo utilice.

Artículo 18.- El Sistema Provincial de Información Ambiental se organizará y mantendrá actualizado con datos físicos, económicos, sociales, legales y todos aquellos vinculados a los recursos naturales y al ambiente en general.

De la Educación y los Medios de Comunicación

Artículo 19.- El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la autoridad de aplicación, promoverá:

a- La incorporación de contenidos ecológicos regionales en los distintos niveles del sistema educativo.

b- El fomento de la investigación en las instituciones de educación superior desarrollando planes y programas para la formación de especialistas que investiguen las causas y efectos de fenómenos ambientales.

c- La articulación con los medios de comunicación a fin de generar la participación de la comunidad en jornadas ambientales y campañas de educación popular, en medios urbanos y rurales, e., respetando las características de cada región.

d- La motivación de los miembros de la sociedad para que formulen sugerencias y tomen iniciativas para la protección del medio en que viven, y

e - La capacitación para el desarrollo de tecnologías adecuadas que compatibilicen el crecimiento económico con la preservación de los recursos naturales, la conservación y mejoramiento de la calidad de vida.

Artículo 20. - El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la autoridad de aplicación, coordinará con los municipios programas de educación no formal, difusión y capacitación de personal en el conocimiento de la temática ambiental. Para ello, podrá celebrar convenios con instituciones de educación, superior, centros de investigación, instituciones públicas y privadas, investigadores y especialistas en la materia.

Artículo 21.- El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio de la autoridad de aplicación, difundirá programas de educación y divulgación apropiados para la protección y manejo de los recursos naturales, en coordinación con otras áreas de gobierno con competencia en el tema.

De los incentivos a la investigación, producción e instalación de tecnologías relacionadas con la protección del ambiente.

Artículo 22.- El Poder Ejecutivo Provincial priorizará en sus políticas de crédito, de desarrollo industrial, agropecuario, aquellas actividades de investigación, producción e instalación de tecnologías vinculadas con el objeto de la presente Ley.

Artículo 23.- La autoridad de aplicación podrá promover la celebración de convenios con universidades, institutos y/o centros de Investigación con el fin de implementar, entre otras, las normas que rigen el impacto ambiental.

9.2.3. Capítulo III

De la flora y fauna

Artículo 24.- La autoridad de aplicación, en coordinación con los organismos competentes del Gobierno Provincial, establecerá:

- a) Condiciones de introducción de especies -exóticas de flora y fauna al territorio provincial, en caso de autorizarse la misma,
- b) Normas tendientes a evitar acciones puedan degradar en forma incipiente y/o irreversible los individuos o poblaciones de flora y fauna autóctonas, en especial aquellas en extinción.
- c) Condiciones de acceso a los recursos genéticos por parte de toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, quienes deberán contar con la expresa autorización de la autoridad de aplicación para dicho acceso.

9.2.4. Capítulo IV

De las Áreas Naturales Protegidas

Artículo 25.- La Subsecretaría de Ecología propondrá al Poder Ejecutivo las medidas a aplicar en las áreas naturales para asegurar su protección, conservación y restauración, dentro de los términos de la Ley Provincial N° 1.321 o del régimen legal que la sustituya.

9.2.5. Capítulo V

De la Bioseguridad

Artículo 26.- La autoridad de aplicación será competente para establecer las normas de seguridad y de fiscalización en el uso de técnicas de biotecnología en construcción, cultivo, manipulación, transporte, comercialización, consumo, liberación y desecho de organismos Genéticamente Modificados (OGM's), en forma de garantizar la protección del ambiente, de la salud y de los seres vivos.

9.2.6. Capítulo VI

De la contaminación ambiental y de las normas técnicas

Artículo 27.- Queda prohibido el vuelco, descarga o inyección de afluentes contaminantes a las masas superficiales y subterráneas de aguas, a la atmósfera y al suelo, cuando los afluentes superen los valores máximos de emisión establecidos para los mismos y/o cuando alteren las normas de calidad determinadas por cada componente ambiental.

Artículo 28.- Las normas técnicas ambientales determinarán los parámetros y niveles guías de calidad ambiental de los cuerpos receptores que permitan garantizar las condiciones

necesarias para asegurar la calidad de vida de la población. la perdurabilidad de los recursos naturales y la protección de todas las manifestaciones de vida

Artículo 29 - La subsecretaría de Ecología en coordinación con los organismos provinciales y/o nacionales competentes, conforme el cuerpo receptor, deberá determinar los valores máximos de emisión, el afluente y el cuerpo receptor, los que previamente deberán ser consensuados en el Ente de Políticas Ecológicas.

Artículo 30.- La autoridad de aplicación, en coordinación con los demás organismos competentes de la Provincia, llevará y mantendrá actualizado un registro de actividades riesgosas y contaminantes.

Artículo 31.- La autoridad de aplicación, en coordinación con los demás organismos competentes del Estado Provincial y/o Municipalidades y Comisiones de Fomento, promoverá el desarrollo de métodos, tecnologías y sistemas de reciclaje o recirculación de residuos u otros tipos de transformación de bajo o nulo impacto ambiental.

Artículo 32.- Toda evaluación de la degradación y medición o cuantificación de contaminantes será costeadada por las personas y/o instituciones responsables de la degradación o contaminación.

Artículo 33.- La autoridad de aplicación queda facultada para ingresar en todo establecimiento, obra, yacimiento o inmuebles cuyas actividades degraden el ambiente o lo contaminen, en el marco de la legislación vigente y con el fin de realizar el seguimiento de lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA, determinando el cumplimiento de las medidas de protección propuestas en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

9.3. TITULO III

DISPOSICIONES ORGÁNICAS

9.3.1. Capítulo Único

De los organismos de aplicación

Artículo 34.- Será organismo de aplicación de la presente Ley la Subsecretaría de Ecología, sin perjuicio de la incumbencia ambiental de cada una de las reparticiones provinciales.

Artículo 35.- El Ente de Políticas Ecológicas actuará como comisión intersectorial de la Administración Pública Provincial a los efectos de la presente Ley y de acuerdo a las funciones conferidas.

Artículo 36.- Los municipios y/o Comisiones de Fomento adheridos al régimen de la presente Ley, podrán verificar el cumplimiento de las normas ambientales inspeccionando y realizando constataciones. De comprobarse algún incumplimiento reclamarán la intervención de la autoridad de aplicación. Asimismo podrán tomar decisiones de tipo cautelar o precautorio dando inmediato aviso a la Subsecretaria de Ecología.

Artículo 37.- El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, propiciará la celebración de acuerdos con los municipios y/o Comisiones de Fomento a los fines de un

tratamiento integral de la problemática ambiental. Se podrá constituir regiones o zonas integradas por dos o más municipios para el tratamiento de cuestiones ambientales comunes, a través de acuerdos interjurisdiccionales.

Artículo 38.- El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación prestará asistencia técnica a los municipios y a las Comisiones de Fomento para la fiscalización y el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 39.- Crease el Fondo Ambiental Provincial (FAP), destinado a la atención de las actividades emergentes de la aplicación de la presente Ley, de carácter acumulativo y con la afectación de los recursos provenientes de:

- a) Los aportes del Estado Nacional,
- b) El producido por la aplicación de las sanciones pecuniarias que la Ley contempla,
- e) Contribuciones voluntarias de empresas, instituciones, particulares u organizaciones no gubernamentales (ONG's), interesadas en la conservación del ambiente.
- d) Los aporte del Estado Provincial,
- e) Lo recaudado en concepto de la aplicación del decreto N0 1.194/98, por el cual se crea el Fondo de Intereses Difusos -Ley 1.352, o la norma que en el futuro la sustituya y
- f) Lo recaudado por aplicación de la Ley N° 1466 de Adhesión a la Ley nacional N0 24051 de Residuos Peligrosos o la norma que en el futuro la sustituya.

9.4. TÍTULO IV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

9.4.1. Capítulo I

De las Infracciones administrativas

Artículo 40.- La autoridad de aplicación fiscalizará el cumplimiento de la presente Ley, con la participación de las áreas específicas de la administración provincial o municipal, respecto de las tareas de control, inspección y evaluación técnica.

Artículo 41.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establezcan las normas vigentes, todo el que causare daño actual o residual al patrimonio ambiental, estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo o recomponerlo según correspondiere.

Artículo 42.- Las infracciones a la presente Ley y a las normas que en su consecuencia se dicten, serán pasibles de las siguientes sanciones:

- a) Apercibimiento,
- b) Reparación del daño causado,
- c) Multa desde cincuenta (50) hasta quinientos (500) veces el sueldo básico correspondiente a la categoría dieciséis (16) de la Administración Pública Provincial.
- d) Clausura de la fuente contaminante desde treinta (30) días a un (1) año o hasta que desaparezcan las causales de contaminación.
- e) Inhabilitación para ejercer la actividad que generó la infracción dentro del ámbito provincial, de treinta (30) días a un (1) año o hasta que la contaminación del ambiente haya sido mitigada o remediada, y

f) Clausura e inhabilitación definitiva.

Las sanciones aludidas en los incisos d), e) y f), conllevan la suspensión temporal o definitiva del infractor de los registros donde se encuentre inscripto. en función de la actividad desarrollada, tal medida deberá ser comunicada a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental de la Nación.

Artículo 43.- Las sanciones previstas en el artículo anterior podrán imponerse en forma separada o conjunta, según resulte de las circunstancias de cada caso.

Artículo 44.- La autoridad de aplicación, para determinar la sanción a aplicar, considerará la gravedad de la trasgresión, el daño presente y futuro realizado al medio ambiente, los antecedentes del infractor, su condición patrimonial y el grado de responsabilidad de su parte.

Artículo 45.- La reincidencia implicará en todos los casos una circunstancia agravante. Se considerará reincidencia a la infracción cometida dentro de los dos (2) años contados desde la constatación de la trasgresión anterior.

Artículo 46.- En el supuesto de reincidencia, la pena de multa será elevada como mínimo al doble del monto que le hubiere correspondido, conforme resolución fundada de la autoridad de aplicación.

Artículo 47.- El procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones a la presente Ley, se ajustará a las normas reglamentarias que determine el Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 48.- El procedimiento que se establezca a fin de que la autoridad de aplicación compruebe el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente Ley, deberá asegurar el derecho a la defensa del infractor. Serán de aplicación supletoria las normas de procedimiento administrativo de la Provincia.

9.4.2. Capítulo II

De la defensa jurisdiccional

Artículo 49.- Para la defensa del ambiente y el equilibrio ecológico, se podrá recurrir directamente ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería del lugar en que el acto u omisión se exteriorice o tuviera, o pudiese tener efecto, o el Juez del domicilio del demandado, a elección del actor, conforme los términos de la Ley N° 1.352.

Disposiciones finales

Artículo 50.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley en un plazo de ciento ochenta (180) días.

Artículo 51.-El Poder Ejecutivo Provincial a través de la autoridad de aplicación \ con la intervención del Ente de Políticas Ecológicas. procederá al ordenamiento y armonización de los regímenes legales vigentes en la Provincia de La Pampa en materia de recursos naturales y ambiente.

Artículo 52.- Invítase a los municipios adherir a la presente Ley.

Artículo 53 Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil.

Dr. Santiago Raúl Giuliano, vicepresidente H. Cámara de Diputados Provincia de La Pampa
- Dr. Esteban Javier Paz, Secretario Legislativo H. Cámara de Diputados Provincia de La Pampa.-

9.4.3. ANEXO I

Proyectos de obras y acciones que deberán cumplimentar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)

- 1) Generación y transmisión de energía hidroeléctrica y térmica.
- 2) Construcción de embalses, presas y diques.
- 3) Administración, conducción, tratamiento y descarga de aguas servidas urbanas y suburbanas.
- 4) Localización de parques y complejos industriales.
- 5) Exploración y explotación de hidrocarburos.
- 6) Construcción y funcionamiento u operación de gasoductos, oleoductos, acueductos y cualquier otro ducto de energía o sustancias.
- 7) Construcción y funcionamiento u operación de rutas, autopistas, líneas férreas y aeropuertos.
- 8) Plantas siderúrgicas.
- 9) Instalaciones químicas (papeleras, curtiembres, etc.).
- 10) Manejo de residuos peligrosos.
- 11) Instalación de establecimientos industriales.
- 12) Instalaciones poblacionales masivas, cuando entrañen riesgo para ellas o para el ambiente.
- 13) Refinerías de petróleo bruto.
- 14) Emplazamiento de centros turísticos y deportivos.
- 15) Plantas de almacenamiento, tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos urbanos, industriales y rurales.
- 16) Proyectos de desarrollo agrícola bajo riego y en secano.
- 17) Solicitudes de desmonte que afecten superficies mayores del cincuenta por ciento (50 %) de la superficie total del predio.

Dr. Santiago Raúl Giuliano, vicepresidente H. Cámara de Diputados Provincia de La Pampa
- Dr. Esteban Javier Paz, Secretario Legislativo H. Cámara de Diputados Provincia de La Pampa.-

UN MIL NOVECIENTOS CATORCE (1.914).

DECRETO N° 2139: APROBANDO REGLAMENTACION PARCIAL DE LA LEY N° 1914 - LEY AMBIENTAL PROVINCIAL -

SANTA ROSA, 26 de Noviembre de 2003

VISTO:

El expediente N° 10334/02 caratulado: “Secretaría General de la Gobernación – Subsecretaría de Ecología S/proyecto de Decreto Reglamentario Ley 1914”; y
CONSIDERANDO:

Que la Reforma Constitucional de 1994, establece que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales (artículo 41);

Que en tal sentido, el Congreso Nacional sancionó tiempo atrás la Ley 25675, Ley General del Ambiente;

Que por Ley 1914 se establecieron en la provincia de La Pampa los lineamientos e instrumentos de ejecución de política ambiental, tendientes a propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la preservación y reparación del ambiente, la educación y participación comunitaria en la materia;

Que el artículo 81 de la Constitución Provincial establece que el Gobernador es el Jefe de la Administración Provincial y tiene, como lo expresa en el inciso 3) la atribución de promulgar y hacer ejecutar las leyes de la provincia, facilitando su cumplimiento por medio de reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su contenido y espíritu;

Que la preservación del ambiente constituye un parámetro insoslayable no solamente en la mayor parte de los emprendimientos productivos, sino respecto de la realización de obras públicas, privadas, planeamiento urbano, ordenamiento territorial; y que este instrumento normativo le confiere un ámbito de competencia que atraviesa transversalmente la de los organismos públicos y la de numerosas iniciativas privadas;

Que no obstante la complejidad de la materia, el Poder Ejecutivo Provincial considera indispensable reglar los procedimientos básicos que cristalicen los objetivos precitados, consolidando lo que indefectiblemente debe ser la acción conjunta del Estado, los actores económicos y la ciudadanía en su consecución;

Que para ello la Subsecretaría de Ecología ha elaborado el proyecto de reglamentación parcial de la Ley 1914, el cual ha sido puesto a consideración de los señores Ministros de Gobierno y Justicia, de la Producción y de Hacienda y Finanzas;

Que en los contenidos de dicho instrumento, resulta imprescindible establecer los requisitos mínimos de protección ambiental que deberán cumplir quienes propongan obras o actividades a instalar en el territorio provincial, según lo establece el anexo I de la Ley 1914, y que se vincularán, según su complejidad, a tres niveles de estudios: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Informe de Impacto Ambiental (IIA), y Declaración Jurada Ambiental (DJA);

Que para cada uno de los estudios identificados, se han definido los niveles de información general y técnica exigibles y que guardan relación con la entidad de los mismos;

Que a los fines de una mayor agilidad en los trámites y para un adecuado procedimiento de participación ciudadana, resulta procedente establecer el mecanismo de convocatoria a Audiencia Pública, atento la significación de la obra o acción proyectada y a su correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental (EIA);

Que con la finalidad de poner a disposición de los interesados la nómina de consultoras y/o profesionales especializados en estudios de impacto ambiental, se determinan los requisitos a cumplir por parte de quienes deseen obtener el correspondiente registro ante la Autoridad de Aplicación;

Que se han considerado también en el presente Decreto Reglamentario los procedimientos sancionatorios a las violaciones de la Ley 1914;

Que este acto constituye el primer y trascendental paso en la determinación de los mecanismos administrativos y técnicos que permitan la puesta en práctica de claras reglas operativas en materia ambiental, de marcado carácter multidisciplinario;

POR ELLO,

EL GOBERNADOR LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1º.- Apruébase la Reglamentación parcial de la Ley 1914, Ley Ambiental Provincial, que como Anexos forma parte del presente Decreto.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Gobierno y Justicia, de la Producción y de Hacienda y Finanzas.

Artículo 3º.- Dése al Registro Oficial, y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese, y pase a la Secretaría General de la Gobernación a sus efectos.-

Dr. Heriberto Eloy MEDIZA, Vicegobernador de la Provincia de La Pampa en ejercicio del Poder Ejecutivo - Dr. César Horacio BALLARI, Ministro de Gobierno y Justicia - Ing. Néstor ALCALA, Ministro de la Producción - C.P.N. Ernesto Osvaldo FRANCO, Ministro de Hacienda y Finanzas.-

9.5. REGLAMENTACIÓN PARCIAL LEY AMBIENTAL 1914

ANEXO I

9.5.1. ASPECTOS GENERALES-OBJETO

Artículo 1º.- Estará necesariamente vinculado y será inherente al objeto declarado por la ley 1914 y la presente reglamentación:

1. El deber de todos los habitantes de proporcionar a las autoridades provinciales la información que éstas requieran en el ejercicio de sus atribuciones para el control y vigilancia del ambiente;

2. El derecho del Estado Provincial a supervisar y controlar la implementación de prácticas adecuadas en la utilización de los recursos naturales;

3. El deber de los propietarios de ejercer el derecho de propiedad en correspondencia con el objeto de la Ley 1914 y el presente Decreto Reglamentario y el correlativo deber del Estado de determinar de manera oportuna y adecuada las restricciones respectivas a dicho derecho, en función de la aplicación de la ley;

4. El deber de los sujetos obligados de abonar los gastos que demande a la Subsecretaría de Ecología y a las demás áreas con incumbencia ambiental, la tarea de fiscalización en el marco de la Ley 1914 y del presente Decreto Reglamentario;

5. Las facultades de la Subsecretaría de Ecología para:

- 5.1.- Realizar tareas de fiscalización y control;
- 5.2.- Ejecutar los actos necesarios o convenientes para aplicar el presente Decreto Reglamentario y sus Anexos y todos aquellos que correspondan a su competencia. Impartir órdenes, directivas o recomendaciones. Intimar, formar proceso administrativo y sancionar a los infractores a la Ley Ambiental;
- 5.3.- Registrar e inspeccionar todo establecimiento, obra, yacimiento o inmueble cuyas actividades afecten o sean susceptibles de afectar el medio ambiente;
- 5.4.- Llevar a cabo tareas u obras de recomposición del ambiente con costas a los responsables de la degradación o contaminación, cuando éstos omitieren hacerlo y el derecho a obtener la percepción integral de las sumas abonadas o invertidas con sus intereses, (que serán calculados por el organismo competente), aplicándose lo establecido en el Capítulo IV.

Artículo 2º.- La Subsecretaría de Ecología será competente a los fines de promover y/o ejecutar todas las medidas que correspondan en la aplicación del presente Decreto Reglamentario, pudiendo a tal fin:

1. Requerir a cualquier agente o entidad pública o privada la cooperación o auxilio que demande el cumplimiento de la ley;
2. Elaborar planes ambientales provinciales y fiscalizar su ejecución.
3. Diseñar pautas dirigidas al aprovechamiento de recursos naturales conforme a un uso integral, integrado y armónico de los mismos.
4. Implementar un banco de datos y un sistema de información y vigilancia permanente de los ecosistemas, los elementos que lo integran y su equilibrio, actualizado en forma permanente.
5. Elaborar programas de lucha contra la contaminación y degradación del ambiente.
6. Requerir las medidas de recomposición a los causantes de daños ambientales, los plazos para ejecutar tales medidas e imponerles sanciones por su retardo o incumplimiento conforme a lo dispuesto en la Ley y en el presente Decreto Reglamentario.
7. Solicitar el auxilio judicial para lograr el cumplimiento forzado de la ley, del presente Decreto Reglamentario y de las normas que se dicten en consecuencia.
8. Propiciar la celebración de acuerdos con los municipios y/o Comisiones de Fomento a fin de compatibilizar procedimientos para alcanzar una aplicación de la ley en todo el ámbito provincial.
9. Acordar con otras áreas de la administración provincial la colaboración de las mismas en la inspección y detección de faltas ambientales.

9.5.2 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) – AUDIENCIA PUBLICA

Artículo 3º.- El titular de un emprendimiento a ejecutarse total o parcialmente en el territorio de la Provincia de La Pampa, comprendido en el Anexo I de la Ley Ambiental 1914, o el régimen legal que lo sustituya conforme lo establecido en el Artículo 3º, segundo párrafo de la misma, deberá presentar en el área de la administración provincial o municipal adherida con competencia específica para autorizar la obra, según el caso, una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Artículo 4º.- Los organismos mencionados, junto con toda la información obrante en su poder, deberá remitir los antecedentes a la Subsecretaría de Ecología a fin de que ésta emita la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Artículo 5º.- Recibida la documentación, tomará intervención el Ente de Políticas Ecológicas (EPE) quien trasladará la misma a la Comisión Técnica, de la que recibirá el correspondiente informe en un plazo de treinta (30) días corridos . Si la complejidad del estudio y las consultas externas que pudieran hacerse ameritan un plazo mayor de análisis se extenderá el mismo, de manera excepcional, por otro período similar.

La Comisión Técnica del Ente de Políticas Ecológicas estará constituida por los profesionales designados por los responsables de los organismos integrantes del mismo, a saber: Dirección de Recursos Naturales, Dirección de Minería, Dirección de Bromatología y Saneamiento Ambiental, Dirección de Aguas.

Artículo 6º.- Paralelamente al trámite de análisis de la EIA, la Subsecretaría de Ecología convocará a una Audiencia Pública, para analizar el efecto local o regional que pueda derivar del proyecto presentado.

Artículo 7º.- La convocatoria a la Audiencia Pública se efectuará con una antelación de quince (15) días corridos, mediante la publicación por una vez en el Boletín Oficial y en medios de comunicación de la localidad en que se radicará el emprendimiento o se realizará la actividad sujeta a estudio.

Se establecerá lugar, día y hora de realización de la misma, indicándose que estarán a disposición todos los antecedentes del caso y el lugar donde se recibirán las inscripciones a las que se hace referencia en el artículo siguiente. Los gastos de publicación serán afrontados por el solicitante de la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente.

Artículo 8º.- El Edicto de Convocatoria a Audiencia Pública contendrá:

1. Carátula completa del expediente administrativo respectivo;
2. Transcripción de la parte pertinente a la providencia que convoque a la audiencia;
3. Identificación completa del proponente del proyecto;
4. Identificación precisa del lugar de ejecución del proyecto;
5. Descripción de las características salientes del proyecto, de los impactos ambientales más relevantes y de las acciones propuestas para su mitigación;
6. Dirección, números telefónicos, números de fax y dirección de correo electrónico de la Autoridad de Aplicación;
7. El carácter no vinculante para la Autoridad de Aplicación de los resultados de la Audiencia;
8. Horario de consulta de las actuaciones.

Artículo 9º.- La Audiencia Pública será presidida por el Subsecretario de Ecología o la persona que éste designe en su reemplazo. Las asociaciones intermedias, los representantes del sector privado e integrantes de la comunidad, agrupados o no, podrán asistir y emitir su opinión, inscribiéndose para tal fin con un día de anticipación en el lugar indicado por la Autoridad de Aplicación en la convocatoria.

Artículo 10.- Durante el desarrollo de la Audiencia Pública, las ponencias y observaciones de los participantes no serán sometidas a votación ni revestirán carácter vinculante, consignándose las mismas en el Acta que se labre de la reunión para su evaluación final por parte del Ente de Políticas Ecológicas. La Subsecretaría de Ecología llevará un Registro de Actas de Audiencias Públicas.

Artículo 11.- Cumplidos los pasos previstos, la Subsecretaría de Ecología conforme lo resuelto por el Ente de Políticas Ecológicas, en base a la documentación e informe proporcionado por la Comisión Técnica, y las conclusiones de la Audiencia Pública emitirá la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) mediante resolución en los términos establecidos por el artículo 11 de la Ley 1914, en un plazo de diez (10) días corridos.

Artículo 12.- Para el caso de autorizaciones condicionadas al cumplimiento de ampliatorias tal como lo contempla el artículo 11 de la Ley, se otorgará al interesado un plazo de treinta (30) días corridos.

El análisis, la aprobación o rechazo de la nueva documentación presentada será resuelta en el término de treinta (30) días corridos por parte de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 13.- El titular de una obra o acción a ejecutarse en la Provincia de La Pampa, según lo establece el artículo 3º de este Decreto Reglamentario, podrá solicitar a la Autoridad de Aplicación, mediante una concreta fundamentación técnica, en función de la escasa entidad ambiental que a su criterio revista el proyecto, se lo exima de la presentación de la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Artículo 14º.- Recibida tal solicitud, la Subsecretaría de Ecología, previa intervención del Ente de Políticas Ecológicas (EPE), resolverá y comunicará al interesado, en un plazo de (15) quince días corridos, si se acepta o rechaza la misma.

En caso de rechazo será exigible la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

En caso de aceptación, en función de los antecedentes presentados, de las características del proyecto, y de su análisis general o consultas puntuales si fueren necesarias, que permitieran establecer la incidencia ambiental del mismo, se determinará qué tipo de estudio ambiental será exigido, a saber: Declaración Jurada Ambiental (DJA), o Informe de Impacto Ambiental (IIA).

Artículo 15º.- Por la entidad que, a juicio de la Autoridad de Aplicación representan los estudios antes mencionados, se considera pertinente que la Declaración Jurada Ambiental (DJA) pueda ser suscripta por el responsable del emprendimiento, sin necesidad de contar con la firma de una Consultora o Profesional Registrado.

Artículo 16º.- Para el caso de la Declaración Jurada Ambiental (DJA), y en función del otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) la Subsecretaría de Ecología resolverá su aprobación, aprobación condicionada o rechazo, en un plazo de (20) veinte días corridos, previa intervención del Ente de Políticas Ecológicas y de su Comisión Técnica.

Artículo 17º.- Para el caso del Informe de Impacto Ambiental (EIA), el plazo será de (30) treinta días corridos.

Artículo 18º.- Para todos los niveles de estudios ambientales contemplados, y durante la etapa de análisis por parte de la Comisión Técnica y del propio Ente de Políticas Ecológicas (EPE), podrá ser requerida información ampliatoria o complementaria, en cuyos casos los plazos para expedirse se contarán a partir de la fecha en que se disponga de toda la información solicitada.

Artículo 19º.- En el mismo sentido, deben considerarse que los plazos fijados para expedirse por parte de la Autoridad de Aplicación, se refieren a proyecto cuya entidad no ameriten consultas con expertos o decisiones que correspondan a otras áreas de gobierno, o en cantidades que superen la propia estructura de la Autoridad de Aplicación, en cuyo caso se asignarán prioridades y se resolverá en ese orden.

Artículo 20º.- En todos los casos, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por la Subsecretaría de Ecología, se notificará al interesado, en un plazo de (5) cinco días corridos, con arreglo al artículo 49 del Decreto 1684/79.

Artículo 21º.- Cuando se produzca el rechazo de cualquiera de los niveles de estudios ambientales exigidos, significará que toda nueva presentación comenzará su tramitación en los plazos y con las exigencias de una nueva presentación de estudio ambiental.

9.5.3. REGISTRO PROVINCIAL DE CONSULTORAS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.-

Artículo 22.- La Subsecretaría de Ecología creará un Registro de Consultoras y/o Profesionales especializados en Evaluación de Impacto Ambiental. Dicho Registro será público y estará a disposición en la sede del organismo u otros medios de información que éste determine.

Para la registración de profesionales, será requisito formal de admisión la presentación de la siguiente documentación:

- 1) Curriculum y/o antecedentes;
- 2) Copia certificada de Título Universitario y/o Post-grado;
- 3) Certificación de Registración Nacional y/o Provincial si la tuviere;

Para la registración de personas jurídicas se deberá acompañar:

- 1) Estatuto o contrato de formación
- 2) Inscripción en el Registro de Contratos Públicos en el lugar en que tuviere el asiento principal de sus negocios.
- 3) Otras registraciones si las tuviere;
- 4) Reseña de actividades
- 5) Ultimo Balance e Informe de Auditor.

La documentación integrará el expediente que se creará al efecto y será facultad de la Subsecretaría de Ecología otorgar la licencia oportunamente solicitada. La decisión podrá ser recurrible.

9.5.4. DE LAS INFRACCIONES

Artículo 23.- Las actuaciones por presuntas infracciones a la ley 1914 se iniciarán de oficio o por denuncia.

Artículo 24.- Constatada una infracción, el agente interviniente labrará el Acta respectiva, la que deberá contener:

1. Lugar, fecha y hora de la constatación;
2. Nombre, documento de identidad, edad, ocupación y domicilio del o los presuntos infractores;
3. Naturaleza y características de la infracción, daño causado y demás circunstancias que rodearon el hecho;
4. Nombre y domicilio de los testigos, si los hubiere, los que deberán suscribir el acta o dejar constancia, bajo responsabilidad del agente interviniente, de su negativa o impedimento para firmarla;
5. Toda circunstancia que pueda resultar de interés a los efectos de la sustanciación del sumario;
6. Firma del o de los imputados, dejándose expresa constancia si se rehúsan a firmar;
7. Firma del agente interviniente.

Artículo 25.- En el Acta deberá consignarse que se emplaza al/los imputados para que dentro de los diez (10) días hábiles presenten descargo escrito ante la Autoridad de Aplicación, ofreciendo la prueba de lo que estimen pertinente para la defensa de sus derechos y para que en el mismo acto constituyan domicilio legal en la ciudad de Santa Rosa, a los efectos del sumario. El período de producción de prueba será de treinta (30) días hábiles.

Dispuesto el cierre del mismo, se dará traslado para alegar por el término de cinco (5) días hábiles.

Artículo 26.- El Acta así conformada y suscripta por el presunto infractor, constituye formal imputación .

Artículo 27.- Se labrarán tantas Actas en original y copias como presuntos infractores existan y se hará entrega de una copia a cada uno de ellos. La omisión de estos recaudos no anula la comprobación efectuada pero el emplazamiento deberá hacerse nuevamente en forma no simultánea.

Artículo 28.- El agente interviniente elevará inmediatamente las actuaciones a la Autoridad de Aplicación, quien luego de recibidas y comprobado que el Acta se ha confeccionado en debida forma, dispondrá la incoacción de las actuaciones sumariales.

Artículo 29.- Las sanciones que se apliquen por daños a bienes del Estado como así también los casos de sustracción, serán sin perjuicio del cargo económico respectivo y la denuncia penal en su caso.

Artículo 30.- La denuncia contendrá:

1. Nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad, grado de instrucción, documento de identidad y todo otro dato personal para la identificación del denunciante;
2. Relación circunstanciada del hecho, lugar, tiempo y modo en que se ejecutó y la forma en que hubiera llegado a conocimiento del denunciante;
3. Nombre y domicilio de los inculpadados y testigos si los hubiere;

4. Enunciación de las pruebas que se ofrezcan y demás indicaciones y circunstancias que permitan inducir la comprobación del hecho denunciado, la determinación de su naturaleza y gravedad y la identificación de los responsables.

Artículo 31.- Formulada la denuncia, se expedirá una certificación del día y hora de la comparencia del denunciante. El sumario será escrito y secreto hasta que el instructor dé por terminada la prueba de cargo y sólo la autoridad que lo dispuso o una superior podrá requerirlo durante la substanciación.

Artículo 32.- Si hubieren surgido indicios de la comisión de un delito de acción pública, formulada la denuncia correspondiente se proseguirá su tramitación, pero no podrá dictarse resolución absolutoria mientras se halle pendiente el proceso penal.

9.5.5. DE LAS SANCIONES

Artículo 33.- El acto administrativo que imponga sanción, contendrá en su caso, las especificaciones sobre la forma de recomposición ambiental a cargo de la sancionada.

Artículo 34.- A los efectos del artículo 41 de la Ley 1914 la Autoridad de Aplicación comunicará a la Comisión Técnica del Ente de Políticas Ecológicas para que se expida sobre el modo y plazo para llevar adelante la recomposición de referencia, pudiendo solicitar la participación de especialistas en la materia y de los funcionarios comunales con competencia ambiental.

Artículo 35.- En todos los casos de daño al ambiente, la Autoridad de Aplicación previo dictamen del Ente de Políticas Ecológicas, recomendará las pautas básicas de recomposición ambiental, de oficio o a solicitud de organismos públicos.

ANEXO II

9.6. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN JURADA AMBIENTAL (DJA)

9.6.1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Nombre y acreditación del/los Representantes Legales,
2. Domicilio constituido en la jurisdicción. Teléfonos,
3. Actividad principal de la empresa u organismo,
4. Nombre del/los Responsable/s Técnico/s de la DJA,
5. Domicilio legal en la jurisdicción. Teléfonos.

9.6.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AMBIENTE

6. Región geográfica donde se ubicará el proyecto,
7. Clima,
8. Identificación de las áreas naturales protegidas,
9. Centros poblados más cercanos. Vinculación.

9.6.3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD

10. Naturaleza del proyecto (descripción general del proyecto, indicando la capacidad proyectada y la inversión requerida),
11. Vida útil del proyecto,
12. Ubicación física del proyecto,
13. Materiales, sustancias y equipo a ser utilizados en las etapas de preparación del sitio, construcción, mantenimiento y operación de la obra o actividad proyectada,
14. Residuos generados,
15. Recursos naturales que serán utilizados en cada una de las etapas.

9.6.4. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

16. Descripción de los impactos positivos y negativos sobre la geomorfología, las aguas, el suelo, la flora y la fauna, y el ámbito socio cultural, de corresponder.

9.6.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

17. Medidas de prevención y/o mitigación de los impactos sobre la geomorfología, las aguas, el suelo, la flora y la fauna y el ámbito socio cultural, de corresponder.

ANEXO III

9.7. CONTENIDO DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL (IIA)

9.7.1. INFORMACION GENERAL.

1. Nombre del Proyecto;
2. Nombre y acreditación del/los Representantes Legal/es;
3. Domicilio constituido en la jurisdicción. Teléfonos;
4. Actividad principal de la empresa u organismo;
5. Nombre del/los Responsable/s Técnico/s del IIA;
6. Domicilio legal en la jurisdicción. Teléfonos;

9.7.2. DESCRIPCION GENERAL DEL AMBIENTE

7. Región geográfica donde se ubicará el proyecto;
8. Superficie de la región afectada en forma directa e indirecta por el mismo;
9. Principales unidades geomorfológicas;
10. Clima;
11. Cuerpos de agua en el área del proyecto;
12. Profundidad del agua subterránea en el áreas de la obra o actividad;
13. Uso actual del agua en el área de la obra o actividad;
14. Principales unidades de suelo en el área de la obra o actividad;

- 15. Uso actual del suelo en el área de la obra o actividad;
- 16. Fauna y flora. Listado de especies amenazadas en el área de obra o actividad;
- 17. Identificación de áreas protegidas;
- 18. Centro poblacional más cercano;
- 19. Centro médico más cercano al área de la obra o actividad;
- 20. Sitios de valor histórico, cultural, arqueológico y paleontológico en el área de explotación;

9.7.3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA.

- 21. Naturaleza del proyecto, (descripción general del proyecto, indicando la capacidad proyectada y la inversión requerida);
- 22. Vida útil del proyecto;
- 23. Programa de trabajo;
- 24. Ubicación física del proyecto. Anexar plano de distribución de la planta y plano de la localización del predio, especificando:
 - 24.1. Localidad
 - 24.2. Departamento
 - 24.3. Ubicación catastral;
- 25. Situación legal del predio;
- 26. Superficie requerida (Ha, m²);
- 27. Colindancia del predio y actividad que desarrolla;
- 28. Obra civil desarrollada para la preparación del terreno;
- 29. Vías de acceso;
- 30. Requerimiento de mano de obra;
- 31. Obras o servicios de apoyo a utilizar en las diferentes etapas del proyecto.

9.7.4. DESCRIPCION DEL PROCESO.

- 32. Materiales y sustancias que serán utilizados en las etapas de preparación del sitio, construcción y mantenimiento de la obra o actividad, listar e indicar volúmenes;
- 33. Equipo requerido para las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento de la obra o actividad proyectada, listar e indicar capacidad instalada;
- 34. Recursos naturales del área que serán aprovechados en las diferentes etapas. Especificar;
- 35. En caso de una industria de transformación o extractiva:
 - 35.1. Indicar materias primas que serán utilizadas en el proceso;
 - 35.2. Listar los productos finales.
- 36. Fuente de suministro de energía eléctrica y/o combustible;
- 37. Requerimiento de agua cruda y potable, y fuente de suministro;
- 38. Residuos generados en las diferentes etapas del proyecto, indicando el destino final de los mismos;
 - 38.1. Emisiones a la atmósfera.
 - 38.2. Descarga de líquidos cloacales.
 - 38.3. Descarga de líquidos industriales.
 - 38.4. Emisiones de ruido.
 - 38.5. Otros.

9.7.5. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

39.Descripción de los impactos positivos y negativos sobre la geomorfología, las aguas, el suelo, la flora y la fauna y el ámbito sociocultural;

9.7.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.

40.Medidas de prevención y/o mitigación del impacto sobre la geomorfología, las aguas, el suelo, la flora y la fauna y el ámbito sociocultural.

ANEXO IV

9.8. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

9.8.1. INFORMACION GENERAL

1. Nombre y acreditación del/los Representante/s Legal/es;
2. Domicilio constituido en la jurisdicción. Teléfonos;
3. Actividad principal de la empresa u organismo;
4. Nombre del/los Responsable/s Técnico/s del E.I.A;
5. Domicilio legal en la jurisdicción. Teléfonos;

9.8.2. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE.

6. Ubicación geográfica;
7. Descripción de las características ambientales;
8. Plano de la superficie del ambiente directamente afectada por el Proyecto;
9. Descripción y representación gráfica de las características ambientales;
- 9.1. Geología y geomorfología;
- 9.1.1. Descripción general;
- 9.1.2. Sismología;
- 9.2. Climatología;
- 9.2.1. Vientos: frecuencia, intensidad, estacionalidad;
- 9.2.2. Precipitaciones: humedad relativa, presión atmosférica, temperatura;
- 9.2.3. Calidad del aire;
- 9.2.4. Ruidos;
- 9.3. Hidrología e Hidrogeología;
- 9.3.1. Caracterización de cuerpos de aguas superficiales y subterráneos en el Área de influencia del proyecto;
- 9.3.2. Uso actual y potencial;
- 9.3.3. Estudio piezométrico estático para cuerpos de agua subterránea;
- 9.3.4. Estudio piezométrico dinámico para fuentes de agua subterránea si correspondiere;
- 9.4. Edafología;
- 9.4.1. Descripción y croquis con las unidades de suelo en el Área de influencia del proyecto;
- 9.4.2. Clasificación;
- 9.4.3. Uso actual y potencial;
- 9.4.4. Nivel de degradación en el Área de influencia (bajo, moderado, severo, grave);

- 9.5. Flora;
 - 9.5.1. Caracterización fitosociológica de la vegetación;
 - 9.5.2. Mapa de vegetación;
- 9.6. Fauna;
 - 9.6.1. Listado de especies amenazadas;
 - 9.6.2. Localización y descripción de Áreas de alimentación, refugio y reproducción;
- 9.7. Caracterización ecosistemática;
 - 9.7.1. Identificación y delimitación de unidades ecológicas;
 - 9.7.2. Evaluación del grado de perturbación;
- 9.8. Áreas naturales protegidas en el Área de influencia;
 - 9.8.1. Ubicación y delimitación;
 - 9.8.2. Categorización;
- 9.9. Paisaje;
 - 9.9.1. Descripción;
- 9.10. Aspectos económicos y culturales;
 - 9.10.1. Centro/s poblacional/es afectado/s por el proyecto;
 - 9.10.2. Distancia. Vinculación;
 - 9.10.3. Población;
 - 9.10.4. Educación. Infraestructura para la educación;
 - 9.10.5. Vivienda. Infraestructura y servicios;
 - 9.10.6. Estructura económica y empleo;
 - 9.10.7. Infraestructura recreativa;
 - 9.10.8. Infraestructura para la seguridad pública y privada;
- 9.11. Sitios de valor histórico, cultural, arqueológico y paleontológico;
- 10. Descripción de las tendencias de evolución del medio ambiente natural (hipótesis de no concreción del Proyecto);

9.8.3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA.

A) Descripción general;

- 11. Naturaleza del proyecto. Explicar en forma general el tipo de obra o actividad que se desea llevar a cabo, especificando el volumen de producción - si se trata de una industria- la capacidad proyectada y la inversión requerida;
- 12. Objetivos y justificación del Proyecto. El solicitante debe dejar en claro las causas que motivaron la realización de la obra o actividad y los beneficios económicos, sociales y de otro tipo que éste contemple;
- 13. Programa de trabajo. En este punto se debe anexar el cronograma de cada etapa, indicando la fecha de inicio de las actividades;
- 14. Proyectos asociados. Explicar si en el desarrollo de la obra o actividad se requerirá de otros proyectos;
- 15. Políticas de crecimiento a futuro. Explicar en forma general la estrategia a seguir por la empresa indicando ampliaciones, futuras obras o actividades que pretenderán desarrollarse en la zona;

B) Etapa de selección del sitio:

16. Ubicación física del Proyecto. Anexar plano de localización del predio, indicando las coordenadas en que se sitúa, Departamento, Municipio y/o Comisión de Fomento, Paraje o Localidad;
17. Urbanización del área. Aclarar si el predio se sitúa en una zona urbana, suburbana o rural;
18. Criterios de elección del sitio. Mencionar los estudios realizados para la selección;
19. Superficie requerida (Ha, m²);
20. Uso actual del suelo en el predio. Mencionar el tipo de actividad que se desarrolla;
21. Colindancias del predio. Mencionar la orientación de cada predio, indicando la actividad que en ellos se desarrollen;
22. Situación legal del predio. Compra, venta, concesión, expropiación, otro;
23. Vías de acceso al área donde se desarrollará la obra o actividad;
24. Sitios alternativos que hayan sido o estén siendo evaluados. Indicar su ubicación regional, municipal o local, otra;

C) Etapa de preparación del sitio y construcción:

25. En este apartado se solicitará información relacionada con las actividades del sitio previas a la construcción misma de la obra o el desarrollo de la actividad.
Se deben anexar los planos gráficos del proyecto y el sistema constructivo, así como la memoria técnica del proyecto en forma breve;
26. Programa de trabajo. Fechas de inicio y finalización de la preparación del sitio y construcción, indicando además las principales actividades que se desarrollarán en estas etapas con su respectivo cronograma;
27. Preparación del terreno. Indicar si para la preparación del terreno se requerirá de algún tipo de obra civil (desmonte, nivelación, relleno, despiedre, desecación de lagunas, otros). En caso que así sea especificar;
28. Recursos que serán alterados;
29. Área que será afectada. Localización;
30. Equipo utilizado. Señalar el tipo de maquinaria que se utilizará durante la etapa de preparación del sitio y construcción, especificando la cantidad y operación por unidad de tiempo;
31. Materiales, listar materiales que se utilizarán en ambas etapas, especificando el tipo, volumen y forma de traslado del mismo. En caso de que se utilicen recursos de la zona (madera, áridos, etc.) indicar la cantidad;
32. Obras y servicios de apoyo. Indicar las obras provisionales y los servicios necesarios para la etapa de preparación del terreno y para la etapa de construcción (construcción de caminos de acceso, puentes provisorios, campamentos, otros);
33. Personal requerido. Especificar el número de trabajadores que serán empleados, y su tiempo de ocupación;
34. Requerimientos de energía;
- 34.1. Electricidad. Indicar origen, fuente de suministro, cantidad que será almacenada y forma de almacenamiento;
- 34.2. Combustible. Indicar origen, fuente de suministro, cantidad que será almacenada y forma de almacenamiento;
35. Requerimientos de agua. Especificar si se trata de agua cruda o potable, indicando el origen, volumen, traslado y forma de almacenamiento;

36. Residuos generados. Indicar el tipo o tipos de residuos que se generarán durante la etapa de preparación del sitio y la construcción;

D) Etapa de operación y mantenimiento;

37. Programa de operación. Anexar un diagrama de flujo. Para las industrias de transformación y extractivas agregar una descripción de cada uno de los procesos;

38. Recursos naturales que serán aprovechados. Indicar tipo, cantidad y su procedencia;

39. Requerimiento de personal. Indicar la cantidad total de personal que será necesario para la operación, especificando turnos;

40. Materias primas e insumos por fase de proceso, indicar tipo y cantidad de los mismos, considerando las sustancias que serán utilizadas para el mantenimiento de la maquinaria;

41. Subproductos por fase de proceso. Indicar tipo y volumen y/o masa aproximado;

42. Productos finales. Indicar tipo y cantidad estimada;

43. Forma y característica de transporte de:

43.1. Materias primas

43.2. Productos finales

43.3. Subproductos

44. Medidas de seguridad. Indicar las que serán adoptadas.

45. Requerimientos de energía

45.1. Electricidad. Indicar voltaje y fuente de aprovechamiento;

45.2. Combustible. Indicar tipo, consumo por unidad de tiempo y forma de almacenamiento;

46. Requerimientos de agua. Indicar cantidad y origen, asimismo reportar los requerimientos excepcionales que vayan a ser utilizados y su periodicidad aproximada, plantear otras fuentes alternativas de abastecimiento.

47. Residuos.- Indicar el tipo de residuos que serán generados, especificando el volumen:

47.1. Emisiones a la atmósfera: indicar si son gaseosas, humos o partículas;

47.2. Descargas de aguas residuales: indicar aspectos físicos, químicos y biológicos;

47.3. Residuos sólidos industriales: describir sus componentes y su humedad;

47.4. Residuos sólidos domésticos;

47.5. Residuos agroquímicos: indicar especificaciones;

47.6. Otros.

48. Factibilidad del reciclaje. Indicar si es factible el reciclaje de los residuos que reporta;

49. Disposición del residuo. Especificar la forma de manejo, y características del cuerpo receptor;

50. Niveles de ruido. Indicar la intensidad en dB y duración del mismo;

51. Posibles accidentes y planes de emergencia;

E) Etapa de abandono del sitio.

En este punto deberá describir el destino programado para el sitio y sus alrededores, al término de las operaciones, especificando:

52. Estimación de vida útil;

53. Programas de restitución del área;

54. Planes de uso del área al concluir la vida útil del proyecto;

9.8.4. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.

La siguiente descripción deberá realizarse tanto para la etapa de construcción del sitio como para la de operación y mantenimiento, y la de abandono, de corresponder. El listado no es taxativo, sino enumerativo.

55. Impacto sobre la geomorfología:

- 55.1. Alteraciones de la topografía por extracción o relleno;
- 55.2. Incremento o modificación de los procesos erosivos;
- 55.3. Incremento o modificación del riesgo de inundación;
- 55.4. Modificación paisajística general;
- 54.5. Impactos irreversibles de la actividad;
- 56. Impacto sobre las aguas;

56.1. Modificación del caudal de aguas superficiales y subterráneas;

- 56.2. Impacto sobre la calidad del agua en función de su uso actual y potencial;
- 56.3. Modificación de la calidad de cursos de agua subterránea;
- 56.4. Modificación de la calidad de cursos de agua superficiales;
- 56.5. Alteración de la escorrentía o de la red de drenaje;
- 56.6. Depresión del acuífero;
- 56.7. Impactos irreversibles de la actividad;
- 57. Impacto sobre la atmósfera;

57.1. Contaminación con gases y partículas en suspensión;

57.2. Contaminación sónica;

58. Impacto sobre el suelo:

- 58.1. Croquis con la ubicación y delimitación de las unidades afectadas;
- 58.2. Grado de afectación del uso actual y potencial;
- 58.3. Contaminación;
- 58.4. Modificación de la calidad del suelo;
- 58.5. Impactos irreversibles de la actividad;

59. Impacto sobre la flora y la fauna:

- 59.1. Grado de afectación de la flora;
- 59.2. Grado de afectación de la fauna;
- 59.3. Impactos irreversibles de la actividad;
- 60. Impacto sobre los procesos ecológicos;
- 60.1. Modificaciones estructurales y dinámicas;
- 60.2. Indicadores;
- 60.3. Impactos irreversibles de la actividad;

61. Impacto sobre el ámbito sociocultural:

- 61.1. Impacto sobre la población;
- 61.2. Impacto sobre la salud y la educación de la población;
- 61.3. Impacto sobre la infraestructura vial, edilicia y de bienes comunitarios;
- 61.4. Impacto sobre el patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico;
- 61.5. Impacto sobre la economía local y regional;

62. Impacto visual:

- 62.1. Impacto sobre la visibilidad;

- 62.2. Impacto sobre los atributos paisajísticos;
- 63. Impactos irreversibles de la actividad;

9.8.5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

El listado de medidas y acciones es orientativo, no agotando ni restringiendo los contenidos del plan de manejo ambiental.

- 64. Medidas y acciones de prevención y mitigación del impacto ambiental, y rehabilitación, restauración o recomposición del medio alterado, según correspondiere.

64.1. Medidas relativas a:

- 64.1.1. la geomorfología;
- 64.1.2. las aguas;
- 64.1.3. las condiciones atmosféricas;
- 64.1.4. el suelo;
- 64.1.5. la flora y la fauna;
- 64.1.6. los procesos ecológicos;
- 64.1.7. el ámbito sociocultural;
- 64.2. Acciones referentes a:

- 64.2.1. el plan de monitoreo (si correspondiere);
- 64.2.2. cese y abandono de la explotación;
- 64.2.3. monitoreo post-cierre de las operaciones;

- 65. La presentación deberá acompañar el cronograma con las medidas y acciones a ejecutar;

- 66. La presentación contendrá los criterios de selección de alternativas en las medidas correctivas y de prevención ambiental;

9.8.6. PLAN DE ACCION FRENTE A CONTINGENCIAS AMBIENTALES.

- 67. La presentación deberá acompañar una descripción detallada de las actividades de riesgo y una planificación de las acciones a ejecutar en caso de una situación eventual adversa.

9.8.7. METODOLOGÍA UTILIZADA.

- 68. El responsable deberá informar y describir detalladamente el método o la combinación de métodos de evaluación de impacto ambiental utilizados, los procedimientos de auditoria ambiental y las técnicas a emplear en los casos de recomposición de áreas degradadas.

9.8.5. NORMAS CONSULTADAS.

69.El responsable deberá informar y describir la normativa y/o criterios provinciales, nacionales e internacionales observados y consultados para la preparación de la Evaluación de Impacto Ambiental.